

Huella del Sur

La Universidad Pública en la encrucijada

Mercantilización, resistencias y alternativas



La Universidad Pública en la
encrucijada
Mercantilización, resistencias y alternativas

La Universidad Pública en la encrucijada

Mercantilización, resistencias y alternativas

Omar Acha • Álvaro Álvarez • Ernesto Arganda Carreras
• Darío Balvidares • Silvia Beatriz Adoue • Marcos
Britos • Francisco Carriquiriborde • Alejandra Ciriza
• Coordinación Político Pedagógica de la UNICAM
• Melina Deledicque • Eduardo Díaz de Guíjarro •
Mariano Félix • Guillermo Folguera • José Guadalupe
Gandarilla Salgado • Ulises Gorini • Judith Naidorf •
Carolina Mamblona • Jorgelina Matusevicius • Mariana
Relli Ugartamendía • Leandro Rodríguez • Silvio
Schachter • Renán Vega Cantor • Nahuel Vogel

Huella del Sur

**La Universidad Pública en la encrucijada.
Mercantilización, resistencias y alternativas.**
© 2025 Ediciones Herramienta y ContrahegemoníaWeb
Buenos Aires - Argentina

Diseño de tapa e interior: Ignacio Fernández
Fotografías en interior: Melina Deledicque (pp. 12, 24, 40, 50, 62, 106, 146, 166, 178, 188, 206, 216, 242 y 256).

Corrección: Huella del Sur (Herramienta, ContrahegemoníaWeb y Tramas)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Ediciones Herramienta:

revistaherramienta@gmail.com - www.herramienta.com.ar
Director: Francisco Sobrino. franciscos4089@gmail.com Tel: (+549) 1156040939

ContrahegemoníaWeb

contrahegemoniaweb@gmail.com
www.contrahegemoniaweb.com.ar

Impreso en Argentina, agosto de 2025
Todos los derechos reservados
ISBN: 978-987-1505-89-0

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Distribuidora Herramienta: Paula Díaz
pauladiaz.herramienta@gmail.com Tel: (+549) 1159965021

Schachter, Silvio

La universidad pública en la encrucijada : mercantilización, resistencias y alternativas /
Silvio Schachter. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Herramienta y Contrahe-
gemoníaWeb, 2025.

256 p. ; 22 x 16 cm.

ISBN 978-987-1505-89-0

1. Ciencias de la Educación. 2. Derecho a la Educación. 3. Universidades Públicas. I.
Título.

CDD 378.05

Esta es una edición digital de libre descarga. Si valoran el trabajo de producción de esta obra (autoría, corrección, diagramación y el cuidado general de la edición) y les interesa colaborar en la salida de nuevos materiales, los invitamos a realizar un aporte económico –cualquiera sea su monto– a la siguiente cuenta:

María Eugenia García

CVU: 0000003100089561605264

Alias: contrahegemonia.mp

CUIT/CUIL: 27278245557

Mercado Pago

Índice

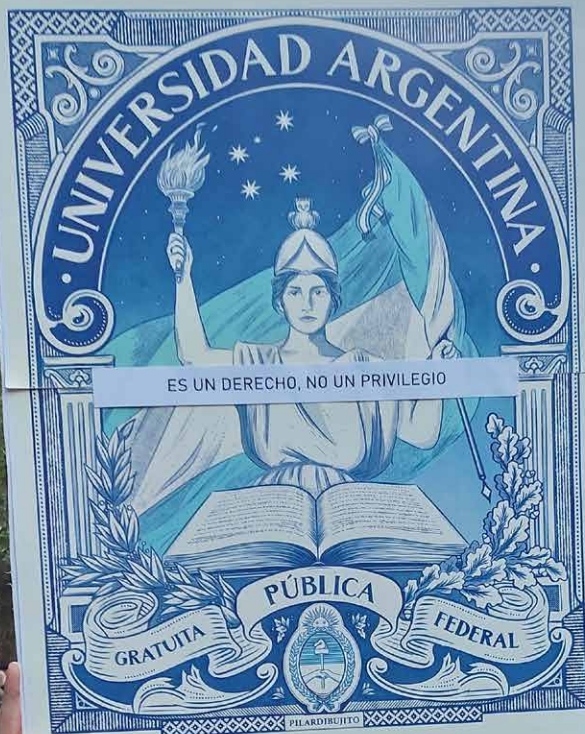
Presentación	11
Prólogo. La Universidad sitiada, dialécticas de la crisis.....	13
Silvio Schachter	
La Universidad pública frente a la embestida anarcocapitalista. Resistencias, aprendizajes y encrucijadas	25
Mariano Félix y Melina Deledicque	
Universidades en Argentina: entre <i>Memento</i> y <i>Laputa</i>	41
Guillermo Folguera	
¿Hacia dónde va el movimiento estudiantil? Entrevista a tres organizaciones universitarias	51
A propósito de las políticas de CyT, los saberes críticos y la apuesta por las tecnologías	63
Alejandra Ciriza	
La universidad pública como ciudadela de politicidad tras la pandemia del Covid-19: conjeturas sobre la experiencia argentina..	77
Omar Acha	
Obrerxs de tiza y proyector. La universidad y la lucha de sus trabajadorxs	93
Leandro Rodríguez y Jorgelina Matusevicius	
Autofagia e infantilización en la universidad contemporánea	107
Renán Vega Cantor	
En la búsqueda de una universidad a la altura de su tiempo. Reflexiones desde la circunstancia mexicana	129
José Guadalupe Gandarilla Salgado	
Universidad pública en la Comunidad de Madrid: entre el ajuste, la mercantilización y la resistencia	147
Ernesto Arganda Carreras y Mariana Relli Ugartamendía	
La universidad en tiempos de horror	155
Judith Naidorf	

La “Nueva Universidad Argentina” de los rectores. Análisis de una reforma inconsulta, silenciosa y por capas que busca desestructurar la universidad pública	157
Carolina Mamblona y Nahuel Vogel	
Defender la educación superior pública no es sólo un derecho: es un deber y una necesidad social	167
Eduardo Díaz de Guíjarro	
La universidad pública en la encrucijada: colonialidad del saber, capitalismo cognitivo y extractivismo tecnológico	179
Darío Balvidares	
Construir otro paradigma de Universidad Pública. Universidad Empresaria o Comunitaria y Popular	189
Marcos Britos	
Antes de la revolución. Origen de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.....	207
Ulises Gorini	
La Universidad Campesina del MOCASE - VC.....	217
Coordinación Político Pedagógica de la UNICAM	
Universidad y extractivismo. Racionalidades y contra racionalidades en el sistema científico argentino.....	223
Álvaro Álvarez	
Ciencia, pero mirada desde la clase.....	237
Francisco Carriquiriborde	
Movimientos sociales y universidad. Debates sobre el marco teórico en la academia.....	243
Silvia Beatriz Adoue	

Presentación

Estamos en un momento de indeterminación social y política sobre el papel, la situación actual y el futuro de la Universidad pública. Frente a los ataques liquidacionistas del gobierno de Milei y la prédica contra todo lo popular de las ultraderechas, consideramos oportuno aportar al debate de cómo resistir y sobre los desafíos que enfrenta como institución, el rol de sus integrantes y el de la relación que estos tienen con el resto de la sociedad.

En este dossier tratamos de desarrollar ideas que no se limiten a reivindicar lo preexistente. Intentamos hacerlo con un sentido polémico y crítico, que no le teme al análisis incisivo y provocador, donde tanto el objeto universidad y la comunidad que la integra como sujeto no se piensen por separado. No negamos todo lo que se ha investigado acerca de los avatares en su devenir histórico y a la vez asumimos el riesgo de repensarlos desde diversos ángulos temáticos, con enfoques y voces múltiples. Vemos el nexo y el encadenamiento con las luchas de estudiantes y docentes, que hoy se renuevan en la indeclinable defensa de la educación pública, pero también señalamos las necesarias rupturas, siempre desde un hacer crítico comprometido con una ética militante. Es un llamado a abandonar la idea de pensar la universidad encerrada en sí misma, en un remedo de la escolástica imagen de claustro. Son análisis que no pretenden ofrecer un camino lineal con diagnósticos y soluciones infalibles, por el contrario, lo hacemos reflexionando y preguntándonos cómo contribuir a un debate abierto, tan urgente como necesario.



La universidad sitiada, dialécticas de la crisis

Silvio Schachter*

Todo el sistema educativo, de ciencia y tecnología en Argentina ha retrocedido dramáticamente producto de las medidas tomadas por el gobierno de ultraderecha. Los recortes de fondos ahogan el financiamiento y estrangulan la actividad universitaria y la investigación científica. Mientras las casas de estudios han ampliado su matrícula en un 500% desde la post dictadura hasta la actualidad, el presupuesto destinado a la misma ha desplegado una curva inversa, dando como resultado una universidad masiva pero crecientemente precarizada.

La universidad pública es atacada de múltiples formas, desde el gobierno, por las políticas de tierra arrasada del motoaserrador de derechos y también desde adentro por quienes desde altos cargos institucionales reclaman más presupuesto, pero a la vez responden a partidos que en el parlamento argentino votaron la Ley de Bases del gobierno. Como señaló la CONADU-H: “Algunas autoridades se han convertido en verdaderas patronales, siendo correa de transmisión de los ajustes de los gobiernos de turno e incluso han malversado y utilizado los fondos del presupuesto para todo tipo de prebendas y negocios”. La orientación de las decisiones de quienes ejercen la dirección de la universidad de adaptar programas legitimados al exterior de ella, es una línea que se ha ido imponiendo sin reservas.

La ofensiva neoliberal de los noventa disputó en las universidades públicas la forma en que tenía que formarse a los profesionales, la manera en que debía producirse el conocimiento y el modo en que la universidad debía relacionarse con la sociedad civil, poniendo en cuestión los

* Arquitecto. Urbanista. Universidad de Buenos Aires. Investigador, ensayista y periodista.

cánones de docencia, investigación y extensión bajo los cuales se venía desarrollando. Con presupuestos pauperizados que se agudizaron desde el menemismo en adelante, la idea de generar los recursos propios fue otra vía para que las empresas aumenten injerencia. Este modelo justifica el desfinanciamiento de la educación pública pues en su lógica, si la educación, la investigación y la extensión son bienes comerciables que pueden generar lucro, la universidad debería asumir su propia financiación. Así, la universidad pública ofrece sus servicios de investigación a las empresas corporativas, con lo cual entrega su autonomía y sus bienes intelectuales al capital. Se fue avanzando hacia una creciente zona gris donde el límite entre lo privado y lo público se vuelve poroso, imponiendo una lógica de la educación como una mercancía que se debe vender a los consumidores, como cualquier otro producto. A través de ella se piensa la universidad como una industria de saberes subordinados al mandato de los mercados, una empresa que compra y vende productos-mercancías cognoscitivos. El conocimiento así concebido, deja de ser un patrimonio común de la humanidad para convertirse en un bien privado basado en la generación de lucro. Este modelo de universidad mercantil encuentra a una parte de la sociedad legitimando esas políticas por mecanismos que van desde el apoyo a las distintas operatorias de privatización de la educación pública como política de Estado, hasta la inclusión de lenguaje empresarial en el mundo académico.

La combinación de estas dinámicas ha dado lugar al llamado modelo LES de Universidad, en referencia a la Ley de Educación Superior impuesta en 1995 por el menemismo y resistida por el movimiento universitario, que apuntaba, siguiendo las directivas del Banco Mundial, a consolidar una universidad precarizada, intentando dar pasos en su privatización y arancelamiento. Estos objetivos de máxima no pudieron imponerse, pero sí se avanzó con la mercantilización, abriendo las puertas para convenios con empresas, laboratorios e involucrando a las casas de estudio en la validación del extractivismo, la megaminería y la depredación del agronegocio.

Se pretende instaurar en la universidad pública una metodología que prima en las privadas, una mezcla entre religión y marketing que permite vender la idea de que el éxito es alcanzable a partir del simple deseo y competencia personal. Este pensamiento se vende con programas dedicados a mostrar a los estudiantes un presunto camino hacia el éxito,

el coaching educativo que naturaliza el funcionamiento de la educación como negocio. De esta manera se establece un modelo educativo cada vez más profesionalista, en el que se desprecian los saberes considerados poco rentables.

La burocracia universitaria se ha expandido y tiende a reemplazar los valores académicos por criterios de gestión, medición y estandarización. El vacío de contenido se llena con lenguaje técnico, informes y estructuras de gestión. Ahora son los dueños del capital quienes fijan las pautas para evaluar la producción intelectual. El concepto de universidad sigue funcionando, pero se ha perdido el cuaderno de la bitácora y navega a la deriva sin proyecto histórico, pues con la globalización capitalista este propósito ha ido modificando su sentido.

Agente de cambio o reproducción del orden social existente

Nunca las capacidades teóricas y empíricas de comprensión del mundo han sido tan grandes como ahora, sin embargo, este mismo pensamiento con demasiada frecuencia se deja encerrar y ahogar en el microcosmos académico, que en la actualidad se encuentra acorralado por el discurso neoliberal y sus derivados, que han invadido todas las esferas de la vida cultural y social, e invita a la sumisión a las fuerzas hegemónicas del mercado. Las teorías y prácticas neoliberales hacia la Universidad pública son parte de un programa más amplio destinado a destruir las estructuras colectivas capaces de resistirse a la lógica sistémica.

Parte de los investigadores y docentes, a veces por fuera de su voluntad, se han convertido en un engranaje rutinario de una gran máquina que produce conocimiento como si fuera una cadena de montaje intelectual. Un intelectual que a la vez, por la presión de las circunstancias, se concentra en la publicación de ensayos y artículos de consumo interno, cuyo principal valor, en muchos casos, es cumplir con la normativa. La ideología de la productividad se impone con la proliferación de *papers* cuya calidad intelectual e importancia para la construcción de una ciencia independiente y de cara al beneficio social son en muchos casos irrelevantes. Una realidad donde la relación entre el pensar y el hacer se ha quebrado y la tradición del intelectual que milita políticamente sus ideas ha perdido adeptos.

Los bienes simbólicos, producidos en territorios periféricos, tienden a tener una baja tasa de exportación, mientras que los creados dentro de

los espacios dominantes tienen un nivel significativo de circulación internacional que son adoptados sin cedazo. La relación de sumisión entre centro y periferia, se aplica también para la investigación y la producción de conocimiento, definiendo los criterios para la financiación y los objetivos. No es circunstancial, forman parte de articulaciones discursivas muy trabajadas y de políticas operacionales estratégicas.

Entre las narrativas impuestas artificiosamente se reitera la figura de la excelencia antepuesta a la masividad y lo popular, la cual es un valor vacío que puede aplicarse a cualquier cosa. Se cultiva un concepto de eficacia donde no importa el nivel de los profesores, ni de los estudiantes, ni el contenido de las clases o de las investigaciones. En estas condiciones, toda visión crítica es reprimida incluso antes de manifestarse, ya que en este patrón educativo prevalece un pensamiento positivista que empobrece la formación integral.

La falta de planificación a mediano y largo plazo de proyectos universitarios, la ausencia de debate, análisis y evaluación en el ámbito nacional y regional, conlleva a un sistema universitario desmembrado, donde las universidades y sus miembros tienen poca o nula interacción ni conexión entre ellos.

A partir de los años 80, lo que vemos emerger son las carreras orientadas a las profesiones con poca referencia a los valores y el ser de la universidad y, a la vez, la apropiación de lo institucional como parte de un activo partidario, que es una forma de privatización que niega el carácter universal de lo político y la esencia de la universidad como espacio de creación de conocimiento y cultura. Se observa una disminución notoria en la elección de carreras de ciencias sociales y humanas (algunas incluso están con riesgo de desaparecer) a la par que crecen las carreras tecnológicas y económico-financieras. Este cambio se notó especialmente después de la pandemia, porque desde entonces algunos estudiantes buscaron carreras donde la prioridad de elección se basa casi exclusivamente en la perspectiva laboral y en aquellas que les permitan estudiar a distancia, y con mayor flexibilidad, lo cual reforzó el aislamiento y la falta de compromiso con la vida social y política, no solo con la universidad.

La autonomía y el cogobierno en su versión actual, tienen más de cooptación que de ejercicio democrático. El ser de la comunidad universitaria, como espacio dinámico de convivencia, aprendizaje y cola-

boración —un ámbito de intereses y acciones comunes, donde se comparten experiencias, ideas y proyectos— está siendo sistemáticamente erosionado. La ofensiva neoliberal ha desarrollado la construcción de una enorme maquinaria de producción de hegemonía, de la que también participan activamente muchas universidades, como institución y/o con sus cátedras; en contraparte, quienes apuestan a proyectos y prácticas culturales contrahegemónicas han vuelto la mirada a la figura gramscia-

■ ***¿Cuál es hoy, en la denominada posmodernidad, el papel de la universidad en la transformación de la sociedad?***

La disyuntiva hoy planteada es ser agente de cambio, motor de transformación social al generar conocimiento crítico para promover la conciencia social y movilizar a diferentes sectores de la sociedad en defensa de sus derechos o, por el contrario, su papel se limita a formar profesionales que reproducen el orden social existente y actuar como un espacio de consolidación y agudización de las desigualdades del capitalismo neoliberal.

na del intelectual orgánico y colectivo en su versión siglo XXI, evitando la simplificación reduccionista a la que fue sometida.

La universidad ha sido tradicionalmente un terreno de confrontación y producción ideológica, donde se expresan las relaciones mutables de dominación y sumisión, que reflejan los conflictos más amplios de la sociedad. Un escenario donde se manifestaron las tensiones sociales y donde se libraba una parte importante de la batalla por la hegemonía cultural, ideológica y social. ¿Cuál es hoy, en la denominada posmodernidad, el papel de la universidad en la transformación de la sociedad?

La disyuntiva hoy planteada es ser agente de cambio, motor de transformación social al generar conocimiento crítico para promover la conciencia social y movilizar a diferentes sectores de la sociedad en defensa de sus derechos o, por el contrario, su papel se limita a formar profesionales que reproducen el orden social existente y actuar como un espacio de consolidación y agudización de las desigualdades del capitalismo neoliberal.

Históricamente la universidad fue sensible a los sucesos locales y mundiales. El Movimiento Reformista del 18 se desarrolló en el contexto del rechazo a la guerra mundial capitalista del 1919, el impacto de la Revolución Rusa y, en Argentina, los acontecimientos de la Semana Trágica (1919), la rebelión obrera de La Forestal (1920) y la Patagonia Rebelde (1920). Desde esas décadas una parte significativa del movimiento universitario latinoamericano comenzó a tomar su compromiso con la sociedad, sus problemas y las formas de encararlos.

Décadas después, en los años 60 y 70, los ámbitos universitarios fueron el escenario donde repercutieron la Revolución Cubana, las movilizaciones contra la guerra de EEUU en Vietnam, contra el racismo, por los derechos humanos y la solidaridad internacional. En la Universidad de Berkeley (1964) se dieron movilizaciones estudiantiles que luego se multiplicaron en otras latitudes, conmocionando el mundo. La radicalización del estudiantado ante el orden burgués de posguerra, recibió el influjo de las luchas por la independencia de las colonias en África y Asia, el rechazo a la guerra fría, y en América Latina creció el sentimiento antimperialista. Ese nuevo espíritu de rebeldía fue parte de un proceso de acumulación política que se condensó en colectivos que la explicitaron en conflictos que tuvieron dimensiones nacionales e internacionales, como lo fue el Mayo Francés. Un tiempo en que se pensaba, como dijo Salvador Allende, que “ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”.

Las respuestas de los gobiernos fueron violentas y brutales. La más dramática ocurrió con la masacre de estudiantes y docentes en Tlatelolco, México, el 2 de octubre de 1968.

En Argentina, en 1969 la unidad obrero-estudiantil fue clave para el éxito inicial del Cordobazo, cuando trabajadores y estudiantes desafiaron a la dictadura y generaron un movimiento de resistencia masiva, una insurrección urbana donde los manifestantes tomaron el control de la ciudad durante días. Una experiencia que se vio espejada a lo largo de todo el país. Hoy, la unidad obrero estudiantil está bloqueada entre otras razones porque no hay un movimiento obrero clasista y porque la mayor parte del movimiento estudiantil se ha burocratizado y dejó de mirar a la sociedad.

Diferente entonces es el contexto actual que horada a las universidades y a su comunidad. Los cambios operados por la globalización capitalista, sus nuevos paradigmas económicos y culturales, los avances



políticos de la ultraderecha, y sus mecanismos de represión y desinformación en la era de la posverdad, la crisis ambiental que pone a la vida del planeta en terapia intensiva, la violencia de guerras y genocidios son, entre otros fenómenos, los actuales condicionantes.

La carrera hacia el título, un arduo tránsito sin compromiso histórico

A diferencia de otras generaciones para quienes las vivencias universitarias marcaron su vida constituyendo un momento determinante de su biografía, hoy el patrón dominante hace que los jóvenes perciban la etapa universitaria como un tránsito lo más acelerado posible, sin compromiso con su historia, su presente, el futuro de la comunidad educativa, de su relación con la sociedad y con el contexto mundial.

El papel del estudiante como sujeto activo no figura entre las prioridades pedagógicas. Se impone una visión que es aceptada como un todo axiomático, donde el estudiante, en rol pasivo, recibe información y contenidos. No se forma un estudiante que construye su propio conocimiento con un aprendizaje basado en experiencias de descubrimiento y colaboración, que aprende y a la vez produce saberes, interactuando con el entorno y reflexionando sobre el mismo.

La meritocracia, la auto referencia, el culto al hedonismo, la salida laboral como único horizonte en un territorio de disputa canibalesca y la falta de reconocimiento del rol social de los saberes, entre otros fac-

tores, han metabolizado la conciencia de un sector importante de los universitarios y modelizado su modo de percibir el mundo, que los hace más proclives a definirse como seres apolíticos, indiferentes, escépticos y sin interés por movilizarse, porque respiran tiempos de desesperanza y escepticismo. Estamos ante casas de estudio que admiten un estudiantado masivo pero no lo retienen, sin garantizar su permanencia y egreso. Un ejemplo de ello son los horarios de cursada que excluyen a quienes trabajan. Las condiciones de vida de gran parte de la juventud fuera de la universidad explican esto: precarización laboral, subempleo, trabajadores registrados pobres, son todos fenómenos que se agudizan en la franja entre los 18 y 30 años.

Los ataques al movimiento estudiantil y a muchas de sus conquistas (comedores universitarios, becas, proyectos de extensión, viviendas estudiantiles, etc.) fueron evolucionando hacia la debacle del porcentaje del PBI dedicado a la educación superior, sostenida por todos los gobiernos después de 1983, que no lograron recuperar los niveles previos a la nefasta misión Ivanissevich-Ottalagano (1974-75)¹.

El quiebre con las luchas universitarias precedentes, cuyo desconocimiento es parte del intento de sepultar la memoria de toda la sociedad, busca —y en parte lo logra— formatear al estudiante como un sujeto presentista, sumiso, transigente, obediente con lo dado y consumidor de saberes descartables.

Por otro lado, el hecho de egresar no representa una garantía. La universidad genera una expectativa de ascenso social que en el contexto de decadencia institucional de los poderes del Estado y el ataque a la cultura, a la actividad educativa y científica de nuestro país, es una meta muy empinada de resultado incierto que acentúa la sensación de una sociedad que ya no lo necesita.

En América Latina y el Caribe hay un total aproximado de 30 millones de estudiantes universitarios. Argentina es la tercera por su número. Si excluimos el posgrado y las universidades privadas, tiene más de 2 millones de alumnos, y de 200 mil docentes. Representan el 5% de la población total del país, sin contar los institutos terciarios y de enseñan-

1 Oscar Ivanissevich fue el Ministro de Educación del gobierno de Isabel Martínez, entre agosto de 1974 y agosto de 1975. Alberto Ottalagano fue interventor de la Universidad de Buenos Aires de septiembre a diciembre de 1974, poniendo fin a la experiencia de gestión de Rodolfo Puiggróss como rector.

za media. Si pensamos en el papel que debe desempeñar la cultura y la joven generación en procesos de cambio social, es imposible no tener en cuenta como sujetos necesarios a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general. La cantidad de personas graduadas de nivel superior en la población de 25 años y más, que en 1980 era de aproximadamente del 4% de la población, en 2023 se elevó al 18%. Este fenómeno se ha desplegado intensamente en distintas geografías. Un ejemplo son las universidades del conurbano bonaerense, que actualmente representan un 14% de la matrícula nacional.

Pero queda claro que entre el peso objetivo que tienen por su dimensión y el papel que deberían jugar, hay una distancia que se explicita entre una subjetividad cooperativa y una realidad que desde hace tiempo viene siendo permeada por variables políticas, sociales y culturales neoliberales, una distancia que no se zanja mecánicamente detrás de valores cuantitativos.

¿Cuál es la expectativa que tiene un joven al ingresar a la universidad y qué piensa de su rol como egresado en la sociedad? ¿Tienen poder los estudiantes y qué tipo de poder ejercen? ¿Qué significa hoy ser estudiante? ¿Cómo y quiénes gobiernan las universidades? Son preguntas que no encuentran respuestas porque son obviadas.

La Reforma de 1918 puso en la autonomía universitaria la búsqueda de independencia de los poderes económicos, políticos y religiosos como condición a la vez de toda interacción fecunda con su entorno. El espíritu de los jóvenes del 18, desde su mirada crítica y disconforme, expresaban la idea de una universidad con capacidad de pensar y repensarse a sí misma. Fue mucho más que cogobierno; fue la expresión de una nueva sensibilidad social que impulsaba a los jóvenes de una clase media antioligárquica y anticlerical, a involucrarse en los destinos de la sociedad. Esto inauguró un largo período donde los movimientos universitarios latinoamericanos comenzaron a propugnar reformas que favorecieran la participación activa de las universidades y de los estudiantes en la solución de los problemas sociales y de democracia dentro y fuera de las aulas, enfrentando el control estatal y a gobiernos que durante décadas estuvieron en manos de dictaduras y distintas expresiones de democracias autoritarias.

La solidaridad internacional fue un rasgo siempre presente en la tradición del movimiento estudiantil argentino, que hoy está casi ausente. A partir de marzo de 2024 en 60 universidades de EEUU se instalaron campamentos estudiantiles reclamando el cese de la ayuda militar y fi-

nanciera a Israel, y contra el genocidio en Gaza y Cisjordania. La protesta alcanzó una dimensión que no se conocía desde la guerra de Vietnam. Su ejemplo tuvo resonancias en distintas manifestaciones a lo largo del mundo. La comunidad universitaria argentina aún está en deuda frente al horror que se vive en Palestina, mantiene un silencio ominoso. Mientras tanto, las autoridades de la UBA junto a la DAIA —Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina— en línea con la política genuflexa del gobierno de Milei, realizaron un acto en Plaza Houssay pidiendo por la liberación de los rehenes del 7 de octubre, sin mencionar las acciones racistas y criminales del Estado israelí.

La inducción de los objetivos neoliberales en la universidad se ha manifestado de maneras diversas, reproduciendo las prácticas que se aplican en el resto del mundo del trabajo: incremento de trabajo flexible, acarreado el reemplazo gradual de los profesores de dedicación exclusiva por profesores de tiempo parcial, sin seguridad laboral o con un trabajo precario; las diferencias entre profesores de planta y profesores ocasionales, que se establecen como distinciones jerárquicas. En dos décadas cayó un 30% el poder adquisitivo de los sueldos de docentes, investigadores y becarios. Como consecuencia, según los datos oficiales ya se perdieron más de 4.000 empleos en el sistema científico y se redujo en un tercio la cantidad de jóvenes que aspiran a ser investigadores.

¡Me lo dijo ChapGPT! Ahora un nuevo desafío, aún poco analizado, pero de omnipresencia creciente, es el fenómeno de la Inteligencia Artificial. Ante un cuadro de retroceso en la capacidad de la universidad de estimular el pensamiento crítico, una nueva y masiva tecnología irrumpe sin que se logre meditar sus entresijos, sus riesgos y consecuencias: la IA ya está entre nosotros. Parece inevitable que los estudiantes utilicen la IA, un recurso donde la ausencia de ética y el plagio es lo más frecuente. Mientras en muchos ámbitos académicos del mundo se entusiasman con las nuevas tecnologías —la IA incluida— todavía la evaluación de su impacto y sus consecuencias en la educación, particularmente la universitaria, es más que incipiente.

La IA no solo funciona como una fuente de información: ya reemplaza la elaboración del texto y de contenidos, su uso incontrolado puede llevar a un debilitamiento de las capacidades cognitivas, afectar el desarrollo de un pensamiento crítico, agudizar la dependencia tecnológica, la degradación de la autonomía intelectual, la disminución en las habi-

lidades para la resolución de problemas y fracturar el vínculo docente-estudiante. Es en parte una realidad que se presenta como permanentemente innovadora pero que es ideológicamente conservadora del orden existente, mientras desmaterializa y descorporiza el mundo.

Una nueva barrera que profundiza la brecha digital y la desigualdad en el acceso a sus recursos. Como señala Vega Cantor, es el camino hacia “la Universidad de la ignorancia”.

Una Universidad sin modelos verticales ni opresiones naturalizadas

A pesar de todas las variables que actúan en su contra, la comunidad universitaria ha dado muestra de su potencial movilizador en las marchas de abril y octubre de 2024, que ocuparon con presencia masiva las calles de todo el país contra la política de ahogo presupuestario del gobierno terraplanista de Milei. Habían pasado seis años desde las anteriores luchas contra la política educativa de Mauricio Macri en 2018. Estas experiencias no deben ocultar la debilidad de las estructuras del movimiento estudiantil, centros y federaciones, para entusiasmar a quienes estudian, lograr su participación activa más allá de la rutina electoral y profundizar los objetivos que superen la mirada coyuntural.

La universidad que queremos no depende tanto de un estatuto o una norma, como de las acciones de los actores que le dan vida. Debe ser discusión, efervescencia, polémica y negación del pensamiento único (un espacio donde las opresiones son naturalizadas). Debería enfren-
tar los modelos verticales, diseñados no para pensar sino para controlar —que disciplinan en una formación destinada a brindar sus conocimientos profesionales a las demandas de una sociedad alienada— y pasar a tomar la decisión de poner ese modelo en cuestión a favor de una universidad que se constituya como parte de un todo social; en línea con la visión de Paulo Freire, de una educación popular por el carácter de los sujetos que la integran y por los contenidos que sustenta, de un pensar crítico, capaz de interpelar creencias impuestas, como el credo de «no hay alternativa», y ser motor activo para transformaciones sociales.

YO SOY

ESTUDIANTE
DE LA
UNIVERSIDAD
SIN
PRESUPUESTO

QUE LA MEJOR
OPCIÓN de un ARGENTINO
NO SEA 
SALIR del PAÍS

La Universidad pública frente a la embestida anarcocapitalista

Resistencias, aprendizajes y encrucijadas

Mariano Félix* y Melina Deledicque**

Desde el inicio de su mandato, el presidente Milei dejó en claro que uno de sus objetivos de fondo es destruir la Universidad pública, gratuita, cogobernada y de calidad. La resistencia colectiva y múltiple golpeó al gobierno nacional, que debió retroceder parcialmente durante 2024. En 2025, con los aprendizajes de las luchas recientes, continúa la resistencia para frenar el fascismo oscurantista y la austeridad.

La austeridad y el terraplanismo como políticas de Estado

Javier Milei fue electo presidente de Argentina en noviembre de 2023. Su elección representa parte del crecimiento global de las ultraderechas que buscan eliminar derechos y desarticular la resistencia social al avance de un capitalismo cada vez más brutal. En ese proyecto, el ataque a las universidades públicas se ubica en un lugar privilegiado.

El discurso paleolibertario del anarco-capitalista Milei ataca el corazón del neodesarrollismo. El Estado aparece como la causa de todos

* Economista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Contacto: marianfeliz@gmail.com

** Socióloga, trabajadora Nodocente de la Universidad Nacional de La Plata. Contacto: melinadele@gmail.com

los problemas, o al menos como un estorbo para que la meritocracia popular opere sin restricciones. Podríamos asumir que este es un fenómeno político reciente o nacido en el vacío, pero sabemos que no es así. Parafraseando a Semán y sus coautores, las bases del apoyo de masas a la destrucción del Estado social “está entre nosotros” desde hace tiempo. Desde el inicio de la crisis transicional del neodesarrollismo iniciada alrededor de 2012 (Féliz, 2024) se aprecia una valoración más consciente “del valor de la libertad, la afinidad con el libre mercado a ultranza, la crítica de las instituciones igualitarias y públicas, con el repudio creciente al legado kirchnerista” (Semán y Welschinger, 2023) que se expresa en la consolidación de un espacio de centro derecha novedoso en el campo electoral. La combinación de un discurso anti-estatista y favorable a la iniciativa individual (es decir, en el campo de sentidos construido por el emprendedurismo) abrió el camino a formar el núcleo duro de una coalición socio-política de ultraderecha. Ello puso en crisis las bases de los acuerdos construidos en Argentina a la salida de la última dictadura cívico-militar-ecclesial (1976-1983). La crisis económica de largo aliento opera como una guerra de desgaste contra las clases populares (Féliz, 2024) que progresivamente pone en crisis la democracia como sistema de representación política y el Estado social como forma de promoción de la “justicia social” (Borovinsky et al., 2024).

Ya en la campaña electoral de 2023 Milei había planteado sin disimulo su intención de llevar la austeridad a las universidades públicas del país. Esta iniciativa era parte de una mirada más general que busca destruir todo lo público y que en la práctica combina el uso de la “motosierra” y la “licuadora”. La misma se expresó en una política de vaciamiento similar a la aplicada en otros espacios del Estado: recortes presupuestarios masivos en gastos básicos de funcionamiento, caídas salariales históricas, ajuste en las condiciones de vida de quienes ven en los estudios universitarios una posibilidad de ascenso social y destrucción de la infraestructura del sistema científico y técnico que se desarrolla mayormente en las universidades nacionales (UUNN) en articulación con organismos como el CONICET, INTA, INTI, CNEA y otros. Con estas acciones, el gobierno busca desarticular uno de los espacios clave para el desarrollo de innovaciones sociales y técnicas, para la formación de profesionales comprometidos y capacitados, y la producción de pensamiento crítico.

Los argumentos de Milei contra el sistema universitario público son varios. Primero, creen que el Estado no debe sostener la educación pública de nivel superior cuando el servicio podría ser provisto por empresas privadas. Milei y sus ideólogos ven en la Universidad una amenaza permanente a sus proyectos de venta del patrimonio público y entrega de la soberanía nacional. Además, asumen que la Universidad pública es un espacio de producción de saberes, prácticas y cuerpos capaces de cuestionar el terraplanismo imperante en las nuevas derechas globales, de las cuales el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) no es sino una de las versiones más mediocres y payasescas (pero no por eso, menos peligrosa).

Por otra parte, afirman que las universidades públicas son meros sitios de “adoctrinamiento” de las personas que allí asisten, y desde donde se promueven ideas de “izquierda”, de expansión de la hegemonía “woke” (progresista) y el socialismo. En esa línea, la ultraderecha busca desvalorizar el papel social de la Universidad como mecanismo de producción de profesionales comprometidos. Para ello, propala un discurso que cuestiona el rol de la educación superior, afirmando su inutilidad siquiera para conseguir un empleo más calificado (Cronista.com, 2025). El relato oficial pretende reducir la formación superior a meras técnicas, pasibles de ser reemplazadas por cursos, capacitaciones o incluso aplicaciones de inteligencia artificial. Ven a la Universidad como fábrica, donde prima la métrica (crédito, horas cátedras, papers) por sobre los procesos de coproducción de saberes y prácticas dentro de la institución y en la comunidad.

En esa clave opera el ataque neo-reaccionario a la Universidad. Ideólogos de lo que se denomina iluminación oscura (Land, 2022; Stefanoni, 2025) piensan a las instituciones de educación superior como productoras de un saber que (en su momento crítico) puede cuestionar el status quo capitalista, y por lo tanto sirven para abrir las potencias colectivas para el cambio social. Los agentes de la neoreacción (que incluyen a los dueños de las principales empresas tecnológicas como Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos de Amazon, o Mark Zuckerberg de Meta/Facebook) se encuentran en una cruzada contra las instituciones democráticas y republicanas instauradas por las luchas colectivas en el centro del capitalismo. Esta es una batalla contra lo que ellos entienden es una “teocracia atea” —que denominan “La Catedral”— capaz de dominar las

mentos e incluye a las universidades, la prensa y la “cultura” en general. Estos actores neorreaccionarios buscan construir una nueva forma de gestión de lo común basada en estructuras imperiales, donde las formulaciones de la democracia liberal (aun con todas sus limitaciones) pasen a un segundo plano. Por ello, muchos de sus seguidores, fantasean –no casualmente– con la idea de “Milei Emperador”.

El ajuste de Milei... Año 1

El gobierno de Milei viene desarrollando una política de austeridad brutal en el Estado nacional y promoviendo ajustes sustantivos en las provincias y municipios. La austeridad se expresa formalmente en la búsqueda de un superávit fiscal suficiente para garantizar el pago de la deuda pública y “aniquilar” la inflación. Ello se ha organizado en torno a dos políticas generales denominadas ilustrativamente como la “motosierra” y la “licuadora”. La motosierra remite a la reducción y eliminación despiadada de instituciones, programas y oficinas estatales, forzando el despido masivo de las y los trabajadores más precarizados dentro del Estado. En 2024, la planta de personal estatal a nivel nacional se redujo casi un 10%. Si bien los despidos fueron generalizados, la motosierra se concentró especialmente en la desarticulación de espacios y políticas orientadas a proteger a minorías y sectores vulnerables: eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado en 2019, la supresión del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) creado en 1995, o el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada para ayudar en la búsqueda de niñeces apropiadas ilegalmente durante la última dictadura militar (1976-1983). Comenzando el 2025, el gobierno aceleró la motosierra, produciendo despidos masivos en los Espacios de Memoria y en áreas sensibles en el Ministerio de Salud, como el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” (único hospital nacional de salud mental), los programas de VIH, ITS, y Tuberculosis, el Hospital pediátrico “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, entre otros.

En paralelo, el ajuste en el gasto público se ha concentrado en la “licuadora”, que remite básicamente a congelar o aumentar por debajo de la inflación el gasto en determinados rubros relevantes, de manera de reducirlos progresivamente en términos reales. En tal sentido, el gasto del Estado nacional se ha achicado en casi 30% respecto de la inflación



durante 2024, con caídas concentradas en el gasto en seguridad social (pensiones y jubilaciones, y programas sociales canalizados a través de organizaciones sociales y comunitarias), en educación y ciencia (principalmente, universidades públicas nacionales y organismos de ciencia y técnica), en salud (hospitales públicos nacionales), subsidios al precio de servicios públicos (como agua, electricidad, transporte), y obras de infraestructura (desde reparación de edificios públicos a obras de agua potable o construcción y reparación de carreteras). El superávit fiscal se ha conseguido sobre la base de la destrucción del capital social colectivo acumulado en décadas y la precarización aún mayor de la vida común.

Con esa visión general, desde el primer día las UUNN fueron objeto de un ataque sistemático por parte del nuevo gobierno. En los primeros meses del 2024, el gobierno nacional congeló el presupuesto destinado a educación superior. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) el gasto público en el sector cayó un 31% en términos reales en los primeros siete meses de 2024, en comparación con igual período del año anterior. Los salarios reales de las y los trabajadores docentes y Nodocentes (administrativos, técnicos y de servicios generales) se redujeron en un 24% entre diciembre de 2023 y julio de 2024.

Según el último informe oficial “Síntesis de Información Universitaria”, el sistema universitario público de Argentina en 2022 incluía 57 universidades nacionales, con alrededor de 2,06 millones de estudiantes, 241 mil docentes y 58 mil Nodocentes. A diferencia de otros países,

la educación superior pública es gratuita y las universidades estatales funcionan dentro de un régimen de autonomía política y autarquía financiera, con un sistema de cogobierno que incluye la participación de todos los estamentos de las mismas (docentes, Nodocentes, estudiantes y graduados). Esta situación es conquista de las luchas históricas de la comunidad universitaria desde la reforma de 1918 y las resistencias al intento privatizador de 1995 cuando se aprobó la actual Ley de Educación Superior (LES). En este último caso, la resistencia –liderada por el movimiento estudiantil– bloqueó el intento de arancelamiento (Talamonti, 2008), aunque la LES –todavía vigente– permitió el avance de un proceso amplio de neoliberalización del sistema universitario. Aun así, las UUNN persisten como elementos clave en la batalla por construir una sociedad más justa; si se quiere, la contracara de la “batalla cultural” del gobierno anarco-capitalista.

Organización y lucha contra el ajuste en la Universidad

Hacia marzo de 2024, las autoridades universitarias (nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional –CIN–, integrado por las y los rectores o presidentes de las universidades públicas) y los sindicatos docentes, Nodocentes y estudiantiles señalaban que de seguir esta dinámica, las universidades cerrarían su puertas en el segundo semestre.

Frente a esa coyuntura, en una iniciativa inédita se conformó un Frente Gremial Universitario (FGU) para articular entre las organizaciones mencionadas, acciones de resistencia y protesta. Ello comenzó llevando las clases universitarias al espacio público como forma de “visibilizar” el conflicto y promover la discusión colectiva frente a la austeridad. En pocas semanas, esas múltiples clases públicas, movilizaciones locales y paros fueron sucedidas por la convocatoria el 23 de abril de 2024 a una movilización al Congreso de la Nación, con réplicas en las principales ciudades del país, la mayoría de las cuales tienen universidades nacionales. Según distintas estimaciones, esa movilización superó el millón de personas en la ciudad capital y otras 500 mil en el resto del país (Félicz y Deledicque, 2024). Las movilizaciones sumaron no sólo integrantes de la comunidad universitaria sino también convocaron a sindicatos de otros sectores, organizaciones sociales y miles de personas no organizadas.

Frente a la masiva movilización, un gobierno por otra parte inmovible, se vio forzado a aumentar el presupuesto de los “gastos de funcionamiento” de las universidades públicas en un 270%. Estos gastos incluyen el pago de servicios, gastos de limpieza, compra de libros y otros rubros similares. Sin embargo, solo representan entre el 5% y el 10% del presupuesto de cada universidad. El resto del presupuesto se destina a salarios de docentes, Nodocentes y autoridades (que son también docentes), y su crecimiento permaneció por debajo de la inflación. Además, se mantuvieron congelados los gastos en obras de infraestructura para la construcción, reparación y mantenimiento de edificios, aulas o laboratorios.

■ El superávit fiscal se ha conseguido sobre la base de la destrucción del capital social colectivo acumulado en décadas y la precarización aún mayor de la vida común.

La inflexibilidad del gobierno llevó al Frente Gremial Universitario a continuar con las acciones de protesta. Estas incluyeron la multiplicación de los paros y huelgas en todo el país, la realización de más clases públicas y nuevas iniciativas como las marchas de antorchas en distintas ciudades o “ferias de ciencias”, entre otras. En agosto de 2024, el segundo semestre del año inició con paros que se ampliaron y extendieron en escala e intensidad.

A su vez se buscó que el Congreso de la Nación interviniera en la discusión. A tal efecto, el CIN y el FGU promovieron la aprobación de un proyecto de ley que consiguiera recuperar la pérdida salarial desde comienzos de año, y a partir de allí indexara los salarios a la inflación, que en la segunda mitad de 2024 persistía elevada. A lo largo de varios meses de discusión y negociación, el proyecto avanzó en el Parlamento y logró la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Esos debates fueron acompañados por más acciones callejeras que convergieron en una nueva movilización nacional el día 2 de octubre de 2024. Esa movilización frente al Congreso de la Nación fue también muy masiva y acompañada en todo el país por acciones locales.

Una semana después de que el proyecto de ley fuera aprobado, el presidente Milei lo vetó, acusando a las y los legisladores de ser “dege-

nerados fiscales” que buscaban poner en riesgo el superávit fiscal que el gobierno quería sostener. La paradoja era que el proyecto aprobado tenía un costo fiscal –estimado por la OPC– de solo 0,14% del PBI (producto bruto interno). Unos meses antes, el gobierno había logrado (en el marco de la Ley Bases votada) la aprobación de una reducción en el impuesto a los bienes personales (que pagan solo unas 100 mil personas de altos ingresos) cuyo costo en pérdida de recaudación impositiva rondaba el 0,41% del PBI, es decir tres veces más.

Si bien el Parlamento podía rechazar el veto presidencial, para hacerlo debía conseguir $\frac{2}{3}$ de los votos en cada una de las Cámaras. En negociaciones denunciadas como viciadas por prácticas corruptas e intercambio de favores, el gobierno de Milei logró impedir que el Congreso lo rechazara.

El veto presidencial desató un proceso de multiplicación de acciones de resistencia en las universidades públicas. En ese momento, el movimiento estudiantil ganó la iniciativa y durante varias semanas entre octubre y noviembre de 2024 llevó adelante un sinnúmero de tomas de los principales edificios (rektorados y facultades) en decenas de universidades en todo el país. Estas acciones fueron complementadas por una nueva sucesión de huelgas convocadas por los sindicatos docentes y Nodocentes.

Si bien las acciones no lograron evitar ni hacer retroceder el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, sí consiguieron que el gobierno tuviera que ceder parcialmente. De esa forma, en octubre de 2024 docentes y Nodocentes recibieron una recuperación salarial significativa (6,8%, bien por encima del 1% que recibió el resto de los trabajadores del Estado nacional) y se reestableció un piso salarial (garantía salarial) para docentes y Nodocentes de menores salarios. Esto no resolvió el conflicto, pues en noviembre de 2024 los salarios persistían alrededor de 25% por detrás de los valores previos al gobierno de Milei.

La masividad de las movilizaciones y la multiplicación de las acciones de protesta generaron un clima social de apoyo a la lucha de docentes, Nodocentes y estudiantes a nivel nacional. Las encuestas de opinión indican claramente que el sistema de universidades públicas gratuito y de calidad es ampliamente valorado por la comunidad: en octubre de 2024, el 80,7% de las personas señalaron estar de acuerdo en que las universidades facilitan el mejoramiento de las condiciones de vida de

los argentinos (*Página/12*, 2024). Sabiendo esto, el gobierno intentó trasladar el debate desde el problema salarial y presupuestario (eje de las luchas) hacia la demanda por mayor transparencia en el uso de los gastos por parte de las universidades. Milei comenzó a enfatizar la necesidad de realizar “auditorías” en el gasto de un sistema de universidades que tiene amplia autonomía de gestión otorgada por la Ley de Educación Superior y la Constitución Nacional. El intento del gobierno de desviar la discusión ignora que todas las universidades públicas atraviesan periódicamente numerosos procesos de auditoría y control interno y externo. En este último caso, es la AGN (Auditoría General de la Nación) bajo control del Parlamento la que se encarga de desarrollar esas auditorías. Buscando ensuciar el debate y desviar la atención, el gobierno de Milei niega la realidad con falsos argumentos. Pero ya sabemos que mienten, mienten, que algo quedará...

Mientras tanto, en septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto de gastos y recursos para el año 2025. En el mismo, las partidas de gastos para las universidades nacionales eran aún más bajas que en 2024. De todas maneras, por segundo año consecutivo, el presupuesto para el Estado nacional no se discutió ni se votó en el Congreso. Sin presupuesto aprobado, el PEN ejecuta los gastos para el sistema universitario actualizando arbitrariamente el último proyecto aprobado (para el 2023, votado en diciembre de 2022).

Como prometió en la campaña electoral, la negativa a garantizar el financiamiento de las universidades indica que el objetivo del gobierno no es tan sólo llevar adelante un recorte en el gasto público, donde las universidades nacionales representan una pequeña proporción. En realidad, hay un objetivo aún más amplio: ahogar a las universidades nacionales para promover su arancelamiento como paso previo a su privatización definitiva o su traspaso a las provincias. El sistema público de universidades nacionales es parte esencial del proceso de producción de conocimientos de alta calidad (que incluye desde centrales nucleares a satélites, de vacunas contra el COVID-19 al desarrollo contra enfermedades endémicas en la región como el dengue) y la promoción del ascenso social por la vía de la educación.

La resistencia social colectiva frente al proyecto oficial de destrucción de la Universidad pública, gratuita y cogobernada en Argentina se

multiplica. Si bien luego de más de un año de gestión, el gobierno de Milei todavía muestra una importante capacidad para promover el recorte presupuestario, la comunidad universitaria sigue trabajando para construir una fuerza social capaz de revertir el programa anarco-capitalista.

2025: El ajuste continúa

El inicio de 2025 mostró un importante reflujo en las acciones y una fractura parcial de la articulación intersindical (el Frente Gremial de Universidades Nacionales) que había logrado potenciar la lucha. A su vez, el conjunto de rectores y rectoras nucleados en el CIN comenzó subrepticamente a retirar el apoyo explícito a la demanda colectiva. Si a comienzos de 2024 se anunciaba el potencial cierre de las UUNN si no se aprobaba un aumento presupuestario, a comienzos de 2025 ese elemento salió del relato oficial en la comunidad universitaria. Por su parte, el movimiento estudiantil que había aportado masividad, también entró en modo pausa.

Las iniciativas del gobierno han sido ratificadas desde comienzos de 2025 con un presupuesto que pretende condenar a las UUNN a languidecer. La Decisión Administrativa 3/2025 que, por segundo año consecutivo, prorrogó el Presupuesto Nacional 2023, otorga a las UUNN tan sólo 3,3 billones de pesos, menos del 50% de lo pedido por el CIN. Con ese presupuesto, sólo podían pagarse los salarios hasta septiembre. En enero de 2025 el gobierno aprobó una masa de salarios para el conjunto de docentes y Nodocentes universitarias que contemplaba un aumento salarial igual a cero (0) para el resto del año. Por otro lado, el dinero asignado por el Poder Ejecutivo a las UUNN para el rubro “gastos de funcionamiento” en enero de 2025 aumentó sólo 103% en relación a enero de 2023, mientras la inflación en ese período fue de 552%: la caída en términos reales es cercana al 70%. En junio de 2025, un segundo decreto (425/25) amplía nuevamente las partidas universitarias, pero deja el presupuesto total para el año por debajo del monto del año anterior (Lavecchia, 2025). Con este aumento se garantiza el pago de los salarios ya acordados para el conjunto del año (sin nuevos aumentos proyectados ni incluídos) y nada más. Según CONADU Histórica, el presupuesto universitario pasó del 0,72% del PBI en 2023 a un estimado de 0,43% para 2025.

Un año nuevo, despertar de la modorra

En ese contexto, el año comenzó con la sensación de que algo se había roto. Hasta mediados de marzo casi no hubo acciones convocadas por los sindicatos. Las principales asociaciones docentes (CONADU y CONADU Histórica) mostraron grietas y las dirigencias arrancaron el año titubeando. Al mismo tiempo, el sindicalismo Nodocente, nucleado en la FATUN, retornó a un clásico vandorismo a la inversa (en lugar de golpear para negociar, comenzó a negociar sin luchar). En 2025, ese sector negoció con el gobierno —sin acciones contenciosas nacionales o coordinadas— compensaciones parciales por encima de los aumentos salariales generales otorgados. Primero, consiguieron complementos no remunerativos para las categorías inferiores, y más adelante, para las categorías intermedias. Esto buscó mejorar los aumentos salariales otorgados unilateralmente por el Estado nacional, siempre por debajo de la inflación.

Para el conjunto de las y los trabajadores de las UUNN, la negociación paritaria brilló por su ausencia y pasó de ser irrelevante (porque el gobierno nacional no negociaba) a inexistente (simplemente, se suspendieron las reuniones).

En ese marco, el movimiento estudiantil mantuvo niveles históricamente bajos de participación y acción autónoma o coordinada. No está claro si ello es un reflejo reformista de las organizaciones gremiales estudiantiles o la respuesta a un giro conservador de sus bases. Sea lo que sea, la situación económica general y la emergencia presupuestaria en las universidades no da lugar a tener actitudes dubitativas.

Frente a un ajuste continuo, el reclamo contra el potencial cierre de las universidades desapareció de la agenda. Sin explicaciones claras, el CIN recuperó su histórico rol como patronal sin matices, y prácticamente olvidó el reclamo general, y en particular el salarial.

En torno a mayo de 2025 comenzó a visibilizarse la iniciativa parlamentaria de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. El mismo fue presentado a finales de ese mes. Notablemente, el nuevo proyecto de ley envía la recuperación salarial al espacio de las paritarias a diferencia del proyecto aprobado en 2024, que obligaba al Poder Ejecutivo a aumentar inmediatamente los salarios para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023.

Desde el aumento logrado en octubre de 2024, los salarios básicos de docentes y Nodocentes (sin adicionales) continuaron la tendencia decreciente frente a la inflación. La pérdida salarial está poniendo creciente presión sobre las condiciones de vida de las y los trabajadores de las UUNN, que empiezan a abandonar sus empleos (FCE-AGD-UBA, 2025). La llamada “vocación” no compensa la pauperización, y en algunas áreas el porcentaje de renuncias entre docentes y Nodocentes es preocupante para la continuidad de las actividades (Alonso, 2024). Sin un cambio urgente en esta tendencia, la Universidad morirá desangrada. Todo marcha de acuerdo al plan (TMAP) del gobierno, parece. Y a veces, parece que las direcciones sindicales alegan demencia, a pesar de la creciente preocupación al interior de la comunidad universitaria.

Sin embargo, es significativo que en el cierre del primer semestre del año 2025 se acrecentó la presión interna en las organizaciones sindicales para acelerar y radicalizar acciones. En asambleas por Facultades, las y los docentes expresan su rabia, desazón y vocación de lucha. En ese contexto, es preocupante escuchar a referentes sindicales docentes relativizando las acciones de protesta frente a la necesidad de priorizar la defensa de las organizaciones sindicales: ¿qué mejor defensa para los sindicatos que ponerlos al servicio de la lucha colectiva que tantos reclaman?

El personal Nodocente también comienza a expresar esa sutil presión desde abajo. El movimiento estudiantil llega, un poco tardíamente, y comienza a manifestar la necesidad de visibilizar el conflicto y activar. En junio de 2025, en reunión del Frente Sindical, el CIN y la estudiantil Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a juntar firmas para apoyar el nuevo proyecto de Ley. El Frente Sindical apoyó la moción y planteó realizar acciones para la última semana de junio con la consigna “Prendete a defender la Universidad Pública”. Si bien se habló de una nueva Marcha Federal Universitaria, las acciones decantaron en una jornada de paros docentes (sin paro Nodocente) con Marchas de Antorchas locales.

En un año electoral, y con la principal referente opositora detenida (Cristina Fernández de Kirchner), se empiezan a mover las articulaciones de un movimiento universitario que necesita reencontrarse con sus tradiciones de lucha y acción para sobrepasar, como en 2001, las barreras que

ponen sus organizaciones gremiales, y desbordarlas. Nada está escrito, pero comienzan a aparecer signos de que despertamos de la modorra.

Aprendizajes colectivos: la lucha sirve y es inevitable

La experiencia colectiva de la lucha y la acumulación de fuerzas permite recoger una serie de aprendizajes. Hay que retomar la idea de que el cambio social se construye desde abajo y sin permiso, en la lucha y a través de ella, pescando en las resistencias del pueblo aquello que suma, multiplica y, por lo tanto, funciona como catalizador. La clave está en encontrar nuevos horizontes que articulen la rabia y la indignación ante un mundo cruel e injusto (Lorde, 2003; Vronsky, 2024), frente al odio que, por momentos, la derecha logra condensar tan eficazmente.

Partiendo desde nuestra posición como parte del pueblo, es desde donde podemos encontrar la verdad del ajuste. No alcanza con describirlo, hay que sentirlo. Por eso, la lucha sirve si la impulsamos desde los lugares de trabajo y estudio en la Universidad, y que no sirve quedarse esperando que “alguien haga algo” (gremios, “dirigentes” políticos o sindicales) si nosotras y nosotros no hacemos nada. Es clave salir de cierta inercia en la que las organizaciones populares han entrado producto de la desesperación por el avance de la ultraderecha, por efecto de la violencia y persecución, y por la crisis de la estrategia de integración neodesarrollista al Estado.

No luchar no es opción. Hay que abandonar una frase que en 2024 ha circulado mucho, sobre todo entre el progresismo desmoralizado: “fingir demencia”. La vida no puede discurrir como si nada estuviera pasando. Hay que recuperar las utopías en el sentido propuesto por Eduardo Galeano, como horizonte que guíe nuestras prácticas en el presente. De nada sirve deprimirse frente las iniciativas de ajuste oficiales, o desmoralizarse ante las “agachadas” cómplices de representantes patronales (como los rectores y el CIN), o las direcciones de algunos sindicatos.

Aprendimos (o recordamos) que vale la pena rescatar las acciones callejeras múltiples y diversas, que permiten sumar al conjunto de quienes están dispuestos a defender la educación pública con sus cuerpos en las calles. Pudimos recuperar tradiciones “olvidadas” por muchas organizaciones sindicales en las universidades: los paros, clases públicas, asambleas y tomas de facultades. Estas acciones volvieron a aparecer en el centro de nuestro repertorio de luchas, mostrando que la visibilización

del conflicto requiere dislocar lo cotidiano, saliendo del status quo y la comodidad de la rutina.

Finalmente, las acciones de este proceso demostraron que hay que juntarse con otros sectores en lucha y resistencia. Para construir una práctica política eficaz, necesitamos conformar un frente único contra el ajuste y el oscurantismo fascista.

Referencias bibliográficas

- Alonso, M. (2024, diciembre 21). *Se multiplican las renunciadas de docentes universitarios por los bajos salarios y la falta de fondos para investigar*. elDiarioAR.com.
- Borovinsky, T., Plot, M., y Slipak, D. (2024). Milei y los horizontes de lo político. Crisis de régimen y anhelo de clausura de la incertidumbre democrática. En A. Grimson (Ed.), *Desquiciados. Los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha en el mundo*. Siglo Veintiuno Editores.
- Cronista.com. (2025, julio 1). *Mark Zuckerberg quiere cerrar todas las universidades y aseguró que estudiar quedó obsoleto*. Cronista.com.
- FCE-AGD-UBA. (2025). *Evolución del salario de la docencia universitaria en Argentina. 'El otoño del salario'* (Informe No. 1; Informe de Evolución salarial, p. 2). FCE-AGD UBA.
- Féliz, M. (2024). La Argentina estancada. Dependencia, crisis transicional y fragmentación social. En G. Chicote y A. Camou (Eds.), *Gran La Plata: Heterogeneidad social, conflictos sociopolíticos y políticas públicas en territorio bonaerense* (1ra ed., pp. 27–45). CLACSO.
- Féliz, M., y Deledicque, L. M. (2024, abril 24). Marcha Federal Educativa. La Universidad tomó las calles en todo el país. *Huella del Sur*.
- Land, N. (2022). *La Ilustración Oscura*. Y otros ensayos sobre la neoreacción. Materia Oscura Editorial.
- Lavecchia, G. (2025, junio 27). *El presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante, la menor desde 2005*.
- Lorde, A. (2003). *La hermana, la extranjera. Artículos y conferencias*. horas y HORAS. la editorial.
- Página12. (2024, octubre 14). *Una mayoría aplastante contradice los argumentos de Javier Milei contra las universidades. Encuesta de Zuban-Córdoba*. PAGINA12.
- Semán, P., y Welschinger, N. (2023, agosto 18). *II tesis sobre Milei*. Revista Anfibia.

- Stefanoni, P. (2025, febrero). ¿Libertad sin democracia? Distopías neorreaccionarias que recorren el mundo. *Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina*, 315.
- Talamonti, P. (2008). La lucha contra la Ley de Educación Superior en la UNLP entre 1994 y 1996. *V Jornadas de Sociología de la UNLP*, 26.
- Vronsky, F. (2024, diciembre 10). *El secreto arte de la crueldad*. LatFem.



Universidades en Argentina: entre *Memento* y *Laputa*

Guillermo Folguera*

1. Una película para comprender las Universidades

Película *Memento*. El director y guionista, Christopher Nolan, nos presenta a un hombre que cada un puñado de minutos pierde la mayoría de sus recuerdos. Olvida gran parte de lo vivido. Olvida quién es y cómo llegó a esa situación. Claro, no es la única película ni obra que trata acerca del olvido. ¿Por qué la elegí entonces como guía para el recorrido? Porque el personaje principal está buscando comprender lo básico. Y estas preguntas acerca de lo fundamental, acerca de lo esencial, son un buen puntapié para iniciar nuestro breve recorrido sobre las Universidades. Una situación preocupante, que precisa ser revisada y comprendida para poder ser revertida.

Antes de abordar cada una de las preguntas básicas voy a ser franco, la Universidad como temática es demasiado vasta y no tengo ni el espacio ni el conocimiento para poder desarrollarla en su totalidad. En cambio, puedo hacer algo más modesto: tratar de analizar el vínculo en particular entre las Universidades y las diferentes formas de extractivismo en nuestro país. Si bien esto representa solo un aspecto de la temática, tiene la suficiente preponderancia e impacto en nuestra cotidianeidad como para dedicarle nuestro recorrido.

* Licenciado en Filosofía (UBA), Licenciado en Ciencias Biológicas (UBA) y Doctor en Ciencias Biológicas (UBA). Investigador Independiente del CONICET con sede en el Instituto Alejandro Korn (FFyL-UBA). Profesor del área de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Biología (FCEN-UBA).

2. ¿Qué vemos?

Abrimos los ojos: ¿qué vemos? En un país en donde la desigualdad social y la destrucción ambiental crecen cada año, la tarea de comprender a las Universidades no es fácil. Se trata de una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento social, señalamiento mediático e intento de cooptación de las Corporaciones. Sin embargo, la degradación institucional y la destrucción salarial parecen ignorar ese reconocimiento y van en otra dirección. ¿Cómo se vincula el presente de las Universidades con todo lo que nos pasa en materia de extractivismos? ¿Qué relación hay entre lo que sucede en sus aulas y laboratorios, y un afuera que es terreno de expansión de las Corporaciones? ¿Hay un afuera y un adentro? Recordemos que toda persona cree que hace el bien, pero ¿qué será hacer el bien cuando se trata de las Universidades? Universidades, así, con mayúscula y en plural. Busquemos algo que nos ayude a comenzar nuestro recorrido. Un espejo. Un espejo roto en un baño de una Universidad pública. Ahí está nuestra primera imagen.

Empecemos entonces con una pregunta básica.

3. ¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos las Universidades? La primera respuesta suele ser aquella que involucra a profesores, investigadores, graduados, estudiantes y no docentes. Primer dato: no se suele incluir en esa lista al resto de la sociedad. Ya volveremos a este punto. Segundo dato: el orden en la respuesta suele ser exactamente ese. Por supuesto que hay muchas Universidades y con diferentes experiencias, pero en general la multiplicidad de claustros se pierde. Democracia universitaria le dicen, y se materializa en las urnas con elecciones periódicas. Sin embargo, nos gobierna un verticalismo brutal. ¿Quiénes toman las decisiones? Si la democracia está en crisis tanto en el mundo como en el país, el ámbito universitario no está exento. Volvemos a las excepciones,, siempre las hay, pero hoy no vamos a detenernos en ellas. Hoy pensamos en la regla. Cuando se trata de decisiones importantes, rigen los verticalismos. Tercer dato: en esa enumeración no hay tiempo ni espacio, no hay territorio ni nada bajo nuestros pies. Tampoco hay historia.

Nos enseñaron también que la Universidad tiene varios objetivos: docencia, investigación y extensión. Detengámonos a mirar cada uno de

esos objetivos propuestos y el modo en que sus prácticas tomaron forma. Veamos.

Docencia. Un salario escaso. La virtualidad creciente como garantía de algo. Acortamientos de carreras como virtud. Carreras cada vez más empresariales como orgullo. Y las preguntas se multiplican. ¿Cuándo fue que la Universidad pública se propuso como objetivo competir con las instituciones privadas? ¿Cuándo se decidió que las Universidades tenían que formar pibes y pibas para el Mercado? ¿Cómo y cuándo se definieron esos objetivos? ¿Quién los propuso, impulsó y ejecutó?

Investigación. Las Universidades como instituciones de investigación también retrocedieron y fueron avanzando otras instituciones tales como CONICET. Parece un tema de nombres, pero no. Si ponemos el acento en los extractivismos hay diferencias significativas. Por ejemplo, CONICET y las Universidades suelen tener vínculos distintos con las problemáticas territoriales. Qué lugar tiene la pregunta por el territorio, conocer el territorio, cuidar el territorio. En cambio, las líneas principales de investigación se focalizaron en hacer negocios con el territorio. ¿Cuándo fue que creímos que era todo lo mismo? Claro, ahora está Milei y destruye a Universidades y CONICET por igual. Y también a INTA, INTI y la lista sigue. ¿Será momento de dar la discusión acerca de para qué y para quién investigamos? Quizás volvamos a escuchar que no, no es posible esa discusión cuando todo se cae. Perdón, no se cae, lo tiran. Pero cuándo es buen momento. Nunca ha sido el contexto apropiado para poner eso en discusión. Quizás también es por eso que hoy nos caemos. Sigamos.

La tercera pata: extensión. Cambiaron varias veces la palabra para referirse al acercamiento de las Universidades a las problemáticas del resto de la sociedad. Pero no cambiaron tantas veces las prácticas. ¿Qué significa imaginar como una “extensión” el vínculo con las necesidades y deseos del resto de la sociedad? Salvo algunas excepciones muy particulares, la extensión se expresa en las Universidades desde el lugar de la voluntad, e incluso de lo anecdótico. Seamos francos, nunca se le dio verdadera prioridad. Prioridad presupuestaria, ética, política. Nada. Digámoslo de una vez: las Universidades buscan acercarse a una sociedad de la que no se sienten parte. Y no solo no se consideran parte, sino que se imaginan arriba, bien lejos, flotando. Esto no es de hoy ni exclusivo de

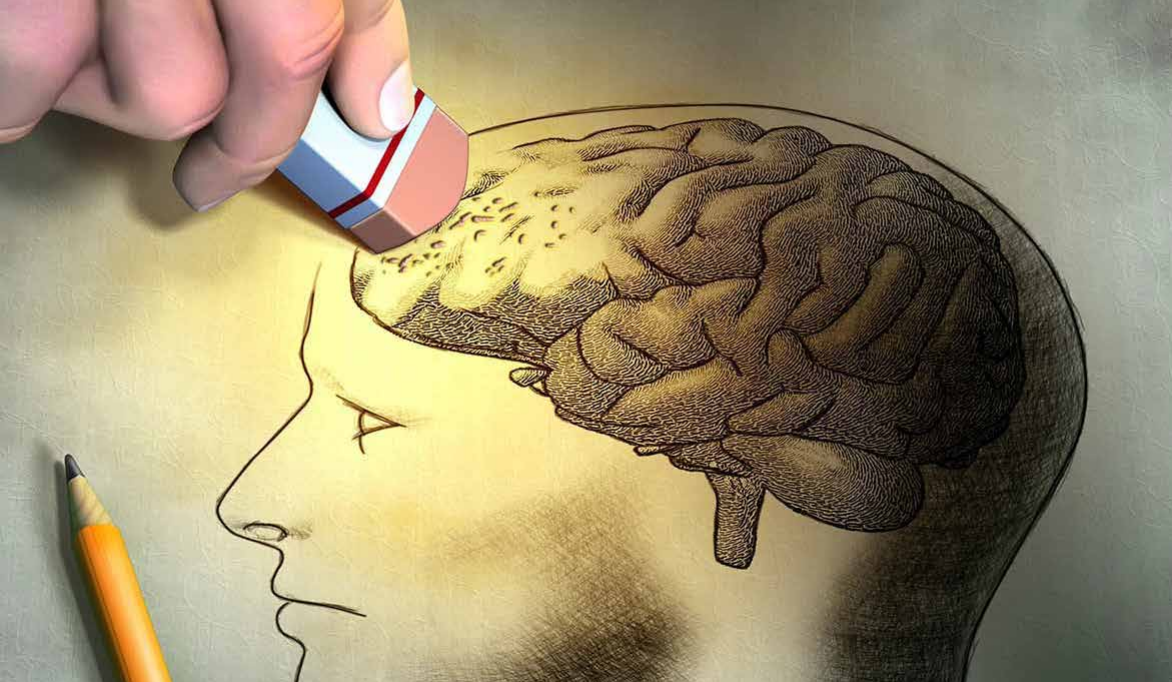
Argentina, pero es una característica fundamental para entender algunos asuntos importantes cuando nos preguntamos acerca de quiénes somos.

*Con los huesos de quién sea,
hay que hacer una escalera,
para que en las Facultades,
olvidemos a los de afuera.*

Bien, algo pudimos responder. Vamos a lo siguiente, dónde estamos.

4. ¿Cómo llegamos hasta acá?

Dijimos que este texto no puede ser exhaustivo. Sin embargo, frente a la pregunta acerca de cómo llegamos hasta esta situación, debemos comprender algunos elementos históricos. Pongamos algún punto de partida, un límite de tiempo: De la noche de los bastones largos hasta acá. Hace sesenta años. Onganía irrumpe en la Universidad de Buenos Aires. En Córdoba se rebelan los estudiantes junto con obreros y sindicatos, explota el Cordobazo. También en Rosario. Otro tanto en Corrientes. Las Universidades de los 60' eran distintas. No sé si en todos los aspectos, pero sí distintas. Y aparecen historias en diferentes territorios del país que así lo muestran. Oscar Varsavsky marcó algunas críticas importantes, también Rodolfo Kusch. Los estudiantes en las calles lo hicieron. Eran Universidades diferentes. Y los dictadores y empresarios lo sabían, a la vez que entendieron que debían atacar en el corazón de estas Universidades. Intervenciones y vaciamientos. Persecuciones y desapariciones. Las Dictaduras cívico, eclesiásticas y militares sabían lo que hacían. Y de todo eso, a pesar de las décadas de democracia, nunca nos repusimos. El tan mentado espíritu crítico de las Universidades se fue moviendo en espacios cada vez más reducidos y excepcionales. Los cuerpos se abroquelaron en laboratorios y aulas. El proyecto dictatorial triunfó al imponer sus objetivos fundamentales. La prioridad en la autorreferencia y la búsqueda por la propia subsistencia, relegando cualquier otro valor y objetivo. Y con un financiamiento cada vez más escaso, el resultado fue claro: se necesita dinero, quién lo puede dar. Así las Universidades buscaron financiadores. De algunos asuntos, de los asuntos lucrativos, de los vinculados con los negocios y el control social. Entonces quedó



abierta la puerta para la promoción y multiplicación de los convenios público-privados.

Ya sin Dictadura pero con un proyecto de la Dictadura vestido de algo distinto a la Dictadura.

*Universidad
de las Corporaciones,
y al que no le gusta,
se jode,
se jode.*

5. ¿Quién es usted?

El centro puesto en el financiamiento de las Universidades y los convenios público-privados tomaron formas particulares durante la Democracia. Y la Universidad fue “afuera” a buscar lo que precisaba para garantizar ese presupuesto siempre magro y escaso, al menos en comparación con las ganancias de aquellos sectores privados. Pero en esa búsqueda olvidó también las preguntas básicas. Por ejemplo, quién sería el privado elegido, ¿una Pyme o una Corporación? Entre los olvidos, olvidó que no eran lo mismo en ningún sentido. También olvidó preguntarse si se trataba de exportar o de producir para el pueblo cercano. Entonces las Corporaciones tomaron protagonismo y decisión. Y celebraron desde

Universidades y otras tantas instituciones lo que iba pasando en la sucesión de gobiernos nacionales y provinciales. Y mientras tanto se fueron aprobando las diferentes formas de extractivismo que hoy nos determinan. Se aprobaron los transgénicos. También la megaminería. Luego se avanzó con las plantaciones forestales. También el fracking. Después se expandió la minería de litio. Se aprobó el offshore. También se generaron y/o ampliaron grandes empresas en el centro de ciudades: Porta, Atanor, Aluar, Klaukol. La lista es interminable. Todas denunciadas por hacer de sus vecinos cuerpos sacrificados. Y en la mayor parte de los casos, las Universidades respectivas apoyaron cada uno de los proyectos. Las Universidades asumieron que debían estar al servicio de las Corporaciones para lograr la exportación-de-grandes-toneladas-de-algo que promete mejorar un no-se-qué de algún modo que-vaya-a-saber-cuál-es.

*Compañeros,
siempre fuimos compañeros,
de momentos tan terribles,
que trataremos de olvidar.*

6. ¿Usted es de confianza?

Esta Universidad de la nueva democracia debía determinar quiénes eran de confianza. Al ser la fuente de financiamiento el único aspecto a considerar, aliado sería quién les permitiera esa entrada de dinero. Y junto con las Corporaciones, otros actores con DNI nacional dijeron presente. Pongamos un ejemplo, para muestra basta Lino Barañao. En su camino como ministro de ciencia, tecnología e innovación productiva (un título extenso) no disimuló nada:

Un chico que recién se recibió de la carrera científica prefiere entrar a una startup y no al CONICET (...) establecer una empresa te suma un área de placer más.

O también:

¿Para qué formar a esta gente si no la podemos utilizar? El utilizarlo implica ponerlo en el lugar en el que sea más útil. Si la prioridad es desarrollar una variedad de alfalfa resistente a las sequías, tiene que trabajar en eso porque eso es lo que se está necesitando. No puede decir que quiere hacer su tesis en otro

tema. Es un compromiso social.

Lino aplaudido por propios y ajenos. Lino sonriente. Lino y sus discursos. Pero no fue solo discurso, fue también práctica. Vamos a un ejemplo explícito de esta política: entregaron el trigo. Trigo transgénico de tecnología HB4 con resistencia al veneno glufosinato de amonio para una empresa que combinaba al rey de la soja Gustavo Grobocopatel, al millonario Hugo Sigman y al grupo Clarín con Héctor Huergo. Y una alianza público-privada en la que la UNL y CONICET daban la garantía de un aparente beneficio colectivo. Hoy a más de tres años de su liberación podemos y debemos preguntarnos: ¿cuál fue el beneficio? ¿Para quién fue el beneficio? ¿Qué lugar ocuparon en la decisión los pequeños productores agrícolas? ¿Los apicultores? ¿Los problemas alimentarios? ¿La deforestación y el desmonte? ¿Los pueblos fumigados?

Sabemos la respuesta. Solo habíamos decidido olvidar.

*Ay ay ay ay,
qué risa que me da,
si no aprueban el transgénico,
que quilombo se va a armar.*

7. ¿Quiénes son los otros?

Si el análisis se limita a quiénes otorgan financiamiento y son interrumpidas las preguntas por las consecuencias (entre tantas otras), entonces quiénes son los otros que no somos nosotros. La respuesta es directa: los mismos que amenazan a las Corporaciones. “Estás exagerando” pueden decirme.

Fue explícito:

“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho.”

Otra vez el ministro Lino Barañao.

Y también otra vez la lejanía de la Universidad con todo lo que sucede afuera. O más bien, con todo lo que sucede abajo.

Vuelve a aparecer la misma idea de lejanía. Pausa, necesitamos una imagen. Vamos a la segunda obra de ficción: la isla de *Laputa*. En el famoso libro de Jonathan Swift, en el que luego de un naufragio Gulliver llega a esta isla flotante en la que viven los científicos y gobernantes.

Abajo, viven los habitantes con temor a ser reprimidos. Si bien fue escrito hace siglos, su actualidad impresiona. Apenas algunos nombres propios para actualizar. Arriba, científicos, corporaciones y gobernantes miran hacia abajo. Y aunque la lejanía tuvo excepciones, éstas raramente se hicieron política pública.

*El pueblo,
hundido,
siempre será vencido.*

Habrá que dejar las alturas nomás.

8. ¿Qué hacemos?

Salir de Memento. Bajar de LaPutá.

El proyecto de Javier Milei no es solo un proyecto de destrucción (aunque también). Sin dudas busca eliminar o dejar caer todo lo valioso por fuera del Mercado, para profundizar la supeditación de las instituciones científicas a las Corporaciones tanto extranjeras como locales. No solo es un proyecto que busca transferir recursos y extranjerizar, también pretende someter y poner a disposición. Por eso no es nuevo, sino que puede verse como una continuidad en muchos sentidos durante estos 60 años. La destrucción salarial se ha acelerado con Milei de maneras impactantes. Del mismo modo, dejar caer a las instituciones, precarizar aún más los ya precarizados, escuelas, hospitales y también, claro, Universidades.

Limitar la historia de nuestras Universidades a lo vivido en el último año y medio, sin comprender además que hay continuidades que explican qué, dónde, cómo, cuándo, no nos hace ningún tipo de favor frente al desafío de revisar nuestras Universidades. Hay una lógica del financiamiento como principio básico. Ciertamente, vivimos en el capitalismo, pero ¿eso es la ciencia? ¿No importan las consecuencias socioambientales en ningún sentido? ¿Las ciencias y sus instituciones deben comportarse como empresas? Y esto no aplica solo para la investigación, lo mismo está sucediendo en la docencia. Carreras más cortas que buscan “atraer” estudiantes para insertarlos lo más rápido posible en el ámbito laboral. “Insertar estudiantes en el Mercado”: cuántos sentidos en esa frase tan simple. Y algo similar en cuanto a la extensión. Científicos “extendidos”

hacia las empresas. La confusión con proyectos que invitan a avanzar con el ámbito privado es una muestra descarnada (y descarada) que en la nube la Universidad está desfinanciada pero cómoda. Demasiado lejos y abajo están las asambleas, organizaciones, productores rurales, movimientos sociales.

Acá estamos. Duele el espejo roto. Todavía más duele lo que muestra. Por ello, miremos al espejo y seamos capaces de encontrar en la memoria que nuestras historias requieren ser revisadas. Recordar el olvido selectivo y la incapacidad de dar cuenta acerca de qué sucedió con las lejanías y con quienes hoy están cerca.

Recordar y Bajar: no para extendernos, ni para investigar, ni para enseñar, sino sólo para ser parte.



¿Hacia dónde va el movimiento estudiantil?

Entrevista a tres organizaciones universitarias

Desde la Reforma en 1918, los estudiantes han sido un factor de cambio y transformación de la Universidad en nuestro país. Al calor de los distintos ciclos políticos, el movimiento estudiantil protagonizó momentos de alzas de lucha e impugnación sistémica, que tiene como hito el Cordobazo en 1969.

Hoy las Universidades atraviesan una crisis que es resultado de un cambio estructural de la sociedad neoliberal y el capitalismo flexible de plataformas, pero en una coyuntura particular de ataque directo a la educación pública superior implementado por el gobierno nacional de Javier Milei y La Libertad Avanza.

Para conocer qué análisis tiene de esta situación el movimiento estudiantil argentino, desde *Huella del Sur* entrevistamos a tres organizaciones que componen un marco amplio de la vida universitaria: La Mella, que se inscribe dentro del campo nacional y popular cercano al peronismo; la Juventud del PTS, dentro de la izquierda trotskista; y estudiantes de Agite!, de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, agrupados en el sector de la izquierda independiente.

En tan solo cuatro preguntas comunes buscamos dar cuenta de una mirada de largo plazo que aborde aspectos sociales, políticos e institucionales. Las respuestas, de conjunto, brindan una radiografía en la que se identifican caracterizaciones y posicionamientos en muchos aspectos diferenciados, pero que representan el estado actual de uno de los factores de cambio más relevantes de la Universidad.

HdS: *¿Para qué se forman hoy lxs estudiantes en las universidades argentinas? ¿Qué rol juega actualmente la Universidad en el modelo de país vigente?*

La Mella: Es uno de los debates que desde el movimiento estudiantil nos venimos dando algunas organizaciones, pero no está para nada saldado. De hecho, no es un debate reciente sino que tiene un trasfondo profundo de hace muchos años, desde el momento en que se pensaron las Universidades y a través de los distintos momentos de modificaciones de planes de estudio, todo el proceso de la LES en los 90. Es una discusión vigente si la Universidad tiene que formar profesionales para el mercado, desde una mirada individualista, y la perspectiva –y uno de los ideales por los que nosotros militamos– que es la construcción de un proyecto político universitario que esté vinculado con las demandas y las problemáticas que tiene el país y que piense las profesiones también vinculadas a cuál es el aporte en términos productivos que se le puede dar para un proyecto político nacional y popular en nuestro país.

Hoy en día podemos preguntarnos si las carreras están orientadas en ese sentido. Creo que hay algunas universidades (sobre todo en el proceso de creación de nuevas Universidades durante el gobierno de Cristina Kirchner) que retoman la importancia de la Universidad vinculada al territorio. Las Universidades de ese proceso de creación en el 2010, sobre todo en el conurbano bonaerense, tienen un arraigo mucho más profundo en las problemáticas del territorio, del municipio en el que se encuentran, de los estudiantes que forman parte y de los docentes que trabajan allí, muchas de esas carreras tienen materias obligatorias que trabajan la relación entre la historia argentina y los procesos productivos y políticos de nuestro país. Me parece que eso apunta a que uno como estudiante tenga como parte de su formación la conciencia social que implica que uno tiene un privilegio por acceder a la educación superior y que en función de ese privilegio es importante que después todo lo que aprendimos podamos ponerlo al servicio de las necesidades y las demandas de nuestro pueblo. Ahora, hay otras Universidades que lejos están de eso y si nos ponemos a ver los planes de estudio o las políticas que se llevan adelante, creo que falta mucho. Y más en esta etapa en la cual cada vez crece más el estudiante que busca una carrera que no le ocupe tanto tiempo o que no tarde tantos años en recibirse, pensando más en el desarrollo profesional individual, muy atravesado por una

época en la que cada vez tenemos que trabajar más y lo que se busca es conseguir algo fácil que me garantice plata. Sobre todo en esta época, esa es una de las demandas por las que tenemos que seguir luchado, de romper con el individualismo desde las carreras y desde la formación, y volver a abonar a la producción de conocimiento colectivo y a pensar esta conciencia social de la importancia del aporte de nuestras carreras a la producción de un modelo de país que sea sustentable, que sea justo e inclusivo para todos.

Agite! Arquitectura: Las Universidades Nacionales y Públicas están hace décadas atravesadas directamente por los intereses privados y los mercados, forman profesionales acriticxs, sin responsabilidad política y bajo lógicas que expulsan a los sectores de bajos recursos.

El modelo de país actual pregona el achicamiento estatal y el desfinanciamiento de los sectores públicos. En este contexto, las universidades están bajo constante ataque, con desfinanciamiento presupuestario, bajísimos salarios docentes y un reducido plan de becas para lxs estudiantes.

Creemos que las universidades deben estar ligadas al modelo de país que queremos construir: soberano, justo, sin oprimidos ni opresores. Por eso, su rol dentro de este marco es el de luchar y defender, pero al mismo tiempo transformarse para reencontrar el sentido real de la Educación Pública.

Juventud PTS: Muchos estudiantes llegamos a la universidad haciendo grandes esfuerzos con el sueño de recibirnos, siendo muchos primera generación de universitarios en sus familias. En general uno entra con mucha ilusión, pensando en qué va a poder aportar con lo que estudia. Obvio también la esperanza de que tener un título te asegure un buen laburo. El problema es que es muy difícil, porque los jóvenes tenemos trabajos en negro, sobra mucho mes al final del sueldo, casi no hay becas, entonces es complicado recibirte. Y además recibirte en medio de la crisis económica tampoco te asegura conseguir trabajo de lo que estudiaste. Hace años que el mercado de trabajo en Argentina no busca gente calificada, sino que crece la precarización. Entonces hay una contradicción, que si se recibe mucha gente tampoco les sirve, porque es mano de obra que el sistema, como está planteado, no puede absorber.

Esto también pasa porque el rol que juega la universidad en el modelo de país que tenemos está, por un lado, al servicio de las empresas; por ejemplo del agro o la mega minería, cosas que benefician a un sector muy chico de la población. Por eso el gobierno de Milei también insistía tanto con la privatización y los vouchers, que sería una universidad totalmente al servicio del mercado, donde se estudiaría “lo que sirve”, que significa lo que le da ganancias a los ricos. Ahí la educación como derecho no existe.

Y por otro lado, un sector de la universidad apuesta a un desarrollo productivo muy ligado al Estado. El tema que tiene esto es que está muy limitado, porque con la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional la política económica de nuestro país no se define acá, se define en Washington. Y la educación, pero también la salud, etc, son blanco de ajuste.

Nuestra perspectiva es que la universidad tendría que estar al servicio de dar respuestas a los grandes problemas sociales, al servicio de las mayorías populares, de terminar con la desigualdad. Por las peleas que se han dado en defensa de la educación tenemos universidades de primera calidad, todos esos conocimientos habría que ponerlos en función de esto.

HdS: ¿Qué impactos tuvo la cultura neoliberal en el devenir del movimiento estudiantil en la Argentina?

Agite! Arquitectura: La cultura neoliberal impacta desde distintos aspectos al movimiento estudiantil. Por un lado, la constante crisis económica que afecta en dos escalas: hace que lxs estudiantes tengamos que trabajar y dejar parcial o totalmente la carrera para subsistir, lo que acota la participación en otros espacios no-académicos; y también nos obliga a vivir bajo la idea de que “todo el tiempo necesitamos hacer plata”, cada actividad, cada minuto de nuestras vidas los tenemos que invertir y nos tienen que rendir monetariamente.

Por otro lado, la cultura neoliberal se relaciona directamente con el individualismo y este desapego hacia lxs otrxs. No nos interesa pensar-nos en colectivo, ni esforzarnos en construir espacios porque “primero estoy yo”, “primero está mi problema”. Así no nos damos cuenta que la salida siempre es colectiva.

Por último, creo que hace varios años las lógicas de la política partidaria y vertical han roto la idea de la palabra “política” como verbo, es decir, la política como herramienta de transformación de la realidad y con eso la idea de sujetx políticx que conforma cada unx de nosotrxs.

Juventud PTS: El neoliberalismo pegó fuerte en todos los aspectos de la vida y la universidad no fue la excepción. En general se destaca mucho que fue un avance de las ideas del individualismo, de la meritocracia, en ese sentido también de la pregunta por lo cultural, que es real. Pero quizás se dice menos que fue un ataque contra los derechos de los trabajadores y las mayorías para beneficiar al capital financiero internacional, un retroceso en la estructura del país. En eso se apoya ese avance más cultural, por la pérdida de la noción de lo público con las privatizaciones, el individualismo con una lógica de la ganancia compitiendo con el de al lado porque todo era muy difícil, la exclusión porque un sector importante de la población no estaba contemplada en el modelo, para los de arriba estaba “de sobra”. Y efectivamente fue una derrota, entonces ahí también se cuestiona si sirve o no la organización colectiva. Encima, esa derrota fue de la mano del PJ y con el aval de las conducciones peronistas de los sindicatos, entonces peor.

Y en la universidad, en ese marco no solo se instaló una cosa de que vas a la facultad nada más a recibirte y salvarte solo, que es la idea que ahora agarran los libertarios, sino que hubo ataques. La universidad sigue siendo pública porque la defendieron, pero se desfinanció y se puso más al servicio del mercado. Surgieron instituciones para ligar más las carreras a las empresas, los títulos se desvalorizaron. Y también se cortó con los espacios de debate y habitar las facultades, que no sean solo lugares de paso sino que los estudiantes junto a los trabajadores nos los apropiamos. Justamente para debilitar la resistencia. Hubo ejemplos importantes de algo distinto como las luchas del 95 contra la privatización o de apoyo a conflictos obreros. Pero incluso los centros de estudiantes, ya sean dirigidos por la Franja Morada o el peronismo, se volvieron más de “servicios”. Es decir, que el centro estaba para gestionar el buffet, la fotocopidora, una especie de ayuda al sector que sí llegaba a la universidad. Ahí se adaptaron al neoliberalismo, no lo cuestionaron. Incluso muchos de los ataques de esa época después no se revirtieron.



Igual quedó una tradición importante que más que de los 90' viene de los 70', que fue la generación del activismo, de la solidaridad, de la unidad obrero estudiantil. Eso trataron de borrarlo pero no pudieron, y es un poco lo que tratamos de retomar hoy en día. Sobre estos temas venimos reflexionando en distintos artículos publicados en nuestra revista digital “Armas de la Crítica” que sale mensualmente por *La Izquierda Diario*.

La Mella: Hay algo de la cultura neoliberal, no solo en el movimiento estudiantil, sino en el sujeto que decide estudiar en la Universidad que es muy notorio, sobre todo en los últimos años hay un cambio en el perfil de los estudiantes. Por supuesto había estudiantes que podían dedicarse a estudiar, formarse, y dedicarle las horas de su semana a la carrera, siempre hubo estudiantes que trabajan. Pero lo que viene pasando en el último tiempo es que el estudiante que elige una carrera universitaria, por un lado es un estudiante que tiene más de un trabajo (y que todos los trabajos que tiene son trabajos mal pagos), es un estudiante que está completamente atravesado por muchos de los efectos de la cultura neoliberal que no son simplemente en términos económicos sino esta idea de que uno vale por producir más, entonces estás pensando todo el tiempo en que tenés que hacer más cosas, todo el tiempo estás pensando en dedicarle más tiempo a estar produciendo, a estar trabajando, y menos

tiempo al deseo, menos tiempo al disfrute, menos tiempo a la elección propia de otras cosas que no pasen meramente por lo mercantil; y todos los efectos que tiene la situación económica por las medidas neoliberales que se vienen profundizando y recrudeciendo en nuestro país en términos de la salud mental, que eso es algo que vemos constantemente, que afecta a la juventud en general y donde no hay una respuesta clara sobre qué hacer. De la pandemia en adelante, la situación de la salud mental de las pibas y de los pibes realmente es un tema que hay que abordar con urgencia y no hay respuestas claras sobre qué hacer (de hecho, la respuesta es desfinanciar la salud pública) y me parece que es un eje que no se puede dejar de lado porque habitar las universidades hoy en día también está atravesado por sujetos políticos y sociales que hoy en día su situación actual es esa, la de tener más de dos trabajos para poder sobrevivir, la de no saber si vas a llegar a pagar el alquiler a fin de mes y la de estar atravesando situaciones ligadas a la salud mental por la incertidumbre y la ansiedad que te genera toda esta situación. Creo que el movimiento estudiantil tiene un rol muy importante vinculado a ser un eje central de la lucha en contra de estas medidas del gobierno de Javier Milei y también en la defensa de la educación pública como pilar fundamental de la sociedad. En el 2024, con todo el desfinanciamiento al presupuesto universitario, al salario docente y no docente, a las becas de estudiantes, el movimiento estudiantil tuvo un rol central porque el gobierno nos eligió como principal enemigo, a nosotros y a todo lo que representa la universidad pública en sí misma, a los trabajadores de la universidad y al estudiante que elige una carrera que no entra dentro de los parámetros de lo que para ellos es estratégico -entonces hay un ataque sistemático a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, como si no hubiera un aporte desde esas carreras a pensar un modelo de país-. Entonces nos eligieron como su enemigo y el movimiento estudiantil le viene dando batalla en las calles, en las aulas y pensando también política para sostener a los pibes, porque los centros de estudiantes y el movimiento estudiantil en su conjunto lo que hacen es sostener que los pibes sigan estudiando. Eso impacta de alguna manera en que los debates que se viene dando el movimiento estudiantil tenga que ver con una parte ciertamente más gremial, porque es responder a la demanda de los pibes para que sigan estudiando, pero con un sustento ideológico y político por detrás de eso sumamente profundo.

HdS: *¿Qué balances hacen de los procesos de lucha del movimiento estudiantil en los últimos años y su vínculo con los conflictos y resistencias socio-políticas?*

Agite! Arquitectura: El mayor proceso a balancear de los últimos años (o década) es el de la institucionalización del movimiento estudiantil y de las propias organizaciones estudiantiles dentro de esa lógica, donde la mayoría ha perdido el signo político.

La burocratización de ese movimiento ha borrado su carácter disruptivo y joven, pero sobre todo ya no se construye de manera horizontal. En este sentido el movimiento ya no convoca más allá de una marcha o una acción puntual, lxs estudiantes “de base” no participan en las tomas de decisiones por lo que se genera una desapropiación que se refleja en la merma del mismo.

Juventud PTS: La idea de que la juventud se había vuelto de derecha sufrió un revés importante con la lucha educativa del año pasado, en la que cientos de miles de jóvenes se sintieron interpelados por la necesidad de proteger y defender a la educación pública ante el miedo de que los anuncios del gobierno sean reales y peligre la continuidad de las universidades. Esto se hizo tan masivo y extendido que incluso tocó fibras sensibles de su propia base electoral, con la que se chocó.

Para muchos, las tomas fueron su primera experiencia política, se autoorganizaron y socializaron de otra manera con sus compañeros. Incluso muchos destacan que cambió el clima social en las universidades recuperando formas de socialización que se vieron trastocadas con la pandemia. En sus distintas etapas el conflicto “movió las aguas”, y comenzó una experiencia política que involucró tanto a sectores de vanguardia como de masas, lo cual dejó una experiencia acumulada y la incorporación de un *know how* de la lucha.

Las enormes marchas educativas del año pasado demostraron, contra el mito sostenido por sectores del peronismo de que “la relación de fuerzas no da”, que cuando hay convocatorias serias, preparadas y con motivos movilizantes, la gente se mueve, masivamente, con creatividad y capacidad de cambiar el ánimo social. Por eso también estuvo planteado que esa enorme fuerza social impulsase la movilización contra el conjunto del ajuste, activando y dando fuerza a otros sectores, cuestión a la que se negaron las burocracias sindicales y estudiantiles. Esto se debe a la política del radicalismo y sectores del peronismo que acompañaron de

forma más o menos efusiva según el caso, al gobierno en la Ley Bases. Aunque hubo otros que se opusieron discursivamente, pero aportaron su granito de arena desmovilizando y desorganizando al movimiento estudiantil.

En términos más generales, el proceso de masificación universitaria en América Latina durante las últimas décadas, vuelve más urgente y posible la actualización del análisis del movimiento estudiantil, para pelear la perspectiva de la unidad obrera-estudiantil, que cada vez se muestra más natural por los múltiples lazos que unen a ambos sectores. Aprovechar esa potencialidad exige una intervención consciente, que inscriba las luchas educativas en la pelea más general por una universidad al servicio de ese horizonte uniendo nuestras peleas a las del resto de los sectores de trabajadores que resisten a los planes de ajuste.

En ese sentido, desde la juventud del PTS y nuestra red de agrupaciones En Clave Roja estamos impulsando en estos momentos grandes campañas de apoyo y solidaridad con los trabajadores en lucha del Hospital Garrahan, como también con trabajadores de empresas privadas que despiden y persiguen a sus laburantes, como son los casos de Georgalos y Secco.

HdS: ¿Cómo evalúan la relación de lxs estudiantes con los claustros de docentes y graduadxs, y su participación en los gobiernos de facultades y universidades?

La Mella: Creo que el movimiento estudiantil y el claustro estudiantil es el actor más dinámico de las universidades. Los avances y las políticas transformadoras que se fueron dando en los últimos años en las Universidades nacionales tienen que ver y surgen primero de una caracterización y de una demanda por parte de los estudiantes de todo lo vinculado a condiciones de cursada e infraestructura, hasta pensar, por ejemplo, políticas vinculadas a programas de abordaje a la salud mental de los estudiantes, de vinculación con guardias de salud mental o de hospitales. Todo esto surge primero de una demanda y una caracterización de estudiantes y podríamos dar muchos más ejemplos que muestran que el movimiento estudiantil es el actor más transformador y más dinámico en las Universidades nacionales, y que además lo viene haciendo desde hace muchísimos años y creo que ese legado también es el que nos pone en una responsabilidad de todo el tiempo estar pensando en cómo

defender lo ya conquistado, pero también en cómo patear la pelota para adelante y pensar y rever incluso las cosas que hay que transformar y también las cosas que hay que ampliar. Y es en este sentido que la articulación con los docentes y los graduados es muy importante, lo fue el año pasado para lograr la Marcha Federal Universitaria, la marcha más grande de los últimos años, quizás comparable con lo que fue la que se hizo contra la LES en el año 95. Y en parte pudimos construir eso por una relación muy fluida entre todos los sectores que formamos parte de la Universidad pública, y logramos transmitirle eso a una sociedad que considera que las Universidades nacionales son de las mejores cosas que tiene nuestro país. Y también creo que eso tiene que verse reflejado en los gobiernos de las facultades y de las Universidades, por esto mismo de la capacidad transformadora que tiene el claustro estudiantil.

Me parece que este debate acerca de cuál es el rol del movimiento estudiantil en las gestiones de las Universidades creo que abre una puerta muy interesante que tiene que ver con poner en valor todo el aporte que realiza el claustro estudiantil para el sostenimiento y para las mejoras de las Universidades, para ser también el principal actor que muchas veces impulsa a dar ciertos debates. En el último tiempo viene pasando muchísimo. Por ejemplo el debate sobre el sistema de créditos, algo que está pasando por el costado en las Universidades, estamos siendo los estudiantes los que estamos poniendo sobre la mesa este debate, los que estamos hablando con los docentes, con los graduados, con los trabajadores no docentes, para construir y fomentar un debate más real sobre lo que está pasando por nuestras carreras. Así que bienvenida sea esa articulación y bienvenido sea pensar cada vez en mayor profundidad el aporte que el claustro estudiantil puede hacer en el modelo universitario que queremos construir.

Agite! Arquitectura: Desde nuestra posición, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo es necesario separar el espacio de cogobierno de los autoconvocados.

Los primeros, no son representativos en relación al padrón estudiantil y no sirven como canalizadores de propuestas o reclamos, más bien son una puesta en escena de las gestiones que se alinean políticamente con la fuerza estudiantil que conduce en centro de estudiantes (la Franja Morada).

Los segundos, materializados en asambleas y movilizaciones, son los espacios que construimos y re-construimos constantemente desde

abajo y de los cuales participamos distintas organizaciones estudiantiles (en nuestro caso estudiantil-graduadxs) y delegados docentes, y participan docentes y estudiantes no agrupadxs con los cuales se han coordinado distintas acciones y jornadas para visibilizar el conflicto universitario.

Juventud PTS: Partimos de la defensa de la universidad, pero cuestionamos que en esta sociedad necesariamente tiene un carácter de clase, que nos proponemos transformar. Y esto implica la necesidad de luchar por el gobierno universitario y el funcionamiento del conjunto de la universidad. Hoy las decisiones las toma la verdadera casta universitaria de rectores y decanos radicales y peronistas, que han pactado con los distintos gobiernos, que son parte del desfinanciamiento, que firman convenios con empresas privadas, que han traicionado nuestra lucha reiteradas veces estos años, y que son elegidos de formas completamente feudales, donde el mayor peso en la elección lo tienen solo los docentes titulares que son una ínfima minoría. Un primer paso para transformar la universidad es terminar con esto, peleando por la elección directa de las autoridades bajo el criterio de mayoría estudiantil, que hoy está subrepresentada, y el claustro único docente, para que sean parte los ayudantes, y también los docentes ad honorem, que se cuentan por miles. A su vez, peleamos para que las y los trabajadores no docentes también tengan representación en estos espacios con voz y voto. Esta democratización permitiría a su vez que seamos los estudiantes, docentes y no docentes quienes definamos a dónde se destinan los recursos con los que cuenta la universidad, cuestionar la orientación social de la educación, los planes de estudio de nuestras carreras, y al servicio de qué intereses están.

Por último, no queremos dejar de denunciar que el ahogo presupuestario a las universidades se siente con fuerza en la precarización de las condiciones laborales y salariales tanto de docentes y no docentes en las universidades a nivel nacional, que siguen luchando por la recomposición salarial.

Por eso, más que nunca necesitamos que se construya una nueva marcha federal educativa que unifique todos estos reclamos y se proponga enfrentar todo el plan de ajuste del gobierno de Milei y el FMI, porque con la salud, la educación y la ciencia no se negocia.



**BASTA DE
DESPIDOS**

Aerolínea
Argentina

Vinilo
Air
en el PROG
PARA ORG
UBA

A propósito de las políticas de CyT, los saberes críticos y la apuesta por las tecnologías*

Alejandra Ciriza**

Me interesa reflexionar sobre las condiciones de producción de saber en la Argentina gobernada por Milei, en las razones por las cuales ciertas líneas de investigación han devenido abyectas en un contexto de destrucción del sistema de ciencia y técnica y de ataque a las universidades argentinas y al sistema de educación público, universal y gratuito, uno de los valores más ampliamente compartido por diversos sectores que, sin embargo, hoy es socavado a través del vaciamiento y el hostigamiento por parte del partido en el gobierno y sus aliados.

Se lleva a cabo un ataque sistemático contra lo que en algún momento formó parte del consenso sobre el cual se construyó la democracia en Argentina desde 1983 a esta parte: respeto por la legalidad burguesa, por los derechos humanos en un sentido amplio, por ciertas libertades individuales y la existencia de ciertos valores compartidos: la educación pública y de calidad, un sistema de salud de cobertura universal, la importancia del sistema de CyT, un sistema que le ha dado al país dos

* Una versión previa de este trabajo fue leída en la apertura de las XVI Jornadas de Historia de las Mujeres y XI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, realizado en Rosario entre el 16 y el 18 de julio de 2025.

** Dra. En Filosofía. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y directora de la Maestría en estudios feministas en la UNCuyo. Investigadora del Conicet. Integra los colectivos Juicios Mendoza, Mujeres por la Memoria y Feministas de Abya Yala.

premios Nobel, y que sólo comenzó a ser hostigado durante el gobierno del también derechista y pretendido republicano, Mauricio Macri.

El gobierno actual proclama de manera abierta su desprecio por toda forma de legalidad declarando abiertamente que la única libertad válida es la del más fuerte. Ejecuta, ante el silencio mayoritario, políticas de desguace de la salud, las políticas de memoria, las políticas de género, la educación pública y el sistema de CyT a la vez que fortalece en forma desmedida las políticas represivas.

Tal vez en esta coyuntura no esté demás invitar a Gramsci quien, en un escrito de 1920, señalaba que el fascismo es un recrudecimiento de la reacción capitalista, un endurecimiento de la lucha capitalista contra las exigencias más vitales de las clases trabajadoras. El fascismo es la ilegalidad de la violencia capitalista y apunta no a la destrucción del Estado, como podríamos pensar a partir de la retórica de la motosierra, sino a su restauración, es decir, a la legalización de la violencia de la clase dominante (Gramsci, 24/11/1920).

El gobierno fascista de Milei busca degradar ciertas formas de saber elevando la tecnología al sitio de prioridad máxima de las políticas de CyT llevadas a cabo desde el Estado.

Cabe preguntar, ¿es que las ciencias sociales y las humanidades carecen de relevancia social? Según se dice desde las altas esferas del poder, sí. Los saberes críticos están demás, y no digamos la historia, un conocimiento no sólo incierto, sino desvalorizado por quienes inventan, día a día, una historia a su medida. Vale recordar lo dicho por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 7 de marzo de 2024:

De hecho, el propio presidente de la Nación, es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias, que ha dado en Argentina y en el mundo; lo cierto es que *el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un CONICET, que ponga sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la Inteligencia Artificial, aplicada a la Medicina; no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que –por ejemplo– abordaba la orientación sexual de Batman* (Adorni, 7/03/2024)¹.

¹ El destacado es nuestro. Vale señalar que los presuntos antecedentes académicos de Milei se limitan a la publicación de doce trabajos, considerados como libros por Wiki-

Más allá del debate acerca del lugar de Milei en el ámbito académico, y su relevancia en lo referido a la producción de conocimiento científico, lo cierto es que las políticas seguidas por este gobierno respecto del CONICET, la universidad y los organismos de CyT se edifica sobre la pretensión de producir tecnologías mientras un ejército de *trolls* vocifera *fake news* y pone en escena diferentes maneras de persecución y acoso para expulsar los saberes críticos, los feminismos, las humanidades.

Según el vocero presidencial la destrucción del sistema científico argentino se justifica por una apuesta a las tecnologías. ¿Cuáles? Es una buena pregunta, dado que al parecer todo el proyecto de país se limita a la reprimarización de la economía y el endeudamiento feroz a costa de quienes viven por sus manos.

Cabe preguntarse, ¿qué tenemos para decir quienes hemos trabajado durante décadas en el sistema de ciencia y técnica? ¿A qué se debe el odio gubernamental hacia las humanidades y las ciencias sociales y el interés declarado por la Inteligencia Artificial? ¿Qué explicación podemos intentar?

Si algunos/as percibimos la crisis ecológica, el avance del fascismo, el racismo, la misoginia y el odio hacia las personas en razón de sus sexualidades o su disidencia corporal como asuntos urgentes de los que es preciso ocuparse, la indiferencia social ante lo común crece y admite, si es que no justifica, la destrucción del sistema de CyT y la educación pública.

pedia, dos de los cuales son documentos de trabajo escritos en coautoría. Cuatro de sus libros han sido publicados en una editorial libertaria de España, dos por Galerna y tres por Planeta, uno de los cuales fue retirado de circulación en el país antes mencionado por contener datos falsos. Dos más han sido puestos en circulación durante su período presidencial. La mayor parte de lo escrito son artículos de divulgación sujetos, además, a sospechas de plagio. En cuanto a sus antecedentes como docente, según la misma fuente (aunque Milei en algunos sitios declara haber sido docente durante veinte años), fue profesor en la UADE y terminó despedido por maltratar estudiantes. En cuanto a su pretendida trayectoria en la UBA, no pasó de la categoría de ayudante ad honorem. Señalo esto a partir de una revisión y búsqueda en internet, no de una investigación en profundidad, y sólo a los efectos de indicar la escasa vinculación del presidente con el mundo universitario y las reglas de la producción científica, dos de las cuales son indicar en forma fehaciente las fuentes y corroborar la información. Su página oficial, a tono con su estilo, menciona once libros, perros, fútbol y rock and roll (<https://javier-milei.com/>).

En la tentativa de elaborar una explicación he procurado acercarme a lo que entiendo como un asunto urgente: la inteligencia artificial, sus usos, sus efectos sobre nuestras vidas.

A propósito de un tema urgente: la Inteligencia Artificial (IA)

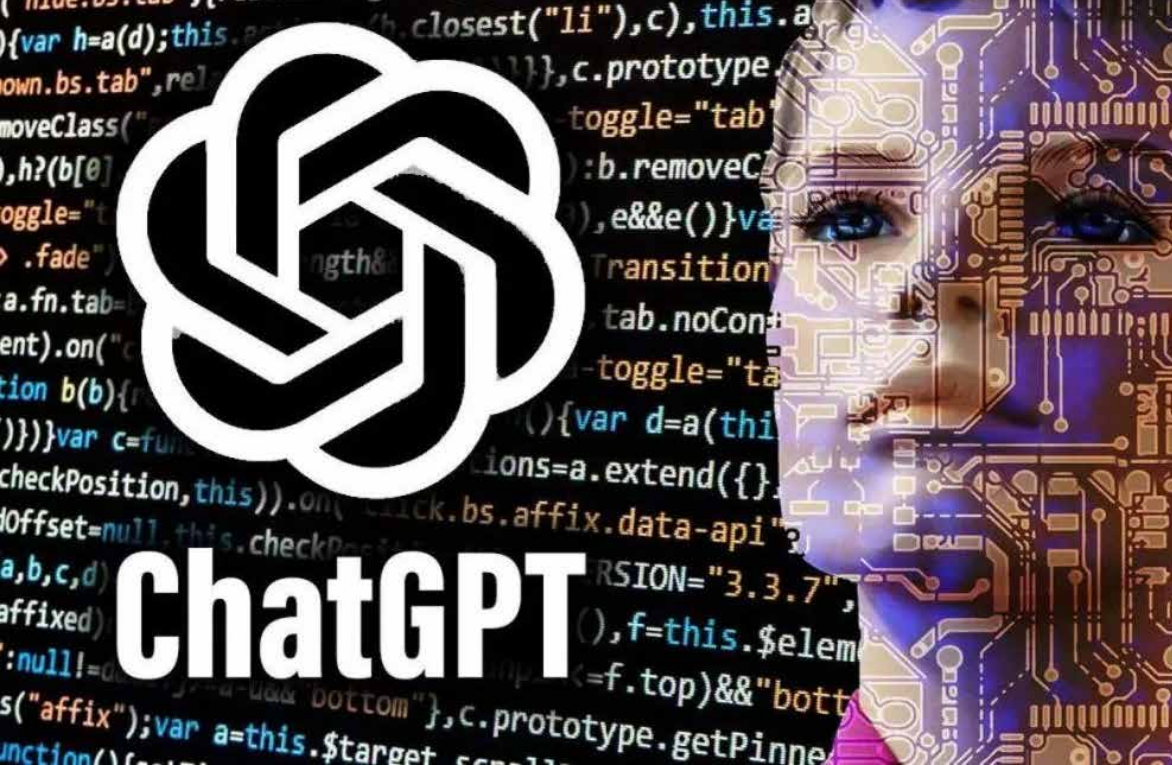
Me interesa, a partir de la insistencia gubernamental en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, procurar por algunas precisiones. ¿Qué entendemos por IA? ¿En qué nos afecta como sociedad? ¿Qué tiene que ver con la veloz transformación pospandémica de la política? ¿Qué decir desde los feminismos del sur, desde la pretensión de producir conocimientos situados, anclados a las múltiples determinaciones corporales, a la historia?

Apoyándome en reflexiones de especialistas en temas vinculados a tecnologías, y en particular a la IA, me parece pertinente reflexionar sobre algunos dilemas a partir de su omnipresencia en nuestras vidas, no sólo en lo referido a las interacciones personales, desde WhatsApp hasta las redes; sino por su presencia en el sistema de salud y los sistemas de vigilancia y control estatal y laboral (los sistemas de datos biométricos en los espacios laborales) y como formas de control de la circulación de personas entre países, sin mencionar su uso con fines de control e incluso espionaje político (Chorny y Balmaceda, 2024).

A los fines de trazar un recorrido retomaré los aportes de Donna Haraway (1983 [1995]), el itinerario a propósito de las tecnologías llevado a cabo por las filósofas feministas Andrea Torrano y Natalia Fischetti (2024) y, desde luego, las reflexiones del filósofo francés Eric Sadin (2020).

Un mundo cyborg. Entre la ficción y la Informática de la Dominación

A inicios de los años ochenta Donna Haraway abogaba (y lo sigue haciendo) por el borramiento de límites entre animales, seres humanos y máquinas. Su *Manifiesto Cyborg* (1983) incitaba a difuminar los límites entre tecnología y seres humanos a la vez que anticipaba un mundo no binario, abierto a la ironía y a la incertidumbre de los saberes parciales. Su escrito, anclado en el horizonte epocal de los 80 y en el norte global, interpretaba el mundo a la luz de la percepción de una transformación en



el mundo real y en la manera de pensar que daba lugar a la sustitución de la sociedad industrial por lo que ella denomina “un sistema polimorfo de información”, y a la necesidad de revisar el binarismo propio del pensamiento occidental. Eran tiempos de crisis de los grandes relatos, de interés por las narrativas locales, de fragmentación de la imagen (que nombraremos con una palabra amplia y discutible) moderna del mundo.

En la lectura que entonces hacía Haraway, las biotecnologías y las tecnologías de la comunicación podían devenir herramientas de transformación de nuestros cuerpos e instrumentos para el tejido de redes desde las cuales tramar otras posibilidades cognoscitivas y políticas susceptibles de modificar el binarismo y de poner en jaque el falogocentrismo occidental. De hecho, unos años más tarde muchas feministas se volcaron al ciberactivismo y la figura del cyborg ponía en cuestión los mapas dualistas de lectura del mundo.

Para Haraway lxs cyborgs se abrían a la animalidad conectando lo humano con otras criaturas vivientes. Tras los pasos de Lynn Margulis, la primatóloga y filósofa estadounidense comprendía que los organismos mantienen entre sí líneas de cooperación e interdependencia que hacen imposible la supervivencia sin otrxs, sin la naturaleza, de la que depende nuestra subsistencia. El cyborg se ubica allí donde la frontera entre lo

animal y lo humano es transgredida a la vez que señala hacia el borramiento de la distinción entre humanxs y máquinas. A diferencia de las máquinas preciberneticas que no poseían movimiento por sí mismas, no decidían, no eran autónomas, las máquinas del siglo XXI están inquietantemente vivas mientras lxs humanxs permanecemos atterradoramente inertes. Al mismo tiempo los límites entre lo físico y lo no físico devienen cada vez más sutiles.

La gente, a la vez material y opaca, dista mucho de ser fluida. Los cyborgs en cambio están abiertos a los aspectos parciales y fluidos de la sexualidad y pueden explorar un lenguaje político capaz de oponerse y a la vez eludir la informática de la dominación. Habida cuenta de su necesidad de conexión y su desconfianza hacia los holismos, lxs cyborgs invitan a actuar en la red poderosamente. Al no estar estructuradx por polaridades ni binarismos permiten imaginar una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las relaciones sociales en el *oikos*, el hogar. La propuesta de Haraway incluía también una convocatoria a la construcción de una relación no extractiva con la naturaleza.

Si el tiempo de lxs cyborgs posibilitaba un horizonte nuevo (de allí la importancia de poner en circulación un nuevo manifiesto a la manera del manifiesto comunista), como contracara Haraway advertía que las nuevas tecnologías facilitaban procesos de privatización y de aceleración de la militarización.

Ubicada en el terreno ambivalente de transformaciones cercanas y aceleradas, Haraway interpretaba que se estaba produciendo una transición desde el patriarcado capitalista a la informática de la dominación. Ese momento, de porvenir incierto era, como la primavera de los pueblos de 1848, el momento de un manifiesto a la manera del Manifiesto Comunista, la oportunidad para interpelar a lxs sujetos para la construcción de un mundo cyborg de tecnologías flexibles e irónicas, de aceptación de la interdependencia.

Bajo el signo de la Informática de la Dominación, Silicon Valley fue y sigue siendo un ejemplo de cómo funciona la intensificación de la inseguridad y el empobrecimiento, la degradación laboral que integra a las mujeres migrantes en puestos de trabajo precarizados en la industria de los ordenadores a la vez que las captura en los dispositivos de las iglesias electrónicas fundamentalistas.

Haraway apuesta a un mundo en el cual la política de la ironía pueda destruir ese lenguaje único y abra la posibilidad de intervención de un sujeto capaz de sobrevivir en los márgenes, en un territorio limítrofe entre la realidad y la ficción, entre la humanidad y la animalidad. Dice Haraway:

El cyborg es materia de ficción y de experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica (Haraway, 1983 [1995]: 253).

Si efectivamente los límites entre lo público y lo privado, entre el proceso de producción, la organización del trabajo y las formas de construcción de consenso se han sutilizado y el mundo, podríamos decir, ha devenido una gigantesca fantasmagoría, lo que ha sucedido desde los años 80 y 90 merced la globalización neoliberal no es otra cosa que el aumento feroz de las desigualdades sociales.

La disolución de las solideces (del cuerpo y las necesidades básicas de los sujetos) sólo ha posibilitado el florecimiento de nuevas desigualdades, incentivando el predominio del capital financiero, la aceleración de la lógica capitalista de la mercantilización y la degradación salarial en un mundo en el cual la tendencia a la baja de la tasa de valorización de capital ha impulsado un proceso de agresiva mercantilización de todo aquello que el capital toca; y su capacidad de tocar, como la del rey Midas, no parece hallar límites.

Eric Sadin: la Inteligencia Artificial y el borramiento de lo real

Cuarenta años después de la escritura del Manifiesto de Haraway, en un libro tan apasionante como complejo, Sadin (2020) aborda la cuestión del peso de la IA sobre las sociedades actuales, la transformación de las tecnologías, su imbricación con el neoliberalismo y las exigencias contemporáneas de la acumulación de capital, que impulsan una aceleración cada vez mayor de los procesos de mercantilización. Nos hallamos en un mundo sin pausa.

Desde la perspectiva de Sadin lo que llamamos inteligencia artificial forma parte de una transformación tecnológica sin precedentes con efectos que exceden la simplificación supuesta de los procesos de administración de las cosas y el mero incremento de la producción. Se trata, más bien, de tecnologías que penetran los rincones más recónditos de la vida

y afectan las relaciones entre los seres humanos, desde luego, pero también la relación con lo real y las formas de inscripción de lxs sujetos en el orden político. Una serie de aparatos incitativos obtienen información y docilizan a los sujetos a fin de que el liberalismo se desarrolle sin trabas. En la misma lógica, del estado incitativo pasamos al estado imperativo.

No es este el lugar para explayarse demasiado sobre el libro, en el que late intensamente la idea de sujeto autónomo.

Me interesa retomar aspectos de la reflexión del filósofo, que confluyen con las observaciones del coreano Byung Chul Han respecto de los efectos de las nuevas tecnologías sobre la disolución de lo real (Han, 2019).

■ *La disolución de las solideces (del cuerpo y las necesidades básicas de los sujetos) sólo ha posibilitado el florecimiento de nuevas desigualdades, incentivando el predominio del capital financiero, la aceleración de la lógica capitalista de la mercantilización y la degradación salarial en un mundo en el cual la tendencia a la baja de la tasa de valorización de capital ha impulsado un proceso de agresiva mercantilización de todo aquello que el capital toca.*

Mientras para Han la digitalización del mundo equivale a una humanización y una subjetivación totales que elimina la radical alteridad de la tierra desacralizándola y desencantándola, reduciéndola a lo que percibe nuestra retina y a la red categorial del espíritu subjetivo, para Sadin la digitalización no sólo conlleva la abstracción del mundo real, la ambición de disolución de toda frontera —espacial o temporal—, sino una mutación antropológica que expropia a los seres humanxs de su complejidad y de su capacidad de decidir sobre las dimensiones más relevantes de la vida en el campo ético y político. El mundo deviene, y en esto coinciden ambos, pura abstracción desencarnada.

Sujeto a la lógica binaria de las máquinas, el mundo se simplifica brutalmente. La impersonal neutralidad asociada a lo maquínico deviene, de manera paradójica, en un reproductor de sesgos racistas y sexistas, tal como han señalado tanto Langdon Winner (1997), como Fischetti y Torrano (2024).

Desde la perspectiva de Sadin las nuevas tecnologías, más que co-laborar, incitan: en aplicaciones de coaching deportivo, pero también operan en el nivel prescriptivo en el caso de la evaluación de un candidato para otorgarle o no un préstamo bancario, o un puesto de trabajo, pero sobre todo lo hacen en un nivel coercitivo, como formas de control en el campo del trabajo. Si la IA induce la delegación pasiva de nuestras capacidades de decisión en un dispositivo inteligente que, por otra parte, no ofrece posibilidades de negarse a “aceptar las condiciones de uso”, proporciona a cambio la complacencia de no encontrar la resistencia de lo real: no hay espacio que pueda resistir a las capacidades de Google maps, ni mejor secretaria que Siri, Alexa o alguna otra aplicación.

Y sin embargo, desde la perspectiva de Sadin, todas esas tecnologías “inteligentes y amigables” operan bajo la lógica del capitalismo acumulando información sobre los usuarios, que realizan un trabajo gratuito para las empresas. Si *Google Maps* te guía, también traza líneas de demarcación que excluyen ciertas zonas, tal como señalan Fischetti y Torrano, produciendo segregaciones en razón de la clase y la racialización.

Si las asistentes inteligentes son de indudable eficiencia, también es verdad que tienen voces femeninas, blancas, bien educadas y devuelven una imagen binaria del mundo que retorna sobre viejos temas ligados a la división sexual clásica del trabajo. El ejemplo es por demás ilustrativo:

En la confusión de fronteras entre el trabajo doméstico y el trabajo de oficina, se están popularizando las asistentes de inteligencia artificial, las nuevas secretarías a la mano para el trabajo de oficina y también el doméstico: Siri (Apple, 2011), Cortana (Microsoft, 2014), Viv (Samsung, 2016) y Alexa (Amazon, 2014 y 2017) tienen algo en común: una identidad femenina (Fischetti y Torrano, 2024: 184).

Por decirlo brevemente y en mis términos: la IA proporciona la ilusión de autonomización respecto del mundo a la vez que, bajo la lógica de la inversión fetichista, deviene sujeto mientras lxs sujetos, fundamentalmente las personas del sur, las personas racializadas, lxs suejtxs subalternos y proletarizados quedan capturados en su lógica. De allí el interés que en ella tiene un gobierno fascista y destructor del sistema de CyT en Argentina.

Como han señalado varixs autorxs, la IA no es inteligencia, sino servidores que acumulan información, y en las condiciones actuales lo hacen al servicio de intereses tan estrechos como privados, por decirlo

en palabras de Sadin (2020). La lógica de la IA es jerárquica y está orientada a imponer sus propias leyes. Dice Sadin:

Se supone que esta lógica se aplicará a largo plazo a todos los segmentos de la vida individual y colectiva en el marco de nuestras relaciones con nuestros cuerpos, con los demás, con el hábitat, o bien en el marco de la organización de la ciudad, de las redes de transporte, de los espacios profesionales de la salud, de las actividades bancarias, de las finanzas, de la justicia, de las prácticas militares... (Sadin, 2020: 20).

Tras los pasos de Jacques Ellul, un filósofo francés de orientación anarquista, Sadin no duda en señalar las implicancias de la IA en el montaje de mecanismos de espionaje, de intensificación de las lógicas productivistas y de militarización (Sadin, 2020).

El borramiento de lo real, la intensificación de la explotación y la imposición de una lógica desde arriba guarda una afinidad inquietante con los señalamientos de Haraway sobre la informática de la dominación.

La afinidad entre esa lógica y la de este gobierno subordinado a los empresarios ciberlibertarios está fuera de duda. Comparte con ellos el credo neoliberal, colonial y patriarcal en el marco de la apuesta por el capitalismo de libre mercado, la propiedad privada de todo y la tecnología en manos de las corporaciones transnacionales.

Desde una afirmación ciega de la neutralidad, bajo la convicción de ser dueños de la verdad refuerzan sus prejuicios apelando al velo de neutralidad de la tecnología. Como señalan Fischetti y Torrano:

Los sesgos maquínicos (*machine bias*) se definen como la transmisión de prejuicios sociales de raza, clase y género a una máquina... que pueden ser producidos intencionalmente o pueden ser ideológicamente producidos bajo el velo de la neutralidad política de la tecnología (Fischetti y Torrano, 2024: 178).

En un mundo binario de amigos y enemigos es bien claro qué lugar ocupamos las feministas y las personas que trabajan sobre teorías críticas en el sistema de CyT.

Acerca de la autonomía de la IA y sus costos ambientales de cara al sur

A pesar de la ilusión de autonomía, como señala Alfredo Moreno, Ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicación en Argentina

Soluciones Satelitales (ARSAT) y Profesor en la Universidad Nacional de Moreno

La producción de resultados de la Inteligencia Artificial (IA) depende de la energía eléctrica. Esta tecnología necesita de una arquitectura de supercomputación que necesita ser enfriada constantemente para satisfacer las demandas de los usuarios. A saber, la industria de la producción de electricidad y calor ha propiciado un aumento significativo del 46% en las emisiones globales. La IA será el motor principal de la duplicación prevista de la demanda mundial de electricidad y del aumento en el consumo de agua para los centros de datos en el período 2026. Los centros de datos ya consumen más electricidad que países enteros. El uso de la IA Generativa intensificará enormemente el uso de energía (Moreno, 2024).

Desde hace años me persigue la idea de que existe una profunda relación entre ecocidio y genocidio bajo el capitalismo y la tentativa de restauración colonialista. No soy la única que piensa esto, ni la única que considera necesario reflexionar sobre las tramas históricas entre capitalismo, racismo y patriarcado, entre la crisis climática y humanitaria que vivimos y el proceso histórico iniciado con lo que Marx nombraba como acumulación originaria de capital, vinculado a la separación entre los seres humanos y sus medios de vida y a la fractura metabólica entre seres humanos y naturaleza. Autores, autoras como John Bellamy Foster, Donna Haraway, Silvia Federici, sólo por mencionar destacados intelectuales internacionalmente reconocidxs, aportan diversas perspectivas para pensar acerca de esos asuntos. Sin embargo, bajo las actuales condiciones, el gobierno no duda en etiquetarlas como asuntos “woke”, por utilizar la terminología presidencial. Temas proscriptos por su compromiso con la “aberrante justicia social”.

Una suerte de perspectiva a contrapelo me impulsa a pensar en ese doble registro: por una parte, la percepción de hallarnos en un momento de peligro bajo el signo de una barbarie fascista que arrasa no sólo este, sino otros muchos territorios, y por la otra, la de que la barbarie se halla entrelazada a procesos materiales que afectan nuestra relación con el mundo, no sólo en lo referido a la creciente precarización de la vida natural y social, sino a las formas de conocimiento, a la promoción de maneras binarias y dicotómicas de ver el mundo portadoras de sesgos de clase, de raza, de género sexual.

La cuestión de la IA es por eso un asunto urgente: no sólo no es neutral, es una maquinaria de amplificación de visiones binarias y conservadoras del mundo, además de un dispositivo que allana la mercantilización y privatización crecientes, un succionador de energía e información que procede del sur —de este sur—, generando depredación y exterminio, zonas de sacrificio y poblaciones sacrificadas.

Algo de la vieja idea marxiana resuena en mí: si el mundo se ve invertido es porque lo está, y se hace necesario reflexionar sobre los mecanismos de inversión.

La letanía que circula en las redes insociales repite: no hay cambio climático; sólo hay dos sexos naturales; los varones blancos son superiores, además de todas las variantes posibles del supremacismo. No es sólo un asunto que ocurra en Argentina. Sucede en Gaza, donde el Estado supremacista de Israel lleva a cabo prácticas genocidas con particular intensidad desde octubre de 2023. No sólo se trata de supremacismo. También de negacionismo, de repetir una y otra vez discursos sobre el algo habrán hecho, no fueron 30000, no hubo genocidio en Argentina, sólo excesos o errores.

Creo que es preciso recurrir a las iluminaciones del pasado para leer el presente. En vísperas de la primera guerra interimperialista Rosa Luxemburg escribía un texto destinado a reflexionar sobre las tareas de la socialdemocracia, y decía

Avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre: así vemos a la sociedad capitalista. No como la vemos siempre, desempeñando papeles de paz y rectitud, orden, filosofía, ética, sino como bestia vociferante, orgía de anarquía, vaho pestilente, devastadora de la cultura y la humanidad: así se nos aparece en toda su horrorosa crudeza (Luxemburg, 1915: 267).

Esas palabras procedentes del pasado probablemente sinteticen de un modo magistral lo que sucede: bajo la actual crisis, como bajo la crisis capitalista de inicios del siglo XX, la burguesía chorrea sangre y lodo, destruye la naturaleza, se lanza hacia guerras y genocidios, vocifera contra todo lo que pueda sonar a cultura y humanidad.

Se reflexiona, entiendo, desde la propia práctica. Trabajo desde hace años desde un lugar fronterizo, en el cruce entre historia y filosofía desde un interés emancipatorio y cognoscitivo respecto del pasado, de las historias de personas subalternizadas, en particular de las mujeres y

personas feminizadas. Me empeño en el pasado como perspectiva de lectura del presente. No por un asunto de nostalgia, sino porque todavía resuena en mis oídos la consigna que acompañó el avance indígena sobre la plaza de Quito en 2001. Como dicen lxs quechuas, sólo se puede ir hacia adelante yendo hacia atrás: Ñawpaqman rishun (¡Vamos adelante, pero también hacia atrás!).

Las feministas hemos insistido sobre la necesidad de una mirada hacia atrás que nos ubique en el terreno de conflicto, que nos devuelva los jirones de un pasado que ha sido sistemáticamente rasgado, que desnaturalice el espejismo que habitamos para hacer lugar a algunas preguntas, para transitar la incertidumbre.

Cada vez más nos hallamos bajo la amenaza de la extracción de minerales que nos dejarán sin agua, todo en aras de la nueva pira sacrificial: la tecnología. Cada vez más se hace necesario recordar que nada se sostiene para la humanidad sin una base material. Por eso es preciso preguntar de qué sangre, de qué carne está hecha la Inteligencia Artificial, qué transformaciones sociales han conducido hacia una “informática de la dominación”, cuáles nos pueden guiar en la dirección obligatoria señalada por Benjamin, hacia un mundo vivible en el cual el contacto con otros seres, humanos y no humanos, la amabilidad, la solidaridad y el sentido de justicia y comunidad, sean parte de nuestra diaria realidad.

Referencias

- Adorni, Manuel (7/03/2024) Conferencia de prensa del Vocero Presidencial Manuel Adorni, desde Casa Rosada. Disponible en: <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/conferencias/50388-conferencia-de-prensa-del-vocero-presidencial-manuel-adorni-desde-casa-rosada-24>
- Balmaceda, Tomás y Vladimir Chorny (2024). “Inteligencia Artificial”. En Suárez Tomé, Danila, Laura Belli y Agostina Mileo (compiladoras) *Epistemología Feminista*, Buenos Aires: EUDEBA, OEI, SADAF.
- Fischetti, Natalia y Andrea Torrano (2024) *Tecnologías feministas. Tramas para la resistencia desde el sur latinoamericano*. Buenos Aires: Clacso.
- Gramsci, Antonio (24 de noviembre de 1920) ¿Qué es la reacción? *Avanti*. En Enzo Santarelli Selección y notas (1979) Antonio Gramsci. Sobre el fascismo, p. 63. México: Ediciones Era.
- Han, Byung-Chul (2019) *Loa a la tierra. Un viaje al jardín*. Barcelona: Herder.

- Haraway, Donna 1995 (1983) Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. En Haraway (1995) Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid: Cátedra, pp. 251-311.
- Luxemburg, Rosa (1915) El folleto Junius. La crisis de la socialdemocracia alemana. En: Obras escogidas, Vol 9. Disponible en https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciiaalemana_0.pdf
- Moreno, Alfredo (15/07/2025) El costo ambiental de entrenar la IA generativa. En Motor Económico. Edición n° 3158 . Disponible en: <https://motoreconomico.com.ar/el-coste-ambiental-de-entrenar-inteligencia-artificial-generativa/>
- Sadin, Eric (2020) La inteligencia artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical. Buenos Aires: Caja Negra.
- Winner, Langdon (1997). Los mitos ciberlibertarios y sus prospectos para la comunidad. Contexto Educativo. Revista digital de educación y nuevas tecnologías, (4). <http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/winner.pdf>

La universidad pública como ciudadela de politicidad tras la pandemia del Covid-19:

conjeturas sobre la experiencia argentina

Omar Acha*

La extensa cuarentena con que los gobiernos mundiales respondieron a la pandemia del Covid-19 a principios de la década en curso generó consecuencias aún difíciles de calcular. Lo hizo en todos los órdenes, de la economía a la política, de la comunicación a las subjetividades. El aislamiento, la individualización persistente, la desconfianza hacia el prójimo constituido en agente de contagio, la virtualización de los contactos, entre varios otros efectos, son indisociables de fenómenos que actualmente estamos atravesando. La vida universitaria –y la argentina aquí tratada no fue la excepción– no permaneció inmune a esa circunstancia. Sin intención apologética hacia la universidad anterior a 2020, en este capítulo me propongo reflexionar, a partir de la realidad argentina, sobre las consecuencias lesivas de la post-pandemia respecto de las di-

* Historiador y ensayista. Doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, es investigador del CONICET y docente en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras.

menciones críticas que supieron matizar las funciones legitimizantes del *establishment* habituales en las instituciones universitarias.

Admito las limitaciones del recorte argentino de estas consideraciones. No creo pertinente generalizarlas. Pero sí pueden ser útiles para pensar comparativamente otros itinerarios y situaciones en América Latina y más allá, pues en su esencia la explicación última de sus dramas obedece a tensiones derivadas de la situación histórica contemporánea del sistema mundial capitalista en que vivimos. En efecto, la omnipresencia de las redes sociales, la extensión de la virtualización, la educación a distancia, el *home office*, la plataformización de tareas, entre otros fenómenos recientes, se profundizó con la cuarentena, pero en modo alguno comenzó con ella y no se detuvo luego de su cese.

La hipótesis que procuraré argumentar consiste en que se ha producido una *conmoción cultural* de las tradiciones críticas en la universidad, tanto entre docentes como entre estudiantes. Ello involucra pensar alternativas en la reconstrucción de la vertiente crítica de la vida universitaria. Pero las novedades de la época impiden cualquier mero retorno a una universidad pública cuyas condiciones de existencia también se han modificado. La argumentación se desarrolla de la siguiente manera: luego de retratar un proceso contradictorio pero reconocible en la mediana duración, donde se verifica una crisis del horizonte universitario atento a los desafíos de lo público (lo que llamaré su politicidad para diferenciarlo de la política tradicional), ofrezco una descripción de los efectos iniciales de la cuarentena para, finalmente, plantear algunas ideas sobre las alternativas abiertas para una reconstrucción crítica de la relación entre vida universitaria “pública” y sociedad activa.

Un prolongado y contradictorio itinerario de la sinergia entre la universidad y la sociedad

En esta sección plantearé una brevísima síntesis histórica que permite comprender la formación de lo que denomino una constelación de tradiciones críticas en la universidad pública argentina, caracterizada por una voluntad de interacción transformadora con la sociedad. Uno de sus rasgos fue una sociabilidad vinculada con la politicidad –distinguible de la política institucional partidaria– donde reside la lucha por la idea de una vida universitaria en relación dialéctica con los dramas contem-

poráneos. En la sección siguiente analizaré por qué esa sociabilidad fue quebrantada por la cuarentena y generó desafíos todavía irresueltos.

En la Argentina, las universidades fueron a lo largo del siglo veinte espacios de enérgica preocupación, y a veces de intervención activa, en la vida social. Con razón, esa preocupación suele iniciarse con la Reforma Universitaria de 1918, aunque plantearé que la *universidad pública* no estaba ya presente. Como fuera, con la Reforma originada en la Universidad Nacional de Córdoba pero pronto extendida a las otras universidades nacionales (por entonces la de Buenos Aires y la de La Plata), se observa un protagonismo estudiantil, acompañado por las franjas más dinámicas del profesorado, enderezado a renovar la lógica interna de la universidad y entablar una relación activa con las demandas de la sociedad. El desencadenamiento del movimiento fue endógeno, explicado por la detracción del arcaísmo catedrático, el endogámico rosqueo profesoral y las arbitrariedades en el gobierno de la institución. Luego el proceso se volcó hacia un afuera en vilo. Según ya dije, el impulso renovador se trasladó a otras universidades argentinas e incluso, con diversos alcances y traducciones, a situaciones latinoamericanas como en Cuba, México y Perú.

Para entender el movimiento reformista es crucial recordar el surgimiento de los centros de estudiantes desde principios del siglo veinte. La Reforma reprochaba a la “casta” profesoral su desactualización intelectual y la carencia de todo interés por la realidad extramuros de los ámbitos académicos. Recordemos que el periodo de la Gran Guerra de 1914-1918 se hallaba en curso finalizar y se había producido la eclosión revolucionaria comunista en Rusia. En la misma Argentina, con la consagración presidencial del radicalismo –Hipólito Yrigoyen asumió el gobierno en 1916– se cerraba el ciclo histórico del predominio político de la oligarquía conservadora. Cualesquiera fueran las actitudes adoptadas hacia esas novedades sociales y políticas tanto nacionales como internacionales, los estudiantes más movilizados reclamaron que la universidad debía incorporarse a la renovación.

Una serie de palabras-clave construye una constelación de los temas reformistas característicos: estudiantes, renovación, nueva generación, reforma, revolución, idealismo, juventud, entre otros. El hilo conductor fue la exigencia de contribuir, desde la universidad, a un mundo diferente al que acababa de estallar con la guerra y el fin del predominio

oligárquico en la política. Por eso la Revolución Rusa interpeló incluso a quienes no siguieron su brújula anticapitalista. En efecto, aunque con el curso de los años el Reformismo universitario fue adoptando un cariz cada vez menos radicalizado y de alguna manera se fue institucionalizando y moderando, los fuegos de la fractura de 1918 perduraron como un imaginario de renovación y búsqueda un diálogo real con la sociedad.

En la universidad argentina, aquella ruptura cultural jalonó gran parte del derrotero del activismo estudiantil durante el medio siglo posterior. El Reformismo fue la corriente hegemónica, no sin discusiones con otros sectores estudiantiles vinculados al comunismo (por izquierda) y al catolicismo (por derecha, pero desde mediados de la década de 1950 en viraje hacia el centro-izquierda con el Humanismo). Para la izquierda más radical, las consignas del Reformismo eran insuficientes y delataban las pertenencias de clase del estudiantado. La “extensión universitaria”, otra de las banderas reformistas, debía transformarse en una auténtica “alianza obrero-estudiantil” que pusiera en cuestión el orden burgués.

Hacia 1939, cuando comenzaba la nueva guerra mundial que iba a tensar las ideologías argentinas alrededor de las divergencias entre pro-aliados, pro-Eje y neutralistas, estaba consolidada la politicidad en la universidad argentina. Por politicidad me refiero a algo diferente a la política inmediata, organizada alrededor de partidos tradicionales. La politicidad es la vocación de inscribir un ámbito particular, en este caso la vida universitaria, en los dramas de la vida pública nacional e internacional. Se excede así la tentación corporativista y cientificista que encierra la universidad en lo que la Reforma puso en cuestión: su reducción a máquina de producción de profesionales liberales para el mercado. Un último rasgo de la politicidad se distingue de la mera invasión de una política externa en lo universitario, donde generalmente se aplica una perspectiva instrumentalizadora. Se trata, en cambio, de pensar y actuar sobre los problemas propiamente universitarios con sus complejidades, sus actores y posibilidades respecto de su entorno.

En la segunda posguerra, desde 1945, el movimiento universitario argentino fue vigorosamente antiperonista al identificarlo con el fascismo. El peronismo, por su parte, denunció el conservadurismo del estudiantado hostil a una participación efectiva de los trabajadores en la vida nacional. Por eso procuró abrir el mundo universitario con la gratuidad en 1949 y la creación de la Universidad Obrera Nacional. Enterado de

la relevancia adquirida por los universitarios en el escenario público, impulsó sectores estudiantiles afines, pero la Confederación General Universitaria tuvo un alcance limitado. La relación del movimiento estudiantil con el peronismo comenzaría a cambiar luego del derrocamiento de Perón en 1955, cuando se verificó que la Revolución Libertadora se tornó en una dictadura antipopular y antiobrera de manera cada vez más notoria. Sin embargo, todavía habría que esperar al Onganía iniciado con el nuevo golpe militar de 1966 para el inicio de un progresivo proceso de peronización de sectores estudiantiles. Hacia 1973, aunque el escenario estudiantil universitario estaba en disputa, los peronistas de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) se habían constituido en un actor dominante. La gran consigna de la JUP se organizaba alrededor de una conexión politizada entre universidad y sociedad, sea en términos de patria peronista o de patria socialista. La izquierda socialista, en todas sus variopintas opciones, fue también importante en ese ámbito. Por su parte, el claustro profesoral se encontraba profundamente condicionado por las novedades políticas desde hacía décadas. De allí que cuando se desencadenó la represión contra la “política” en las universidades, ya con el gobierno de Isabel Perón en 1974 pero más decididamente con la dictadura militar de 1976, numerosos actores de la universidad fueron objeto de feroz persecución y expulsión. Se pretendía cercenar la implicación entre universidad y sociedad largamente construida desde la Reforma.

Lo esencial a retener es que hasta la dictadura se habían sedimentado los múltiples estratos históricos característicos de la universidad pública. Quiero detenerme en una puntualización respecto de lo que hasta el momento pareciera una historia *interna* de la vida universitaria. Me interesa subrayar que si la exigencia de una politicidad atravesó a todos los “claustros” de la universidad tendiendo puentes hacia el exterior, ello aconteció y perduró porque la relación no fue unilateral. La presión de la sociedad y la incorporación de nuevas generaciones en el marco de la universidad pública favoreció una sinergia donde confluyeron circunstancias particulares del complejo funcionamiento corporativo universitario con una sociedad caracterizada por largas décadas de contradictoria, discontinua pero siempre retomada movilidad social ascendente, uno de cuyos aspectos fue el incremento de la matrícula del colegio secundario y de la universidad.

La obra disciplinadora y terrorista de la dictadura dejó hondas huellas en la sociedad movilizada antes de 1976, al menos en importantes sectores. También lo hizo en el movimiento estudiantil y en las capas profesoras. Pero el retorno democrático en 1983 no fue el deseado por los núcleos que venían de retirarse del gobierno tras la derrota militar en las Islas Malvinas. El término de “democracia de la derrota” es solo parcialmente adecuado para graficar lo que otro nombre, también inconveniente, designó como “primavera democrática”. En efecto, para regresar al aspecto aquí tratado, si el clima revolucionario desarrollado en la primera mitad de la década de 1970 estaba cerrado, la política y la voluntad de conexión con la sociedad hallaron un nuevo impulso con el renacimiento de la vida universitaria después de 1983. Como sabemos, no en los mismos términos imperantes una década atrás. La presencia de la agrupación del radicalismo, la Franja Morada, cuyos núcleos más críticos no lograban mellar la idea en general conservadora y funcional a una gradual clausura interna de los muros universitarios, fue expresiva de la corporativización de la universidad argentina. No obstante, la vivacidad de la universidad pública fue enorme. La tradición de politicidad pudo transmitirse.

Se comprende entonces que durante la década de 1990, ya fracasado el alfonsinismo y en apariencia victoriosa la versión menemista del peronismo, la universidad fue uno de los bastiones contra la ofensiva neoliberal. El peronismo que conservaba una presencia moderada en los ámbitos estudiantiles carecía de vínculos con el menemismo y la presencia de las izquierdas perduró a pesar de sus conocidas diferencias intestinas. En la primera década del corriente siglo, tras la crisis del 2001-2002, las aulas fueron todavía un escenario donde la sinergia entre universidad y sociedad tuvo relevancia. Los movimientos sociales que desde el decenio de 1990 habían hallado en los espacios universitarios lugares de reunión, debate y activismo afines, continuaron interactuando con estudiantes y docentes: grupos piqueteros, empresas recuperadas, agrupaciones de derechos humanos, sindicalismos combativos, sabían que la universidad pública —en sus aulas extracurriculares y patios, pero también en iniciativas con reconocimiento institucional— era un lugar receptivo para sus iniciativas. El conflicto de 2008 sobre las retenciones a las exportaciones agrarias desencadenó una nueva era de politicidad estudiantil con la novedad de una naciente pero expansiva identidad

kirchnerista que convivió con las izquierdas. Fueron esas mismas dos corrientes las que vivieron una nueva ola de politicidad con el ascenso, al calor del “Ni una menos”, del feminismo durante la década siguiente. Otra vez, las paredes universitarias no separaban su interior de enseñanza e investigación de un exterior en movimiento.

De esta síntesis esquemática no debe extraerse el corolario de una continuidad en el lugar de la universidad pública argentina en lo relativo a su relación con la sociedad. Es cierto que perduraron rasgos que datan de largas décadas, como la gratuidad, el co-gobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la activación política del estudiantado, la porosidad con las organizaciones de la sociedad civil, la noción de extensión universitaria, que hacen de la experiencia argentina algo novedoso a nivel mundial. Pero todas esas características remiten a una misma peculiaridad: la resistencia a someter la universidad al imperio irrestricto de la mercantilización. Pero esa resistencia, que no está condenada a perdurar, solo puede subsistir en activo combate con la lógica del capital. Eso último merece una breve explicación.

El descubrimiento fundamental de la crítica marxista de la economía política no consiste en revelar que el trabajo humano es la fuente del valor de las mercancías. Esto ya estaba presente en la economía clásica como en Adam Smith y David Ricardo. Tampoco reside en mostrar que el empresario se queda con una parte de lo producido por el obrero, la plusvalía subyacente en la ganancia capitalista, pues eso también había sido reconocido por el último economista mencionado. Lo que Marx elaboró fue la “forma social” de la explotación del trabajo y su carácter dinámico o, mejor dicho, dialéctico. Esto significa que la forma del valor, sostenida en la explotación del trabajo abstracto, estructura objetivamente un mundo social a través del intercambio de mercancías. Esa estructuración es contradictoria y está sometida a crisis constitutivas, pero se reproduce en ciclos constreñidos a acumular más ganancias por parte de los capitales. Por eso está enajenado. Es automático. Ese sujeto sin una intención oculta se mueve solo, consume a la clase obrera, a la naturaleza, y quizás a sí mismo. Por eso la política socialista no procura repartir un poco mejor la ganancia, como en el *fifty/fifty* peronista, laborista o socialdemócrata, que son expresiones de esa estrategia (aunque naturalmente un socialista siempre aboga en lo inmediato por mejorar el

salario y las condiciones laborales), sino a abolir el modo de producción y su forma social.

Nada permanece al margen de esa forma del valor, a la reducción de todo lo existente a mercancía, y por lo tanto, a la subsunción a mera mercadería comprable por dinero. La universidad no está ajena a esa forma dialéctica del valor, como no lo están nuestro sueños o deseos, el agua y el aire, el planeta y (como proyectan los capitalistas exaltados en la revista *Forbes*) el espacio extraterrestre.

Ese proceso social y objetivo subsume a la vida universitaria de modo incesante. La enseñanza está asalariada, el estudio está formateado para ingresar al mercado salarial, los medios de educación son mercancías, así como los resultados de la investigación. Sin embargo, en el caso argentino –y allí la confrontación con su vecino chileno es aleccionador– las mediaciones que obstaculizan un imperio directo de la mercantilización siguen presentes en la universidad pública. Naturalmente, hay que cerrar los ojos para dejar de ver que en algunas facultades la conexión con la lógica capitalista es más profunda y agresiva: medicina, farmacia, agronomía, economía, veterinaria, ingeniería. Las facultades de humanidades suelen ser las más reacias a plegarse a una mercantilización irrestricta. Sus productos son menos sencillos de convertir en mercancías reconocidas como tales, pues el valor es un fenómeno social: vale por el tiempo de trabajo “socialmente necesario” concretado en su confirmación en el intercambio.

Aunque la voluntad política no puede anular el avance de la lógica del valor, su imposición está lejos de ser inexorable sin matiz alguno. Y los procesos históricos le imprimen complejidad. Por ejemplo, si los noventa menemistas fueron centrales para la creación de universidades privadas, también propiciaron, especialmente gracias a la Ley de Educación Superior de 1995, la fundación de nuevas universidades nacionales. Por las razones histórico-estructurales ya explicadas, en la Argentina existe una matriz cultural que habilitó el pasaje de la universidad *nacional* a la universidad *pública*.

La universidad pública es un animal extraño en la fauna capitalista. La clave de su resistencia, que es la condición para preservar sus prácticas críticas sostenidas en un diálogo con la sociedad extramuros, descansa en las tradiciones de autonomía, politicidad y compromiso social.

En los párrafos precedentes he condensado la historia de esas tradiciones. Es lo que entró en crisis con la larga cuarentena del Covid-19.

Los (aún) incalculables efectos de la cuarentena

El tópico de los efectos sociales y subjetivos de la cuarentena del Covid-19 sobre distintas poblaciones y contextos ha generado una bibliografía inabarcable. Pero la cantidad no es un argumento. El grado de certidumbre alcanzado en esos estudios es generalmente reducido y discutible. Es prematuro derivar diagnósticos demasiado terminantes cuando las metodologías de análisis son objeto de controversia, la documentación empleada es debatible y, sobre todo, la proximidad temporal torna inasible el cierre del proceso para su evaluación integral. Sin embargo, la inmensa mayoría de las averiguaciones convergen en postular algunas tendencias. Me interesa subrayar dos de ellas: la fragmentación social verificada en el individualismo y la ruptura de las narrativas tradicionales. Los sujetos devinieron cada vez más egoístas y temerosos. Sus horizontes de pensamiento y sentimiento se angostaron en un presente eterno. Ante la crisis de futuro también se produjo una separación del pasado.

Sin embargo, es crucial destacar que tales tendencias comenzaban a asomar con claridad hacia el 2001, aunque no estoy de acuerdo con establecer una causalidad entre una crisis muy compleja y lo que se impuso tras la pandemia con el gobierno de Milei. El 2001 fue ambivalente. Contenía en sí dos almas. Ambas habitaban en la consigna “Que se vayan todos”. El alma que se expresó más claramente al principio fue el de la protesta y la eventualidad de nuevas formas de representación y acción. Fue un alma de activación, de solidaridad, de conexión entre luchas desde abajo. Allí había una promesa emancipatoria que entusiasmó a mi generación. Pero también habitaba el 2001 una segunda alma: el individualismo de la supervivencia, la desesperanza de un futuro, el sálvese quien pueda.

El kirchnerismo quiso domesticar el alma renovadora, horizontalista y transformadora por la restitución de la promesa peronista de una alianza de clases, el ascenso del estado y una cierta redistribución hacia las clases populares, sin conmovir las condiciones materiales que hacían inviable ese sueño de regresar a 1945. Por supuesto, pudo hacerlo durante unos años, que fueron aquellos en que se fundó su base militante e ideo-

lógica, pero las condiciones habilitantes de su hegemonía no perduraron más de un lustro. Hacia 2009, no casualmente al compás de la crisis general del capital desencadenada un año antes, al proyecto kirchnerista solo le quedaba vivir de recuerdos y crear, tras la victoria del macrismo en 2015, el mito de la “década ganada”. La gestión de Alberto Fernández, al margen de sus diversas falencias y la súbita emergencia pandémica, procuró sin chances retrotraer el reloj de la historia.

Los gobiernos neoliberales de Mauricio Macri (2015-2019) y el iniciado por Javier Milei a fines de 2023, encarnaron, con sus diferentes modales e intensidades, un proyecto de mercantilización radicalizada de la vida universitaria argentina. La aspiración profesionalista como horizonte de la experiencia universitaria procura retornar, en la Argentina, a lo que había sido la clave de sus metas antes de la Reforma de 1918. También en eso el proyecto libertario procura retroceder a una sociedad pre-democrática. Al margen de sus imaginarios, debe notarse en su proyecto privatista la pretensión de que la realidad de la vida universitaria pasada ya no existe. ¿Estamos frente a una afirmación solo ideológica?

Lo importante a retener es que la expansión del horizonte universitario durante el siglo pasado fue inseparable de un periodo donde, con altibajos, prevaleció un contexto social de movilidad social ascendente, surgimiento de sectores medios relativamente densos, y donde el desvío de un segmento de la riqueza social para la universidad era tolerado por la clase dominante. La actual tendencia a derivar la compleja vida universitaria en una máquina de producir profesionales materialmente liberales, es decir, individuos preocupados por sus futuros individuales y el ingreso monetario previsible por el título habilitante aprobado, participa de un agotamiento estructural de la movilidad social ascendente. Y eso expresa la dificultad de sostener un crecimiento económico propio del largo periodo de crisis capitalista en que aún nos hallamos. Pero no debemos perder de vista a los actores en este drama.

He dicho que buena parte de la agencia universitaria se dirime en los centros estudiantiles. No olvidemos que la autonomía universitaria, rastreable antes de 1918, adquirió fuerza social cuando estuvo acompañada por el co-gobierno estudiantil. Pero ningún centro es realmente efectivo si no encuentra resonancia entre los estudiantes de a pie. Los centros son fuertes cuando responden a una inquietud cotidiana del conjunto,



o de un sector significativo tanto cualitativa como cuantitativamente de quienes representan.

Sucedió al respecto que la cuarentena profundizó el proceso de individualización estudiantil generado por la propia experiencia mercantil cotidiana y por la fragmentación del tejido social argentino de las últimas décadas. La situación se agrava por la decadencia de la educación secundaria que forma individuos con herramientas insuficientes para atravesar las exigencias de la universidad. El empobrecimiento de sectores medios y la expulsión de la clase obrera de la movilidad ascendente hizo más darwinista el recorrido de vida pensado como estudiante. Se trata cada vez más de obtener un título con rapidez sin depositar en el periodo de estudio un tiempo del que no se dispone, o se lo tiene de manera crecientemente escasa. Y la politicidad requería de un cierto tiempo libre, es decir, no sometido al trabajo. Casi sin tiempo libre, militar en los centros de estudiantes, en el aula o en los pasillos se hace cada vez menos atractivo. Formar grupos de estudio independientes, generalmente asociados con lecturas disonantes de la doxa académica, es más arduo. La formación de grupos de amigos y amigas para rendir materias y constituir agrupaciones políticas o intelectuales comenzó a menguar. Las reuniones en cafés se hicieron cada vez menos accesibles. En fin, todo el mundillo inseparable de la formación de un espíritu crítico comenzó a declinar. No es sorprendente que en ese marco la vida política estudiantil perdiera potencia e iniciativa para la interacción con el afuera de las facultades.

La cuarentena ahondó esa tendencia de mediano plazo y fracturó los vínculos pre-existentes, neutralizó la sociabilidad en curso y quebrantó la transmisión de modos previos de ver el mundo.

La mengua en la transmisión de la cultura crítica amenaza también el legado de la politicidad universitaria argentina. Según expliqué previamente, el interés constitutivo por comprometerse en los dilemas de la sociedad se había constituido en un nervio identitario en la vida universitaria. Pero una identidad se construye históricamente y está siempre en peligro. Requiere rituales de refuerzo y prácticas concretas que permitan reproducirla, modificarla, transformarla en el tiempo. De otro modo se osifica y olvida. La brecha en la memoria y la transmisión de tradiciones con que la cuarentena hirió a la cultura política universitaria argentina, profundizó la crisis en que se hallaba bajo el tenaz estado de sitio de una creciente mercantilización. Se objetará que fueron apenas dos años de encierro (de marzo de 2020 a abril de 2022). No obstante, al montarse sobre una predisposición estructural a la fragmentación e individualización egoísta, hizo tambalear lo que aparecía como un tipo social perenne: el estudiantado politizado, vestido descuidadamente con libros revolucionarios en un bolso precario, movilizado por el cambio social. Temo que detrás de la fachada en que pareciera haberse alterado poco entre estudiantes, y también entre docentes, algo más profundo se ha mellado.

¿Qué hacer ante el embate de la lógica del capital sobre los restos de politicidad aún vivos en la universidad luego del parteaguas de la cuarentena tan bien explotada por la actual ofensiva libertaria? ¿Cómo recuperar y rehacer, de nuevas maneras y ante las recientes modificaciones en los vínculos sociales, las tradiciones de una universidad crítica? Es lo que intentaré desarrollar en el próximo y último apartado.

Renovar los legados de la universidad pública

La gran fractura inicial de la tradición de politicidad universitaria argentina fue infligida por la dictadura militar instalada en 1976. Los gobiernos neoliberales de 1990 en adelante también hallaron en la politicidad universitaria un enemigo a derrotar. Pero lo hicieron de maneras distintas. Aquí no pude entrar en detalles sobre cómo Menem, Macri y Milei agredieron la vocación universitaria por participar activamente de los dramas nacionales. Lo común de sus políticas, insisto irreductibles

a una sola idea sencilla (recordé que durante el gobierno de Menem se promovieron nuevas universidades estatales además de las privadas, y Macri no desarrolló una lógica de desfinanciamiento comparable a la de Milei), consistió en una contra-reforma económica y cultural orientada a deshacer su historia de compromiso social con todas las limitaciones que una visión exigente podría ciertamente ponderar. Es admisible cuestionar las ilusiones de la tradición Reformista en su progresiva domesticación, señalar las restricciones de los intentos peronistas por situar a la universidad de una estrategia conciliadora con una lógica capitalista inclemente en su obsesiva mercantilización, reconocer en las izquierdas las dificultades de los enfoques usualmente externos a la politicidad específica, y sin embargo plantearse un futuro diferente para la universidad argentina.

Ese futuro posible, hoy bajo el fuego cruzado de, por un lado en el mediano plazo, las tendencias estructurales al individualismo despolitizante y mercantilizador, y por otro lado en el corto plazo, de la agresión ideológica del mileísmo desfinanciadador y reaccionario, requiere meditaciones sobre el pasado y el porvenir.

Hay un actor central de la universidad argentina después de la Reforma: las y los estudiantes. No menos importantes son, desde luego, las y los profesores en sus diversos estratos, cuyas diferencias de intereses aquí no puedo detallar (en principio, entre los “titulares de cátedra” y el resto de la planta docente). Lo cierto es que desde antes de 1918, la modernidad, el cambio, la crítica, la renovación, siempre estuvieron asociadas al estudiantado. Su órgano asociativo, aunque no exclusivo, fueron los centros estudiantiles. Digo no exclusivo porque es viable observar experiencias en las cuales los centros de estudiantes devinieron conservadores, apéndices de las gestiones instaladas en los decanatos, se subordinaron a las fuerzas políticas externas, y se requirió de un activismo de base para reinstalar la politicidad amordazada por la propia burocracia estudiantil.

Desde 2020 en adelante, se observa una crisis de los centros de estudiantes como órganos de la movilización y politicidad estudiantil. Eso puede deberse a una “ley de hierro de la burocracia” que según el teórico Robert Michels aqueja a toda organización perdurable, pero se deriva especialmente de la desafección generada por la cuarentena. El enfrentamiento al ataque frontal del mileísmo suscitó un renacimiento

parcial del estudiantado como actor político. Pero esa parcialidad revela las incertidumbres ideológicas que no podemos ocultar entre los propios estudiantes. ¿Cuántos votan a Milei y cuántos están de acuerdo con desfinanciar y mercantilizar la universidad en la que estudian? Es una pregunta todavía sin respuesta cierta.

¿Qué ocurre desde el ámbito docente (en el que por experiencia tengo más información)? La diferencia entre estudiantes y docentes participa de los ciclos de vida universitaria que de manera general caracterizan a cada sector. El estudiante universitario transcurre entre 4 y 10 años en las aulas. El docente, como trabaja en tanto que tal, tiene un recorrido aproximado de 30 años de enseñanza. Eso significa que cuando se produjo la pandemia, ya venía con una carga cultural previa más o menos extensa que perduró durante el periodo de la cuarentena. Tuvo que actualizarse en los nuevos recursos (Zoom, Meet, carga de *slides* de Powerpoint y clases escritas en campus virtuales, etc.), sin mayores fracturas en sus formaciones profesionales. Se puede presuponer una mayor resistencia docente a la doble lógica de individualización neoliberal orientada a la mercantilización y a la novedad ideológica de la oferta libertaria. Es algo a examinar en el futuro, para lo que será preciso distinguir entre las diferentes universidades, facultades y profesiones.

Sin embargo, la actitud docente puede ser vista también como un problema para enfrentar los ataques decididos contra la vida universitaria. La pertenencia a un horizonte cultural previo es también una dificultad para comprender el escenario actual que, posiblemente, los estudiantes, en parte captados por el discurso libertario, comprenden mejor. En mi caso, como en numerosos de mis colegas docentes, estamos inseguros de si nuestros estudiantes actuales –incluso en lucha contra la agresión mileísta– poseen identidades culturales, como estudiantes, similares a las nuestras formados en décadas previas. Todo hace pensar que no es así. Se ha producido una fractura en la transmisión generacional.

¿Qué hacer en ese contexto? Ciertamente no soñar con el retorno a un pasado al que es imposible, e incluso indeseable, volver. Los claroscuros de la universidad reformista y en sinergia con la sociedad no eran pocos, a menudo simplificados por las narrativas épicas. La sociedad argentina ha modificado las condiciones de su reproducción. La inclusión educativa coextensiva con la movilidad social ascendente se encuentra en una severa crisis. La fragmentación de lo social y la dispersión del

capitalismo de plataformas han producido nuevas subjetividades, las que particularmente en el contexto argentino de las últimas décadas alteraron profundamente la anterior interrelación entre la universidad y su entorno.

La propia universidad ha cambiado. Piénsese que la demografía estudiantil pasó de 47 mil estudiantes en 1945 a 330 mil en 1973 y actualmente supera los dos millones y medio de alumnos incluyendo universidades estatales y privadas. La presencia e inclusión expansión de la universidad nacional desde mediados de 1990 ha sido un fenómeno paradójico donde anidan diversas vetas con sus propias singularidades que es preciso abarcar en una política general, sin aplastarlas en una respuesta tan sencilla como inadecuada. La izquierda con la que me identifico, en general, ha desplegado una estrategia universitaria donde se adopta una relación utilitaria con la politicidad. Suele enfocarse en la dinámica protestataria y la confluencia con otros conflictos sociales de diferentes actores extramuros, lo que no está mal. El relegamiento de las reivindicaciones estudiantiles en el seno de sus intereses particulares es, en cambio, incorrecto. Esa política profundiza la desafección de un estudiantado en crisis, azorado por las dificultades económicas y en un contexto adverso para la politicidad universitaria, y donde no puede descartarse la presencia de franjas convocadas por el discurso libertario. En realidad, siempre existieron segmentos del estudiantado refractarios a la politicidad de la universidad pública.

Las potencias vigentes en la politicidad universitaria hizo que las manifestaciones públicas y repercusión mediática más relevante contra el violento proyecto de mercantilización del gobierno Milei proviniera justamente del lugar de estudiantes, docentes, familiares y sectores de la población reconocedores de la importancia de la universidad pública en lo mejor de la experiencia social argentina. Los libertarios han debido retroceder en todo intento de terminar con la “gratuidad” universitaria. Han desfinanciado las universidades, pero no en el grado terminal con que soñaban hacerlo. He allí una memoria viva. Pero nada es eterno.

Las secuelas de la cuarentena fragilizaron la transmisión de esa memoria, que no puede subsistir y, sobre todo, renovarse, sin prácticas cotidianas y sociabilidades de debate, amistad y también desacuerdos. El gremio docente de la universidad, en general proveniente de la sociedad forjada en matrices previas, ha resistido al ataque ideológico libertario.

Más el actor fundamental de la vida universitaria argentina son los estudiantes. A ellos y ellas solo podemos intentar transmitir los trazos de un pasado que no es un programa suficiente para el presente y los futuros posibles.

Lo que se ha observado respecto de una actitud pro-activa y orientada a desarrollar las universidades nacionales como ocurrió durante los gobiernos kirchneristas es la insuficiencia de enfoques parciales. Incluso en momentos en que existe acceso a recursos, la inscripción de las universidades en una constelación de variables socio-económicas, laborales, regionales, tecnológicas, comunicacionales, entre otras, demanda una perspectiva integral extendida a la discusión sobre la entera sociedad en que deseamos vivir.

En diversas ocasiones de la historia de la universidad *pública* argentina –que por lo dicho no debe tomarse como sinónimo de *estatal* o *nacional*– se ha planteado rehacer, modificar, renovar y revolucionar el legado de la Reforma de 1918. He allí el secreto de su perdurable politicidad cuando los nombres de sus actores han sido olvidados. La realidad política y económico-social argentina, la agresión sufrida desde el gobierno libertario, y la mutación de la lógica capitalista plasmada en formas sociales y productivas actuales, pero también en las subjetividades, imponen un desafío cuyo enigma solo lograrán resolver los estudiantes mismos. Los docentes, como trabajadores de la educación, podemos colaborar en esa tarea que es también la de toda la comunidad universitaria.

Obrerxs de tiza y proyector. La universidad y la lucha de sus trabajadorxs

Leandro Rodríguez* y Jorgelina Matusevicius**

El 23 de abril de 2024, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país sucedió una de las movilizaciones más importantes del último tiempo. Alrededor de un millón de personas que expresaban una multiplicidad de sectores se dieron cita para defender su universidad. Movimiento estudiantil, trabajadores docentes y no docentes, funcionarios de las universidades, asambleas barriales, sindicatos, familiares de estudiantes, jubilados, piqueteros, periodistas, confluyeron en un grito unánime contra el cierre de universidades públicas y exigiendo presupuesto para su funcionamiento.

Un símbolo de los días previos a esa marcha fueron los pasillos y aulas de las facultades a media luz, ya que las autoridades daban la orden de apagar luces porque “el presupuesto no alcanzaba para llegar a fin de año”. Pero si la lucha por el financiamiento de la educación ante su posible cierre logró involucrar al conjunto de la sociedad, la disputa por el uso de una recomposición presupuestaria para mejorar las condiciones de trabajo y salarios no ha tenido el mismo derrotero. Vale aquí preguntarse: ¿es posible desvincular la pelea por una universidad pública, gratuita, democrática, popular, de la exigencia de la mejora de las condiciones de trabajo de les docentes?

* Docente, sociólogo, secretario de prensa AGD UBA, integrante de CSyP Marabunta

** Trabajadora social. Docente universitaria y trabajadora de la salud. Delegada de la Asociación Gremial Docente de la UBA y miembro de CSyP Marabunta.

En nuestro país el deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades nacionales viene arrastrándose hace varios años. Podemos ubicar este deterioro en torno a lo salarial desde el año 2013, en tanto que el Convenio Colectivo de Trabajo Nacional (CCT) fue conseguido recién en el 2015 y la resistencia a aplicarlo fue y es muy dura, tanto por parte de los gobiernos nacionales como de la mayor parte de los rectorados. En el aspecto presupuestario el deterioro en los 90 fue recuperándose parcialmente bajo los gobiernos kirchneristas para volverse a desplomar a partir del 2015.

En contraste con estas idas y vueltas, una serie de elementos troncales de las políticas educativas tuvieron continuidad en esos distintos períodos. En la década del 90, en pleno neoliberalismo, las políticas del Banco Mundial para la educación de “los países en desarrollo” fue acordada e impulsada fuertemente por los gobiernos nacionales. Como contraparte, se puso en pie una dura resistencia del movimiento estudiantil. En la década del 2000, luego del primer ciclo de impugnación al neoliberalismo, gobiernos como los del kirchnerismo que presentaban una variante neodesarrollista al neoliberalismo, modificaron las políticas educativas neoliberales en algunos aspectos, pero sostuvieron elementos esenciales de la misma¹, legitimándolas en cierto modo con un discurso progresista. En esa década, en el movimiento estudiantil se llegó a expresar una tendencia por una universidad “democrática y popular” en lucha contra la evaluación y el financiamiento externo, así como contra la implementación de formas de contratación cada vez más precarias, promoviendo un aumento presupuestario y un manejo democrático del mismo por la comunidad educativa de conjunto. Esta tendencia desplegó formas de democracia y acción directa en algunas unidades académicas, pero no llegó a conformarse un movimiento universitario de este tipo a nivel nacional.

Mientras el movimiento estudiantil se encontraba con un límite en la lucha por la democratización universitaria y la disputa en torno a la producción de conocimiento crítico en ella, de parte de la docencia universitaria dimos una importante lucha en el 2005. Ese año el gobierno

1 La evaluación externa con la CONEAU, el financiamiento de capitales privados / venta de servicios, una autonomía “universitaria” contrapuesta a la democratización de la misma, reservándose el poder para un grupo muy minoritario de profesores en condiciones de autorreproducirse, etc.

iba recomponiendo el salario mínimo, vital y móvil, pero no los salarios de les trabajadores registrades. Ante ello, muy diversos sectores del movimiento obrero fueron saliendo a luchar, entre quienes destacaba, como lucha testigo, les trabajadores del Hospital Garrahan y del movimiento piquetero. En el curso de una huelga por tiempo indeterminada de la docencia universitaria nacional, en Buenos Aires se confluýó en la calle con esos sectores (y parcialmente con un movimiento estudiantil que aún seguía activo). Ante una lucha que iba en crecimiento, y contaba con simpatía social, el gobierno de Kirchner jugó a dividir concediendo la reivindicación histórica de pasar al básico todas las sumas salariales de la docencia universitaria “en blanco”. Hasta el 2015 las mejoras que se irían dando aparecerían netamente como “dadas desde arriba”, mientras las luchas independientes se encontrarían ante duras políticas gubernamentales. Recién en 2016, ante la ofensiva macrista, se dará una pelea en la que las distintas tendencias dentro del movimiento docente volverían a encontrarse en la lucha. Con masivas clases públicas e importantes marchas, el movimiento docente y estudiantil ganaron la calle, pero sin una articulación orgánica. Cuando en septiembre de 2018 la conducción nacional docente de CONADU y FEDUN firmaron un acuerdo paritario a la baja con Macri, como movimiento docente y estudiantil no logramos ser capaces de forjar instancias desde donde dar vuelta esa entrega. No estaríamos a tono con los niveles de autoactividad de masas que se daban en ese momento en el movimiento feminista y se habían dado en diciembre del 2017 frente a las reformas previsional y laboral del gobierno. Pesaría entonces como un gran lastre la consigna del peronismo: “Hay 2019”.

El debate estructural. ¿Qué conocimiento para qué sociedad?

Este breve *racconto* histórico expresa apenas un fragmento de la lucha por cambiar la estructura social. La estructura sólo se modifica a través de la coyuntura y no hay otra forma de que así ocurra. Como trabajadorxs docentes universitarios somos parte activa de la política educativa. En tanto trabajadorxs reproducimos o transformamos esa porción sobre la que nos toca intervenir.

Las políticas educativas neoliberales de los 90 buscaban una transformación profunda de la universidad en función del proyecto de sociedad que tenían. Y esa búsqueda estaba respaldada por la clase domi-

nante local y mundial. La hegemonía neoliberal era así globalizante. La resistencia a esa política, dada la correlación de fuerzas, no podía surgir sino desde abajo, teniendo en cuenta la debilidad y desmoralización de la fuerza social reformista y el grado de derrota y desarme de la fuerza social revolucionaria. Por ello mismo tuvo tanto valor el encuentro desde abajo, los espacios autoconvocados, todas las formas de autoorganización que emergieron. En ellos no había, a priori, ninguna (contra) hegemonía de los sectores en lucha, ninguna política educativa transformadora para contraponerse a las reformas que se impulsaba desde los organismos como el Banco Mundial y el BID. Ello sólo podía forjarse en el curso del movimiento.

II ¿Es posible desvincular la pelea por una universidad pública, gratuita, democrática, popular, de la exigencia de la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes?

Las políticas educativas neoliberales no sólo tenían respaldo desde arriba y una orientación materialmente posible, sino que además atacaban una universidad y un sistema científico-tecnológico que aparecía con pérdida de sentido. ¿Qué vinculación tenía la investigación, la extensión y la docencia universitaria con aquella Argentina? De allí que los sectores más críticos coincidían en la consigna: “Ni la universidad que tenemos, ni la que nos quieren imponer”. Pero esta tendencia, si bien mostró una importante y saludable dinámica de politización académica, partía de una situación objetivamente minoritaria. Las mayorías se unificarían en torno a cuestiones gremiales estudiantiles como el “No al arancel”, cuya no aplicación implicó una conquista concreta del período.

Al mismo tiempo las reformas, como ya dijimos, fueron penetrando. La modificación de los planes de estudio en base a la evaluación externa (de la mano de la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU–); la introducción de lógicas de productivismo vía incentivos docentes a discreción de las autoridades; la generalización de la inestabilidad laboral en base a contratos precarios, fueron imponiéndose en la mayoría de las universidades surgidas en los 90, tanto en las públicas como en las privadas. Las dedicaciones exclusivas, que permiten integrar docencia, investigación y extensión, siguie-

ron quedando en el olvido copando la escena las dedicaciones simples, que obligan a tener horas en distintas universidades, en otros niveles educativos o aún en otros trabajos no educativos.

Reformas (regresivas) que se fueron imponiendo bajo la hegemonía neoliberal noventista y que continuaron bajo la variante kirchnerista. Podemos hablar, en términos del mismo kirchnerismo, de un “modelo productivo con inclusión social”, en la medida en que efectivamente reactivó el aparato productivo y la inclusión social, si lo medimos en relación con el menemismo. Pero este neodesarrollismo extractivista no planteó una modificación de las políticas educativas neoliberales que venían (y siguieron) avanzando, sino que más bien adicionó fondos para un crecimiento cuantitativo de las universidades, en presupuesto para ampliar la infraestructura, becas y salarios, así como el número de estudiantes y docentes. No se trata de negar lo positivo de esta ampliación universitaria, sino de recalcar que esa ampliación se hizo sobre la base neoliberal noventista. Un símbolo de ello en el ámbito de la investigación y que da cuenta del perfil de política científica que no busca romper con las tendencias neoliberales de adaptación al mercado, fue la continuidad de Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina entre 2007 y 2018.

Otra universidad para otra sociedad

El “callejón sin salida” al que nos enfrentamos al plantear la lucha por otra universidad es: ¿para qué sociedad? La crisis del horizonte socialista que nos dejó el siglo XX pesa como una gran loza. A ello, para peor, se suman los límites de experiencias transformadoras como la del “socialismo del siglo XXI” y los diversos países del ALBA, o de intentos transformadores como los de Syriza, Podemos o el Apruebo Dignidad chileno. Pero, ante la ausencia de experiencias ya consolidadas y en curso de un nuevo modelo de universidad, ¿qué hacer? Ante ello no se trata de imaginar utopías que partan de cero o de la nada. Tenemos ya lineamientos que surgen tanto de nuestra experiencia universitaria, como de la historia más amplia de la misma y también de experiencias de luchas y construcciones por otra sociedad. El qué hacer es un problema dialéctico, que requiere un trato de ese tipo, en línea con la tercera tesis sobre Feuerbach de Marx: *la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse*



racionalmente como praxis revolucionaria. Esa praxis colectiva en la que transformamos la realidad al mismo tiempo que nos transformamos a nosotros mismos.

La disputa por forjar un proceso de enseñanza aprendizaje crítico es, al mismo tiempo, la disputa por construir una universidad de este tipo, por conformar una clase trabajadora crítica (entendiendo ese proceso como un momento de la conformación de la clase trabajadora) y por construir otras relaciones sociales. Una disputa que puede y debe darse desde todos los ángulos. Desde la forma de ejercer el poder como docente o como estudiante en la cursada, desde la disputa sobre los concursos y designaciones docentes, sobre la forma de contratación de éstos, sobre los planes de estudio, sobre la dinámica de los órganos de cogobierno, sobre el manejo del presupuesto y sobre el presupuesto mismo.

En el curso de esta lucha tenemos algunas orientaciones generales: que la universidad reúna la producción de conocimiento, integrando la docencia, la investigación y la extensión; que investigue con financiamiento propio y sin apelar a recursos de empresas; que sus trabajadorxs puedan dedicarse con exclusividad a su tarea de docencia e investigación, es una condición de posibilidad para que la universidad cumpla una función social con autonomía de la injerencia de intereses mercantilizados en la producción de conocimiento. Por cierto, las presiones que el capital ejerce sobre la universidad desde afuera, por medio de la ley de la mercancía, canalizado por las reformas más extremas vía la fuerza social neoliberal y también por medio de las matizadas (o tamizadas) reformas neodesarrollistas, son presiones que se apoyan y son propulsadas

a la vez por esas mismas fuerzas presentes dentro de las universidades. Como dijimos, el citado caso Baraño es un sencillo ejemplo de esto.

La lucha por un aumento del presupuesto del Estado para la universidad pública y gratuita, debe ir de la mano de una lucha por un uso transparente de estos recursos, en función de dicha producción de conocimiento como fuerza de trabajo crítica y de calidad y de las necesidades sociales en general.

La disputa por mejores condiciones de trabajo constituye una pieza fundamental de la defensa de la universidad pública. El punto de partida más evidente es la pelea por la recomposición salarial. Sin trabajadorxs no hay universidad y entenderlo de este modo supone la necesidad de apostar a fortalecer nuestras herramientas gremiales como espacios de debate, participación y lucha, entendiendo que la recomposición salarial no vendrá del pedido de los rectores al gobierno de turno, sino de la lucha gremial directa. Lucha salarial que está en relación con la que da el resto de nuestra clase, por lo que debemos reconocernos como parte de la clase trabajadora, cada vez más precarizada y pluriempleada.

A su vez, pensarnos de este modo supone no depender de decisiones de las gestiones universitarias, o no delegar en ellas la tarea de la defensa de las condiciones de trabajo. Las gestiones de las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confluyeron en el conflicto de 2024 con el Frente sindical universitario y la Federación Universitaria Argentina (estudiantes); sin embargo, luego de que en mayo se anunciara el “aumento” presupuestario que permitía el funcionamiento de las universidades, la lucha entró en otra fase. Dicho “aumento” presupuestario no sólo no significó un mejoramiento salarial, que sigue cayendo, sino que apenas alcanzó para cubrir gastos operativos como la luz y el agua, pero en términos reales implicó una reducción respecto al año anterior.

Esta reducción presupuestaria se combina y agrava por la ratificación del rumbo de reforma universitaria mercantilizadora que, asentándose en las políticas educativas neoliberales preexistentes, viene a agudizarse con el gobierno de Milei.

Entonces, más allá de la importancia de una amplia unidad de acción para frenar la ofensiva contra la educación superior, es necesario identificar nuestras propias demandas en este proceso de lucha y reconfigurar la pelea por la universidad, no sólo defendiendo acríticamente su carác-

ter actual sino intentando avanzar en una orientación pensada desde y para les trabajadorxs (docentes, no docentes y estudiantes en su calidad de futuros profesionales).

Exigir mejores condiciones de trabajo no garantiza una universidad de calidad y un sentido popular, feminista, de sus planes de estudio, pero sin esas condiciones no hay ninguna posibilidad de construirla.

¿Cómo afecta a les trabajadorxs y a la lucha sindical el proceso de (contra)reforma universitaria en curso?

Las reformas que impulsan los organismos internacionales de crédito para la universidad llevan casi 30 años de avance y se fueron implementando en forma casi imperceptible pero decidida. La estrategia para la aplicación de los cambios ha sido utilizar la asfixia presupuestaria, para luego condicionar financiamientos a cambio de la implementación de reformas.

Esto fue imponiendo muchas transformaciones en las condiciones de trabajo. El Programa de Incentivos Docentes, por ejemplo, se aplica desde 1993. Desde sus orígenes buscaba incentivar la “productividad” del trabajo docente a partir de plus salariales, lo que implicaba una estratificación del trabajo docente. La exigencia de productividad y la sobrecarga de tareas técnico burocráticas impactaron en las condiciones de producción intelectual en desmedro de la calidad académica, reduciendo los tiempos disponibles para la participación gremial y política (Llomo-vatte y Wischnevsky, 1997). A su vez, la lógica de la competencia para acceder a cargos docentes obliga a la realización de costosos estudios de posgrados que se generalizaron a partir de los años 90. Si en 1994 existían entre públicos y privados 790 posgrados, para 2023 contamos con 3845 acreditados por la CONEAU. El carácter público o privado sólo indica qué institución dicta dichos cursos, pero no garantiza (en general) su gratuidad. Para acceder al trabajo docente y para promocionar en la carrera docente no alcanza con el título de grado, lo que implica un alto costo de formación que asumimos los propios trabajadores.

Por otro lado, en los últimos años ha cobrado un gran impulso las modalidades remotas de educación. Las modalidades a distancia o propuestas virtuales vienen creciendo desde 1999, año en que se creó la Universidad Virtual de Quilmes. Para el año 2019, de acuerdo a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), ya existían 381 ofertas de grado

y pregrado y 112 posgrados virtuales. Si bien esta era una modalidad reservada a este tipo de oferta educativa, durante el aislamiento por la pandemia de COVID 19 se extendió el uso de plataformas digitales para dictado de clases, aulas virtuales, campus en las históricas modalidades presenciales. Se incorporó entonces la modalidad remota a la educación presencial. La incorporación de equipamiento para el desarrollo de estas modalidades estuvo, en la mayoría de los casos, a cargo de los propios docentes. A su vez, la extensión de esta modalidad dio un nuevo impulso al pluriempleo en la medida en que el salario se fue deteriorando y los docentes tuvieron que tomar más horas. Existe un extendido debate en torno a la calidad del proceso pedagógico bajo este tipo de modalidad en la que la interacción entre les estudiantes y los procesos colectivos de aprendizaje se ven seriamente afectados. Quienes sin duda se han visto beneficiades de este proceso son las empresas que proveen los software para los entornos virtuales, constituyendo una nueva fuente de negocios. Por su parte, la posibilidad de intercambio entre docentes, compartir experiencias y participar de las organizaciones gremiales se ven seriamente afectadas.

Si estas reformas tienen unos cuantos años de implementación, lo que tenemos por delante es una nueva arremetida que podría trastocar completamente nuestro proceso de trabajo. En diciembre de 2023 se aprobó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) luego de un largo derrotero que tuvo su máximo nivel de avance post pandemia con la generalización de modalidades virtuales e híbridas de dictado de materias a raíz del confinamiento obligatorio. En 2021 el CIN acuerda *siete puntos para la universidad argentina* en los que propone avanzar con los lineamientos de la reforma que incluyen la revisión de propuestas curriculares y la introducción de la figura del crédito académico, entre otros aspectos.

Esta reforma —que implica un cambio profundo de la universidad que se forjó al calor de la Reforma de 1918— convierte a las unidades académicas en mercados de ofertas académicas en las que los recorridos de las cursadas dejan de ser colectivos, para ser individuales e individualizantes. La posibilidad de acreditar cursadas en distintos ámbitos como materias, pasantías laborales o cursos virtuales convierte a les docentes en competidores por la matrícula y precariza aún más el trabajo. Su implementación podría implicar, a futuro, planteles docentes mucho más

flexibles, en la medida que, si no hay demanda para un contenido, no tendría sentido una oferta fija de propuestas de materias. A su vez, esta reforma viene avanzando sin ningún proceso de debate colectivo, pasando por encima de cualquier espacio de cogobierno universitario. Las discusiones en el Consejo Interuniversitario Nacional no cuentan con el correspondiente aporte del sector docente y sus gremios, y la reforma lejos de fortalecer la democracia en la toma de decisiones profundizaría la falta de democracia en las decisiones sobre la política educativa. Aunque no esté explicitado, la implementación del SACAU avanzaría sobre la flexibilización y precarización del trabajo docente, la descolectivización de los trayectos formativos, el avance de modalidades remotas y a distancia, la eventual introducción de la lógica mercantilizadora del conocimiento en el dictado de carreras de grado y la consecuente pérdida de control sobre la integralidad del proceso de trabajo de les docentes universitarios.

Es por esto que la lucha por condiciones de trabajo debe ir de la mano del debate sobre los cambios que se pretenden imponer desde la política educativa, evidenciando los avances de la contra reforma en curso y contraponiendo a ellas nuestro propio modelo de universidad al servicio de los intereses del pueblo trabajador.

El Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria bajo la mira

En el año 2015 se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria y preuniversitaria. Si bien fue un paso enorme de la lucha docente universitaria que llevó años de concreción, tuvo algunas fallas de origen. El CCT habilitaba a las universidades nacionales a formular reservas en la aplicación de uno o varios artículos. Invocando la autonomía universitaria y planteando que algunas cláusulas de lo convenido podían contradecir los estatutos universitarios, dejaban sentada la posibilidad de no aplicarlas. La Universidad de Buenos Aires, por su parte, se negó a ser parte del CCT nacional y estableció uno propio que negaba, por ejemplo, la regularización de les docentes que llevaban 5 años o más en la condición de interinos (como lo indicaba el artículo 73 del CCT Nacional). El CCT nacional además impide que la condición de

interinos pueda prolongarse por más de tres años si tuviese que contratar temporariamente docentes.

A pesar de la vigencia del CCT existen numerosas situaciones de docentes contratadxs cuya situación de inestabilidad les expone al disciplinamiento académico de las gestiones.

Esta inestabilidad laboral es una de las principales causas de lo que se denomina clientelismo académico, modalidades informales de intercambio que son motorizadas por vínculos de carácter asimétrico en la universidad (Hobert, 2013) que permiten o impiden el acceso, la permanencia y la promoción. Es decir, para poder hacer carrera docente existen mecanismos informales que imponen subordinación y obediencia a las lógicas imperantes en el trabajo docente.

Este disciplinamiento tiene consecuencias a la hora de poder ejercer los propios derechos laborales que se traduce en, por ejemplo, no hacer paro si el titular de la cátedra no lo autoriza, no participar con voz propia en espacios de organización para no quedar expuesto y dañar así la posibilidad de una beca o un cargo.

Ahora bien, si estos mecanismos de disciplinamiento ya existen y tienen serias consecuencias en la organización gremial docente, imaginemos qué pasaría si avanza una (contra) reforma que destruye cualquier tipo de colectivo docente y profundiza la lógica competitiva entre trabajadorxs. La ofensiva actual de ultraderecha no necesitaría anular el CCT dado que el mismo se encuentra acechado, por un lado, por el desinterés por hacer carrera docente debido a los bajos salarios, algo que ya está pasando en muchas unidades académicas, y por otro, porque la reforma misma supone una planta flexible, móvil, cambiante y en ningún caso estable.

Las armas de la crítica y la construcción de nuestro propio poder en la universidad

La historia no está, de ninguna manera, escrita de antemano. La universidad la hacemos quienes damos clases, investigamos, estudiamos en ella. La batalla que tenemos por delante es decisiva y requiere de nuestro involucramiento para no ser meros objetos espectadores de los cambios que se pretenden.

En ese sentido necesitamos reapropiarnos de nuestras herramientas de organización que nos permitan ser parte activa de las decisiones sobre

nuestro espacio de trabajo. Nuestras condiciones materiales de vida, el pluriempleo, las múltiples estrategias que desplegamos para lograr llegar a fin de mes, muchas veces nos llevan a no poder dedicarle tiempo a generar espacios colectivos donde analizar qué está pasando en la universidad, cómo nos organizamos para las luchas que tenemos por delante. Si la reforma universitaria que soñaron los estudiantes en 1918 incluía democratizar el acceso al conocimiento y a la toma de decisiones, el cogobierno actual no alcanza. No podemos conformarnos con la actual gestión de lo existente que está signada por la iniciativa de los sectores empresarios para convertir a la universidad en un sector rentable y que responda a sus intereses. Necesitamos revolucionar desde nuestras prácticas pedagógicas hasta los propios espacios de organización. Necesitamos ir por los dolores que nos quedan (como decía el manifiesto liminar de 1918), apostar a democratizar nuestro espacio de trabajo para construir el poder necesario para revertir la ofensiva. Para eso es indispensable la defensa de nuestra herramienta gremial, que se construya desde una perspectiva de independencia de clase y que crezca desde el trabajo de base.

El gobierno de Milei, desde que asumió, ubicó como blanco de ataque a las universidades. Intentó presentar como una dilapidación de recursos el presupuesto universitario, envió auditorías, cuestionó el trabajo de investigación, generó un canal de denuncias para evitar supuestos adoctrinamientos. Sin embargo, pese a toda esta batería de ataques, no ha logrado romper el apoyo social con el que cuenta la universidad pública en nuestro país. El desafío entonces que se nos presenta es cómo defender la educación superior al mismo tiempo que buscamos construir su carácter popular, abierta y en diálogo con las luchas sociales, democrática, participativa, que investigue y produzca conocimiento para transformar la sociedad de raíz. Necesitamos luchar contra el recorte y la asfixia presupuestaria pero al mismo tiempo colectivizar las decisiones sobre los recursos en la universidad, necesitamos evitar el vaciamiento que sirve luego para legitimar la mercantilización del conocimiento al mismo tiempo que llenar de debate de ideas nuestras aulas en conjunto con los movimientos que luchan contra los despidos, contra el extractivismo, contra las violencias patriarcales, necesitamos impedir el cada vez más profundo deterioro salarial al mismo tiempo que cuestionamos las lógicas de disciplinamiento académico actualmente existentes. En

definitiva, se trata de recuperar nuestra capacidad colectiva para organizar nuestro proceso de trabajo, construir nuestro propio poder, desde nuestros espacios gremiales, desde nuestras herramientas organizativas.

Contamos con nuestras armas, las armas de la crítica, de la insubordinación y la desobediencia a aceptar el estado actual de cosas. Como nos enseñaron les estudiantes cordobeses, *si se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de una orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección.*²

Referencias bibliográficas

- Llomovate, S. Y Wischnevsky, J. (1997). Condiciones laborales de los docentes universitarios en los 90. Algunos resultados de investigación. Revista Praxis Educativa N° 1. pp. 15-26
- Hobert R. (2013). Comprendiendo y explicando el clientelismo académico en la Universidad de Buenos Aires (2004-2012). X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. pp 6.

2 Manifiesto Liminar de La Federación Universitaria de Córdoba, 1918.



Autofagia e infantilización en la Universidad contemporánea

Renán Vega Cantor*

Desde hace varias décadas la universidad pública soporta una andanada neoliberal, cuya finalidad ha sido convertirla en un negocio rentable al servicio del capital académico. Para hacer posible ese objetivo, el neoliberalismo ha recurrido a diversos procedimientos, entre los cuales el más evidente ha sido el ataque desde afuera y por arriba. Con eso se hace alusión a la fórmula “clásica” que ya se ensayó desde los tiempos de Pinochet en Chile, consistente en imponer por la fuerza los intereses del capital y para hacerlo posible se recurrió a la represión, la destrucción de sindicatos de profesores y de organizaciones de estudiantes, a la censura, a la quema de libros, al asesinato y desaparición de los líderes docentes y estudiantiles, en suma, a la destrucción del tejido social crítico que pudiera existir y a la implantación del control militar y paramilitar en los campus universitarios.

Esta premisa, la Doctrina del Shock, fue la base de la imposición de las políticas neoliberales en materia de educación, entre las cuales figuran la privatización, la desfinanciación planificada, la mercantilización, la evaluación de resultados, la maximización de ganancias, la gestión privada de índole empresarial, la precarización laboral y el predominio de un lenguaje economicista (rentabilidad, eficiencia, eficacia, calidad, excelencia, competencias...).

* Historiador. Ex Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de América Latina.

Esto es de sobra conocido y estudiado en diversos lugares del mundo, pero lo que es menos referido concierne a la imposición del *neoliberalismo desde adentro y desde abajo*. Esta fase en la que nos encontramos desde hace unos pocos años puede denominarse la era de la edufagia de la universidad. Lo significativo estriba en que pocos catalogan esta nueva fase como parte del neoliberalismo y más bien lo conciben como un momento pretendidamente emancipador. En concreto, lo *políticamente correcto* y la *ideología woke* suelen ser presentados como grandes conquistas democráticas, inscritas en un pretendido proyecto progresista.

En contraposición, sostenemos que esta última fase del neoliberalismo educativo es tan perversa como la anterior –que permanece en el trasfondo de la lógica educativa– con el agravante de que los agentes educativos (estudiantes, profesores, trabajadores y directivos) han hecho suyo el neoliberalismo (encubierto con nuevos sofismas), con lo cual se está destruyendo desde dentro y desde abajo a la universidad.

Una crítica anticapitalista a lo que sucede en la universidad es necesaria y debe diferenciarse de la crítica que desde la derecha y de posturas procapitalistas se realiza a lo políticamente correcto y a la ideología woke en particular¹. Debe señalarse que ese tipo de crítica desde la derecha es frecuente, y pretende denunciar, lo cual no es cierto, que lo woke está cargado de marxismo encubierto. Esa es una postura ideológica interesada, porque confunde las perspectivas de las izquierdas de hoy, muchas de las cuales están impregnados de lo woke –e incluso han recibido apoyo financiero e institucional para sus campañas en los campus universitarios por parte de la agónica USAID– que se denominan progresistas y que han abandonado la tradición de Marx y cualquier filón anticapitalista.

1 Entre algunas de las críticas hechas desde una defensa abierta o algo matizada del capitalismo y de sus pretendidas libertades se encuentran: Axel Kaiser, *La neoinquisición. Persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI*, Ariel, Bogotá, 2020; Douglas Murray, *La masa enfurecida. Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura*, Península, Barcelona, 2022; Alessia Putin Ghidini, *Cancelación. Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político*, Almuzara, Córdoba [España], 2024. Entre algunas críticas a lo políticamente correcto y a lo woke desde la izquierda están: Frank Furedi, *Qué le está pasando a la universidad. Un análisis sociológico de la infantilización*, Narcea Ediciones, Madrid, 2018; Susan Neiman, *Izquierda no es woke*, Debate, Bogotá, 2024; José Errasti y Marino Pérez Álvarez, *Nadie nace en un cuerpo equivocado. Éxito y miseria de la identidad de género*, Deusto, Barcelona, 2022. En estas obras nos hemos apoyado para escribir este artículo.

Autofagia

Desde hace algunos años en diversas disciplinas críticas se constata que el capitalismo vive una fase de autodestrucción y rebasamiento de los límites que ponen en peligro no solo su supervivencia sino la de la humanidad. Para estudiar esa metamorfosis se han acuñado términos como Sociedad autófaga, capitalismo caníbal y etnofagia.

Sociedad autófaga es un concepto crítico que recalca las diversas formas en que el capitalismo se autodestruye debido a su desmesura inherente, a su carácter voraz e insaciable, con su sed desmedida de acumulación, con el arrasamiento de lo que encuentra a su paso. Y todo esto no es atenuado con la ciencia y la tecnología, sino que antes, por el contrario, estas forman parte de las fuerzas productivas-destructivas que siembran hambre, muerte, caos y desolación por doquier².

En la misma dirección, Nancy Frazer habla del *capitalismo caníbal*, para recalcar el carácter destructor y autodestructor del capitalismo, que arrasa con la naturaleza y con aquellos sectores sociales que permiten la producción y reproducción del capitalismo³.

Como parte de esa lógica caníbal, el capitalismo en su expansión mundial promueve el culto a la diferencia y a las identidades fragmentadas e individualizadas con poco sustento colectivo. Y aquí adquiere sentido la noción de *etnofagia*, entendida como una fuerza que exalta discursivamente la diferencia con el fin de engullir a lo comunitario y devorar al que es distinto, pero ya no solo con las acciones brutales (genocidio y etnocidio, que tampoco son del pasado ni han desaparecido como queda claro en el caso de Palestina) sino mediante el impulso a sutiles fuerzas disolventes desde dentro y desde abajo. La nueva estrategia es más pertinaz y potente en la misma medida en que busca socavar la unidad comunal desde adentro, poniendo más activamente en juego las fuerzas individualistas del mercado y utilizando pautas y mecanismos de atracción y seducción que excluyen (o reducen al mínimo necesario) los brutales o burdos medios de otras épocas⁴.

2 Anselm Jappe, *La sociedad autófaga, Capitalismo, desmesura y autodestrucción*, Pepitas de Calabaza, La Rioja, 2020.

3 Nancy Frazer, *Capitalismo caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en peligro su propia existencia*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2023.

4 Héctor Díaz Polanco, *Etnofagia y multiculturalismo*, Disponible en: https://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=1020, octubre 17 de 2006. (Énfasis nuestro).

Ahora bien, la etnofagia no se circunscribe a un aspecto restringido del dominio del capitalismo y de las estructuras estatales, sino que ahora está relacionado con los más diversos ámbitos de la sociedad, entre los que vale incluir a la universidad. Es un dispositivo clave de la dominación capitalista e imperialista en esta fase neoliberal, que no se reduce a actuar dentro de los límites de un estado-nación, siendo por el contrario un proceso mundial.

Estas categorías resultan útiles para analizar lo que ahora acontece en la universidad del capitalismo realmente existente, teniendo en cuenta que la autofagia, la etnofagia y el carácter caníbal del capitalismo se evidencian en las diversas esferas de la sociedad y en la relación con la naturaleza. La educación no está al margen de dicho proceso e incluso se convierte en un ámbito estratégico para difuminar la autofagia por gran parte del tejido social, en algo que podríamos llamar *edufagia*. Esta actúa de manera similar a la etnofagia, puesto que con mecanismos más sutiles y, en apariencia, progresistas, se exalta la diversidad hasta niveles micros, de forma tal que desde dentro se vaya minando la universidad y ese proyecto se presenta como un gran avance democratizador, al reconocer la diversidad cultural que florece en la vida universitaria. El reconocimiento demagógico de la diversidad es una estrategia de sometimiento, a partir de la división y la fragmentación y está inscrita en los antivalores del neoliberalismo, el egoísmo narcisista, el individualismo, la competencia y el darwinismo pedagógico, que exalta la supervivencia de los más aptos y el triunfo de los exitosos y ganadores en el mercado de la diversidad.

La edufagia se presenta bajo la forma de lo políticamente correcto y, en los años más recientes, de la ideología woke. Ahora mismo, los dos procesos terminan siendo uno solo, expresado en el predominio indiscutible de lo woke, proveniente directamente del sistema universitario de Estados Unidos y en menor medida de Inglaterra.

El término woke (despierto en inglés) surgió en el seno de la comunidad afro estadounidense a finales de la década de 1930, para enfrentar el racismo. Fue un término anclado en las luchas de la comunidad negra de Estados Unidos con un claro sentido de dignificación y solo hasta mediados de la década de 2010 se convirtió en un término de más amplio espectro, al ser asumido por grupos identitarios, de género y LGTB+, y comenzó a formar parte de una nueva ortodoxia, excluyente, intolerante

y censora. Analizamos algunos de los elementos de la ideología woke que se imponen en las universidades.

Tribalismo

Un elemento distintivo de las izquierdas mundiales hasta hace poco tiempo era su reivindicación del universalismo y del internacionalismo. En esa perspectiva, se apoyaban, sin distinción de fronteras, las luchas que las clases subalternas libraban en cualquier lugar del planeta. A esa lucha la unían las convicciones y no la sangre, al recalcar que, más allá de diferencias de tiempo y espacio, existe una conexión múltiple, motivada por una sed de igualdad, justicia y libertad que no tiene límites y mucho menos que estén determinados por los orígenes tribales, el género o la raza. Esa concepción universalista e internacionalista nutrió las luchas mundiales en diversos espacios nacionales desde el siglo XIX hasta la desaparición de la URSS.

Luego se ha impuesto la concepción posmoderna del repliegue identitario, que afirma que las reivindicaciones deben ser parciales, aisladas y fragmentarias, oscureciendo la existencia de una realidad estructural (el capitalismo), a pesar de que sigue siendo el fundamento de las diversas formas de dominación y opresión, contra la que según esos posmodernos no vale luchar y la cual se acepta pasivamente. Esto supone que cualquier grupo que reclame el derecho a su identidad, al margen del resto de la sociedad, tendría un privilegio especial que lo hace, por sí mismo y en sí mismo, merecedor del reconocimiento social. Esto ha dado pie a un proyecto tribalista que es uno de los componentes centrales de lo woke.

En este contexto adquieren fuerza las reivindicaciones de género y raza, y no es porque estas no sean demandas legítimas de importantes sectores de la sociedad, históricamente excluidas y marginadas. El problema es que las luchas de mujeres, homosexuales, transexuales y grupos racialmente subordinados se esencializan en el proyecto woke y se conciben como realidades puras y cerradas. Al respecto, resulta ilustrativo constatar la evolución (mejor, involución) de la categoría de género que, de ser un aporte fundamental del feminismo de clase, terminó siendo un vocablo tan amplio y etéreo que involucra los más diversos asuntos de identidad restringida y expresa una fragmentación extrema y forzada de la vida real. Es la *diferencia* llevada al extremo neoliberal,

del individualismo egoísta y narcisista en que se predica que se debe ser diferente como tú, especial como lo eres tú y único como tú.

De allí se deriva ese disparate sobre la “libre autodeterminación de la identidad de género” que recorre los campus universitarios y muchos consultorios médicos. Con eso se sostiene que el sexo no existe, es una simple opción que se le impone a los niños desde la cuna, y que frecuentemente se nace con el sexo equivocado, y este puede ser cambiado según la ocurrencia de cada cual, con el beneplácito de padres de familia, educadores y directivos académicos y con la participación mercantil de un sistema médico en búsqueda de nuevos nichos de mercado y de ganancias⁵.

La noción de género se ha degradado de tal forma que en este momento existen más de 4000 géneros, entre otros las de las personas que se creen perros o gatos y cuyos miembros y familiares demandan que se les trate como tales. En Estados Unidos, por ejemplo, la madre de un joven que se declaró gato exigió que fuera atendido por un veterinario, dado su identificación con un tipo de animal, que lo llevaba a reclamarse un miembro más de los mininos⁶.

El culto a lo identitario ha conducido a que, en aras de una reivindicación legítima como lo es incluir en los relatos históricos a los sectores siempre marginados y excluidos (población afrodescendiente negra, mujeres, gais, lesbianas...) se llegué a plantear que solo los sujetos pertenecientes a cada uno de esos sectores están autorizados para escribir su historia, porque estarían dotados de una esencia superior y privilegiada que los sectores externos no tienen., como si el pasado no fuera un país extraño, al que cualquiera ser humano puede acceder si lo quisiera. Así las cosas, un “blanco” no puede escribir sobre la esclavitud africana, ni un varón podría indagar en la historia de las mujeres. Esto genera un tipo de historia restringida, solamente adecuada para un sector particular, pero carente de cualquier perspectiva universal, que es en última instancia uno de los rasgos centrales del conocimiento histórico. Esto quiere decir que, para comprender las particularidades e identidades parciales, deben inscribirse en el marco más amplio de lo general, atinente a una sociedad determinada.

5 J. Errasti y M. Pérez Álvarez, *op. cit.*, p. 94.

6 A. Putin Ghidini, *op. cit.*, p. 231.

Victimismo

Lo woke pretende ser una reivindicación de las víctimas lo que supone que se lee la historia y el mundo contemporáneo no a partir de la agenda de lucha de sujetos de carne y hueso, con sus sueños, aspiraciones y esperanzas, en la que había conciencia y proyecto, sino a partir del sufrimiento de lo que se denomina “víctimas”. Después de la II Guerra Mundial emergió la noción de víctima, lo cual tenía el objetivo loable de reivindicar a quienes habían padecido la esclavitud, los campos de concentración, la limpieza étnica, la brutalidad colonialista e imperialista, entre otros aspectos relevantes en la historia del capital. En ese momento el término víctima no era un elogio, era un estigma, y por eso difícilmente alguien lo reclamaba ya que se recalcaba el espíritu de lucha, de sujetos activos, que soportaban la persecución por su compromiso y por enfrentar y resistir a la opresión, la discriminación y la explotación.

Eso parece ser de un tiempo lejano, porque en estos momentos se impuso el culto a la víctima y se enfatiza en la lógica del padecimiento. Entre más se sufre y se exhibe ese sufrimiento más reconocimiento se alcanza y más dadas y concesiones pueden obtenerse de los que se autocalifican a sí mismos de “víctimas”. El victimismo es un negocio, otro nicho de mercado del capital, en el cual la exhibición del dolor es directamente proporcional al éxito alcanzado por ciertos individuos. Así, en Estados Unidos la inclusión por parte de universidades y empresas de la discriminación racial de la población negra supone un aumento exponencial de las ganancias y de la constitución de un nuevo y lucrativo negocio de millones de dólares, todo a nombre de la inclusión y del reconocimiento de las víctimas⁷. Esto es pura demagogia, porque los empresarios que eso promueven no están interesados en los millones de pobladores negros que soportan opresión, discriminación y explotación. Lo que se impulsa en forma directa es a las “víctimas exitosas” de manera individual, y máxime si su imagen victimizada produce fabulosos dividendos, como muestra del carácter incluyente y pretendidamente democratizador del capitalismo woke.

Alcanzar el éxito individual, a nombre del dolor y del trauma, es neoliberalismo de pura cepa y es políticamente desmovilizador, porque el que se dice “víctima” quiere que a él le arreglen la situación y obten-

7 A. Kaizer, *op. cit.*, pp. 65 y ss.

ga beneficios, desligándose de cualquier lucha colectiva. Es una postura procapitalista, en la medida en que esencializar a un individuo o a un grupo particular, y no como sujetos activos sino como entes pasivos, conduce a una permanente conmiseración, porque la víctima no genera compasión, sino lástima. Emerge un ansia de reconocimiento, propio por demás del repliegue identitario, con las consecuencias políticas que ello genera: “A la pregunta ¿qué hacer?”, que ha dominado la política moderna ha sucedido un quejumbroso ‘¿quién soy?’”⁸.

La universidad es el escenario privilegiado de las “olimpiadas del victimismo”, donde se rinde culto y se reverencia a las “víctimas”, que son todos aquellos que se autoproclamen con tal apelativo. Se sostiene que la víctima no se equivoca nunca y es la portadora de la verdad, sin importar si hay evidencias o no. Esto ha llevado que las universidades estén repletas de “ofendidos” que dicen sufrir por cualquier cosa: aquellos a los que un profesor no les puede alzar la voz porque los está violentando; otros que forma parte de algún grupo identitario y se sienten agredidos cuando se cuestiona algún aspecto de esa identidad, como por ejemplo, si los bebedores de Coca-Cola o consumidores de comida basura forman un nuevo género, y si se critica a la “chispa de la muerte” o a McDonald’s consideran que se les ataca emocionalmente por cualquier afirmación que cuestione sus fibras identitarias más sensibles; están los que se sienten agredidos y victimizados por determinados libros y escritos, a los que censuran porque les generan dolor y sufrimiento, y se niegan a asistir a un curso sobre la esclavitud, porque sienten que allí se remueven traumas históricos de vieja data, que no pueden soportar; están los que no son capaces de sostener ningún debate ni controversia porque eso implica ser maltratados, puesto que el desacuerdo ya no existe, ha sido sustituido por el daño y las microagresiones.

Este victimismo generalizado encubre los verdaderos problemas de acoso y violencia que soportan diferentes sectores de la universidad, porque ahora todo es un espacio asolado por una quejadera generalizada, lo cual tiene repercusiones al psicologizar todas las acciones humanas y judicializarlas con protocolos burocráticos. Como consecuencia, cualquier persona del mundo universitario es susceptible de soportar persecuciones y procesos disciplinarios por trivialidades, tales como pre-

8 Daniel Giglioni, *Crítica de la víctima*, Herder, Barcelona, 2020, p. 94.



guntarle a un estudiante si es de tal región o cuál es su origen étnico o geográfico, porque eso se consideran terribles ofensas, que causan dolor y traumatizan...

En las universidades se ha impuesto la lógica victimista, que promueven los directivos académicos y sectores del profesorado, lo cual conduce a la proliferación de códigos de conductas, a censuras y autocensuras, a la imposición de un lenguaje aséptico y pretendidamente neutro –entendido como aquel que no debe ofender a nadie. Este sí que es el triunfo del capitalismo con su énfasis en el individualismo absoluto, dado que el yo –cada estudiante aislado– es el centro del mundo con sus problemas y fragilidades⁹.

Cancelación

Uno de los elementos más destructivos y dañinos del método woke es la política de la cancelación, por lo que se entiende que una persona debe ser condenada de manera permanente por cualquier falta que haya cometido, hoy o ayer, y que ponga en cuestión la corrección política. Y no estamos hablando de grandes delitos, por los que es apenas obvio deberían ser juzgados y condenados si se comprueba que son culpables los agentes del mundo universitario, incluyendo a los profesores. No, lo que ahora se consideran delitos graves están referidos a cualquier palabra o acción que ofenda a alguien y quien se siente agredido denuncie a tiempo, como parte de la “cultura de la delación” que se ha impuesto en las universidades.

Esto se sustenta en una lógica binaria, entre buenos y malos, que se convierte en el rasero para medir lo que es aceptable y lo qué no es.

9 F. Furedi, *op. cit.*, p. 14.

Quien ha cometido un error deberá pagarlo por el resto de su vida y debe ser cancelado. Además, vulnerando elementos básicos del derecho liberal, se da el caso que cuando una persona pague penalmente por una falta, eso no se considera suficiente porque lo woke sostiene que la culpa es eterna y la pena no tiene límites temporales. Esto implica que los cancelados deben purgar una pena eterna, lo cual equivale a la muerte moral, intelectual, política y cultural. Quien sea cancelado deberá desaparecer por completo de la vida pública y siempre se le recordarán sus faltas, reales o imaginarias, y para hacer más opresiva y omnipresente la cancelación las redes (anti)sociales del odio se encargan de atizar, difundir y revivir, cada vez que sea necesario, la persecución de los nuevos herejes, y eso genera verdaderos linchamientos virtuales, algo fácil porque esas redes son el refugio de los cobardes e imbéciles.

La cancelación tiene otra forma perversa de censura y revisionismo histórico, en la medida en que se aplican a personajes y sucesos de otras épocas, borrando cualquier contexto temporal, los criterios de corrección política hoy imperantes. Nos encontramos ante casos tragicómicos de censuras y prohibiciones de autores clásicos de todos los tiempos, por ser considerados esclavistas, sexistas, racistas, misóginos, de lo que no se libran Platón, Aristóteles, Shakespeare... Allí se incluyen, lo cual parecería pintoresco, hasta los cuentos de hadas. Al respecto, baste mencionar que en ciertos círculos académicos de Inglaterra se ha prohibido la *Bella durmiente*, porque, según una lectura estrecha de género, allí se fomenta la violencia sexual y el machismo puesto que la protagonista, que dormía placida y eternamente, es despertada por un intruso que la besa sin su consentimiento¹⁰.

Existe una coincidencia entre la cancelación woke de la literatura que no es correcta políticamente y la censura conservadora de los libros. Es bueno recordar que en escuelas de Estados Unidos se prohíben e incluso se queman libros, porque no se avienen con la ideología mojigata de los padres de familia, por lo general conservadores y retrógrados. Si sus creencias (como las que figuran en la Biblia) no aparece en los libros es porque estos textos son diabólicos. En este caso, lo woke revela su carácter profundamente conservador porque se identifican plenamente con la extrema derecha cristiana en la censura y la prohibición de “literatura

10 A. Kaiser, *op. cit.*, p. 109.

peligrosa”, para retirar del escenario público a aquellos autores incómodos, que no deben ser leídos por las tribus identitarias.

Se llega al punto que para, purificar la bibliografía, en ciertas universidades se ha inventado un novedoso cargo burocrático, “los lectores de sensibilidad”, esto es, “expertos” en asesoría lingüística y gramatical para que cuando los autores escriban tenga en cuenta los efectos que sus dichos pueden tener en las diversas tribus de víctimas¹¹.

Una gran parte de escritores, pensadores, artistas, políticos, revolucionarios... hoy por hoy son cancelados, simplemente porque su vida y acciones no se corresponden con los cánones de seudomoralidad que se han impuesto en los campus universitarios, como si fueran válidos en sí mismos y tuvieran tal carácter transhistórico que permitiera juzgar con los mismos parámetros de hoy a los autores y pensadores de otras épocas.

Nuevo lenguaje

La gramática woke, como derivado de sus fuentes originarias (posmodernismo y posestructuralismo), se caracteriza por usar un lenguaje incomprensible, una verdadera tortura para los simples mortales. Sus textos son ilegibles, de esos que resultan porque sus autores no tienen nada que decir o no están seguros de lo que afirman. Se ha impuesto una jerga impenetrable solo para los iniciados de las respectivas tribus, una nueva lengua en la cual todo es neo, post o trans.

Se ha impuesto el lenguaje inclusivo, suponiendo que con el cambio de apelaciones se transforma la realidad y las cabriolas terminológicas, cada vez más enmarañadas, modifican a los sujetos. Solo basta hablar de los, las y les para que todos estén felices y contentos y no haya ofendidos que se sientan excluidos por la imposición de un lenguaje heteropatriarcal. El feminismo queer—con fuerte influencia en la academia de los Estados Unidos e Inglaterra, y con ecos en tierras latinoamericanas—se distingue por la invención de nuevas palabras o el uso de viejas con un nuevo sentido. Un ejemplo es ilustrativo: en lugar de hablar de mujeres debe decirse “personas no poseedoras de próstata”, como lo hizo la revista *Teen Vogue* en 2019¹².

11 *Ibid.*, pp. 112-113.

12 J. Errasti y M. Pérez Álvarez, *op. cit.*, p. 248.

Existe un lenguaje del reemplazo, puesto que ciertos términos son vetados en la academia universitaria y la lista es amplia: en lugar de decir ciego se dice con limitaciones visuales o “personas neuro alternativas en lo visual”, a los inválidos se les debe decir que sufren de diversidad funcional....

Una muestra del “novedoso significado” de ciertos términos aparece en la guía *Sexo más seguro para cuerpos trans*:

Pene: Usamos esta palabra para describir los genitales externos. Los penes vienen en todas las formas y tamaños, y personas de todos los géneros pueden tenerlos.

Orificio delantero: usamos esta palabra para referirnos a los genitales internos, a veces denominados vagina. El orificio delantero puede autolubrificarse, dependiendo de la edad y las hormonas.

Strapless (sin correa): utilizamos esta palabra para describir los genitales de las mujeres que no han sido sometidas a reconstrucción genital (o “cirugía inferior”), a veces denominado pene.

Vagina: utilizamos esta palabra para referirnos a los genitales de las mujeres trans que han sido sometidas a cirugía inferior¹³.

Esta cabriola lingüística pretende cambiar la realidad biológica, producto de la evolución de millones de años de la especie humana: la palabra vagina se reserva a las mujeres trans, mientras que los genitales de las mujeres biológicas se denominan orificio delantero.

Sin duda, la verdadera revolución lingüística que esta transformando a las universidades del capitalismo occidental se presenta en el ámbito de los géneros. Hay una profusión de nuevos géneros para referirse a los rasgos identitarios de cualquier persona no binaria, y la lista aumenta todos los días. Cualquier rasgo, por banal, absurdo e impreciso vale para dar paso a un nuevo género. En 2016 en España se hablaba de la existencia de 251 géneros, entre ellos estos tan pintorescos: “Healgenero: género que trae paz mental a le identificate”; Felinogénero: género correspondiente a gatos. Cuando te sientes peludite y mullide y quieres que te acaricien la barbilla; Aerogénero: género que cambia según la atmosfera, nivel de confort, quién está alrededor, la temperatura, la época del año...”¹⁴.

13 Citado en J. Errasti y M. Pérez Álvarez, *op. cit.*, pp. 248-249.

14 J. Errasti y M. Pérez Álvarez, *op. cit.* p. 250.

Infantilización

El capitalismo realmente existente impulsa la infantilización a escala general, para tener a unos seres humanos dóciles, pasivos, obedientes, dependientes de los artefactos electrónicos y, sobre todo, consumidores compulsivos, que nunca se cuestionan ni tengan en su horizonte mental algún tipo de atisbo crítico sobre el mundo real y mucho menos alguna perspectiva de horizonte colectivo o lucha organizada.

El control desde la primera infancia de los seres humanos busca que cuando estos crezcan en términos físicos sigan siendo los niños consumidores que vienen siendo desde sus primeros años de vida, lo cual ahora se evidencia en el culto al celular. Nada hay más patético que ver a niños manipulando primero el celular que a un juguete y a los padres a su alrededor en la misma postura infantilizada, sin contemplar a los hijos, y rendidos ante el nuevo tótem del que no pueden despegarse ni un minuto. Luego cuando ese niño crece corporalmente sigue siendo mentalmente niño y piensa que esa va a ser su condición permanente durante toda la vida, dado que el neoliberalismo además exalta la falacia de que el mundo pertenece a los adolescentes, y quienes no estén en esa condición son seres desechables.

La infantilización se expresa en la música, en el cine (con la exaltación de los superhéroes y la imposición de los dibujos animados como forma preferida de esparcimiento y divulgación) en la información que circula a través de los artefactos microelectrónicos, en el lenguaje-bebe que usa la gente adulta y que replica el que circula a través de las redes antisociales, en el deporte, en la educación, en las costumbres y en la forma de comer y vestir.

La infancia –esencial en la vida de los seres humanos, pero que es una etapa limitada en el tiempo que da paso a otras fases de la vida– es el modelo que el capitalismo busca prolongar para que la gente conciba el ahora como perpetuo e insuperable presente, que busque divertirse como si no hubiera mañana y deba comprar en forma compulsiva. Ya no existe responsabilidad, compromiso a largo plazo, ni medida, lo cual impide afrontar los grandes retos de nuestro tiempo, como la desigualdad, la explotación, la opresión, la injusticia, las guerras, el trastorno climático...

La infantilización de la sociedad implica que los adultos sean tratados y considerados como niños, generando un ciclo de dependencia tal

que aquellos no sepan qué hacer y siempre estén condicionados por lo que les digan los padres, puesto que el paternalismo es la otra cara de la infantilización, aunque con la paradoja que el papel de padres no lo asuman ellos sino el celular. Lo que caracteriza a la gente infantilizada en el capitalismo es el narcisismo que lleva a que cada uno se considere el centro del mundo, en torno al cual deben girar los demás, lo que produce un individualismo ególatra e irresponsable. Se pretende permanecer en la edad infantil porque se supone que allí todo es fácil y sencillo, no existe autosuficiencia, y no deben afrontarse los retos de la edad adulta, con todos los riesgos e incertidumbre de la vida en el capitalismo.

Mencionemos algunos de los componentes de la infantilización de la universidad en los tiempos actuales.

Reivindicación exclusiva del yo y de la propia identidad

Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que la llegada de los adolescentes y jóvenes a la universidad significaba un paso trascendental en la vida de quienes lograban acceder a los estudios superiores. Este era un salto hacia la mayoría de edad, en el sentido kantiano de la palabra, fundamental para asumir el paso a la madurez y afrontar los retos de la vida con autonomía y responsabilidad. Esa conducta individual estaba dada por entender la importancia de los demás, forjar intereses generacionales comunes, con ideales compartidos con otro grupo de estudiantes, de acuerdo con el origen y pertenencia de clase.

Eso ha cambiado en forma drástica y ahora nos encontramos con que la universidad es otra fase infantil que replica y reproduce las características de la educación primaria y secundaria, pero ahora con adolescentes y jóvenes. Estos cargan tras de sí el peso de la formación neoliberal de la personalidad, con un acendrado individualismo y culto al consumo y prisioneros de las lógicas darwinianas de la competencia y la supervivencia de los millonarios y los exitosos. Esa carga viene acompañada de una inseguridad absoluta para asumir la nueva fase de la vida, que en teoría debería ser la universidad, a la cual los jóvenes llegan manteniendo y reforzando su estancado comportamiento infantil de no asumir responsabilidad alguna, de necesitar protección, de considerar que los nuevos retos que les plantea la vida son problemas irresolubles e innecesarios, que son asediados por peligros que no puede afrontar sino es por

la intermediación de terceros, en una clara réplica del paternalismo que se preserva y reproduce dentro de las universidades.

La conducta narcisista se refuerza en aras de seguir manteniendo los privilegios de sobreprotección que le brinda esa prolongación de la infancia y el consecuente paternalismo. Para ese individuo narcisista todos los demás son enemigos, de los que debe ser protegido. Y esa protección se la brindan en las universidades de manera directa y explícita las autoridades académicas y administrativas. Esta *centralización del yo* es conservadora y desmovilizadora en términos políticos, porque lo político es esencialmente colectivo e implica la búsqueda del bien común.

Psicologización y judicialización

Como de entrada se piensa a la universidad como un espacio inseguro, repleto de peligros que acechan a los niños grandes que allí ingresan, todo lo que sucede en los campus es examinado a partir de una mirada estrechamente psicológica, médica y judicial. De ahí se desprende la consideración que cualquier palabra o acción es una amenaza y genera traumas en los noveles estudiantes e incluso en muchos profesores. La universidad de hoy está llena de jóvenes traumatizados, que necesitan urgentemente tratamiento psicológico o asistencia médica, por cosas que en la mayor parte de los casos tienen otro origen. Por ejemplo, en las universidades latinoamericanas –cuyas sociedades son terriblemente desiguales– se reproducen las diferencias sociales (empezando por las diferencias de clase) y una parte significativa de los estudiantes tienen problemas de subsistencia, de alimentación, para asumir los costos y gastos que implica ir y estar en una universidad. Eso no es ni mucho menos una cuestión psicológica de base, es un asunto de desigualdad y de clasismo. Obvio que de allí surgen problemas psicológicos y médicos, pero el remedio inicial para “curar la desigualdad” no es psicológico ni mucho menos.

Eso no se considera porque los grandes temas, referidos al carácter impopular y antidemocrático de la universidad, han desaparecido de la agenda política de los estudiantes de hoy, como tendencia dominante, para ser reemplazados por la búsqueda obsesiva de la terapia, de la ayuda psicológica y del apoyo emocional. Los problemas estructurales de la educación superior (privatización, desfinanciación, precarización laboral, antidemocracia, falta

de autonomía, represión estatal...) ya no están en el horizonte de los niños-adultos que habitan los campus. En estos momentos todo son riesgos y traumas que solo pueden afrontarse con tratamiento psicológico y terapias de autoayuda.

No extraña que en el lenguaje de las universidades sobresale la retórica de la vulnerabilidad y se haya establecido un “guión cultural de la vulnerabilidad” en el cual las emociones están en el centro de las preocupaciones. Ya no es importante discernir, comprender, problematizar, asumir las diversas visiones del mundo como una riqueza cognoscitiva cultural y política, sino que todo eso es traumático y debe evitárselo al joven infantilizado, para no ofenderlo. Así nos encontramos con el hecho de que las universidades están repletas de “ofendidos y ofendidas”, por cualquier cosa.

La infantilización coloca a las emociones en el centro de la atención y se convierten en un arma de la guerra cultural contra el presente y el pasado. *Contra el presente*, porque a partir del estado emocional de un estudiante se juzga una situación; si este se ha ofendido quiere decir que el hecho que lo altera es traumático. Puede sentirse afectado por un libro que le ha recomendado un profesor, por un tema planteado en clase en que se cuestiona de manera directa o indirecta algún elemento identitario de su yo y esto resulta agresivo e insoportable. Puede verse agredido por una pregunta elemental (de donde eres, qué haces, cuál es tu nacionalidad y cualquier banalidad de ese estilo) que, según su criterio narcisista y ególatra, ejerce quien le pregunta algo. Puede sentirse interpelado porque alguien (otro estudiante, profesor o directivo) le alce la voz o le haga algún reproche, crítica o sugerencia, porque entiende que, como niño que se sigue considerando, cualquier corrección es inaceptable... Y así hasta el infinito.

Contra el pasado, porque el adulto infantilizado de las universidades de hoy considera que no se deben traer los traumas del ayer al mundo de hoy. Cualquier asunto del conocimiento histórico en el que sea necesario destacar asuntos atinentes a la guerra, la explotación, la opresión, el genocidio o los crímenes ocasiona traumas que deben evitarse. Para qué hablar de genocidios en la historia, a la hora de examinar el genocidio de los palestinos, y reconstruir la destrucción de las comunidades indígenas de toda América (empezando por las de Estados Unidos) si eso supone

que, para quienes tienen algún nexo étnico con grupos desaparecidos violentamente, recordar su propia historia los afecta emocionalmente. Profesor que hable de esos temas traumáticos es un agresor al que debe denunciarse y perseguirse por tener el atrevimiento de vulnerar con hechos del pasado a los de por sí vulnerables jóvenes de hoy.

Es la reivindicación de la ignorancia, porque todo verdadero conocimiento es traumático, genera problemas, lleva a hacer preguntas, a dudar y cuestionar, pero nada de eso es hoy tolerado por la *policía del trauma* que ronda en las universidades, en la cual son copartícipes gran parte de los estudiantes, que andan a la casa de todos los herejes a los que hay que denunciar.

A la terapia psicológica debe agregarse el tratamiento médico derivado, porque gran parte de los traumas de los niños-adultos que pueblan las universidades requieren atención sanitaria especializada, medicamentos y acompañamiento terapéutico de índole física, que se complementa con el de índole espiritual, que brindan los psicólogos del trauma perpetuo que acosa a la población universitaria. Ese es otro nicho de mercado para el capitalismo, en el cual juegan un papel central las terapias e intervenciones médicas de cambio de orientación sexual y sexo, una práctica cada vez más recurrente en ciertas universidades del mundo, entre las que sobresalen las de Estados Unidos, Inglaterra, España...

Al lado de la psicologización y medicalización de la vida universitaria se desarrolla la judicialización, porque es obvio que los niñas grandes deben ser protegidos con leyes, protocolos, normas, sanciones, penas, excomuniones, nuevos tribunales de la inquisición que se han impuesto en la universidad, y la mayoría de los cuales niega las normas elementales del derecho liberal burgués, como son las del derecho a la defensa y a no ser condenados sin juicio previo.

Esas normas lo cubren todo, desde el lenguaje que se emplea, inscrito en el ámbito de la corrección política, los contenidos de los programas que se enseñan, el tono de la voz de los profesores en las clases y cualquier relación entre profesores y estudiantes. Esto destruye un aspecto elemental de la pedagogía para asumir los problemas normales y cotidianos de la vida educativa: que las cuestiones, conflictos, malentendidos y dudas que se generan en una clase deben ser resueltos dentro del aula, sin necesidad de llevarlos fuera de allí, salvo que sean de tal gravedad que desborden ese espacio. Pero no, ahora las cosas se hacen al

revés, y se empieza con acusaciones que se ventilan fuera de los espacios académicos y desde allí se inicia el procedimiento judicial con la apertura de costosos y tortuosos procesos disciplinarios contra profesores, principalmente.

Y esto tiene un agravante woke, pues todo aquel que denuncia es por definición axiomática una *víctima indefensa*, que tiene la razón y es portadora de verdad sin discusión alguna. Es un razonamiento tautológico (la víctima dice la verdad y lo que dice es cierto porque es víctima) que se ha impuesto en los campus y que lleva a que cualquier hecho traumático (muchos de los cuales son malos ratos o momentos desagradables o malentendidos) sea denunciado por parte de quien en adelante se declara víctima e ingresa en la interminable cadena de quejosos y ofendidos, que pueblan hoy las universidades y cuentan con el aval y respaldo de las directivas académicas, situadas en los políticamente correcto¹⁵.

No quiere decir, según lo planteado hasta acá, que en las universidades no se deban perseguir los delitos que allí se cometan, incluyendo el acoso y las violencias sexuales, lo que es una necesidad imperiosa y un deber. Eso debe hacerse con resolución y determinación. Pero lo que sucede, precisamente, es que el discurso de las microagresiones oculta esos problemas reales y lleva a que la judicialización sustituya a cualquier diálogo pedagógico, que se supone debería ser la esencia de cualquier proyecto educativo medianamente serio.

Culto a la seguridad

Como la universidad de nuestro tiempo no está habitada por adultos en mayoría de edad que piensan con cabeza propia, sino por niños-adultos que requieren protección frente a todos los riesgos que los asechan a cada minuto, dentro de los campus se está desarrollando un culto a la seguridad total, algo así como la tolerancia cero del punitivismo jurídico de estirpe estadounidense. Para ello se ha creado la noción de “la universidad como espacio seguro”. La pregunta básica es: ¿Qué se entiende por espacio seguro?, si la vida está llena de inseguridades y el paso de la infancia a la madurez, que se supone se desarrolla en los campus, está repleto de retos e incertidumbres, que forman parte del afianzamiento de

15 F. Furedi, *op. cit.*, p. 15.

esa madurez, de la autonomía, confianza y el aprendizaje riesgoso que eso implica.

La noción de “espacio seguro” que tiende a imponerse en la universidad es aquella que postula que, como en los jardines de infancia, los niños-adultos deben estar completamente seguros y tranquilos que no tendrán ningún trauma ni nada que los afecte o aflija. Si esos jóvenes infantilizados sufren “acoso bibliográfico” por parte de un profesor que los hace leer libros traumáticos [*El Capital, Oteló, Crimen y Castigo, El Siglo de las Luces, La Perla...*] pues ellos ya no deben asistir a las bibliotecas o centros de lectura —si es que todavía quedan en la Universidad de la ignorancia de nuestro tiempo— porque estos han dejado de ser espacios seguros.

Si esos jóvenes infantilizados no pueden soportar una discusión, un debate (términos que en sí mismos generan inseguridad existencial, porque para los ofendidos esas son microagresiones traumáticas) en una cafetería, en una aula de clases, en un teatro... pues hay que clausurar esos espacios para que aquellos se sientan seguros.

Si esos jóvenes infantilizados no pueden soportar una clase con temas sensibles que los afectan emocionalmente (la esclavitud, el genocidio, las guerras...) pues hay que evitar que asistan a esas clases o debe obligarse a los profesores a cambiar la bibliografía y el énfasis temático por asuntos más agradables que suenen bien a los oídos de los traumatizados niños-adultos y solo de esa forma, a punta de control y represión, las aulas de clase pueden ser espacios seguros, lo cual significa el regreso a la universidad medieval.

Una de las consecuencias de la búsqueda insaciable de espacios seguros es la ruptura del tejido universitario y de la comunidad educativa, y es el paso, ese sí seguro e inexorable, hacia la segregación y al apartheid universitarios. Al paso que vamos, pronto se propondrá que las mujeres estén separadas de los hombres y estos de los trans, porque la sola relación entre todos ellos es fuente de inseguridad, con lo que retornaremos a formas conservadoras de educación que se pretendían superadas en las universidades contemporáneas, y que implican el retorno de la “normal de señoritas” (en donde solo haya mujeres estudiantes y profesoras) y de niños-adultos de sexo masculino, cada una por su lado.

Y otro elemento que se desprende de la noción de espacios seguros, que reivindican muchos profesores y estudiantes, es el de la educación

virtual, en el que ya no exista presencialidad y se rompa cualquier nexo directo entre profesores y estudiantes. De esa manera, se fortalece la tendencia neoliberal de privatización y de cierre de campus y su sustitución por computadores, terminales e internet, tendencia que se acentuó durante la reciente pandemia de la Covid-19. Obsérvese como una reivindicación típicamente woke, la de “espacios seguros”, termina mostrando el filo neoliberal y neoconservador del falso progresismo y como tiene una veta procapitalista que conduce a la clausura de los campus, por la vía de formar guetos o implantar la virtualización plena de los espacios educativos, lo cual además es un negocio jugoso para las multinacionales que se lucran de vender cachivaches tecnológicos que son presentados como la garantía de una irreversible “revolución educativa”.

Contra el pensamiento crítico

La infantilización de la universidad forma parte de una cruzada orquestada contra todo pensamiento crítico e independiente, porque se ataca en forma acotada a quienes se nieguen a plegarse a la nueva ortodoxia woke. Esto deriva en ataques, denuncias, censuras, expulsiones y juicios arbitrarios de quienes entran a ser considerados enemigos según la nueva inquisición de estudiantes infantilizados.

Todo pensador crítico, profesor independiente, investigador autónomo que requiere de libertad para expresarse libremente es visto como un obstáculo que impide la consolidación de las pautas de infantilización en la universidad. Se requiere que nadie piense, ni dude, ni cuestione y si alguien lo llegase a hacer debe ser callado, censurado y, sobre todo, cancelado. Esto ha llegado a extremos que en otros tiempos no hubieran sido tolerados, como los que se están estableciendo en universidades de los Estados Unidos, en las cuales se institucionalizan sistemas de denuncia tendientes a evaluar en los profesores las microagresiones¹⁶.

Otras universidades llaman a que se denuncien todos los actos que consideren microagresiones y están formando “equipos de reacción a los prejuicios” que tramiten las quejas de los estudiantes. Así, “animar a los miembros de una comunidad académica a denunciarse el uno al otro representa un nuevo nivel en la burocratización de la vida del campus. Al informarte, una vez considerado como la personificación de la co-

16 F. Furedi, *op. cit.*, p. 136.

rupción moral, ahora se le admira por contribuir a la cruzada contra la microagresión”¹⁷.

Este control pseudo moralista destruye el tejido universitario y promueve los comités que intervienen en el desarrollo de las actividades en el aula y en la investigación, para impedir que aquellos que transgredan las normas de infantilización establecidas sean censurados e incluso expulsados, simplemente por expresar sus ideas libremente, impartir cátedras disonantes con lo woke y sugerir lecturas de autores cancelados.

En últimas, a partir de la concepción neoliberal de la soberanía del consumidor se sostiene que los estudiantes tienen todo el derecho para enfrentar todo lo que consideren microagresiones porque son consumidores indignados con las prácticas académicas que se les venden. Si no les gustan, porque les parecen incómodas o los traumatizan, deben proceder como cualquier consumidor soberano y exigir el cambio de aquel (que antes se llamaba profesor) que les ofrece o les vende un producto académico insatisfactorio para su gusto. Para que el procedimiento sea más efectivo y expedito están los comités que dictaminan, en consonancia con el sentir de sus consumidores qué es bueno y qué es malo para sus infantilizados estudiantes.

Los efectos sobre la vida universitaria son perversos y destructivos, ya que se enrarece la libertad de cátedra y de pensamiento, y genera el silencio y la autocensura para no ofender a los niños-adultos que de ninguna manera pueden afrontar debates, discusiones, polémicas –que forma parte consustancial de la vida académica– ya que todo eso es visto como malas acciones, microagresiones que aumentan la vulnerabilidad de los estudiantes en los campus.

Ese es un componente de la edufagia que destruye la universidad desde dentro, mientras los acuciantes problemas de nuestra sociedad reclaman una universidad pública, amplia, democrática que contribuya a solucionarlos. Mientras los profesores y estudiantes se ocupan de traumas ficticios, microagresiones, vulnerabilidades individuales y el narcisismo se convierte en el centro de atención de la vida académica, América Latina y el mundo se deshacen a pedazos, como si esos asuntos cruciales que afronta la humanidad no tuviera que ver con las comunidades universitarias.

17 *Ibid.*, p. 137.

La universidad está dejando de ser un lugar en el que se piensen y se elaboren proyectos alternativos y críticos, que repercutan en el beneficio de las sociedades y de las naciones, para convertirse en un nicho de mercado capitalista, en el cual el neoliberalismo woke está destruyendo los últimos resquicios de democracia que existían. Se impone la dictadura de lo políticamente correcto, el último peldaño en el proceso de destrucción de la universidad, con el agravante que ahora opera desde dentro y desde abajo, agenciado por gran parte de estudiantes, profesores y directivos.

Pese a eso, en muchas universidades existen voces críticas de estudiantes y profesores que no se pliegan a los nuevos dictados del neoliberalismo educativo y perseveran, en medio del aislamiento y la marginación, en su proyecto de construir otro tipo de universidad, no mercantil, ni infantilizada. Allí se encuentra la esperanza para reconstruir una universidad al servicio de la población, donde quepan muchos mundos y saberes y que rompa con la destructora hegemonía de lo políticamente correcto.

En la búsqueda de una universidad a la altura de su tiempo. Reflexiones desde la circunstancia mexicana*

José Guadalupe Gandarilla Salgado**

“El resultado de todo esto no es desaliento, sino esperanza. Ya no nos enfrentamos a la simple decisión (moral) de emprender o no acción política contra un sistema inicuo (cualquiera sea el motivo y el tipo). Si tenemos consciencia, ya no tenemos esa libertad (moralista). Tampoco podemos simplemente esperar la inevitable superación del capitalismo, ya que, en ausencia de un cambio político radical, esa superación implica caos.

La acción y la preparación políticas se convierten así en una forma completamente necesaria de conciencia de clase —ya no una cuestión de argumentos morales y supervivencia a corto plazo—, completamente necesarias para que la humanidad misma pueda hacerse cargo de una posible crisis ecológico-económica y un posible estado de caos sin precedentes en el mundo”.

Anthony Wilden, *Ecología e ideología*

* Este trabajo contó con el apoyo de la UNAM PASPA-DGAPA. Madrid, junio/julio de 2025.

** Investigador Titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha sido profesor en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales, y Filosofía y Letras, de la UNAM, y profesor invitado en otras universidades del extranjero.

Palabras previas

En los primeros meses de despliegue de la operación militar genocida del Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino, en Gaza, y luego también en Cisjordania, para liquidarlo y ocupar la totalidad de sus territorios, el mundo recibía con asombro las noticias terribles sobre la destrucción de bienes culturales, establecimientos de enseñanza básica y universitaria y, por supuesto, el asesinato de docentes, académicos e investigadores; del asombro se pasó a un estado de ánimo más angustiante y estresante cuando con el ataque se registraron eventos que documentaban una ofensiva sistemática de liquidación y limpieza étnica, cuyas víctimas pasaron a ser mujeres, amas de casa, adolescentes, niñas y niños, hasta bebés de brazos, y la destrucción avanzó derribando hospitales, humildes hogares y toda infraestructura. Desde hace meses, ya que las víctimas son decenas de miles, el ejército israelí y sus tecnologías bélicas matan a la gente palestina cuando va a la búsqueda de algo de comida o por un poco de agua (eventos que, en la opinión pública internacional, casi han sido normalizados o adquirieron un estatus de ocurrencia cotidiana, no extraordinaria). Vivimos como humanidad una etapa que nos ha colocado en el umbral de la “tercera guerra mundial”, si no es que ésta ya ha comenzado, y ahora se está dando, entre superpotencias algo más debilitadas (por ahora, entre Estados Unidos y Rusia, con China en una posición más expectante) en episodios, o por partes, y de manera indirecta o descentralizada (haciendo participar en los campos de operaciones a sus aliados o sub aliados, o a cuerpos de milicia irregulares o mercenarios) (Monereo, 2024 y 2025).

Con este tipo de procesos que ponían en evidencia lo endeble de los valores relacionados con la denominada “civilización” occidental y la supuesta forma constitutivamente democrática de los Estados, en los hechos pareciera que hemos arribado a una situación en que prevalece el trato inhumano sobre la otredad y la puesta en condición de subhumanización para contingentes poblacionales amplios, que al emigrar al Norte son presas de la mayor explotación, al emplearse en muchas actividades que otras personas no desean desempeñar (sorprende que, en las grandes metrópolis del mundo, por ejemplo, su ciudadanía suela dispensar un trato de mayor generosidad o atención a sus mascotas o a sus plantas, que a sus semejantes humanos que han llegado a esos sitios con trabajosos procesos de migración, y sufriendo múltiples estafas) o que,

de quedarse en sus territorios, son avasallados, pues en la visión de los grandes emporios multinacionales, usufructuarios del capitalismo moderno colonial, o de los grandes fondos de inversión, personificación del capital ficticio más desarrollado y despiadado, son consideradas (esas gentes y personas del Sur global) una especie de ‘estorbo’ a los planes de capitalización y apropiación de riquezas, recursos, y *royalties* de las ‘verdaderas’ personas corporativas o ficticias, que es la forma (así reconocida jurídicamente por los códigos de ley, en los diferentes países) en que actúan y defienden sus intereses las grandes compañías y los gigantes *holdings* y complejos corporativos.

Tal estado de guerra y las condiciones de inhumanización que conlleva, volvieron a generar episodios de activismo y resistencia al interior de diversos campus educativos, la vida universitaria se reactivó generando paros, marchas y movilizaciones de muy diverso tipo y alcance en muchos lugares del planeta, pero en especial en los campus de las grandes universidades de los Estados Unidos, en protesta por el papel activo o pasivo, de su gobierno, por su omisión o por su involucramiento, en el diseño geopolítico de construcción del Gran Israel y de cómo el Estado sionista fue perpetrando un genocidio a los ojos del mundo entero, en el objetivo de alcanzar una reestructuración de los intereses occidentales sobre la disposición de los recursos de Medio Oriente y de su papel en la confrontación estratégica en contra de China. Movilizaciones estudiantiles, y cartas o manifiestos de docentes e investigador@s se extendían en algunas ciudades de Europa y otras partes del mundo.

Otras universidades también fueron arena de conflicto en situaciones conectadas con la guerra, fuera porque sus respectivos Estados pretenden destinar sus presupuestos públicos para financiar la guerra (en apoyo de Ucrania) y encuentran en el recorte a los gastos educativos y al presupuesto universitario la manera de cuadrar sus finanzas (en España, por ejemplo), o porque los encargados de conducir el Estado son los ejecutores de su disolución, son los infiltrados del fascismo tardío (Toscano, 2025) que vienen a liquidar las funciones del Estado en lo que a seguridad social y servicios públicos corresponde, y asumen como gastos innecesarios o ineficaces *per se* los dirigidos a financiar la ciencia o las labores universitarias (como es el caso con Argentina, y también en los Estados Unidos, retaguardia y vanguardia de las nuevas derechas, y

cuyos mandatarios ven en los *campus* un lugar de batalla para erradicar la “ideología Woke”).

Pero hay otras realidades, como las de un país como México en que, aunque hubo expresiones de compromiso solidario con el pueblo palestino, por sectores (no mayoritarios, desgraciadamente) del estudiantado y de las y los profesores, que más bien plantean una situación de pasmo, como característica que signa al tiempo que atraviesa por la institución universitaria, que no se muestra muy viva como para que en ella encarnen programas de defensa de los más altos valores humanitarios, de inclusión y no sometimiento, y de reflexión de estas grandes problemáticas planetarias ¿Están, nuestras instituciones, respondiendo a la altura de las exigencias que coloca este tiempo tan convulso? No parece haber lugar al entusiasmo cuando tampoco pareciera erigirse en espacio privilegiado para la reflexión de los procesos de transformación y cambio que el país está viviendo. Buena parte de la comunidad de investigación, por ejemplo, se opuso a las propuestas de la Nueva ley general de ciencia, impulsada por la anterior dirección del extinto Conacyt (hoy elevado a secretaría de Estado, SECIHTI), y vió con escepticismo prioridades como las señaladas en los Programas Nacionales Estratégicos ¿Pueden la universidad, y otros centros de investigación, excusarse de discutir los grandes problemas de su país, del mundo y de su propia auto-transformación? Ojalá que, en su descargo, se hubiesen encontrado fuerzas que en su empuje, o autoridades y funcionarios más sensibles y proactivos, que siquiera les constituyeran, a nuestros espacios del saber y del debate más avanzado, en lugar visible de algunas necesarias protestas simbólicas (como, por ejemplo, suspender programas de colaboración universitaria con el Estado de Israel, cuestión que la UNAM no llevó a efecto, pero que, al menos, el Colegio de México sí ejecutó). En ese marco, también resulta necesario reflexionar sobre la universidad, cuando ésta, como esa tarea debiera corresponderle, no parece alzarse como la voz de avanzada en la interpelación crítica (cuando, ciertamente, no se vive en ella una de sus etapas más esperanzadoras), y quizá no pueda ser esperable otra cosa cuando sus autoridades principales están más comprometidas en legitimar la transformación de la universidad en los marcos de las exigencias y rankings que los procesos globales imponen que en tratar de cuestionarlos, o de intervenir soberanamente en ellos, a fin de darles un sello más propio y acorde a nuestras circunstancias.

En medio de este panorama, busquemos, en las siguientes páginas, ver las razones por las que quizá se juega en ello una lucha al seno de la institución universitaria por encaminarla a la recuperación de su sentido y, sospechamos, por sacarla de una cierta situación de letargo.

¿De quién se exige y de dónde se espera un pensamiento crítico?

De entre sus más recientes artículos de opinión que escribe y publica hasta con fruición, y que se agrupan hasta conformar el cuerpo de uno de sus más recientes libros (Žižek, 2025), era esperable que en alguno de esos textos se dejará decir mucho de sí mismo, a un punto en que como tal, en una de sus preocupaciones (¿obsesivas?), el filósofo psicoanalista continuador de Lacan, hasta se auto-describe, “...[e]s un poco como el neurótico compulsivo –como yo– que habla y gesticula todo el tiempo no para conseguir algo, sino porque tiene miedo de que, si se detiene un instante, los demás se den cuenta de la inutilidad de lo que está haciendo y puedan plantear una pregunta realmente importante” (Žižek, 2025: 179). Pero fue en una de las ideas precedentes a ese alumbramiento del yo, en que el crítico esloveno dio al clavo con una cuestión de importancia a la hora de discutir, como sabe hacerlo, una determinada situación, en el marco que lo define todo.

Para el caso que nos ocupa en estas notas, la cuestión medular, caracterizar la actualísima condición del régimen capitalista global, y desde ahí atender otros asuntos relacionados o derivados: el problema del sentido y la exigencia del pensar crítico. El régimen social en cuya cárcel habitamos, y que nos marca la pauta de las prácticas sociales que ejecutamos, es como tal un sistema abierto y adaptativo, en cuya estructura funcionan otro conjunto de sistemas, también abiertos, aunque algunos quisieran verlos y asumirlos como cerrados, entre ellos el sistema universitario, y de entre sus funciones reproductivas destacan las cuestiones del trabajo de investigación y creación de nuevos conocimientos y de la aportación intelectual, si es que en dichos establecimientos bajo los estándares de su funcionamiento, en la situación actual, a eso se concurre, pues con alto grado de realismo Žižek nos advierte:

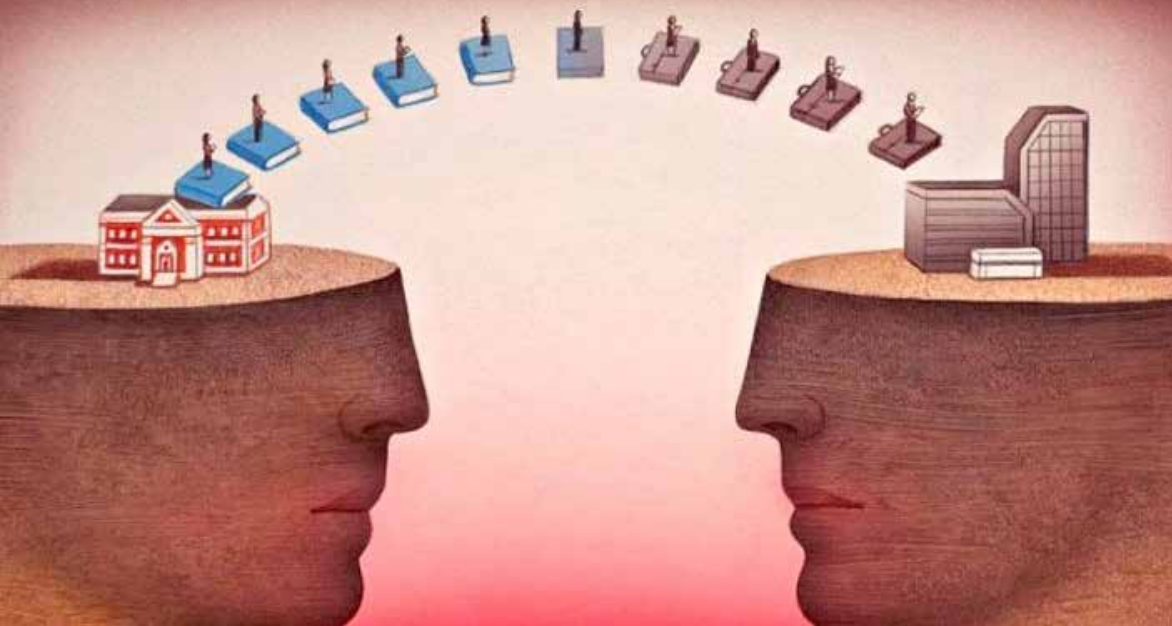
“el capitalismo global actual genera apatía precisamente porque nos exige una hiperactividad permanente, un compromiso constante con su dinámica devastadora: ¿somos conscientes de lo mucho que ha cambiado nuestra vida coti-

diana en las últimas décadas? Así pues, para abrir el camino a un cambio real, primero tenemos que frenar el ritmo enloquecido del cambio continuo. Nunca se nos da un momento de respiro para pensar. La apatía es, pues, la otra cara del dinamismo extremo: las cosas cambian sin cesar para que nada de lo que importa cambie realmente” (Žižek, 2025: 179).

En muchas ocasiones se da por sentado o se asume como una cuestión aceptada o dada por hecho, que la universidad y las partes de ella consagradas a la actividad de investigación científica (en su sentido amplio, que incluye las ciencias antes denominadas duras, o a veces llamadas empíricas,¹ las sociales o humanísticas, y las nuevas ciencias) son las entidades productoras de razonamiento crítico dentro de una sociedad, o unas de las más importantes. En los tiempos más recientes esa es una cuestión que se debate, pues lo que parece que fuera ganando terreno es una concepción en la que a la universidad lo que le compete es generar conocimiento acreditado, suficientemente sustentado en una gestión autovigilada de calificación de las prácticas académicas. Dicho en otros términos, de acordarse que en las universidades lo que se genera es el conocimiento “pertinente”, por llamarlo de algún modo, nada asegura o impele a que éste se rija por su condición de ser o presentarse como crítico, si no, si al caso, por cumplir con las exigencias que legitiman su circulación dentro de los medios de calificación del trabajo académico.

Esa era la situación a la que se habría llegado en un determinado momento del capitalismo, la época de la segunda posguerra, y bajo el discurso económico del keynesianismo, para aquellos países que habrían alcanzado cierta situación de conformación de sus sociedades como pretendidos Estados de bienestar. Bajo ese esquema parecía que se había consolidado una situación en que las actividades científicas amparaban su legitimidad, en plena correspondencia con el proyecto de la sociedad liberal moderna, en una especie de acuerdo o compromiso adquirido por el Estado para la subrogación de esa actividad, destinando una determinada parte de los presupuestos públicos cuyos montos dependían de que tan elevada fuese la consideración de lo que se dio en llamar “el contrato social de la ciencia”, como resultado del cual se asumía que sociedad y gobierno financian; y en quienes reposa la actividad científica entregarán a cambio conocimientos suficientes, para la creación de tecnologías

1 Por ejemplo, en Hinkelammert (2022), en especial, págs. 17-29.



e impulso del desarrollo económico y social. Sin embargo, durante todo lo que lleva rigiendo el modelo neoliberal, y más en los momentos en que éste ha agudizado la situación de crisis, lo que se discute ya no es solo sobre el conocimiento pertinente sino sobre la pertinencia misma de dicho contrato, sobre la necesidad de arribar a “un nuevo contrato social sobre la ciencia”. Y, definitivamente, del perfil que asumiría éste, dependerá el tipo de conocimiento generado que se considere pertinente o no a lo que se defina como el ideal de sociedad a construir o privilegiar: una educación, universidad y ciencias abocadas a las finalidades crematísticas del mercado u otras orientadas a la resolución de las grandes problemáticas de la sociedad, del país de que se trate, más aún cuando estos arrastran una historia de dominación externa imperialista o de “colonialismo interno”. Como quiera que sea, eso revela como muy pobre o insuficientemente comprensivo, pleno, o total, el exclusivo criterio de la autorregulación por los propios científicos de lo producido en su propia esfera. Esto es, que lo producido es pertinente por la esfera de la que deriva y porque es calificado por los criterios que la comunidad (académica) se ha dado. Como si fuera posible que dicha comunidad quedará incólume o permanentemente a salvo de que no se interiorice en ella también la lógica de funcionamiento del orden social dominante (el neoliberalismo) en sus propios mecanismos de autorregulación (competitividad, cuantificación, productivismo, eficientismo, científicismo), que no están exentos de reproducir desigualdades o fomentar la concentración de la

obtención de logros (cuestionando algunas de las muy valoradas “tesis mertonianas”, desde hace mucho tiempo), más aún cuando esos logros o fines parecen también ser dominados por el “neoliberalismo educativo”, y sus bienes u *outputs* tan preciados, ahí producidos, también asumen esa carga de significado, declinándose hacia fines o nichos del lucro privado (haciendo predominar las lógicas de la “ciencia neoliberal”). Esa dificultad o limitación ya era advertida, hace medio siglo, por uno de los teóricos, no suficientemente revalorado, de los sistemas abiertos o adaptativos, y en uno de los pasajes de su único libro traducido al castellano ya nos advertía:

“Como dice Marx tan acertadamente la cuestión de la verdad para la humanidad no es una cuestión teórica, sino práctica. Lo anómalo en el mito de la universidad –el de «una universidad libre en una sociedad libre» que aparece con tanta monotonía en las mociones presentadas al Senado Académico y a otros órganos de decisión parecidos– no es que dicho mito sea manifiestamente falso. Lo anómalo es que esa universidad «abierta» sólo podría existir en una sociedad muy distinta de la nuestra, que no estuviera fundada sobre la explotación. El mito de la «comunidad académica» es un mito del primitivismo puro o del socialismo utópico. En otras palabras, la imagen que tienen de la institución los miembros de la universidad –imagen fuertemente consolidada cuando ocurre algo que pudiera interpretarse como un mordisco dado a la mano «generosa» del gobierno– es la de un sistema cerrado, separado de la organización socioeconómica y política del «entorno» que, por una parte, ejerce un control sobre éste (en sus «inputs») y al que, por otra parte, ayuda la universidad a reproducirse (en su «output») (Wilden, 1979: 25).

Capitalismo, ciencia, universidad

Si trasladamos el tipo de preocupaciones, señaladas en el anterior apartado, a lo que acontece dentro de la organización universitaria, y a la relación que ésta establece con respecto a la sociedad (nación, país), a su ecosistema (conjunto de articulaciones de sentido para la producción de nuevos conocimientos, anteriormente ilustrados en la metáfora de la

triple hélice² y hoy orientados por la figura de la penta hélice³) o al mundo del que hace parte (economía o sistema-mundo, e identificación de la etapa particular o época histórica que da la impronta a dicha totalidad), notaremos que esas tres escalas (nación, ecosistema, horizonte o mundo), plantean una exigencia al trabajo de las y los universitarios que decide o no, que marca u orienta sobre la pertinencia de la institución en cuanto tal. Si la institución universitaria no sabe o no quiere atender esa demanda implícita que esas instancias, cada una moviéndose en su peculiar escala o ritmo, le formulan, interpelan o establecen, se revelará capaz o no de conservar su hegemonía, su pertinencia, y su legítima autonomía para operar las reglas de su funcionamiento.

Antaño solía plantearse un filón de esta discusión de un modo muy esquemático, pues se partía por separar las actividades que preferentemente discurren al seno de la universidad, y se integran en sus cuerpos o divisiones, la científica, la de ciencias sociales, la de la filosofía y humanidades, era un modo de concentración de tres tipos de racionalidades convergentes (racionalidad instrumental, racionalidad ética, racionalidad estética) en un único espacio que la sociedad se habría dado para ello (la universidad), que las ordenaban prioritariamente según lo que de esos cuerpos académicos se esperaba que emergiera, la ciencia, la ideología, la metafísica. Por supuesto, la racionalidad instrumental y la innovación científica terminaron por someter a las demás funciones, o las plegaron a sus criterios acreditadores de sentido.

Hoy, se ha tomado conciencia de que la integración de funciones es más orgánica de lo que antes era aceptado. Y desde que “la ciencia” perdió su inocencia, con el Proyecto Manhattan y la toma de conciencia por Oppenheimer, uno de los científicos líderes en ese conglomerado; y más aún en estos tiempos cuando uno aprecia la exactitud de las curvas (en algo como lo que denomina Israel su “domo de hierro”, el escudo antimisiles) y la precisión hasta cuántica de las velocidades, cambios de dirección de artefactos militares, o la conversión de dispositivos técnicos de comunicación en armas de guerra, para ser detonados sobre vícti-

2 Modelo que describe el conjunto de interacciones entre tres entidades clave en la innovación y el desarrollo económico: universidad, industria y gobierno.

3 Modelo que describe una interacción entre cinco actores clave para la nueva producción científica: la academia, la industria, el gobierno, la sociedad civil y el medio ambiente.



mas humanas precisas, contemplamos, en este tipo de procesos, cómo la ciencia se usa para determinar un diferencial en la valoración de la vida humana (cuánto una víctima de una cierta ciudadanía, estadounidense, israelí o de otros estados poderosos, exige como exterminio de los pobladores de otros estados, sometidos, ¿decenas, cientos, miles, toda la población o etnia a exterminar?), y para decidir la lógica del poder, tal como se sostiene en un artículo reciente:

“El conocimiento nunca está desligado de la realidad: solo existe dentro de una red de relaciones políticas. Ignorarlo es hacerle el juego al poder. Y, para los científicos, negar su responsabilidad es una hipocresía cómoda. No se trata de renunciar a la investigación y los descubrimientos, sino de comprometerse políticamente compartiendo el conocimiento, haciéndolo público. En resumen, oponiéndose a su uso en provecho del poder de unos pocos” (Rovelli, 2025: 32).

Este aspecto de la problemática remite a una consideración inexcusable, la referente a la valoración social, económica, de una determinada actividad dentro de ese espacio social más amplio en el que dicha actividad se lleva a término, esto es, el problema respecto al lugar y función de lo producido en una sociedad, y a los aspectos bajo los que se rige esa sociedad, esto es, la pregunta por los significados, de una parte o del todo en una sociedad. Ese es un tema que ha sido abordado por la parte de las ciencias humanas que se ocupan de la disciplina que estudia los signos o sistemas de signos, esto es, la semiología y dentro de ésta la rama deno-

minada “semiótica” o “semiosis” “histórico-social”. Esta cuestión gira en torno a problemas a veces denominados ontológicos de una sociedad, esto es, toda sociedad es una comunidad política, y al reproducirse lo hace produciendo un código comunicativo (Echeverría, 1998: 153-197), en ese sentido los valores o mercancías son como los signos lingüísticos, artefactos que se validan, esto es, que develan su significado en el acto comunicativo entre emisor y receptor (Sierra, 2020), lo mismo que entre productores y consumidores en una sociedad que deciden, en la esfera de la realización social, si una mercancía o producto del trabajo lanzada al mercado, encuentra su validación o ve interrumpido su ciclo, atraviesa una crisis. El aspecto decisivo se plantea sobre la cuestión de que un orden social en tanto código comunicativo funciona como una cadena de significación, y ésta se rige por ese determinado código al que se pliega, por ejemplo, para el orden social en su conjunto, el dinero como universalización del valor, y la obtención de rendimiento o ganancia como el elemento decisivo de acreditación o validación de toda actividad bajo el capitalismo.

El capitalismo, en ese sentido, es una cadena de significación o sistema abierto, puesto que su validación final, siempre remite a la diferencia entre $D-D'$, esto es, el aumento cuantitativo del capital adelantado, esto es, toda actividad que hace parte de esa esfera más amplia, en su última consideración, el mercado mundial, obedece o se pliega a un código de funcionamiento que busca obtener rendimiento, extraer o crear plusvalor o apropiarse de ganancia; una valoración, entonces, entre lo que entra como *input* y sale como *output*, y como las medidas de sus acopiamientos o puntos de entrada no son iguales a sus acopiamientos o puntos de salida, puesto que sus extremos no son lineales o estacionarios, sino constantemente exigidos por la lógica de acrecentamiento, ese sistema está constantemente exigido de retroalimentación de su entorno, al que no puede sino conducir a un estado de extenuación, por la elemental imposición de la tercera ley de la termodinámica, o principio de entropía. En resumen, el sistema abierto y adaptativo que conocemos como capitalismo (González Casanova, 2004), y que se integra de múltiples sistemas y subsistemas, crea y recrea la vocación de su *hybris* (en tanto pretensión de omnipotencia, o perfección, desenvolviéndose en un marco o en campos, ellos mismos finitos e imperfectos), clama, pues, en su desmesura, por la infinitud, en un entorno (planetario) finito (Hinkelam-

mert, 2022). Las partes o subsistemas que lo integran, al sistema abierto o adaptativo también denominado “capitalismo complejo” (González Casanova, 2008), ahí despliegan sus funciones, e isomórficamente, en sus procesos de retroalimentación o en sus cambios de fase, también lo hacen bajo esa condición constitutiva de crisis, por ello ésta no es sino el desarrollo ampliado de sus contradicciones o el intento de aplazamiento de esas contradicciones, bajo el engaño de que ese aplazamiento de problemas del presente encontrarán soluciones (tecnológicas) en el futuro (Morozov, 2015).

Volviendo, entonces, al tema de la universidad y de ésta como organización para el despliegue del discurso científico, lo que encontramos es el agregado de otra de sus características, ser también la sede o un territorio muy privilegiado de intercambios simbólicos. La universidad no puede prescindir de sus rituales y de sus actos protocolarios, pero tampoco puede limitar a eso sus actividades de reconocimiento por la sociedad. Las universidades, menos en una época como ésta, no pueden defenderse, o asumirse, como expresiones organizativas de sistemas cerrados (de serlo así no generarían conocimiento sino mera información), sino que inscriben sus prácticas en el marco u orden social del que forman parte (dentro de su completa cadena de significación), esto es, la pregunta por su papel o desempeño (de cómo se usa y por quién el conocimiento, lo que decide sobre su verdad, o sobre lo pertinente de lo ahí producido), no puede sino responderse dentro del sistema abierto capitalista, en que se encuentran insertos dichos establecimientos generadores de cultura. Por eso, uno de los más acreditados exponentes de la semiosis histórico-social, no dudó en describir, hace medio siglo, un problema que ya asomaba en el horizonte del trabajo universitario amenazado por su estandarización y formalización, y lo registra en toda su crudeza, en este pasaje que citamos *in extenso*:

“La «unidad de conocimiento» en la universidad está, en general, completamente vacía de significado y esencialmente desprovista de valor. La función que tiene su circulación por la esfera del discurso académico es sencillamente la de mantener la homeostasis de las relaciones en el «establishment» académico. Como habrán notado seguramente todos aquellos que hayan asistido a más de un simposio académico o leído algunas revistas universitarias, el valor de guardar silencio cuando no se tiene nada que decir ha dejado de ser considerado una virtud en el ámbito académico. Alguien sugirió hace unos años que

lo primero que habría que pedirle a alguien que quisiera obtener el Doctorado en Filosofía debería ser el exigirle no publicar nada durante diez años por lo menos. Pero la negativa a «publicar o morir» es impensable en una industria cuyo producto es el «conocimiento». Habría que rechazar las necesidades institucionales del crecimiento por el crecimiento y de la producción por la producción; y entonces sería poco probable la supervivencia de la institución” (Wilden, 1979: 23).

Es posible reformar o reorientar la institución universitaria cuando desmercantilizar exige desmetricalizar

Tomar los filos de las aristas de esta discusión nos lleva a otro terreno del debate: la identificación de las prioridades que entre sus tareas van despuntando de modo más destacado, y que dan el tono o van delineando los cambios en el perfil que la institución universitaria va asumiendo con el tiempo, pero que a veces también la anclan o hasta la petrifican, en un mundo de constantes cambios. Por ello, no es casual que en el campo educativo se dirima parte del conflicto en nuestras sociedades, y que en esas entidades (educativas), en ciertas ocasiones, se muestre en toda su crudeza la naturaleza, forma y profundidad de los conflictos más intensos que azotan a nuestra humanidad. La universidad y otros centros creadores del conocimiento pertinente son una caja de resonancia o enclave social en que se instala, o debiera instalarse, la exigencia del pensar, esto es, donde se activa o debe reactivarse el cuestionamiento sobre el rumbo, la interrogación por el sentido, o dicho en un tono nietzscheano, la pregunta por la “transvaloración” de los valores.

Puede la institución estar a la altura de atender esa exigencia, de darle una salida coherente a ese reclamo, en momentos en que la lógica de la universidad se mueve por finalidades muy estandarizadas, puesto que el paradigma estadounidense de la institución se extiende globalmente, a punta de imponer sus *rankings*, y medidas de rendimiento que al formalizarse le paralizan aunque parezca que avanza permanentemente, cuando lo que estatuye es una situación de ordenamiento que le obliga a un funcionamiento metricalizado, de ciertos indicadores, que le conducen a estados de homeostasis,⁴ que le imposibilitan a sus comunidades operar

4 Según muchas de sus definiciones, la homeostasis, también conocida como homeostasia, es un proceso por el cual un sistema (aquí hemos dicho de evitar caracterizar a la universidad como un sistema cerrado, pero mayoritariamente es interpretada así), especialmente un organismo vivo, mantiene su equilibrio interno a pesar de las fluctua-

saltos o superar inercias institucionales. Lamentablemente las comunidades académicas terminan por acostumbrarse a esa manera (homeostática) de funcionamiento, y se entregan a una obediencia casi celebrativa de esos códigos de rendimiento y hasta de premiación para aquellos que destaquen en esas disciplinas: Publicando donde debe publicarse y de la manera en que hay que hacerlo, sin preocuparse tanto por lo que se ha dicho o escrito, sin preguntarse por la vida efímera de los outputs. El académico, evitando ser irrelevante termina quizá produciendo y recreando un producto de enorme irrelevancia. Funcionarios que se eternizan en ese papel, con lustros o décadas en funciones de dirección o conducción, de tal modo que se han convertido en elites tecno-burocráticas, o en castas doradas que consumen y absorben mucho presupuesto corriente que se le acredita a la institución. Estudiantes que creen ahorrarse el tiempo de pensar buscando en los nuevos dispositivos y en la inteligencia artificial las aplicaciones que les resuelvan las pruebas, los exámenes, la misma escritura. Cuando la situación ha llegado a estos extremos ¿es posible hacer algo? ¿Cuáles son los factores que nos han instalado en estas condiciones que parecen inamovibles?

En su novela no solo más extensa, sino su trabajo más celebrado por la crítica, el escritor estadounidense John Barth describe una de las oleadas de incursión del colono anglo protestante sobre los territorios del Norte de América, que no habían nunca sido plenamente conquistados y colonizados por los españoles, ni suficientemente incluidos en la lógica de reproducción económica de la Nueva España; su historia discurre, entonces, en Maryland, a fines del siglo XVII, territorios de los que se verá surgir el nuevo imperio americano de mediados del siglo XIX en adelante. Pues bien, en su novela, muy al inicio, se describe el carácter del personaje central de esa historia en los siguientes términos, “Ebenezer Cooke, con más ambición que talento y, sin embargo, más talento que prudencia...” (Barth, 2013: 31). Ya en esa actitud, en ese ethos, se encuentra impreso el proceder calculista y de utilidad con que viene cargado el código del nuevo orden social que arraigará en el capitalismo estadounidense, y que va impregnando todo género de actividad, y ni siquiera las instituciones relacionadas con la cultura, la educación y la

ciones externas. Este equilibrio se logra a través de mecanismos de autorregulación que ajustan continuamente las condiciones internas (de la organización) para mantenerlas dentro de un rango aceptable para el entorno en que esté inscripta.

investigación quedarán a salvo de que se irradie, en tiempos más recientes, ese principio que coloniza a las sedes organizativas en que dichas instituciones anclan su producción, haciendo que escuelas, universidades y ministerios del mundo contemporáneo también sean palancas de transmisión del neoliberalismo educativo. De ahí que no resulte excesivo señalar que el *modus operandi* del *homo academicus* en las universidades y en los centros e institutos de investigación se corresponda mucho con ese tipo de sujeto que obra como el personaje de John Barth, y su creatividad la pliega a una idea de producción (cuantitativa) en que destaca y domina, “más ...[la]... ambición que ...[el]... talento”, pero que “sin embargo ... [aun siendo poco el talento, éste suele ser mayor o]... más que la prudencia”. La miseria del proceder productivista del *homo academicus* queda magistralmente descrito en esta breve paráfrasis que obtenemos de la descripción de John Barth. Con esa lógica gobernando el principio de producción (formalizada y eficientista) y publicación (de vida efímera en circuitos muy especializados), ese campo de la producción académica da más curso a la ambición que al talento, y deja poco margen para la prudencia.

En otro ejercicio literario encontramos un argumento semejante, de similar agudeza e ironía. Seguramente, el escritor oaxaqueño Gerardo de la Torre no imaginaba que, en la parte final del segundo de sus cuentos reunidos en el volumen *Viejos lobos de Marx*, nos estaba regalando una extraordinaria alegoría de la actitud que está en la base de aquello en que se ha convertido, en la actualidad, la vida académica y que ha elevado a la competitividad en uno de sus principios supremos, y ha erigido a la obtención de “remuneraciones por méritos” en la principal de las fuerzas ordenadoras. De rebote, con esos mecanismos “de evaluación”, se fortalece el individualismo, y los premios se vuelven un aliciente que como “efecto indeseado”, conllevarán probablemente a una destrucción de las comunidades académicas.

La transición de la forma universitaria que justo estaría en germen en los años en que ese pequeño volumen de De la Torre se publicaba (1980) puede ser sintetizada como la de un salto que aspira a alcanzar *lo mejor* (en cuanto a la calidad de sus productos obtenidos) dirigiéndose, sin embargo, hacia *lo más* (en términos cuantitativos). Las instituciones universitarias vieron instaladas toda una serie de exigencias que jalaron hacia una profunda búsqueda de competitividad, que queda bien

ilustrada en uno de los cuentos de De la Torre, cuando hace decir a uno de sus personajes: “Creo que nunca voy a ser tan buen escritor como Malcolm Lowry, pero te aseguro que voy a ser más borracho” (De la Torre, 1980: 21).

Esperemos que algún lector o lectora encuentre aquí argumentos para reflexionar sobre el papel de la universidad en momentos en que la situación tan problemática que vivimos nos exige esa autorreflexión, y de paso logre sacarlo, o sacarnos, del encierro y del ensimismamiento, porque de lo contrario su rumbo, nuestro rumbo, seguirá siendo el que marque la universidad de papel, la de la métrica y de los patrones de evaluación. Precisamos salir de esa borrachera productivista, donde rige un principio de cálculo individualista, utilitarista, que es la inscripción del código neoliberal en el sujeto que habita y vive la universidad, y que por ello se aleja de su propensión y pretensión intelectual y se suma al apego contabilizador del *homo academicus* y a la parametrización acorde al *comodus magistratus* (el cómodo funcionariado), cuando a lo que debiera comprometerse la comunidad universitaria es a la búsqueda de un modelo en que hoy desmercantilizar nos exige ya desmetricalizar. Esa quizá sea ahora una de las cuestiones universitarias urgentes, al menos en las condiciones del México de nuestros días.

Referencias bibliográficas

- Barth, John. 2013 [1960]. *El plantador de tabaco*. Madrid: Sexto piso.
- De la Torre, Gerardo. 1980. *Viejos lobos de Marx (y otros cuentos)*, Culiacán: UAS, 1980.
- Echeverría, Bolívar. 1998. *Valor de uso y utopía*, México: Siglo XXI editores.
- González Casanova, Pablo. 2004. *Las Nuevas Ciencias y las Humanidades: De la Academia a la Política*, Barcelona: Anthropos – IIS/UNAM – Editorial Complutense.
- González Casanova, Pablo. 2008. “El capitalismo organizado. Entre el orden y el caos”, *Desacatos*, núm. 28, septiembre-diciembre, pp. 165-172.
- Hinkelammert, Franz J. 2022. *Cuando Dios se hace hombre, el ser humano hace la modernidad. Crítica de la razón mítica en la historia occidental*. San José, Costa Rica: UCR, Segunda edición ampliada y revisada.
- Monereo, Manolo. 2024. “Introducción ¿Estamos ante el inicio de una tercera guerra mundial?” en Monereo, Manolo, Carlos Eduardo Martins y Francisco López

Segrera (Coords.). *¿Hacia la Tercera Guerra Mundial?*, Madrid: El viejo topo, 2024, págs. 13-29.

Monereo, Manolo. 2025. “El doloroso parto de un mundo nuevo” en Lynch, Nicolás y Manolo Monereo. *Geopolítica de vida o muerte. Entre el calentamiento global y el invierno nuclear. La humanidad en cuidados intensivos*. Lima, Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática - Latindadd, marzo de 2025.

Morozov, Evgeny. 2015. *La locura del solucionismo tecnológico*. Buenos Aires: Katz editores.

Rovelli, Carlo. 2025. “El mito de la neutralidad de la ciencia”, *Le Monde Diplomatique* (edición española), Año XXXIX, no. 357, julio.

Sierra Caballero, Francisco. 2020. *Marxismo y comunicación. Teoría crítica de la mediación social*. Madrid: Siglo XXI editores.

Toscano, Alberto. 2025. *Fascismo tardío. Raza, capitalismo y las políticas de crisis*. Madrid: Akal.

Wilden, Anthony. 1979 [1972]. *Sistema y estructura: Ensayos sobre comunicación e intercambio*. Madrid: Alianza.

Wilden, Anthony. “Ecology and ideology” (Ecología e ideología) en Idris-Soven, Ahamed, Idris-Soven, Elizabeth y Mary K. Vaughan (Eds.). 1978. *The World as a Company Town. Multinational Corporations and Social. Change* (El mundo como ciudad empresarial. Corporaciones multinacionales y cambio social). The Hague, Paris: Mouton Publishers.

Žižek, Slavoj. 2025. *Demasiado tarde para despertar ¿Qué nos espera cuando no hay futuro?*, Barcelona, Anagrama, 2025, 2ª. Edición.



Universidad pública en la Comunidad de Madrid:

Entre el ajuste, la mercantilización y la resistencia

**Ernesto Arganda Carreras* y
Mariana Relli Ugartamendía****

En la Comunidad de Madrid, la defensa de la universidad pública se ha convertido en un eje de articulación social que trasciende lo estrictamente académico. A diferencia de otros contextos como el argentino, donde la educación pública es un campo de disputa ideológica más explícita, en Madrid todavía existe un consenso social amplio que lleva a la confluencia de distintos perfiles ideológicos en su defensa. Esta legitimidad es una fortaleza, pero también es una responsabilidad: frente al avance privatizador, la lucha por la universidad pública no puede darse por sentada, requiere organización, imaginación y persistencia.

1. Un pantallazo sobre la educación universitaria en España

El sistema universitario español se organiza en un marco de competencias compartidas entre el gobierno central y los de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Universidades del Estado, a través de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), establece el marco normativo común, es decir, las bases del sistema universitario, incluyendo principios de gobernanza, carrera académica, financiación y participa-

* Departamento de Física Teórica, UAM.

** Departamento de Artes y Humanidades, URJC, Madrid.

ción estudiantil. Por su parte, los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas gestionan los presupuestos, autorizan la creación de universidades y regulan aspectos clave como los pagos de matrículas y tasas, los sistemas de becas, entre otras cuestiones, y, para ello, sancionan sus propias leyes.

Desde la implantación del Plan Bolonia, en 2007, España se integró al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que supuso una reestructuración de los estudios en carreras de grado, másteres y doctorados. Este proceso trajo consigo una estandarización de títulos, pero también una creciente presión para adaptar la oferta académica a las demandas del mercado laboral, en detrimento de disciplinas humanísticas y críticas.

El acceso a la universidad pública en España se realiza mediante una nota numérica que combina el promedio de calificaciones del secundario con las notas obtenidas en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Cada mes de junio, al finalizar el curso académico, las personas egresadas del secundario rinden los exámenes que componen la PAU y cuyos resultados definirán las posibilidades de ingreso a las carreras en la universidad pública. Cada carrera tiene una “nota de corte”, calificación mínima exigida para el ingreso, que se recalcula anualmente en función de la demanda y del número de plazas disponibles. Si un estudiante no alcanza la nota necesaria para ingresar a la carrera que desea, podrá elegir otra carrera que exija una nota menor.

Las universidades públicas españolas se sustentan con financiamiento público, pero no son gratuitas. Si bien sus aranceles son menores que los de las instituciones privadas, el alumnado paga por cada materia que cursa y, si no aprueba y debe recurrar, la matrícula se encarece. Las tasas se calculan según la cantidad de créditos (horas lectivas) que tenga cada asignatura y los materiales necesarios para desarrollar las cursadas, siendo más caras las asignaturas que requieren laboratorios, por ejemplo. Las tasas varían según cada Comunidad Autónoma y Madrid se sitúa entre las más caras del país: el precio del crédito en primera matrícula ronda los 18,5 euros, pero puede superar los 89 euros en tercera matrícula, lo que penaliza especialmente a los estudiantes con mayores dificultades (cursar una asignatura de 60 créditos puede costar 1.110 euros).

En cuanto a las condiciones laborales, el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico de Gestión, Administración y

Servicios (PTGAS) sufren en la Comunidad de Madrid una creciente precarización. Las figuras contractuales más vulnerables —como los profesores asociados o sustitutos— representan una parte significativa de la planta docente, con salarios bajos y escasa estabilidad. A esto se suma la externalización de servicios (como la limpieza o los comedores) que deteriora las condiciones laborales puesto que sus trabajadorxs están subcontratados por empresas tercerizadas que, a su vez, son contratadas por las universidades.

En paralelo, los fondos de inversión han encontrado en la educación superior un nicho de negocio. Las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, han autorizado la creación de universidades privadas promovidas por capitales financieros, muchas veces sin una evaluación rigurosa de su calidad académica. Estas instituciones funcionan como expendedoras de títulos y proveedoras de vínculos empresariales, están orientadas al lucro y tienen escasa vinculación con la investigación o el compromiso social.

2. La universidad pública en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid cuenta con seis universidades públicas (UCM, UAM, UC3M, UPM, URJC y UAH¹), doce universidades privadas en funcionamiento y, al menos, cuatro más en proceso de autorización. Esta creciente desproporción entre la oferta pública y privada en los estudios universitarios refleja una política deliberada que promueve el ingreso de inversiones de diversas fuentes en el sector, visto más como un negocio que como un servicio educativo. Al tiempo que se multiplican las instituciones privadas, las universidades públicas no han crecido en número ni aumentado su cantidad de estudiantes. Un informe del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) muestra que, entre 2000 y 2024, ha habido un 120% más de inscripciones en grados del sector privado y un 18% menos en los de la universidad pública, siendo las diferencias relativas en los/as estudiantes de máster aún mayores, con más personas matriculadas en

1 Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos Tercero, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad de Alcalá de Henares.



universidades privadas que en las públicas (CC.OO., *Análisis del sistema universitario de la Comunidad de Madrid*, febrero de 2025).

El ajuste presupuestario ha sido una constante desde la crisis económica de 2008. Según datos del informe del CC.OO., la financiación pública del sistema universitario madrileño está estancada desde hace más de quince años. En 2023, la Comunidad de Madrid destinó 1.122 millones de euros a la educación superior, lo que representa apenas el 0,38% del PIB regional, muy por debajo del 1% recomendado por la LOSU. Este presupuesto no es suficiente para costear los gastos básicos de funcionamiento y, por eso, las universidades públicas se ven obligadas a buscar recursos alternativos mediante convenios con empresas privadas, patrocinadores o venta de servicios. Un ejemplo de ello son los convenios entre la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con el Banco Santander, que han generado tensiones con sectores estudiantiles que denuncian la financiación de proyectos contaminantes o vinculados a la industria armamentística.

La infrafinanciación también impacta en la oferta académica. Carreras como las Licenciaturas en Filosofía, Historia del Arte o Filología enfrentan recortes de grupos, reducción de cargos docentes y amenazas de cierre por no ser “rentables”, puesto que el número de estudiantes no es lo suficientemente significativo como para generar ingresos interesantes, a la vista de quienes evalúan solamente la dimensión económica de la educación superior. Esta lógica mercantil pone en riesgo la diversidad

del conocimiento y el papel crítico de la universidad en la construcción de todo tipo de conocimientos.

La expansión de las universidades privadas en Madrid no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una política activa y sostenida de desregulación y apoyo institucional para la mercantilización de la educación en todos los niveles educativos. Desde el gobierno de la Comunidad Autónoma, se alienta la generación de centros educativos privados y concertados a la vez que se desatienden las necesidades de las escuelas públicas y se precariza el trabajo en ellas.

En el sector universitario, el crecimiento de la oferta privada se vio acelerado desde que el gobierno de José María Aznar (Partido Popular) sancionó una Ley Orgánica Universitaria en 2001 (LOU 6/2001). Hacia finales del siglo pasado, sólo había cuatro universidades privadas en España, vinculadas a órdenes religiosas. Con posterioridad a la sanción de dicha Ley, se crearon cuarenta en todo el Estado, concentradas, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, seguida por la provincia de Barcelona y la de Valencia.

Bajo el discurso de la “libertad de elección”, el gobierno madrileño ha facilitado la entrada de empresas e inversiones de fondos buitre en el sector educativo, convirtiendo la educación superior en un negocio que se muestra altamente lucrativo. En 2018, el fondo de capital de riesgo británico CVC compró la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid por 1.100 millones de euros y, un año antes, el fondo Permira había comprado la Universidad Europea por 770 millones ([El Salto](#), 18/9/2022).

El costo de cursar una carrera de grado en una universidad privada madrileña oscila entre los 4.500 y los 25.000 euros anuales, muy por encima de los 1.100 euros promedio de la universidad pública. Esta brecha económica refuerza todavía más la segregación social, ya que el acceso a determinadas titulaciones queda reservado a quienes las pueden pagar.

En la Comunidad de Madrid, circula el borrador de una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) que, de aprobarse, va a profundizar esta tendencia. Este borrador contempla la posibilidad de supeditar la financiación pública a criterios de “eficiencia” y “resultados”, lo que podría derivar en el cierre de carreras o institutos de investigación que “no sean rentables” en términos meramente económicos.

Pero, además, existe una dimensión de la educación superior en instituciones privadas que no es menor y cabe remarcar: las carreras universitarias -y, sobre todo, los estudios de máster- suelen ser espacios de circulación de contactos y referencias para el futuro laboral. En las universidades privadas más caras no se paga por una educación mejor, se paga por pertenecer a determinados círculos sociales y élites, así como por relaciones con empresas financiadoras, contactos con profesores que han tenido cargos públicos, etc., cuestión que refuerza el éxito de algunos emprendimientos. En palabras de Damián Herrera Cuesta, profesor de la UNED, esto lleva a que *“la educación funcione como mecanismo de organización social y, a la vez, de legitimación de las desigualdades estructurales”* (citado por [El Salto](#), 2/7/2020). Es especialmente en las ramas de ciencias sociales, económicas y jurídicas donde más entran en juego los contactos y donde se consolida la vía de distinción y profundización de las desigualdades. Quién más paga, es decir, quien pueda permitirse abonar entre diez y cien mil euros un título de máster, tendrá contactos más robustos o de peso para el futuro. En lugar de ser un mecanismo de promoción social a partir del estudio, la universidad corre el peligro de convertirse en un espacio de segregación socioeconómica: si te educaste en la pública, para ciertos sectores “valdrías menos” que si fuiste a la privada, pudiendo romperse así el consenso generalizado en torno al valor de la educación pública de calidad.

3. Luchas y resistencias

Frente a este panorama, la comunidad universitaria madrileña ha protagonizado un ciclo de movilizaciones sin precedentes en los últimos años. La huelga educativa del 28 de abril de 2025 marcó un punto de inflexión: por primera vez desde la “Marea Verde” de 2013, confluyeron en una misma jornada de lucha todos los niveles educativos (desde educación infantil hasta la universidad), todas las figuras laborales docentes y no docentes, y el movimiento estudiantil. Lamentablemente, la trascendencia de la huelga fue opacada por un apagón del sistema eléctrico nacional que acaparó la atención mediática, invisibilizando parcialmente el alcance de la jornada de lucha. No obstante, la fuerza de su convocatoria

dejó un saldo organizativo que perdura y sigue enfrentando el modelo de ajuste a la educación pública.

La huelga fue acompañada de manifestaciones previas, asambleas interuniversitarias y acciones de visibilización de la situación tales como ocupaciones de espacios, pegada de carteles, estampado de remeras, etc. La consigna “*Sin universidad pública no hay futuro*” se convirtió en un lema compartido por docentes, estudiantes y trabajadorxs. Uno de los elementos más destacados de este proceso ha sido la organización asamblearia desde abajo. Estas asambleas han permitido construir una agenda común desde la diversidad de demandas sectoriales. En palabras de Daniel Montañez, docente de la UCM y afiliado al sindicato anarquista CNT, “*la mejor forma de lograr concienciación y participación activa es potenciando asambleas de trabajadores y estudiantes en cada centro educativo*”, y eso se ha estado impulsando desde las distintas universidades públicas. Sin embargo, la participación no ha sido homogénea en todos los niveles educativos. Sectores como el personal no docente o el profesorado de educación primaria e infantil han estado menos representados, lo que plantea el desafío de ampliar la base del movimiento en un contexto adverso.

Ante la fuerza de la movilización en las universidades públicas, la respuesta institucional ha sido la criminalización. El borrador de la LE-SUC incluye un reglamento disciplinario que permite sancionar a las universidades donde se produzcan “actos vandálicos” o “incívicos”, sin definir claramente qué se entiende por tales. Esto abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que pueden limitar el derecho a la protesta legítima. Además, se contemplan multas de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas, colocación de pancartas sin permiso o acampes (como los realizados en distintos campus universitarios en apoyo a Palestina). La ley también prevé sanciones de hasta un millón de euros por “no garantizar la pluralidad y la libertad en el campus”, lo que podría usarse para reprimir expresiones críticas a las políticas privatizadoras.

La universidad pública madrileña se encuentra en una encrucijada. Por un lado, sufre un proceso de ajuste y mercantilización que amenaza su existencia como espacio de conocimiento crítico, accesible y democrático. Por otro, cuenta con una comunidad que, pese a las dificultades, se organiza y resiste desde abajo, construyendo alternativas y defendiendo un modelo de educación para todas.

La respuesta desde el poder político muestra la fuerza real y potencial que tiene la defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado español, donde la importancia de la educación pública y de calidad goza de un consenso generalizado. En la Comunidad de Madrid, el intento de romper ese consenso parece querer comenzar por la educación superior, ajustando el presupuesto y precarizando las condiciones de trabajo, primero, y acto seguido, dando facilidades para la expansión de la oferta privada.

En Argentina, antes de que el menemismo y sus aliados comenzaran la destrucción de la educación, el consenso social giraba en torno al reconocimiento de la escuela y la universidad públicas como exponentes de la mejor educación, en oposición a la educación privada en sus distintas versiones, desde la extremadamente cara y elitista hasta la barata y de mala calidad (“para quienes no aprueban en la pública”). Ese consenso -de base más o menos real- se fue rompiendo al tiempo que se desfinanciaba y destruía la educación pública argentina y se ampliaba la oferta de escuelas privadas dirigidas a una clase media que, educada en la pública, ahora se esfuerza por pagar las cuotas y diferenciar la educación de sus hijos e hijas de la de los sectores populares. La escuela que como sociedad no supimos defender en los 90, fue quedando mayoritariamente destinada a quienes no pueden pagar educación privada, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Se podría decir que, todavía y a pesar de todo, la educación superior argentina se ha salvado de esa destrucción, sigue gozando de prestigio social y consigue reunir voluntades en su defensa. Y no será exagerado atribuirlo a los distintos ciclos de organización, resistencia y enfrentamiento a las políticas de ajuste de la educación superior pública de los años 90 y 2000. Atender las realidades de otros países, en los que la incidencia de los capitales financieros se muestra de manera mucho más bestial, amplía el panorama de análisis para enfrentar lo que pueda sobrevenir.

Asimismo, conocer esos devenires de la educación argentina y observar lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid -con un gobierno afín a Milei cuya presidenta se ubica ideológicamente en la extrema derecha y actúa en consecuencia-, nos advierte sobre la importancia de las movilizaciones y las acciones de resistencia aquí y ahora, frente a un plan privatizador que -en Argentina lo sabemos- una vez echado a andar, cuesta mucho frenar y, mucho más, revertir.

La universidad en tiempos de horror

Judith Naidorf*

Sí, ya se. Me van a decir que horror fue Auschwitz donde murieron masacrados mis bisabuelos o que la universidad también existió durante la inquisición o en la primera guerra mundial. También había universidad cuando la matanza de los pueblos originarios y la explotación colonial. Pero la diferencia es que aquella universidad, esa que existe hace más años que el Estado Nacional y la propia modernidad, era un reducto para unos pocos, en masculino.

Desde mediados de siglo XX la universidad se ha vuelto masiva y su crecimiento seguirá en expansión. Hubo un tiempo en que se dijo que la universidad era un elefante montado en un aeropuerto —lo dijo Héglio Trindade— o que la universidad podía tender a desaparecer porque le competían otros espacios de concentración y divulgación del conocimiento. Sin embargo, la universidad que ha sabido no solamente conservar sus atributos instituidos —como la formación artesanal del aprendiz-maestro medieval que implica la formación en investigación, la embestidura y la defensa de una argumentación fundamentada como es una tesis, entre otros ritos— también ha logrado reinventarse a través de lo que Cornelius Castoriadis denominó sociedad instituyente en tanto fuente y origen de la alteridad y de autoalteración perpetua.

¿Cómo la universidad ha sobrevivido como institución social más de ocho siglos? ¿Y para qué sigue existiendo? En esa pregunta fundamental, es decir de los fundamentos, es que se nos juega la propia noción de utilidad social que hace años venimos abordando y desentrañando en nuestras investigaciones: ¿para qué y para quién investigamos?

* Investigadora Principal de CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Coordinadora del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (CLACSO).



La universidad sobrevivió porque tiene en su esencia esta capacidad de autoalteración. Su autonomía le permite ser protagonista y artífice de los cambios, aunque al decir de Jacques Derrida, ésta a veces se rinde, se vende y queda como una ciudadela expuesta por ausencia de fuerza propia.

El cogobierno, esa participación tri o cuatripartita de estudiantes, graduados, profesores y no docentes la hacen dinámica y potente, pero al no ser soberana sino un brazo más del Estado (no del gobierno) serpentea en un mundo que está tan descolocado como ella.

Pero, ¿para qué sirve la universidad hoy en este mundo del horror donde la perspectiva de futuro más cierta es la profundización de la desigualdad, cuando no una guerra nuclear?

La pandemia fue un momento bisagra que nos confundió con una perspectiva de un mundo distinto pos ella misma, quizá más solidario, menos ingrato, más consciente de los límites de la humanidad. Sin embargo, las consecuencias o el devenir están a la vista: el mundo es un horror, las derechas se están envalentonando, los acuerdos mínimos de convivencia están pasados de moda y la maldad es la nueva tendencia.

Pero la universidad sigue siendo un reducto de pensamiento. Porque si volvemos a los orígenes y optamos por una perspectiva histórica genealógica que ponga el foco en el presente, podremos reconocer ese aspecto instituyente que motivó a los jóvenes de Abelardo a buscar, al decir de Le Goff, un suscitador de ideas más que un maestro. La universidad tiene esa capacidad de pensar un futuro distinto a partir de desarmar o deconstruir, dirán algunos, el devenir catastrófico. Y ahora, hace poco, aprendió a hacerlo haciendo porosas sus paredes, en relación con otras, otros y otras. No más faro ilustrado ni recetas para todo contexto. Respuestas y ensayos territoriales en espacios de creación, vínculo fraterno, cuerpo a cuerpo, con nuestras diferencias en búsqueda de un horizonte inestable y reinventable, pero común y mejor para todos.

La “Nueva Universidad Argentina” de los rectores

Análisis de una reforma inconsulta, silenciosa y por capas que busca desestructurar la universidad pública.

Carolina Mamblona* y Nahuel Vogel**

En 2021 se lanzaron las bases del proyecto denominado “Nueva Universidad Argentina” (NUA), aprobadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). En 2023, después del resultado de las elecciones nacionales, ya en la gestión saliente de Perczyk a cargo del hasta entonces Ministerio de Educación (ME), se aprueban una serie de decretos que le dan cuerpo a esta nueva reforma para la educación superior.

Estos cambios parten de un amplio diagnóstico sobre la situación de las y los estudiantes, las carreras y el análisis de la tasa de ingreso y egreso de las casas de estudio, expresadas en el documento “La universidad argentina: hacia el desarrollo económico y el progreso social. Ejes 2022 - 2023” (DL-ME) publicado en diciembre del 2021.

En noviembre de 2023 se aprobaron en el ME un conjunto de resoluciones donde se expresan los lineamientos de la NUA tales como: **Funcionamiento de Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC 2597/23), Sistema Argentino de Créditos Académicos**

* Clase pública, Colectivo de docentes universitarixs UNLP y docente en UNICEN.

** CAUCE

Universitarios (SACAU 2598/23) y otra sobre la educación a distancia a través del **Sistema Institucional de Educación a Distancia** de cada institución universitaria (**SIED 2599/23**). Todas las resoluciones en conjunto le dan concreción a nuevos rumbos para la educación superior, en continuidad con los fundamentos de la ley de educación superior (**LES**) menemista, basada en las reformas neoliberales de los años 90.

El gobierno de Milei abraza y empuja que esta gran reforma se lleve a cabo. Por eso, en abril de este año salió una nueva resolución que le pone avance y plazo a la adecuación de las carreras al SACAU¹. El gobierno de Milei, reduciendo el Ministerio de Educación a una Secretaría, con una Subsecretaría de políticas universitarias, en el marco del Ministerio devastado de Capital humano a cargo de Pettovello, puso primera para avanzar hacia el sistema de créditos buscando adecuar las carreras hacia el 2027. El SACAU es una parte de toda una reforma estructurada por capas que aborda distintos aspectos de la educación superior.

Los fundamentos en los que se basa esta reforma parten del análisis del crecimiento de la cantidad de estudiantes en el sistema universitario que se ha exponenciado enormemente en los últimos años, contando con una población aproximada de más de 2,5 millones de estudiantes que cursan estudios de grado y de posgrado en 133 instituciones universitarias a nivel nacional. Estos cambios se orientan hacia el descenso de la brecha entre la tasa de ingreso y egreso, y el tiempo promedio de permanencia de acuerdo a la duración de las carreras. Es necesario recordar que la tasa de egreso es del 29,6% de los estudiantes universitarios que terminan las carreras en el tiempo previsto por las mismas.

En un contexto general de ajuste y endeudamiento, se identifican en el documento de diagnóstico las condiciones de precarización laboral y de la vida que afrontan lxs estudiantes universitarios, pero sin buscar alternativas que modifiquen dichas condiciones sino readecuando la educación hacia lograr mayores niveles de flexibilidad educativa para el estudiante. La propuesta no termina por concluir que son necesarios cambios que mejoren las condiciones de estudio, vivienda, alimentación, etc; por el contrario, determina como la única respuesta a esta problemática el acortamiento, flexibilidad y virtualización de la educación superior.

1 Aprobación Anexo SACAU - REDACCIÓN PROPUESTA POR ACUERDO PLENARIO CU N°274 (15-04-2025) y resolución 556/25 publicada en el Boletín Nacional el 05/05/2025, Ministerio de Capital Humano.

Estas propuestas modifican el rumbo de las universidades tal como las conocemos en la actualidad y esto se realiza sin un profundo debate colectivo. Esta reforma se impuso desde un acuerdo de los rectores de distintos signos políticos, pero unificados en avanzar desde arriba sin dar una debate en las instancias colectivas político-gremiales e institucionales de las universidades, por ello todavía se desconoce todo este paquete en la comunidad universitaria. La alternativa que impulsan los rectores es capacitar hacia abajo, a las autoridades y cuerpos docentes para que se efectivice la implementación lo más rápido posible.

Se utilizan argumentos sobre las condiciones en que los estudiantes se insertan en las carreras y sobre ellos se montan lineamientos propios de la LES (Ley de Educación superior) que en su momento no habían sido aprobados, producto de las luchas universitarias de los años 90. Asimismo, se retoman los impulsos del Macrismo por colocar un Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que estaría contenido en la incorporación de los trayectos intermedios y el eje de internacionalización de las currículas.

Conocer estos decretos nos permite analizar el proyecto de reforma en su implementación, y familiarizarnos con un lenguaje de siglas que hasta el momento no eran parte del cotidiano de la universidad, para saber lo que necesitamos defender y cambiar y no dar como naturalizadas estas imposiciones.

Recuperamos algunos de los principales lineamientos de la NUA y planteamos algunas críticas para ir elaborando de conjunto en el activismo universitario.

Se plantea, ***“repensar las modalidades de enseñanza y de aprendizaje, focalizando las estrategias en el estudiante como sujeto que aprende y desplegando alternativas de formación mediadas por la tecnología”***.

Ello implica una reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje promoviendo una educación híbrida, bimodal, virtual y remota tal como lo expresa el decreto 2599/23 del ME. Se plantea para carreras que requieran dictarse mediante la educación a distancia y/o carreras presenciales que busquen modificar los planes de estudio. Es importante visualizar que entre las condiciones de presencialidad se cuentan a las actividades mediadas por tecnología que se desarrollen de manera sincrónica. Estos cambios introducen que una misma carrera pueda

ser dictada de manera presencial o a distancia con su debida aprobación. Claramente se explicitan y configuran modelos mixtos de presencialidad y virtualidad que cambian procesos de aprendizajes, modalidades de enseñanza, contenidos, prácticas y todo lo que atañe a la propia vida estudiantil. La presencialidad física quedaría reducida a un 25% de las actividades, ya que la sumatoria de horas dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas no podrá exceder el 75% de la carga horaria del plan de estudios, y siempre deberán contar con el SIED validado, lo que significa un sistema complementario a las evaluaciones de Coneau.

En este punto donde la pandemia ofició como una oportunidad para su implantación, tendría que analizarse que antes que hibridizarnos en los hechos, es necesario recuperar los horizontes de los procesos formativos, así como revisar el impacto en los procesos de trabajo que se distanciarían de algunos logros plasmados en el Convenio Colectivo de Trabajo del 2014, entre otros debates.

Se propone ***“analizar las horas que invierten los estudiantes en cursar, estudiar y realizar trabajos prácticos, revisando la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras, reconociendo que las y los estudiantes tienen perfiles y biografías personales diferentes, y que es necesario potenciar las prácticas pedagógicas, la calidad educativa, la permanencia y el egreso en sintonía con ello para que el derecho a la educación sea una realidad”***. A la brecha de ingreso y egreso se le suma una tasa de desgranamiento del 60% para el primer año y como el propio documento afirma se traduce en una ralentización de la cursada. Aquí claramente se complementa el acortamiento de carreras teniendo un límite en los 4 años de duración, con las horas establecidas en la unidad de medida CRE (Crédito de referencia del estudiante), en el marco de SACAU, se calcula en horas el tiempo de formación de un estudiante, buscando identificar todas las actividades y horas de interacción pedagógica (presencial o virtual). El valor promedio es de SESENTA (60) CRE anuales distribuidos no solo por anualidad, planteando un mínimo (240) CRE y CUATRO (4) años de duración para las carreras de grado. Las horas de interacción pedagógica se establecerán en un mínimo de DOS MIL CIEN (2.100) horas, unas 500 horas menos de las que están contempladas en las licenciaturas actuales.²

2 Según una publicación de Alejandro Alvarez, en la red X, “A partir de 2027, todas las nuevas carreras universitarias (públicas y privadas) deben usar el SACAU, porque así

Junto a ello, el propio ME propone que, asociado a la tensión sobre la gestión del tiempo y las propuestas de aprendizaje, incorporar **“titulaciones intermedias que permitan a los estudiantes disponer de reconocimientos de competencias profesionales con énfasis técnico o de aplicación a un campo profesional”** (DL-ME, 2021: 5) identificando que solo el 10% de las carreras de grado en la actualidad presentan opciones de titulaciones intermedias. Las titulaciones intermedias cuentan con dos caminos que se explicitan en los Lineamientos de la NUA cuando se propone *“Identificar trayectos formativos diversos, ampliando las certificaciones intermedias y/o tecnicaturas que reconozcan saberes técnicos y de aplicación en campos profesionales”* y *“la necesidad de certificaciones académicas que no conducen a titulaciones, pero sí podrán dar cuenta de trayectos de formación cumplidos por los estudiantes”* (Ibíd.)

En este punto es necesario abrir algunos debates en torno a qué implicaría, para algunos campos/áreas de conocimiento, contar con un título intermedio más adecuado a salidas laborales flexibles y precarizadas, y/o el reconocimiento de trayectos académicos que podría desdibujar áreas de incumbencias, contratar personal sin idoneidad y recaer en prácticas que carezcan de sustentos y fundamentos científicos con las consecuencias éticas que ello conlleva. Pueden pensarse como opciones de inserción laboral o como promesas de una inserción que no podrá lograrse en algunas áreas.

Se avanza en *“trabajar en procesos de internacionalización inclusivos, para que las y los estudiantes puedan experimentar la dimensión internacional como parte constitutiva de su formación y no solo como una experiencia aislada de intercambio”*. Bajo la lógica de créditos la formación se centra mucho más en el camino que elige “libremente” el estudiante adecuando los currículos a nivel internacional tal como orientaba la reforma de Bolonia. Se trata de una internacionalización orientada desde una lógica mercantilizada y liberal, donde la incidencia de los perfiles de las unidades académicas pierde peso frente a la decisión individual. Sumado a ello, para lograr un sistema de internacionalización asequible al conjunto se lo vincula a la virtualización

lo consensuaron entre ellas. Las carreras existentes pueden adoptarlo voluntariamente o seguir con sus sistemas actuales, aunque se espera una transición progresiva” (30-04-2025).

como posibilidad de efectivización denominada “*internacionalización inclusiva y de calidad*” (DL-ME, 2021: p.7)

La NUA busca “*avanzar hacia la certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público, que permitan el desarrollo de criterios e indicadores que identifiquen áreas de apoyo y fortalecimiento*”. En este punto, al fortalecer y profundizar un mecanismo de disloque y exacerbación de las áreas de evaluación por fuera de los procesos de trabajo se amplifican las funciones de control que los propios mecanismos de evaluación colocan como parámetros de calidad.

Sin duda que esta reforma mantiene similitudes y continuidades con postulados mercantilistas y privatizadores colocados por la Ley de Educación Superior que se encuentra vigente desde hace 20 años. Viene a profundizar aquello que había quedado inconcluso adecuándose a un presente tensionado por las empresas de gestión del conocimiento, las plataformas, la hegemonía de lógicas financieras y el avance de postulados ideológicos individualistas.

Luis Bonilla (2025) afirma que “(...) la estrategia seleccionada fue potenciar un nuevo modelo de internacionalización universitaria y cultura evaluativa neoliberal, bajo el manto de neutralidad que suponían la calidad educativa y actualización para apropiarse de la innovación científica y tecnológica. La internacionalización universitaria se promociona como una disposición de la academia al encuentro de buenas prácticas, cuando en realidad su sentido y orientación estratégica está determinada por el centro capitalista”.

Desafíos actuales

La universidad viene de estar luchando desde el año pasado por un presupuesto que le permita seguir funcionando. Esto no puede soslayar estas reformas que requieren por lo menos de un análisis consciente, crítico y profundo, si no queremos que empalmen con lo que pretende el gobierno de Milei para destruir las políticas públicas, y allanar el camino a la remercantilización de la educación superior. A su vez, no puede dejar por fuera la necesidad de recomposición salarial de docentes y no docentes, con aumentos salariales acordes a lo perdido, en un contexto donde se eliminaron los acuerdos paritarios nacionales.

De aquí se desprende la reflexión de que el movimiento estudiantil, así como las organizaciones gremiales docentes, tenemos un desafío

enorme en trascender el posibilismo y enfrentar este ataque del gobierno nacional como lo que realmente es: una transformación profunda de la educación superior como la conocemos.

El año pasado se extendieron tomas de edificios por todas las universidades del país en defensa de la educación pública, se hicieron dos marchas federales enormes y en la ciudad de La Plata tuvo lugar una movilización histórica: desde el siglo pasado no tenía lugar un despliegue tan enorme y masivo de la comunidad en defensa de la universidad pública. En estas instancias, no solo se puso en pie una demostración de lo que significa la universidad pública para amplios sectores sociales, sino también aparecieron algunas fibras del debate acerca de qué universidad queremos y necesitamos.

Sin embargo, las conducciones burocráticas de la mayoría de los gremios estudiantiles capitaneados por Franja Morada y/o el peronismo, jugaron un rol de desarme de la lógica de democracia horizontal posterior al despliegue masivo de tomas y asambleas en todo el país. Si bien no es una dinámica novedosa, cobra una importancia relevante para el desarrollo de los conflictos que las conducciones de los órganos gremiales tomen el camino de la negociación con los mismos rectores que impulsan estas reformas.

Esta dinámica se hace evidente en la no convocatoria a una nueva marcha federal que, sabemos, nos daría nuevas y mejores condiciones para ubicar en la agenda pública los debates sobre el ajuste que sufre la educación superior y las reformas en curso.

Por ello es necesario que el conjunto del estudiantado tome un rol activo en fracturar la lógica verticalista y sumisa de los gremios para con los rectores y autoridades.

Para discutir estas reformas en mejores condiciones, debemos plantear la lucha en unidad en la misma medida en que desarrollamos procesos de toma de decisión por abajo, disputando las lógicas institucionales y burocráticas, enfrentando estas lógicas silenciosas e inconsultas.

Ahora bien, no podemos dejar de analizar otros procesos complementarios que buscan disciplinar la fuerza histórica de las luchas universitarias. Todas estas reformas se complementan con algunas avanzadas en paralelo del gobierno nacional:

- El decreto 366/2025 que busca discriminar a estudiantes extranjeros a partir de focalizar en este grupo social y pretender que paguen aranceles extraordinarios, tanto para educarse en el país, así como acceder a la salud y otros derechos fundamentales.
- Los vetos presidenciales al aumento presupuestario.
- El canal para denunciar a docentes y profesores por cuestiones de “adoctrinamiento” abierto por Álvarez y Torrendell que puede operar en nombre de la “libertad” liberal del gobierno en torno a atacar el principio de libertad de cátedra.

Algunos interrogantes para seguir pensando

¿Recortar la duración de las carreras es la única solución a los problemas de la universidad? ¿Cómo se redefinen las funciones docentes? ¿Cómo se redefinen los cargos/puestos de trabajo en las readecuaciones pedagógicas? ¿Cómo se lograrán trayectorias formativas disímiles y fragmentadas de acuerdo a las condiciones del estudiante? ¿Las ofertas educativas se realizarán en instituciones privadas? ¿Cómo pensar una universidad que necesita cambiarse, sin adecuarse a tendencias del mercado de trabajo precarizado?

Las implicancias de esta reforma son profundas y debemos analizarlas en los sindicatos docentes, desde los centros de estudiantes, desde las asambleas interclaustrales, desde las aulas y los espacios del co-gobierno. Porque estos cambios nos involucran y no los pueden hacer los rectores por arriba.

Porque estamos convencidos que, ***“No seremos la generación que dejó morir la universidad pública”*** (Afiche realizado por la cátedra Rolie de la Facultad de Artes de la UNLP).

Referencias:

- Bonilla, Luis (2025). La internacionalización de la cultura evaluativa neoliberal (1972–1980). Huella del sur, 12-5-25. Disponible en: <https://huelladelsur.ar/2025/05/12/la-internacionalizacion-de-la-cultura-evaluativa-neoliberal-1972-1980/>
- Ministerio de Educación (2023). Anexo: Nuevo reglamento sobre modalidad de Educación a distancia. 30-10-23. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-2599-2023-393379/texto>

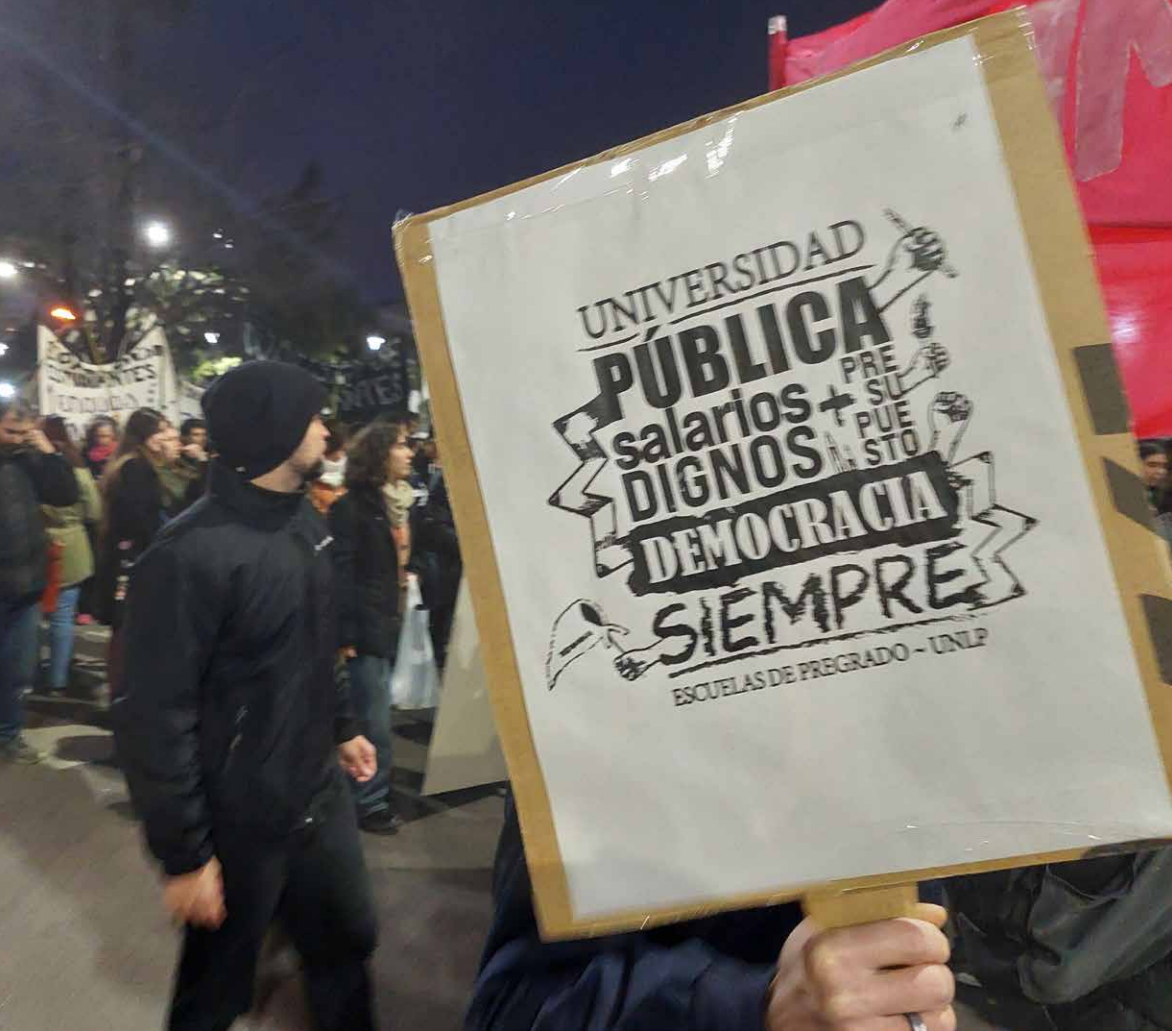
Ministerio de Educación (2021). La universidad argentina: hacia el desarrollo económico y el progreso social. Ejes 2022 – 2023.

Gobierno Nacional (2023). El Consejo de Universidades comenzó el tratamiento de la agenda de 7 puntos para la nueva universidad argentina. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-de-universidades-comenzo-el-tratamiento-de-la-agenda-de-7-puntos-para-la-nueva>

Resolución 2597/2023.RESOL-2023-2597-APN-ME

Resolución 2598/2023.RESOL-2023-2598-APN-ME

Resolución 2599/2023.RESOL-2023-2599-APN-ME



Defender la educación superior pública no es sólo un derecho: es un deber y una necesidad social

Eduardo Díaz de Guijarro*

Este artículo, y el dossier de *Huella del Sur* en el que está incluido, se publicará en un momento de crisis como pocas veces se ha vivido en la Argentina, y también en el conjunto del mundo. Las desigualdades generadas por la injusticia y la irracionalidad del sistema capitalista alcanzan límites intolerables para el mantenimiento de la convivencia de la humanidad. Los gobiernos de ultraderecha se multiplican, las guerras afectan regiones enteras del mundo y el planeta se deteriora paulatinamente. Entre los trabajadores y el conjunto de los explotados y marginados predomina el desconcierto y no surgen hasta ahora luchas suficientemente fuertes como para revertir las aberraciones, las mentiras y la crueldad de una minoría privilegiada que acumula monstruosas fortunas a costa de la miseria y de la muerte de millones de seres humanos.

En ese marco, dedicar estos textos al tema de la educación superior puede parecer un lujo, meramente especulativo e intelectual, incompatible con las urgencias del momento. Pero no es así.

* Físico y Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. De 1964 a 1976 fue docente en las Universidades de Buenos Aires y Córdoba e investigador en la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos. Fue dejado cesante en 1976 por la dictadura militar y pasó a trabajar en la industria. Ha publicado, entre otros títulos, *Espíritu crítico y formación científica* (Eudeba, 2010) y es coautor de *Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA* (Eudeba, 2015).

El *educidio*, componente dramático de la crisis del capitalismo

Contrariamente a lo que podría pensarse en un análisis superficial, lo que está ocurriendo con la educación superior en nuestro país y en varios otros es un fenómeno más complejo y más grave que la mera restricción de un derecho. No se trata solamente de una política coyuntural, en la que se pretende restringir el acceso a la educación a los sectores sociales de menores recursos, ni es la continuación de la ya tradicional tendencia promovida por los organismos internacionales de favorecer la enseñanza privada en detrimento de la pública. Veremos que su alcance y su significado son novedosos y graves, y expresan la crisis global del sistema capitalista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, critica sistemáticamente a las universidades, incluso las más prestigiosas, porque sus estudiantes se han manifestado en contra de la masacre provocada por el ejército israelí en la franja de Gaza. Pero este multimillonario enardecido no sólo detesta ver en un campus la bandera palestina, tampoco acepta que estudiantes extranjeros estudien en ellos. Lo que molesta a Trump son las instituciones de estudio y de investigación donde exista un pensamiento independiente y crítico. Él pretende gobernar su país y el mundo entero según sus propias e inapelables decisiones, privilegiando las ganancias del minoritario grupo de poseedores del dinero, de los medios de comunicación y de las armas.

Mientras tanto, el estado sionista de Israel destruye las ciudades gazatíes, provocando en lo que va de la guerra alrededor de cincuenta y cinco mil muertos. Según un informe de las Naciones Unidas, “la ofensiva de Israel en Gaza es consistente con las características de un genocidio” (Naciones Unidas, 2024). Pero, además, entre los blancos privilegiados de sus bombardeos están las escuelas y las universidades. Se intenta así destruir las tradiciones culturales palestinas y todo aquello que pueda preservarlas, incluyendo las bibliotecas y los museos. Uno de los ejemplos más dramáticos y evidentes ocurrió poco después de comenzada la guerra, el 17 de enero de 2024, cuando el ejército israelí dinamitó en forma programada el edificio de la Universidad Al-Israa. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Balakrishnan Rajabopal, difundió el video de la explosión y sostuvo que:

“en Gaza, un nuevo crimen internacional, el *educidio* o la muerte del conocimiento, debe ser agregado a la lista de crímenes bajo la ley internacional, cuando las escuelas y las universidades son sistemáticamente destruidas, con el resultado de un daño generacional de las sociedades” (citado en O’Malley y Sawahel, 2024).

La extrema derecha mundial intenta destruir la enseñanza superior no sólo en las zonas de guerra. La política del presidente argentino Javier Milei de desfinanciar las universidades públicas, asfixiar presupuestariamente todos los organismos vinculados a la investigación, disolver varios de ellos y reducir paulatinamente el poder adquisitivo de los salarios docentes hasta niveles de hambre también puede calificarse como *educidio*. No sólo los misiles o la dinamita destruyen las instituciones de enseñanza. La crítica sistemática, la desvalorización del trabajo científico y la asfixia económica apuntan al mismo objetivo que señaló el funcionario de las Naciones Unidas para el caso de Gaza. Lo que persiguen los gobiernos de ultraderecha es provocar “un daño generacional a las sociedades”, anular las conciencias de la mayoría de la población al eliminar o minimizar las instituciones donde es posible el desarrollo de la ciencia y del pensamiento independiente, y anestesiarnos con la catarata de mentiras, falsedades y agresiones que inundan las llamadas “redes sociales”.

Por todos estos motivos, podemos afirmar que atacar la educación superior es una de las formas más graves de poner en peligro la subsistencia misma de las sociedades humanas y del planeta en que vivimos.

Surge entonces una pregunta clave. ¿Cómo resistir esa ofensiva?

Para responderla, es necesario definir con claridad el alcance de los diversos aspectos que están en juego.

¿Para qué sirven las universidades?

Desde su aparición en occidente, hace ya ochocientos años, las universidades cumplieron un papel dual y conflictivo. Estuvieron inmersas, como todas las instituciones humanas, en la permanente lucha entre las clases sociales. Por un lado, los sectores dominantes trataron de utilizarlas para mantener su propio bienestar y su dominio sobre el resto de la población, para formular normas y leyes acordes con su conveniencia y para difundir su ideología. Pero también, por otro lado, fueron el ámbito

que permitió preservar los conocimientos acumulados por las generaciones anteriores, generar nuevas ideas y desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Los adelantos científicos desarrollados en las universidades, o por los universitarios en sus diversos ámbitos de actuación, permitieron conocer mejor el mundo en que vivimos, el funcionamiento del organismo humano y las características de las sociedades. Esos conocimientos pudieron aplicarse a cuestiones tan necesarias para la vida como la medicina, la construcción de viviendas, la producción de alimentos, los medios de comunicación y de transporte, y para alentar el arte y la cultura en general.

Esta característica dual estuvo presente durante toda su historia, incluso durante algunos períodos que suelen describirse enfatizando sus aspectos negativos. Durante sus primeros siglos de existencia, las universidades estuvieron controladas por la Iglesia Católica, pero, sin embargo, en los siglos XVI y XVII:

“la inmensa mayoría de los hombres que lograron destacar en la Revolución Científica [...] adquirieron toda su educación superior o parte de ella en la universidad [...] Las universidades y sus tradiciones intelectuales suministraron al menos una matriz para la Revolución Científica (Porter, 1999: 583 y 595).

Esto ocurrió en prácticamente todas las ramas de la ciencia de aquella época. El propio Galileo Galilei estudió y luego fue profesor en las universidades de Pisa y de Padua.

En el siglo XIX, cuando las universidades se habían estructurado alrededor de nuevos modelos pedagógicos y organizativos, adecuados al capitalismo en ascenso, ocurrió lo mismo. Mientras que, por una parte, servían para formar funcionarios para el aparato del Estado, también surgieron de sus aulas grandes avances de las ciencias básicas, de la medicina y de diversas ramas de la tecnología. Por otra parte, intelectuales que jugaron un papel fundamental en el desarrollo de las nuevas ideas económicas, filosóficas y políticas se formaron inicialmente en las universidades de los estados burgueses. La Universidad de Berlín fue uno de los centros intelectuales de Europa durante el siglo XIX. Allí fue profesor Georg Hegel y allí se formó Carlos Marx en leyes y filosofía y obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena.

El carácter dual de las universidades y de las instituciones culturales y científicas es una constante de la historia. Baste agregar que Marx

escribió “El capital” basándose en sus exhaustivos estudios en la Biblioteca Británica de Londres, ubicada nada menos que en el país donde se había iniciado la Revolución Industrial y que era, en ese momento, la principal potencia capitalista del mundo.

Es innegable que, en las sociedades donde, bajo diferentes formas, existieron clases sociales en conflicto, los beneficios del conocimiento generado en las universidades y por los universitarios estuvieron y están mal distribuidos. Tanto en el feudalismo como en el capitalismo, sólo una minoría goza de enormes privilegios, a los que la mayoría no puede acceder. En el presente de nuestro país y en el conjunto del mundo esto es desgraciadamente así. Pero la experiencia histórica muestra que los conocimientos y las tecnologías avanzadas existen, que son un enorme tesoro acumulado durante siglos, en permanente crecimiento y desarrollo, y que pueden ser utilizadas para el beneficio de la humanidad. Constituyen una herramienta fundamental para lograr que, una vez que se logre reemplazar el capitalismo por un sistema que no esté dominado por el dios dinero, los seres humanos podamos no sólo subsistir, sino vivir plenamente, y para que el planeta no sea destruido por el uso irracional de los recursos naturales.

La educación superior como derecho humano universal y como deber del Estado

Las primeras demandas que suelen aparecer al considerar las políticas sobre la educación superior pública son las posibilidades de acceso y permanencia y el financiamiento estatal.

En el caso argentino, si bien estos aspectos han sido siempre problemáticos, desde que Javier Milei asumió el gobierno, a fines de 2023, se transformaron en extremadamente graves. Las universidades públicas fueron paulatinamente desfinanciadas, poniendo en riesgo su existencia misma. Las grandes movilizaciones de 2024 permitieron obtener un ínfimo refuerzo para los llamados gastos de funcionamiento, pero los sueldos docentes continuaron devaluándose y los investigadores carecieron de fondos para continuar sus trabajos. La intención de la ultraderecha es que sean las universidades privadas las que concentren la actividad de docencia e investigación, mientras las públicas, para subsistir, se ven obligadas a semi privatizarse, buscando apoyos financieros empresariales. Esos apoyos, en forma de convenios o donaciones, invariablemente condicionan los

contenidos de la investigación y la orientación de las carreras, privilegian las tecnológicas en detrimento de las sociales y ubican las universidades dentro de las llamadas leyes del mercado. Tanto la orientación empresarial como la estrechez presupuestaria limitan el derecho a la educación superior pública y gratuita a muchos miles de jóvenes de familias trabajadoras, que aspiran a obtener un título universitario.

Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y reiterada posteriormente en innumerables convenciones y pactos internacionales, establece en su artículo 26 que la educación es un derecho humano universal y que el acceso al nivel superior sólo deberá depender de los méritos personales. El artículo 27 afirma que también es un derecho la posibilidad de participar en los beneficios del progreso científico. Nuestro país ha sido firmante de esas declaraciones de principios, hoy violadas.

Además, Argentina ha sido vanguardia en el planteo de que la educación superior no debe ser elitista ni dogmática, que debe desarrollar el pensamiento independiente y volcarse hacia el servicio del conjunto de la sociedad. Estos conceptos forman parte de nuestra tradición desde principios del siglo XX, cuando la Reforma Universitaria de Córdoba planteó en 1918 las bases para una concepción social y democrática de la educación superior.

Los que usualmente son llamados derechos humanos no se reducen al derecho a la libertad individual, a no ser encarcelado, torturado o asesinado por dictaduras. Incluyen también el derecho a una vida digna, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a la educación en todos sus niveles.

No sólo en la Argentina, sino en todos los lugares donde su peso se acrecentó en los últimos años, la ultraderecha sostiene equívocamente que defiende “la libertad”. Pero le da al concepto de libertad el sentido de que cada persona, como individuo, es libre de hacer lo que quiera o lo que pueda. La sociedad desaparece como comunidad y queda reducida a un conjunto de individuos que compiten entre sí. El Estado no asume ninguna responsabilidad sobre el bien común. Cínicamente, desde luego, se reserva el poder de asegurar las ganancias de los multimillonarios y de reprimir por la fuerza todo intento de resistencia popular.

Como consecuencia de la anulación de sus responsabilidades sobre el bienestar social, el gobierno limita o elimina totalmente, según los

casos, la participación estatal en la educación, en la salud e incluso en las obras públicas.

Esta política lleva a un nivel extremo la tendencia mundial impulsada por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, ya existente desde las últimas décadas del siglo XX, de introducir en las universidades un modelo de organización y de financiamiento empresariales. Con una irracionalidad absoluta y una actitud casi demencial, los

■ La intención de la ultraderecha es que sean las universidades privadas las que concentren la actividad de docencia e investigación, mientras las públicas, para subsistir, se ven obligadas a semi privatizarse, buscando apoyos financieros empresariales. Esos apoyos, en forma de convenios o donaciones, invariablemente condicionan los contenidos de la investigación y la orientación de las carreras, privilegian las tecnológicas en detrimento de las sociales y ubican las universidades dentro de las llamadas leyes del mercado.

gobernantes de la extrema derecha y los multimillonarios que acumularon fortunas desmesuradas, que exceden toda dimensión imaginable, no comprenden, o quizá no les importa, que están poniendo en riesgo la existencia misma de la vida sobre la Tierra.

Ya en 1848, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels partieron de describir la enorme potencialidad del sistema capitalista, comparado con el feudal, en cuanto a los desarrollos industriales y los avances científicos que estaba posibilitando. Sin embargo, con un lúcido criterio premonitorio, advirtieron que su avance y globalización descontrolados conducirían a la humanidad a una crisis creciente. Y expresaron esta idea con una frase digna de ser recordada:

“Toda esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros” (Marx y Engels, 1848).

Entre los bienes que el capitalismo en ascenso produjo durante los siglos XIX y XX se incluyen las universidades, los institutos de investigación,

las bibliotecas y los museos. Esos mismos bienes que ahora, en su delirio apocalíptico, están destruyendo o intentando destruir.

La reacción frente a esta catástrofe existe, aunque es necesario reforzarla.

En 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior, en la que se reunieron delegados de universidades de toda Latinoamérica, resolvió pronunciarse en defensa no sólo del derecho individual a la educación, sino también agregando expresamente que ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Es su deber hacerlo:

“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región” (CRES, 2008).

En 2018, una nueva Conferencia Regional reiteró estos conceptos y los amplió, incluyendo también la gratuidad de la educación superior como deber de los Estados.

La responsabilidad de las universidades y de los universitarios

Las declaraciones y movilizaciones en defensa de la educación pública, muchas veces acompañadas o formando parte de grandes luchas populares, permitieron a lo largo de la historia grandes conquistas democráticas. Gracias a ellas, hoy es posible poner al menos un freno al desaforado avance de la ultraderecha. Sin embargo, cuando las luchas se centran en la defensa del derecho a la educación, a las posibilidades individuales de acceder a ella y al deber del Estado de financiarla, tienen también una limitación.

En nuestro país, suele invocarse que la gratuidad de las universidades públicas facilita el acceso a estudiantes de familias trabajadoras, posibilitando su ascenso social o su acceso a trabajos bien remunerados o de mayor prestigio. Se trata indudablemente de derechos individuales justos, como también lo son el natural anhelo humano de adquirir conocimientos sobre la naturaleza y la sociedad o de acceder a las expresiones artísticas o culturales en general.

Sin embargo, el objetivo de la enseñanza superior no es meramente el beneficio personal de cada individuo para adquirir conocimientos y habilidades en las aulas o en los laboratorios, que lo habiliten como persona a una vida mejor en el futuro. El estudiante recibe durante sus estudios un



cúmulo de conocimientos que, al graduarse, le otorgan la posibilidad de investigar en alguna de las ciencias básicas, de conocer cómo funcionan la economía y las relaciones sociales, de cuidar el medio ambiente, de prevenir enfermedades o de curar enfermos, de construir viviendas o de diseñar maquinarias, fábricas o medios de transporte y comunicaciones. Al egresar de la universidad pasa a ocupar puestos de trabajo que, en todos los casos, implican una gran responsabilidad social. No se trata de una cuestión meramente individual. El graduado adquiere una parte de esos valiosos conocimientos que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de su historia, pasa a ser un protagonista fundamental del sector que tiene en sus manos la posibilidad de volcar esos conocimientos no para su provecho personal sino para el beneficio de la comunidad.

Los graduados universitarios tienen un compromiso con la sociedad toda, más aún cuando el sistema público de enseñanza ha sido financiado con los impuestos colectivos.

Este concepto es clave para comprender cuál es realmente el papel social de las universidades y cuál es el deber social que tienen frente a la sociedad. Para que las luchas por la educación superior adquieran un sentido pleno y superador, los reclamos al Estado para que financie y sostenga las universidades no deben concebirse con el mezquino objetivo de que quienes accedan a las mismas se incorporen como nuevos miembros de una elite privilegiada. La historia ha demostrado sobradamente que los conocimientos elaborados por las sucesivas generaciones tienen el

enorme potencial de mejorar la vida humana en todos sus aspectos. Un objetivo que se logrará únicamente si esas luchas se emparentan con las del conjunto de los trabajadores y explotados, para reemplazar el sistema capitalista por otro que elimine las injusticias y las desigualdades.

Mientras los millones de trabajadores, explotados y postergados, protagonizarán indudablemente las grandes luchas que posibilitarán los futuros cambios sociales, en la actual etapa y en el futuro próximo, los universitarios tendrán un papel irremplazable. Serán quienes encuentren formas más justas de organizar las relaciones económicas y políticas entre las personas y entre las naciones, serán quienes puedan transformar la concepción de la medicina, que hoy está dominada por el negocio de los grandes laboratorios farmacéuticos y de los prestadores de servicios médicos, para transformarla radicalmente, logrando no sólo que existan más y mejores hospitales públicos, sino también que haya menos enfermos, mediante el énfasis que debe ponerse en la prevención y en garantizar mejores condiciones de alimentación, de vivienda y de higiene ambiental. Y habrá arquitectos que diseñen viviendas dignas para millones, en lugar de torres de lujo para los millonarios y los famosos de la farándula. Y habrá abogados que defiendan verdaderamente la justicia e ingenieros que diseñen y hagan funcionar fábricas concebidas racionalmente y no con el objetivo de generar ganancias a sus dueños. Y científicos que investigarán los enigmas básicos de la naturaleza y de la sociedad, base imprescindible para todo desarrollo futuro de una humanidad libre y solidaria.

Esto implica que los universitarios no sólo tenemos derechos. También tenemos deberes.

Los estudiantes reformistas de 1918 incorporaron esta idea del compromiso social a los programas de las centrales estudiantiles a lo largo de décadas, tanto en la Argentina como en otros países de Latinoamérica. También fue un factor clave de los planes educativos de las grandes revoluciones sociales del siglo XX, que pudieron aplicarlo con suerte dispar, pero que sirvió como ejemplo de cómo la educación puede y debe insertarse en un programa global para el desarrollo humano pleno.

Conclusión: la educación superior es una necesidad social

Por todo lo dicho, reiteramos la afirmación contenida en el título de este artículo. La educación superior no es sólo un derecho humano elemental de todos los individuos, que debe ser garantizado por el Estado. También es

una necesidad de la sociedad, que requiere de instituciones y de personas capaces de preservar y utilizar el enorme caudal de conocimientos, que fueron desarrollados por la humanidad a lo largo de su historia, enriquecerlos con su pensamiento creador y aplicarlos para el bienestar humano.

Durante este difícil período histórico que atraviesa nuestro país y el resto del mundo, el papel de las universidades y de los universitarios debe ser rescatado como uno de los factores imprescindibles para construir un futuro mejor. Los universitarios no sólo deberán persistir en las luchas defensivas, frenando la destrucción que se siembra desde las altas esferas del poder, sino que deben ser conscientes de su enorme responsabilidad social. No estamos peleando por obtener una beca o unos pesos más para alcanzar un título. Estamos peleando por una sociedad mejor. Estamos peleando, junto con el resto de los trabajadores y de los sectores explotados, para que los seres humanos puedan vivir plenamente, gozando de todo lo que la historia produjo en cuanto a ciencia y tecnologías, cuyos futuros desarrollos y sus futuras aplicaciones dependerán de nosotros, los universitarios de hoy, y de los que sigan nuestros pasos en el futuro, como parte de una sociedad solidaria y verdaderamente humana.

Referencias

- CRES (2008): *Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 2008*, IESALC, UNESCO.
- Marx, Karl, y Engels, Friedrich (1848): *Manifiesto Comunista*; la cita fue tomada de la edición en castellano de Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2018.
- Naciones Unidas (2024): La ofensiva de Israel en Gaza es consistente con un genocidio, dice comité de derechos humanos; *Noticias ONU*; *Mirada global Historias humanas*; recuperado el 21/6/2025 de <https://news.un.org/es/story/2024/11/1534306>
- O'Malley, Brendan, y Sawahel, Wagdy (2024): Can higher education in Gaza survive Israel's war on Hamas, *University World News*, 28 January.
- Porter, Roy (1999): La Revolución Científica y las universidades, en Hilde de Ridder Symoens (Ed.), *Historia de la universidad en Europa, Volumen 2, Las universidades en la Europa moderna temprana (1500 – 1800)*, Bilbao, Universidad del País Vasco.

**VAN CONTRA
LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA
— PORQUE —
NOS ENSEÑA
A PENSAR
NO A
OBEDECER**



La universidad pública en la encrucijada:

Colonialidad del saber, capitalismo cognitivo y extractivismo tecnológico*

Darío Balvidares**

Desfinanciamiento y desposesión del conocimiento público

El deterioro de la universidad pública no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia deliberada que busca debilitar su rol como espacio de pensamiento crítico y autonomía científica.

En Argentina, bajo la administración de Javier Milei y su enfermizo seguidismo a las acciones del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el ajuste presupuestario no solo impacta en los salarios docentes y los recursos para el sostenimiento diario de las universidades sino también en la investigación que lleva adelante el sistema científico en su conjunto.

Este ataque se inscribe en una lógica global de acumulación de capital, donde el conocimiento, lejos de ser un bien colectivo, se convierte en un recurso explotable bajo esquemas extractivistas. La reducción de los presupuestos universitarios, la precarización de docentes e investigadores y la desarticulación de organismos públicos de ciencia y tecnología

* El documento fue analizado de forma breve en mi primer libro *La novela educativa o el relato de la alienación* 2005 Redes Cultura

** Profesor y Licenciado en Letras (UBA). Investigador en Política Educativa e integrante del colectivo editorial *Huella del Sur*.

configuran un proceso de desposesión del conocimiento público, empujándolo hacia la privatización y subordinándolo a intereses del mercado.

Las instituciones financieras internacionales han jugado un papel clave en la reconfiguración de la educación superior bajo criterios de eficiencia económica. Informes como “Cerrando la brecha en educación y tecnología” (2000) del Banco Mundial promovieron una visión de la universidad como un espacio que debe adaptarse a las necesidades del mercado antes que garantizar el acceso al conocimiento libre. En ese documento y de acuerdo con la posición que le toca a la Argentina, respecto de la relación educación y tecnología en esa clasificación que realiza el Informe del Banco Mundial en su recomendación dice que: “Aumentar el presupuesto de las universidades públicas, generalmente no representa una solución factible ni deseable y en cambio se debería considerar la recuperación de los costos, los aumentos de matrícula según un determinado presupuesto y las políticas que relacionen la transferencia de recursos públicos con el desempeño (...) fortalecimiento de incentivos para la investigación y el desarrollo privados...”.

En paralelo, organismos nacionales como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avalaron progresivamente la lógica de vinculación universidad-empresa, favoreciendo modelos de financiamiento mixto que reducen la independencia académica. Veamos un fragmento de un documento del CIN: “Organizar y potenciar los recursos del sistema para la transferencia de I+D a la producción y a los servicios. Instrumentar modalidades de asignación de recursos que permitan consensuar prioridades en un marco previsible y sustentable. Impulsar la inserción de las universidades y de la Educación Superior Argentina en los procesos de internacionalización, integración y desarrollo local y regional...”¹.

Lo que está en disputa no es solo el presupuesto universitario, sino el sentido mismo de la educación superior: si será un espacio de producción de conocimiento al servicio de la sociedad, o continuará la profundización como apéndice funcional del sector privado. La ofensiva contra la universidad pública no solo es económica, sino ideológica, buscando transformar el conocimiento en un producto más dentro de la lógica mercantil.

1 “Universidades y Estado: una asociación para responder a los desafíos del cambio” Documento de discusión para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Políticas Universitarias. 2005.

Capitalismo cognitivo: la mercantilización del conocimiento

El capitalismo contemporáneo ha desplazado progresivamente su foco de acumulación desde los bienes materiales hacia los bienes intangibles, consolidando lo que se conoce como capitalismo cognitivo. En este modelo, el conocimiento ya no es considerado un derecho colectivo ni un recurso público, sino un insumo estratégico para la acumulación privada. La producción intelectual, la educación y la investigación científica se subordinan a las dinámicas del mercado, transformándose en activos sujetos a las leyes del capital.

Las universidades, que históricamente funcionaban como espacios autónomos de producción de saberes, son arrastradas hacia una lógica empresarial donde el conocimiento debe demostrar rentabilidad y aplicabilidad comercial. La investigación académica se orienta hacia áreas que garantizan financiamiento privado, desplazando estudios humanísticos, sociales y críticos que no generan beneficios monetarios. De este modo, el capitalismo cognitivo no solo moldea el contenido del conocimiento, sino que también impone quién lo produce y con qué objetivos.

La mercantilización del conocimiento se materializa en múltiples estrategias:

Patentes y propiedad intelectual: La ciencia y la tecnología se privatizan a través de patentes que restringen el acceso a descubrimientos esenciales, desde medicamentos hasta algoritmos de inteligencia artificial.

Universidad-empresa: Se impone un modelo de vinculación estrecha entre instituciones académicas y el sector privado, condicionando la producción científica a intereses corporativos².

Financiamiento selectivo: Fondos públicos y privados privilegian investigaciones con impacto económico, dejando sin apoyo a proyectos con valor social.

2 Como ejemplo podemos decir que la Universidad Nacional de Tucumán participa de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) en la explotación de la mina Agua Rica, junto al gobierno de la provincia de Catamarca. O la minera Barrick Gold tomaba los servicios del Departamento de Hidráulica de la Universidad Nacional de San Juan para los informes de exploración en la mina Veladero a principios de la década del 2000.

Datos como mercancía: La educación digital y las plataformas tecnológicas convierten los datos generados por estudiantes y docentes en insumos comercializables para empresas de software educativo y marketing.

Este modelo también está atravesado por una profunda desigualdad: las universidades de élite concentran los recursos mientras que las instituciones públicas, especialmente en países periféricos, enfrentan un desfinanciamiento progresivo. La autonomía científica se ve erosionada y la producción de conocimiento se convierte en un terreno de disputa económica y política.

El capitalismo cognitivo no solo modifica las estructuras de financiamiento universitario, sino que redefine el rol mismo del conocimiento en la sociedad. En lugar de ser una herramienta de transformación y emancipación colectiva, se convierte en un bien de consumo restringido a quienes tienen el poder de financiarlo y explotarlo. La pregunta central es si el conocimiento seguirá siendo un derecho universal o si se consolidará como un privilegio de mercado.

Extractivismo tecnológico y la digitalización del conocimiento

En el contexto del capitalismo cognitivo, la expansión de la tecnología ha abierto nuevas fronteras para la apropiación del conocimiento. Lejos de democratizar el acceso a la educación, la digitalización ha consolidado un modelo extractivista donde los datos, las publicaciones académicas y los procesos de aprendizaje se convierten en mercancías.

Las plataformas de educación digital han redefinido la relación entre universidad y mercado. Empresas como Coursera, edX³ y Canvas⁴, han transformado el conocimiento en productos de consumo, donde el acceso depende de suscripciones, modelos freemium⁵ y licencias de uso restringidas. Lo que antes era un derecho garantizado por las universidades pú-

- 3 Coursera y edX son plataformas de educación en línea que ofrecen cursos de universidades y empresas reconocidas. Aunque permiten el acceso gratuito a algunos contenidos, su modelo de negocio se basa en certificaciones pagas, suscripciones y programas especializados, convirtiendo el aprendizaje en un producto comercializable.
- 4 Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje utilizado por universidades y colegios para administrar cursos y evaluaciones. Aunque facilita la educación digital, también recopila datos de estudiantes y docentes, integrándose en la lógica del mercado educativo.
- 5 Estrategia de negocio por la que se ofrece una versión básica, gratuita de un producto o servicio y se cobra por funciones o servicios adicionales.



blicas, hoy es ofrecido como un servicio privatizado, controlado por algoritmos que optimizan el contenido para la mayor rentabilidad posible.

Este extractivismo digital opera de diversas formas:

Captura de datos educativos: Plataformas de gestión académica recopilan información sobre estudiantes y docentes, desde su rendimiento hasta sus hábitos de aprendizaje, para alimentar sistemas de inteligencia artificial y mercados de publicidad.

Privatización del acceso al conocimiento: La concentración editorial en grupos como Elsevier⁶ y Springer⁷ limita la difusión del conocimiento.

6 Elsevier es una editorial con sede en los Países Bajos, especializada en publicaciones científicas, técnicas y médicas. Publica más de 2.800 revistas y más de 600.000 artículos anuales. Es propietaria de plataformas como Science Direct, Scopus y Clinical Key, que ofrecen acceso a investigaciones y datos científicos. Sin embargo, ha sido criticada por sus altos costos de suscripción y por restringir el acceso a investigaciones financiadas con fondos públicos.

7 Springer Nature es otra editorial académica de gran alcance, con más de 2.920 revistas publicadas. Es conocida por sus libros y revistas científicas, incluyendo Nature, una de

to científico, convirtiendo las publicaciones académicas en bienes de lujo inaccesibles para estudiantes de universidades de países con menos recursos.

Automatización y control del aprendizaje: Los algoritmos determinan qué contenido se prioriza, qué métodos de enseñanza se adoptan y cómo se estructuran los procesos de evaluación, desplazando el criterio humano y académico en la educación.

Deslocalización de la producción científica: La externalización de investigaciones a plataformas globales permite que empresas y universidades extranjeras exploten el conocimiento sin redistribuir los beneficios a las comunidades locales.

Este modelo de extracción digital no solo impacta el acceso a la educación, sino que también redefine el rol de los docentes e investigadores, subordinándolos a sistemas de medición algorítmica y estructuras de financiamiento dependientes de métricas de impacto. El conocimiento deja de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en un insumo dentro de cadenas de producción tecnológica dominadas por actores corporativos.

Recuperar el sentido del conocimiento como un derecho público y colectivo se torna prioritario. Las universidades y los movimientos sociales han desarrollado redes de acceso abierto, bibliotecas digitales gratuitas y modelos de educación colaborativa que buscan romper con la lógica extractivista. La disputa no es solo tecnológica, sino política: ¿qué rol tendrá la educación en el futuro y bajo qué condiciones se producirá el conocimiento? ¿cuál es la especificidad de la educación en este contexto?, son preguntas que tienen que ser debatidas por fuera de la lógica mercantil corporativa.

Antiintelectualismo en la política contemporánea

El antiintelectualismo ha emergido como una herramienta política clave en el discurso de personajes conservadores de derecha y de la ultraderecha. Este fenómeno no solo se manifiesta en el desfinanciamiento de la

las publicaciones más prestigiosas en el ámbito de la ciencia. Al igual que Elsevier, ha sido cuestionada por sus modelos de acceso restringido y por la concentración de publicaciones en manos de pocas empresas.

educación pública, sino también en un desprecio activo hacia el pensamiento crítico y la producción académica.

Figuras como Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, como decíamos al principio de este artículo, han promovido narrativas que desacreditan a las universidades públicas y a los intelectuales con raigambre social, presentándolos como élites desconectadas de las “verdaderas necesidades” de la sociedad. Este discurso busca erosionar la confianza en las instituciones académicas, presentándolas como espacios ideologizados y alejados de la realidad económica.

El antiintelectualismo opera en varios niveles:

Desfinanciamiento sistemático: La reducción de presupuestos para universidades y centros de investigación no solo limita su capacidad operativa, sino que también envía un mensaje político sobre la falta de prioridad que se le otorga al conocimiento.

Desprestigio del pensamiento crítico: Se promueve una visión utilitaria del conocimiento, donde solo se valora aquello que tiene aplicaciones comerciales inmediatas, relegando las ciencias sociales, humanísticas y todas aquellas que abrevan en el pensamiento crítico.

Ataques discursivos: dirigentes políticos que desacreditan públicamente a académicos e investigadores, reforzando la idea de que la educación superior es un espacio de adoctrinamiento ideológico. Posturas que un sector del periodismo acompaña y promociona en la construcción de la opinión pública.

Promoción de alternativas privadas: Se impulsa la privatización de la educación como una solución “eficiente” frente a las supuestas ineficiencias del sistema público, reforzando la lógica de mercado.

Este rechazo al pensamiento crítico no es casual, sino estratégico. Al debilitar a las universidades como espacios de cuestionamiento y resistencia, se facilita la implementación de políticas que benefician a las élites económicas y consolidan estructuras de poder desiguales.

Sin embargo, frente a esta ofensiva, las resistencias persisten. Movimientos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales han levantado la voz en defensa de la educación pública como un derecho y un espacio de emancipación. La lucha no es solo por recursos, sino por el sentido mismo del conocimiento: si será un instrumento de liberación o un producto más dentro de la lógica mercantil.

Colonialidad del saber y colonialidad del poder: la estructura profunda de la desposesión del conocimiento

La desposesión del conocimiento público, la mercantilización de la universidad y el extractivismo tecnológico no son fenómenos aislados, sino expresiones de una lógica histórica más profunda: la colonialidad del saber y la colonialidad del poder.

El concepto de colonialidad del poder⁸, nos permite entender cómo las estructuras coloniales no desaparecieron con la independencia de los países, sino que fueron reconfiguradas en nuevas formas de dominación. En el ámbito del conocimiento, esto se traduce en un sistema global donde las instituciones, disciplinas y legitimaciones del saber siguen estructuradas en función de las jerarquías impuestas por el colonialismo.

La colonialidad del saber⁹, por su parte, se refiere a cómo el conocimiento es producido, distribuido y validado dentro de un esquema que reproduce la hegemonía de ciertos centros de poder. Las universidades de países periféricos son constantemente subordinadas a agendas de investigación dictadas por países centrales, mientras que epistemologías indígenas, populares y alternativas son marginadas o directamente invalidadas en el circuito académico global.

Un claro ejemplo es el sistema de créditos que deberán obtener los estudiantes, anunciado recientemente por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez en un posteo de la red X; puesto que esa subsecretaría será la autoridad de aplicación a partir de 2027. Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos, ECTS (por sus siglas en inglés) copiado del europeo del cual nos ocuparemos en algún otro artículo, porque hace al proceso de la colonialidad del saber en tanto es parte de la imposición de la estandarización sistémica.

Estos conceptos explican el porqué de todos los mecanismos de apropiación que analizamos en el artículo:

El desfinanciamiento de la universidad pública responde a una estrategia que empuja a la educación a depender de estructuras privadas de validación, reforzando la lógica de dependencia económica.

8 Aníbal Quijano: "Colonialidad del poder y clasificación social" Binghamton University New York. 2000

9 Walter Mignolo: "La idea de América Latina, la herida colonial y la opción decolonial". Gedisa. España. 2007

El capitalismo cognitivo profundiza la idea de que el conocimiento es un bien exclusivo de quienes tienen el poder de financiarlo, manteniendo una brecha estructural entre el saber producido en países centrales y periféricos.

El extractivismo tecnológico funciona como una nueva forma de desposesión, donde los datos, investigaciones y sistemas educativos de países con menos recursos son explotados sin que sus comunidades se beneficien de ello.

El antiintelectualismo opera como una herramienta de control político, desacreditando el pensamiento crítico para evitar cuestionamientos sobre estas estructuras de dominación.

Entender la desposesión del conocimiento como parte del proceso de la colonialidad nos permite ver más allá de los síntomas y comprender el curso histórico que sostiene la apropiación del saber. La disputa por el conocimiento no es solo económica o tecnológica, sino profundamente geopolítica y epistémica.

Desde quienes luchamos por la universidad pública, como por la educación en todos sus niveles, con la potencia gremial y las herramientas que nos brindan la ciencia crítica y la epistemología decolonial, debemos enfrentarnos no solo a la privatización, sino a una estructura global que define quién puede producir conocimiento “legítimo” y bajo qué condiciones. No sólo se trata de defender recursos, que es una parte importante de la lucha sino también de construir modelos de educación y producción del conocimiento que rompan con las lógicas neocoloniales de la estandarización mercantilista y permitan una verdadera democratización y socialización del saber.

Antes de que la violencia epistemológica y la voracidad capitalistas nos ponga en la encrucijada fatal de aquella breve y siniestra historia que contaba Eduardo Galeano: “El democrático rey convoca a los animales, al pato, a la gallina, al cerdo... y les pregunta. ‘¿Con qué salsa desean ser comidos?’ y el pato le dice: ‘Yo no deseo ser comido’. A lo que el rey responde: ‘Eso no está en discusión’”; es decir, cuando se nos impida decidir o peor, cuando se nos impida pensar y ni siquiera nos demos cuenta de que eso está ocurriendo.



Construir otro paradigma de Universidad Pública

Universidad Empresaria o Comunitaria y Popular

Marcos Britos*

La reforma Universitaria, considerada como un todo, ha perdido su vigencia.¹

Rodolfo Puiggrós. Rector UBA 1973

¿Ante el ataque del gobierno de Milei contra la Universidad Pública, la respuesta es defender la autonomía sin revisar la Reforma de 1918? ¿No será momento de poner una lupa sobre a quién está beneficiando la autonomía universitaria y cuánto hay de fuegos artificiales y chantajes cruzados entre Milei y Yacobitti?

A lo largo de los últimos treinta y cinco años la Universidad Pública fue siendo fagocitada por el capital privado, financiero y mercantil, en un acuerdo de partes reglamentado en su repartija por el Consejo Superior de sus gerentes académicos. Esta reconversión fue planteada y desarrollada en sus bases fundacionales por Oscar Shuberoff a partir de 1985 y sellada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín cuando acordaron los límites de la reforma constitucional en el Pacto de Olivos de 1992/3. La resultante es un presente en el cual la Universidad Pública usa sus herramientas generadoras de conocimiento al servicio de la acumulación de plusvalía de empresas privadas, con un beneficio empresario recípro-

* Ex dirigente sindical no docente. Integra la Agrupación Rodolfo Puiggrós de trabajadores y jubilados de la UBA. Investigador de la Biblioteca Nacional.

1 Puiggrós, Rodolfo. Entrevista. Revista Panorama. 14 junio de 1973.

co: las universidades estatales también acumulan plusvalía por la venta de su mercancía en forma de “transferencia tecnológico/científica”. Las consecuencias son múltiples y se expresan en acumulación de denuncias de corrupción y competencia, repartija de empujones y beneficios de particulares o grupos de particulares, en un contexto de discusiones que ocurren en las Comisiones de los Consejos Superiores, donde lo central pasa por las cláusulas de los convenios, los contratos, las prestaciones de servicios a terceros, los recortes presupuestarios internos y la respuesta a los chantajes financieros externos e internos, con prestidigitación financiera. Luego, como en un directorio empresario, se dan discursos y se levanta la mano en base a los acuerdos logrados en las oficinas circundantes.

Esto funcionaba en orden desde los años 90, hasta que llegó Milei. En su delirio capitalista financiero a ultranza, se corrió de los acuerdos del Pacto de Olivos y se propuso enfrentar al *Partido del Estado*, es decir, lo que él considera una alianza entre radicales, peronistas (y variantes) para aprovecharse de los empresarios usando al Estado como herramienta de presión y sometimiento. En ese sentido, es terraplanista en su valoración de la evidencia técnico/científica respecto del sentido del Estado. Como parte de esa disyuntiva, la Universidad Pública se encuentra en la misma situación que cualquier otra institución del *sistema Estado*: hundirse o acordar con el gobierno.

Ahora bien, acordar con Milei es acordar un precio, no un objetivo. Su objetivo se asienta en que al país que él imagina, le alcanza con las empresas de educación privadas que ya existen. Por eso propone una reducción total de la financiación pública y su reemplazo por los enormes ingresos (que solo conocen y manejan los gerentes académicos) de esa venta de servicios a terceros, para que ese capital no se destine a las campañas partidarias de los gerentes académicos y sus negocios. Y si hiciera falta más dinero, que cobren los títulos de grado, como ya lo hacen con los posgrados. Este debate se da en el marco de un paradigma acordado y aceptado por las partes: la reducción del presupuesto universitario público para ser reemplazado por el capital privado. ¿Las diferencias? Son de ritmos y grados. Las consecuencias son catastróficas para la universidad, pero también para la sociedad.

Por todo esto, se hace urgente volver atrás. Es urgente encontrar puntos de referencia para analizar qué Universidad hace falta construir,

qué Universidad proponemos para esa transición y cuáles serían las tareas a impulsar para lograrla.

¿Universidades públicas que funcionan como repúblicas independientes que exportan su producción asociadas a empresa privadas?

La insurrección estudiantil que generó la Reforma de 1918 venía empujada desde 1903, cuando el estudiantado en la UBA logró reivindicaciones democráticas haciendo frente a gobiernos e instituciones externas opuestas a cualquier progreso. A trescientos años de su fundación, la iglesia católica aún mantenía un fuerte control sobre los estratos académicos. Promovía contenidos y dinámicas pedagógicas (aún se enseñaba Teología y Derecho Público Eclesiástico como materias de Abogacía). El método crítico y la duda razonable no formaban parte de las herramientas pedagógicas de ninguna Facultad. Cuando la crisis internacional derivó hacia la Primera Guerra Mundial, el contexto de esa academia reaccionaria estaba integrado por fábricas cargadas de obreros anarquistas y marxistas que miraban hacia los Congresos de Delegados de Asambleas Obreras, en el país que construía la URSS. Así, un sector de la burguesía local comprendió, como necesidad de época, la importancia de lograr espacios de participación democrática en la gestión universitaria para que ésta se interesara por los problemas sociales, promoviendo que el conocimiento generado en las universidades públicas aportara a morigerar – al menos en parte – las demandas sociales. El *progreso* ingresó entonces a la Universidad encabezado por Deodoro Roca – un representante de la burguesía liberal cordobesa – atropellando a la reacción conservadora cuyos cimientos se conformaban con dos grandes vigas de soporte: la iglesia católica (desde la colonia) y los terratenientes exportadores vinculados a Inglaterra (desde la Revolución de Mayo). La autonomía universitaria fue un ariete de batalla y se transformó en la torre defensiva de la universidad pública progresista. La iglesia católica perdió su baluarte.

Casi 80 años después, la reforma constitucional pactada de 1994, le dio rango constitucional a la autonomía universitaria. Pero la reacción había mantenido siempre su combate contra la autonomía, buscando retomar el control de *las fábricas de conocimientos*. Las universidades públicas (únicas que existían) fueron intervenidas por los gobiernos en

múltiples oportunidades. La recuperación de la autonomía y la democracia interna en la gestión se transformaba siempre en bandera de lucha impulsando movilizaciones y crisis recurrentes. En esa dinámica, que aparecía como periódica e inevitable, hacia mediados de los años '80 del siglo pasado, el "hundimiento del socialismo real" golpeó las puertas universitarias en todo el mundo. En simultáneo y no casualmente, un salto tecnológico/científico inconmensurable inició un proceso cualitativo para la capacidad de producción y distribución de mercancías del capitalismo. Esta vez, el protagonista central no fue un burgués liberal sino un síndico de empresas, hábil para la prestidigitación de las columnas de los balances contables y las negociaciones políticas: Oscar Shuberoff.

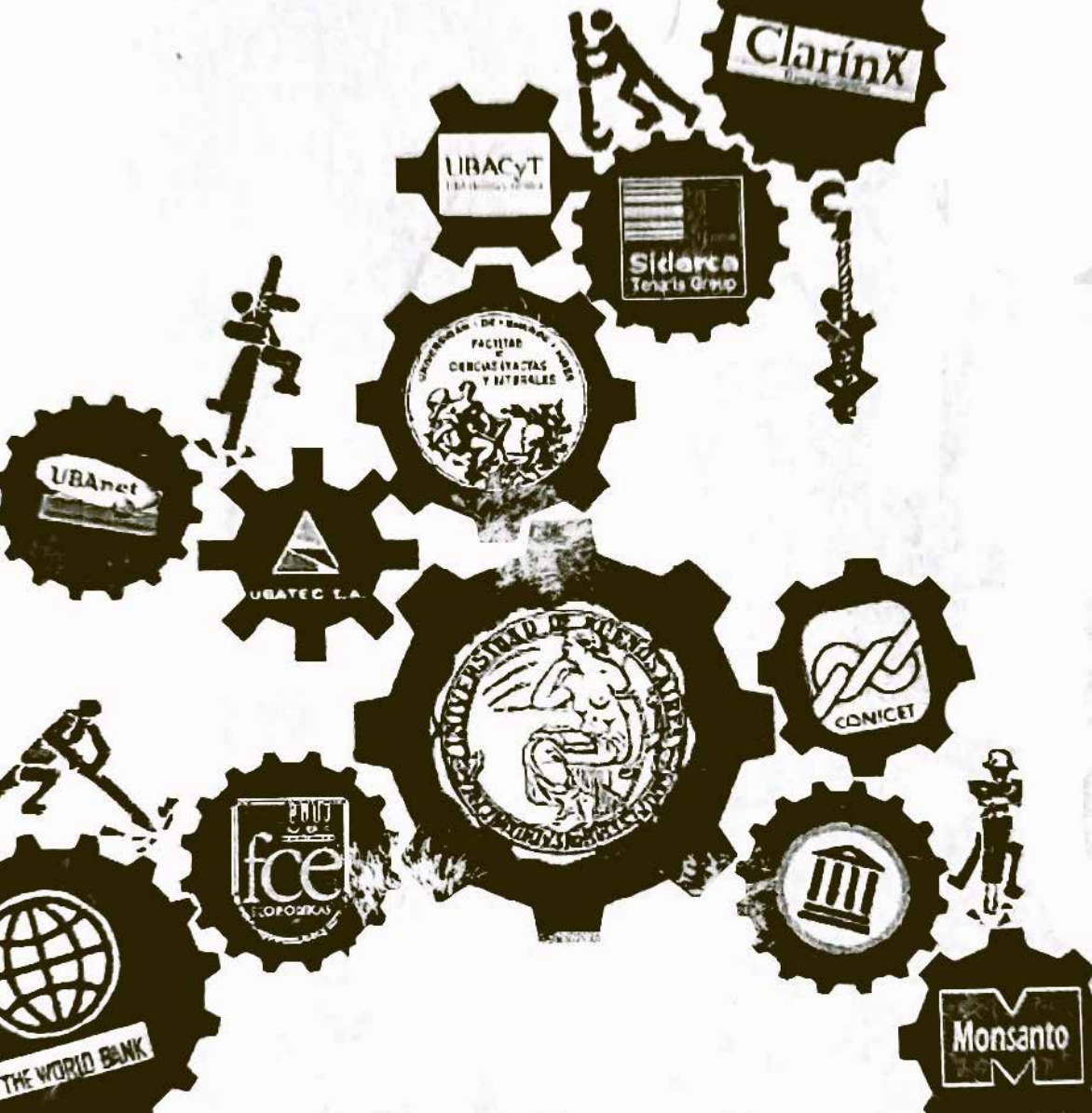
Coincidiendo con la ofensiva imperialista que derrocó sangrientamente al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, desde mediados de los años 60 la Casa Blanca venía tanteando la posibilidad de asociar las empresas privadas a las Universidades Públicas de alguna manera (la Fundación Ford - una vez más - hizo punta en esta perspectiva).² Pero fue recién en 1987 cuando la Resolución Shuberoff número 1195, creó la primera Dirección de Convenios y Transferencias que tuvo una universidad pública en argentina. Siguió la Universidad de Mar del Plata al año siguiente y cuatro años después Shuberoff creó UBATEC S.A. Fue la primera empresa privada en la que participó la UBA como socia capitalista de cámaras empresarias (la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural) y un representante del partido peronista en el gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires: Carlos Grosso. Cada socio aportó, democráticamente, un 25% del capital societario. Es decir, cuando en 1994 la autonomía universitaria alcanzó rango constitucional para crear un blindaje inexpugnable, el capital empresario ya era parte societaria con la UBA. El acuerdo traía un haz de espada bajo la manga: el capital generado por la venta de la mercancía producidas por la UBA a los empresarios privados, sólo sería contabilizado por la UBA. Por lo tanto, al no ser parte del presupuesto público, quedaría por fuera del control y/o auditorias del Estado Nacional. Por lo tanto, la autarquía absoluta de la contabilidad de estos fondos está asegurada por el blindaje constitucio-

2 Arana, Mariano. *La Fundación Ford en Argentina a principios de los años sesenta. El caso de la Escuela de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires*. 91. Serie de documentos de trabajo del IIEP /UBA-CONICET. Junio 2024. Disponible en Internet.

nal de la autonomía universitaria. Oscar Shuberoff fue el visionario. En el presente, todas las universidades públicas tienen estas dos banderas flameando asociadas en su mástil más alto.

Para el neoliberalismo, como expresión política del capital financiero, el acuerdo fue pura ganancia: podrían reemplazar progresivamente al presupuesto estatal. Mientras tanto, los “fondos propios” podrían ser redirigidos según criterios de costo beneficio o acuerdos de partes convenientes mientras que el empresariado tiene hoy la misma dimensión que en su momento tuvo la iglesia católica en la universidad pre reformista. Al mismo tiempo, las Universidades tienen un nivel de autonomía respecto del Estado Nacional que permite que funcionen con tanta o mayor autonomía que una Provincia. Porque no hay manera de cuestionar y controlar la totalidad de su administración contable, su gestión académica, su objetivo pedagógico, su política para la producción de conocimientos; si no es desde el control de sus áreas de gestión. Es decir, sin ser parte invitada. Por lo tanto, la “pérdida de vigencia” señalada por Puiggros se consolidó como “ausencia” a partir de que no hay autonomía universitaria frente al capital privado. En su momento, la *autonomía universitaria* tuvo sentido como herramienta contra la reacción que desde afuera de la universidad pública intervenía (policial y militarmente a veces) para controlar el conocimiento y producir el necesario para sus intereses. Hoy la reacción controla la generación de conocimiento desde los estrados académicos, pero además los ha transformado en una mercancía. El capital privado colonizó las universidades públicas, se hizo determinante para su funcionamiento y sus objetivos estratégicos.

Esta reconversión requirió una reingeniería compleja, que fue conformándose como algo naturalmente aceptado a lo largo de tres décadas. Esa reingeniería incluyó la modificación del Estatuto Universitario, la implementación de normativas que adaptaron los vínculos laborales con el estamento universitario asalariado, la elaboración de Leyes que regularon el funcionamiento de estas “nuevas/otras” universidades pública mediante el rediseño de estructuras de gestión administrativas y académicas, la reorganización/eliminación de cátedras y gastos improductivos en términos de costo beneficio capitalista, la creación de áreas específicas para la gestión del capital privado generado por la Universidad Pública, etc. Como producto de todo esto, se generó una *casta administradora* por sobre toda la estructura académico/administrativa existente



hasta el momento y se instaló la competencia, la insensibilidad social, la promoción del egoísmo y el clientelismo como vínculo privilegiado, la corrupción lisa y llana, el desprecio por la verdad y el oscurantismo consiguiente. De todas estas expresiones hay ejemplos por centenares, Facultad por Facultad y Universidad por Universidad. A manera de ejemplos señalamos algunos casos en el ámbito de la UBA.

- Entre 1991/2016, campos de la UBA con administración privada. Desde 2016 Sociedad Anónima Unipersonal (del Rector). La UBA tiene

17.000 hectáreas de campos propios en las zonas más productivas de la pampa húmeda: San Claudio, en Carlos Casares, con 5.467 has; Perhuiil en Laprida, con 10.818 has y Los Patricios, en San Pedro, con 1054 Has. Otras 6.000 has en tres grandes islas del río Paraná, en Santa Fé. Hasta 1991 los administraba una Comisión de Administración de Campos, con participación de la Facultad de Agronomía y personal de planta permanente. Rendía cuentas a la Dir. Gral. de Asuntos Económicos Financieros bajo dependencia directa del Consejo Superior. A mediados de 1991 se concesionó la gestión administrativa. En los campos había 11.000 vacunos y producían doble cosecha anual en unas 4.000 hectáreas agrícolas. Los escándalos por los manejos de los Campos son habituales. En 2014 el rector Hallú (kirchnerista) acordó con el INTA la administración (paga) en reemplazo de la empresa privada. El nuevo rector Barbieri (masista) canceló el contrato porque el INTA cobraba mucho más que la empresa y su gestión era peor. ¿La solución? Una Sociedad Administradora de Campos de la UBA - SAU (Sociedad Anónima Unipersonal), bajo control del Rector.

- En 2020, criptogate de la UBA. En 2018 la Facultad de Ciencias Económicas creó una Agencia Calificadora para proyectos de inversión. En abril de 2020 la Agencia firmó un convenio con una empresa llamada *SeSocio* (!). Publicaciones “especializadas” informaron que la UBA se integraba “como nuevo miembro de la comunidad” de *SeSocio* mediante “un acuerdo colaborativo”.³ El 29 de junio de 2022, algunos días después de que el Decano de Ciencias Económicas de la UBA dejara el rectorado, se publicó “el carpetazo”: la empresa había facturado millones de dólares...pero sus promociones de inversión se fueron a la quiebra una y otra vez sin rendir dividendos. En palabras del periodista Fernando Trofelli:

Por supuesto desde la Agencia de la UBA se lavaron las manos. Por supuesto nadie pudo saber la opinión del Ex Rector Alberto Barbieri (...) “Las calificaciones representan un análisis de un proyecto a realizarse, pero no un seguimiento de que el proyecto se concrete, ni que se lleve

3 “La UBA se suma a *SeSocio.com* con una nueva calificación de riesgo”. *El Cronista Comercial*. 19 de abril de 2020. “El Centro de Estudios de la UBA se suma para calificar proyectos de inversión: cuáles son y cómo acceder a ellos sin monto mínimo. Infobae. 20 de abril 2020. Cómo captaba fondos la empresa *SeSocio* y el rol de la UBA”. Federico Trofelli. *Tiempo Argentino*. 29 de junio 2022

adelante de la forma planificada. La Facultad no realiza actividad de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación del cumplimiento del proyecto ni del destino de los fondos por parte de SeSocio PFC SA”, (...) “La decisión de inversión queda bajo la responsabilidad del inversor, apoyada en su capacidad, juicio, experiencia y el riesgo que esté dispuesto a correr”.

- 2022 La Dirección de Obra Social (DOSUBA) desvinculó a quienes se jubilan en la UBA. En la UBA, un descuento automático y obligatorio se destina a la DOSUBA. Pero el personal que se jubila pierde su condición de afiliado y no puede hacer uso de las prestaciones salvo que tenga una enfermedad de base preexistente. Solo hubo unas pocas resoluciones judiciales favorables. DOSUBA funciona como cualquier obra social: coseguros crecientes, asistencia cuando se logre turno, recorte de prestaciones, hospitales universitarios desfinanciados y en crisis. Pero el descuento es compulsivo. Corresponde señalar que la Universidad Pública tenía un régimen jubilatorio propio: desde los 55 años de edad y con 25 años de servicio, pero el 82% podía lograrse a los 60 años con cinco años de aporte particular. El *neoliberalismo* lo eliminó y el *progresismo* nunca lo devolvió.
- 2023 - Liquidación del sistema de salud preventivo para el claustro estudiantil. El examen preventivo de salud para estudiantes de la UBA fue un derecho sancionado en la Facultad de Medicina a finales de la década del 30 del siglo pasado. En 1965 se extendió a toda la Universidad con la creación del SUS (Servicio Universitario de Salud). Un legado “con cargo” permitió construir y equipar un edificio específico para la implementación del sistema preventivo. Desde mediados de los ‘80 el sistema comenzó a ser desfinanciado. Finalmente, pasando por sobre normativa universitaria y legal nacional, el Consejo Superior encabezado por Barbieri (Decano “peronista” de Económicas) y luego Gelpi (médico y decano “radical” de Medicina) y Yacobitti, vació la institución, dismanteló el edificio, reubicó al personal asistencial sin destino laboral y finalmente abandonó el inmueble. Todo con un único objetivo: reducir “gastos improductivos” y otorgar el edificio para el desarrollo de un proyecto económico de la Facultad de Psicología (hoy devenida al couchologismo y promotora de venta de asesoramiento en conductas). El papel de APUBA y la FUBA fue determinante para la aplicación de cierre y dismantelamiento.

Este tipo de situaciones ocurren en una universidad que se jacta, en su propia página web institucional, de las siguientes ventajas comparativas:

- Promover el acceso a Patentes: Presume de 180 patentes sobre conocimientos públicos.
- Tener un Centro Pyme que ofrece novedades de financiamiento, consultorías especiales, acceso a crédito, jornadas y ofertas tecnológicas y cursos de capacitación empresarial.
- Acceder a la marca comercial “Hecho en UBA” “Ecosistema” (sic) destinado al emprendedurismo (sic) que surja del seno de la comunidad universitaria.
- Ofrece un “holding” de EBT: Para promover y apoyar la creación de Empresas de Base Tecnológicas vinculadas societariamente a la UBA.

No es necesario seguir enumerando el entramado totalmente normalizado y normatizado de vinculaciones societarias con empresas privadas, pero si destacar este último punto de las EBT por su dimensión político/académica. Apelando a un Estatuto Universitario adaptado al servicio de la mercantilización del conocimiento, que dispone que las universidades no solo se limiten a la docencia y a la investigación sino que su “tercera función” debe ser la “transferencia del conocimiento” (vendiéndolo a las empresas que lo comprenden), define un reglamento para promover el “Holding EBT/UBA”.

[la UBA se propone] buscar mecanismos propicios que fomenten la vinculación y transferencia de los conocimientos científicos, tecnológicos y/o resultados de investigación derivados de las actividades de enseñanza, investigación y/o extensión generadas en el ámbito de esta Universidad (...) el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Resuelve: Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento para la Creación y Promoción de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires, que como Anexo (ACS2023-533-UBA-SG#REC) forma parte de la presente Resolución, encuadrándose en el Capítulo C Código UBA I-43.⁴

- 1992/2002 Conformación de una casta burocrática como superestructura política de gestión. Al inicio del gobierno de Alfonsín, la máxima estructura de gestión administrativa de la UBA la ocupaban unas quin-

4 Resolución del Consejo Superior de la UBA N° 1973 de 2023.

ce personas de planta permanente con cargo de Dirección General. Por sobre esta línea se ubicaban cuatro Secretarios del Rector. A partir de 1990 la gestión académica-administrativo-contable se multiplicó por más de diez. Con cargos de Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores o equivalentes. Solo en Rectorado son casi cincuenta cargos políticos que, a su vez, tienen designados sus coordinadores y responsables de sectores en total unas 400/500 personas (sólo en la Auditoría hay 24 profesionales y dos secretarías). Teniendo en cuenta que cada Facultad puede crear su propia casta de gestores, es posible que sean más de mil personas los que integran la gestión político/académica de la UBA.

Dicho esto, la pregunta inevitable es ¿es necesaria la autonomía universitaria para definir objetivos universitarios estratégicos?. ¿Y autarquía para la acumulación de capital propio?. Esta perspectiva era inconcebible en 1918 y por eso nunca fue parte de los debates de la Reforma. Pero en esta Universidad es imprescindible plantear, en primer lugar, que el Estado Nacional debe aportar el presupuesto público necesario - presente y futuro - para el funcionamiento íntegro y completo de las universidades públicas. Sumando a eso, el conocimiento generado en las Universidades Públicas debe priorizar las necesidades de la mayoría de la sociedad, especialmente los sectores más desprotegidos frente al poder del capital.

Aquí resulta necesario, como referencia histórica, poner sobre la mesa una intervención de Ernesto Che Guevara un 17 de octubre de 1959 (vaya fecha!). Reivindicándose en su condición de cordobés graduado en la universidad donde se originó la reforma de 1918, intervino en un debate de la Universidad de Oriente sobre la perspectiva universitaria y la revolución en curso en la Cuba pre-socialista. Allí condenó la autonomía universitaria y advirtió: el gobierno saldría a competir con una universidad construida de acuerdo a las necesidades de las clases pobres y del país como nación.⁵ Rodolfo Puiggróss, ya como Interventor de la

5 Guevara, Ernesto. Intervención en el ciclo de conferencias acerca de «Universidad y Revolución», en la Universidad de Oriente. Revista Mambí, 15 de octubre de 1968. páginas 4-10. En la revista Cuadernos de Cultura de enero de 1960, el PC publicó la intervención que en la misma conferencia hizo Juan Marinello, Presidente del Partido Socialista Popular de Cuba (PC) de Cuba. Con un lenguaje barroco y complicado hasta para experimentados lectores, Marinello coincidió con el Che en el problema de la Autonomía Universitaria destacando en varios párrafos algunas características de la Universidad Pública en Argentina y la influencia de la Reforma Universitaria de 1918.

Universidad de Buenos Aires en 1973, planteó una disyuntiva coincidente con el planteo del *Che*: ¿autonomía universitaria – determinada y controlada por quiénes – al servicio de qué objetivo? Cuatro años más tarde, Juan Carlos Portantiero, se sumó a esta perspectiva considerando perimida la reforma universitaria.⁶

Bases para una Universidad Pública Comunitaria y Popular

Siguiendo esta línea, corresponde retomar un principio básico de la Universidad reformista: las únicas “prestaciones a terceros” deben ser gratuitas y públicas, al servicio del Estado (laico). A lo que deberíamos agregar: “y de las organizaciones sociales y populares bajo requisitos de fiscalización democrática”. Aún así, considerando que hay una importante cantidad de trabajadores y trabajadoras pendientes de recibir su salario, o beca, de este entramado de negocios:

1. El Estado Nacional debe hacerse cargo de los compromisos (laborales y científicos) con los proyectos de investigación existentes hasta su caducidad, en tanto y en cuanto los mismos no afecten la soberanía nacional en todos sus planos, ni atenten contra conquistas de la clase trabajadora y el pueblo, ni signifique asumir compromisos sobre patentes o formas de privatización y confidencialidad de los resultados.
2. Todas las empresas favorecidas en sus ganancias por la compra de conocimientos a la universidad pública, deben destinar un porcentaje de sus utilidades al financiamiento de la Universidad Pública.
3. Prohibición de toda patente, confidencialidad o secreto sobre los descubrimientos y hallazgos que pudiera producir una investigación, convenio o compromiso hacia “terceros” (excepto para aplicaciones en función de la defensa nacional).

Pero como también se ha acumulado un capital privado en las universidades (que puede inferirse mil millones en dólares anuales), devenido del papel Empresario de las Universidades Públicas, proponemos:

6 Portantiero, Juan Carlos. *Estudiantes y Política en América Latina. El proceso de la Reforma Universitaria 1918-1938*. EUFyL 2018 (segunda edición) pág. 36. Portantiero basa su apreciación en que “la figura social del estudiantado que intentaba representar ya no existe”

1. Que todas ellas centralicen en una contabilidad única y pública, dependiente de cada Rectorado, todos los ingresos de capital (en todas sus formas) por ventas de productos a terceros (cualquiera sea la calidad institucional de los mismos).
2. Que dicha información, centralizada por el CIN, sea publicada en la web.
3. Que esa contabilidad (nunca auditada por un organismo público) sea auditada por una Comisión de Fiscalización creada a tal efecto, con participación plena de organizaciones populares y de la comunidad universitaria.
4. Que la auditoria se haga desde el presente hacia el pasado, hasta donde los comprobantes aun existentes lo permitan, y se evalúen las responsabilidades de las posibles fallas a los efectos de las denuncias que correspondan.
5. Que dicho capital se destine exclusivamente a inversión universitaria según las necesidades más urgentes generadas por la actual política de chantaje y destrucción de la educación pública universitaria del gobierno de Milei.

¿Qué hacemos con Consejos Superiores producto de una democracia calificada?

Entre 1903 y 1918 se produjo la apertura del gobierno de la universidad a métodos más democráticos y desde mediados de los años '50 se comenzó a valorar la participación de trabajadores sin funciones docentes. Pero aún hoy todas las propuestas aceptadas consideran una representación paritaria, sin que haya un método científico para esta determinación. Es decir, sigue siendo una rémora del pasado porque mantiene la representación minoritaria para el sector mayoritario, pero que además es el más permeable a nuevas ideas y a la movilización para lograr sus objetivos: la juventud universitaria.

Cuando en 1958, anulada la reforma Constitucional de 1949, se convocó a Asamblea Universitaria para reformar el Estatuto de la UBA, en el contexto de una nueva ofensiva conservadora: buscaba lograr la habilitación de empresas privadas de educación universitaria (sólo existían academias de alcance técnico/terciario) y la habilitación del título de grado para las universidades confesionales (que hasta ese momento sólo tenían insti-

tuciones de alcance confesional). Al mismo tiempo, la Fundación Ford comenzaba a intervenir con sus propuestas. El gobierno de Arturo Frondizi, triunfante por los votos peronistas, habilitó el retroceso del reformismo en beneficio de empresarios y el retorno de la iglesia católica. La movilización estudiantil fue gigantesca y eso no permitió que se cumplieran todos los objetivos de la reacción. Pero las empresas de formación universitaria y las universidades confesionales hoy ocupan un espacio determinante en la creación y difusión de conocimientos (poco o nada científicos). De los debates de la Asamblea Universitaria de 1958 rescatamos el planteo solitario de Mario Bunge, académico socialista de dimensión internacional por sus elaboraciones teóricas, quien explicó por qué la reacción buscaba coartar lo más posible la presencia estudiantil y docente “de aula” en el gobierno universitario. Y explicó que el estamento de graduados no debía ser considerado un “estamento universitario” y en cambio los trabajadores sin cargo docente debían integrarse al Consejo Superior.

El resultado de aquellas resoluciones lo tenemos en la democracia calificada de la propia UBA, en donde 31 representantes se reúnen como Consejo Superior. Los 300.000 estudiantes tienen cinco representantes y la misma cantidad representan a unos 40.000 docentes. Pero como votan solamente los docentes permanentes y titulares, la proporción es otra, porque los docentes en condiciones de votar son unos 5.000 (no casualmente, la UBA no publica este padrón). Ahora bien, considerando que el Rector/a, el Vice y Decanos/as son (o han sido) docentes, mas cinco graduados (por lo general también docentes), suman 25 docentes. Además hay un/a representante del personal sin funciones docentes, pero representando a APUBA como organización, y sin voto! Si el Director/a General del Clínicas o de Asuntos Jurídicos de la UBA, ocupara un escaño, no tendría voto. Cabe agregar que la elección indirecta de un Decano/a o Rector/a, impone negociaciones complejas y secretas, así como condiciones políticas, administrativas y académicas.

Ante esto, una propuesta que retome las perspectivas de la Reforma del 18 y expulse al capital privado como se expulsó a la iglesia católica entonces, va a necesitar aplicar una reingeniería revolucionaria respecto de la estructura de gestión. Esto es la implementación de los métodos de la Democracia Directa para la gestión Universitaria: un voto por cada integrante de la comunidad universitaria (con eliminación del claustro de graduados) y representación proporcional en la gestión. A saber:

1. Elección directa por parte de la comunidad universitaria, de rectores, decanos, cargos académicos y de gestión administrativa en base a requisitos de condiciones.
2. Elección directa al Consejo Superior de los representantes estudiantiles.
3. Elección directa al Consejo Superior - con padrón único y proporcionalidad por ítem laboral - de los trabajadores/as universitarios/as (cualquiera sea su especialidad)
4. Los decanos (docentes) ocuparían su estrado por la responsabilidad institucional en las Facultades.
5. Como proponía Mario Bunge en 1958, los graduados/as deberían acceder al Consejo Superior y Consejos Directivos solo como miembros efectivos de la comunidad universitaria o como integrantes de organizaciones sociales que se integren como tales a los órganos de control, supervisión y/o asistencia a las Universidades.
6. Prohibición de designaciones sin concurso para todos los cargos no electivos de las Universidades.
7. Prohibición de mantener cargos vacantes (en todos los estamentos) por más de dos meses luego de producida una vacante, en las estructuras tanto académicas como de gestión.
8. Prohibición de realizar concursos que no sean públicos y de carácter presencial.

Esto significaría un Consejo Superior con 30 estudiantes, 20 docentes y 2 no docentes. Todos con voz y voto, mas referendum universitario en caso de paridad ante decisiones claves. Es otro paradigma para el gobierno universitario a partir de plantear otro paradigma para la Universidad Pública.

¿Cómo controlar eficazmente las finanzas públicas y las encriptadas de las Universidades Públicas?

Como parte de ese nuevo paradigma es fundamental cerrar todos los pasos posibles a la corrupción profundizando los medios de control. Para ello proponemos:

1. Creación de órganos populares de control y supervisión (por Facultad y por Universidad) integrado por las asociaciones sociales que estén interesadas en ser parte de los mismos, con acceso directo a todas las

- instancias para conocer su funcionamiento y presentar sus propuestas de mejoras, críticas o denuncias.
2. Elección directa por parte de los trabajadores/as de los Directores de todas las áreas de gestión con revocación o continuación de mandato por referéndum anual.
 3. Eliminación de la “planta política” como casta de gestión. Regreso a la planta permanente con carrera laboral como único sistema de gestión.
 4. Rendición de cuentas públicas del uso mensual del Presupuesto Universitario asignado: ante los poderes del Estado Nacional y ante las organizaciones populares que se involucren en la educación universitaria. Toda su contabilidad debería ser publicada y ser de libre consulta.
 5. Auditoría integral anual con participación plena de los organismos de control y supervisión populares, de todos los convenios, contratos, acuerdos y variantes similares, que estén firmados con “terceros”. Para evaluar el resultado de su administración económico financiera y realizar las denuncias penales que pudieran corresponder.

Sobre esta plataforma, planteamos la necesidad de impulsar un proceso de reorganización completa, de reconversión total para un nuevo paradigma educativo, eliminando la educación como negocio o como herramienta de control ideológico al servicio de las confesiones religiosas o los empresarios. Habrá que elaborar las medidas que puedan tomarse según las fuerzas sociales que se vayan construyendo con ese sentido. El conocimiento público debe ser científico, laico y gratuito en todos sus niveles. Por lo tanto, corresponde expropiar para el Estado las empresas privadas que prestan servicios educativos universitarios, (sean o no confesionales) integrándolas al sistema público bajo sus mismas normas y criterios académicos, retrotrayendo el sistema a la situación de las instituciones de educación universitaria previa 1958. Finalmente la prohibición para la creación y funcionamiento de instituciones educativas confesionales, así como la presencia de todo signo, actividad o manifestación religiosa en los ámbitos universitarios y educativos.

El primer eslabón de una cadena

Esta propuesta de reingeniería positiva del sistema educativo universitario, requiere de una reconversión revolucionaria contra la reacción a la Reforma de 1918, que finalmente ha logrado colonizarla con las herra-

mientas tradicionales del capital: el dinero, la corrupción, el clientelismo, la deslealtad, el individualismo y la competencia destructiva. Como resultante: oscurantismo y superficialidad. Sin duda que esto requiere una transformación revolucionaria de la sociedad capitalista en una nueva sociedad como la que tanto odian y temen (en partes iguales) los políticos burgueses y sus mandantes: el socialismo en sus posibles formas recreadas, las que tomen en cuenta las experiencias de la historia para revalorizarlas y evitar cometer los errores que llevaron a su retroceso. Sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazo esperando que esto ocurra, o que todo se derrumbe. Por lo tanto, para el “mientras tanto”, tenemos que imaginar formas de construir fuerza social organizada.

En primer lugar entendemos necesario desarrollar una paciente y profunda campaña de debate dirigida a la comunidad universitaria sin distinción de estamentos: ¿En qué se parece y en qué se diferencia, la actual Universidad Pública respecto de la Universidad Reformista? ¿Cuál es la Universidad Pública necesaria? ¿Para qué/quien trabajamos o estudiamos en esta Universidad Pública?

En segundo lugar la organización de la comunidad universitaria debe tender a abandonar la corporación por estamentos. El estudiantado es mayoritariamente un sector asalariado o desocupado, el docente y el no docente son asalariados, las consecuencias de esta Universidad Empresarial con Gerentes Académicos entrelazados con empresarios y funcionarios del Poder del Estado, de una manera u otra, nos afecta a todos por igual. La construcción de agrupaciones universitarias unitarias sería un gran primer paso para impulsar ese debate y hacerse cargo de las consecuencias.

No es posible definir el curso de los acontecimientos porque es dominante la incertidumbre generada por la ausencia de una clara dirección política para los sectores obreros y populares en general. Esta crisis puede, o no, devenir en fenómenos sociales masivos que nos lleven a un nuevo 2001 que lo supere en propuestas y acciones. Pero entendemos necesario plantearnos ante la perspectiva de una respuesta social para llegar a la misma con herramientas conceptuales y organizativas para intervenir en ella. proponemos para ello las siguientes tareas:

1. Difusión y debate del nuevo paradigma de Universidad Pública, señalando las consecuencias prácticas, materiales, concretas, que afectan la

generación de conocimiento, las elaboraciones científicas, los objetivos académicos y pedagógicos, los derechos humanos y sociales de las personas afectadas por la colonización mercantilista de la universidad pública, y especialmente, las consecuencias para los trabajadores de la propia universidad pública en sus condiciones de trabajo, salarios y jubilaciones.

2. Exigir a los organismos universitarios la anulación o modificación de toda la normativa vigente que permitió la reingeniería reaccionaria contra los principios de la Reforma de 1918.
3. Elaborar y sistematizar las propuestas necesarias para dar forma a la normativa (Estatutos, Reglamentaciones, Propuestas Académicas y de Desarrollo) que defina un nuevo paradigma de la educación universitaria argentina basado en los planteos aquí presentados.
4. Poner como norte estratégico concretar una asamblea Constituyente Universitaria que ponga en debate y resuelva sobre esta perspectiva de nuevo paradigma para dar forma a una Universidad Pública Comunitaria y Popular.



Antes de la revolución

Origen de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

Ulises Gorini*

Desde sus inicios como un ensayo singular de educación popular contrahegemónica, enraizada en la praxis política de la resistencia a la dictadura y la etapa posdictatorial de reestructuración neoliberal del capitalismo local, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) atravesó los vaivenes del ciclo político argentino y los propios virajes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. De aquella iniciativa de formación de cuadros revolucionarios –tal como lo había definido Hebe de Bonafini en su fundación, en los albores del siglo XXI– orientada a disputar los sentidos del saber hegemónico, pasando por sucesivas transformaciones derivadas de la crisis del proyecto original, hasta el asalto último del mileismo, que intenta clausurar definitivamente los espacios de pensamiento crítico y construcción de subjetividades emancipatorias, su derrotero refleja también los dilemas de la izquierda contemporánea y las trampas del posibilismo.

La UPMPM nació como una apuesta radical por la contrahegemonía. Fundada el 6 de abril del año 2000, en el marco de una renovada resistencia popular contra la reestructuración neoliberal del capitalismo

* Autor de *La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo*. Tomo I. 1976-1983; *La Otra lucha. Historia de las Madres de Plaza de Mayo*. Tomo II. (1983-1986); *Hebe de Bonafini, la biografía* (en prensa); fundador y titular de la Cátedra de Historia de las Madres de Plaza de Mayo en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

local, la Universidad surgió de una iniciativa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini, quien intentaba traducir el legado de lucha de las Madres en una propuesta educativa de nivel superior orientada a la transformación social profunda. El proyecto tenía un sentido militante y cierta impronta antiacadémica, remitía a las tradiciones de la educación popular y se proyectaba como un instrumento para la revolución social y política, aunque el planteo no resolvía por sí mismo los presupuestos epistemológicos que la orientarían.

El antecedente inmediato de la iniciativa había sido un ciclo de seminarios desarrollados durante el año anterior, que contó con la participación de algunos de los más destacados intelectuales de la izquierda revolucionaria y predominantemente de raíz marxista. Esa composición estaba en sintonía con la radicalización que Bonafini venía imprimiendo en el movimiento de las Madres, desde la inicial reivindicación de la militancia revolucionaria de los hijos-desaparecidos, pasando por la exaltación de la figura del Che Guevara hasta la proclamación del socialismo como meta. Entre esos intelectuales estaban los escritores David Viñas, Osvaldo Bayer y Ricardo Piglia, el filósofo León Rozitchner, el sociólogo Juan Carlos Marín, el dramaturgo Tato Pavlosky y el filósofo e historiador cubano Fernando Martínez Heredia, además de decenas de jóvenes intelectuales, en general formados en la universidad tradicional, pero con experiencias partidarias y militantes de izquierda. Fue en una reunión entre las Madres y ese grupo heterogéneo de intelectuales, realizada para celebrar la exitosa culminación de los seminarios, que Bonafini anunció la decisión de crear la universidad popular. Y fue Martínez Heredia quien, con cierta irónica admiración, señaló lo que parecía una paradoja: “En Cuba se nos ocurría crear universidades después de la revolución, nunca antes”.

De algún modo, el intelectual cubano estaba dando en una de las clave de la iniciativa de las Madres. La idea de “antes de la revolución” indicaba la intención de formar cuadros para contribuir al proceso revolucionario, en línea con la batalla cultural que Bonafini percibía como imprescindible para que avanzara el proceso de transformación profunda de la sociedad. Y la apuesta era apropiarse del recurso universitario, es decir, del más exigente nivel de formación desde una perspectiva contrahegemónica.

“Esta universidad será la cosa más hermosa, el sueño más grande. Es el camino increíble para la revolución que soñaron nuestros hijos”, dijo Hebe el día de la inauguración. La Universidad nacía en un momento de auge de la resistencia, luego del reflujo provocado por la ofensiva menemista. El punto de inflexión había sido 1996, en el vigésimo aniversario del golpe de Estado, cuando masivas movilizaciones en todo el país marcaron el inicio de un nuevo ciclo de lucha que culminaría en el levantamiento popular de 2001.

Por otra parte, una escuela de cuadros revolucionarios, en el sistema y la coyuntura del país en esa época, no podía pensarse ni realizarse como dependiente del Estado y tampoco como una institución privada. De ahí la idea de “universidad popular”, que enlazaba con tradiciones nacionales muy precisas, como las experiencias de educación popular en los orígenes del movimiento obrero argentino y posteriormente de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGT-A), en lo político con las iniciativas de anarquistas y socialistas, y en lo más estrictamente pedagógico con la escuela de Enrique Pichon-Rivière¹. En el ámbito latinoamericano, conectaba con la tradición de Paulo Freire y con las experiencias históricas de la Revolución Cubana, la experiencia chilena durante el gobierno del socialista Salvador Allende, la revolución nicaragüense y la emergencia del zapatismo en México. Pero, en lo concreto e inmediato, lo que había inspirado a Hebe era la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, que había creado una escuela para sus militantes y que ella había conocido en su último viaje a ese país.

La Universidad Popular pretendía formar cuadros políticos comprometidos, articular saber y práctica militante, y disputar la hegemonía cultural desde abajo. No respondía ni al mercado ni al Estado. Era, en palabras de Vicente Zito Lema, su primer director académico, “una aventura cultural que se propone superar las prácticas educativas del sistema, legitimadoras de la opresión”. “Esta Universidad tiene el propósito de estimular y organizar ámbitos grupales de reflexión creativa, articular la teoría y la práctica, generar herramientas para disputar la hegemonía intelectual, abrir un espacio para que los sectores populares y los nuevos movimientos sociales puedan participar y crear formas de construcción

1 Psiquiatra, psicoanalista y psicólogo nacido en Suiza y nacionalizado argentino (1907-1977).



política. Esta aventura cultural se propone superar las prácticas educativas del sistema, legitimadoras de la opresión. La Universidad pretende recuperar las tradiciones de luchas populares, transformar la sociedad y a nosotros mismos, en el saber y la lucha”, escribía Zito Lema, en un folleto de presentación del proyecto.

Hebe, por supuesto, no enunciaba los propósitos de esa manera, pero no solo coincidía con lo escrito por el director académico, sino que había creado las condiciones de existencia de un proyecto inspirado en lo que el poeta y dramaturgo escribía con tanta precisión y que recordaba ese tipo de relación que Madres establecía con ciertos intelectuales y que tan claramente había enunciado años antes María del Rosario Carballeda de Cerruti, secretaria histórica de la Asociación, cuando dijo que “hay amigos que saben decir las cosas mejor que nosotras y entonces les pedimos que las escriban”.

Por su parte, Hebe decía que el propósito era “enseñar sobre el valor de la palabra y de la vida. No sé si se enmarca en la filosofía, en la sociología, en la ética o en algo nuevo. No me asusta inventar y crear algo que salga de lo establecido”. Economía política y social; Arte; Investigación periodística; Derechos Humanos y Psicología social eran las seis carreras con que se iniciaba la Universidad. El proyecto incluía varios semi-

narios: Educación popular; Lectura crítica de *El Capital*, de Karl Marx; Psicoanálisis, capitalismo y marxismo; Literatura argentina y política; Cooperativismo; además de talleres de Cine documental y Fotografía, y Arte callejero. Todos los estudiantes debían, también, cursar dos materias obligatorias, cualquiera fuera el seminario en el que se inscribían: Formación política e Historia de las Madres de Plaza de Mayo. No habría títulos oficiales. Solo el Diploma de Madres.

La experiencia, evaluada en los términos en que había sido creada, fue exitosa. La concurrencia de estudiantes, que se fue incrementando año tras año, era uno de los indicadores, pero no el único. Sin embargo, Zito Lema pronto entraría en conflicto con Schoklender y decidió alejarse en el 2003. “No renuncio a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. No se renuncia a lo que se ama, y yo amo profundamente esta Universidad que soñé, fundé, puse en marcha, y de la que soy director académico y docente. He decidido alejarme de la Universidad para evitar las groseras provocaciones del administrador Sergio Schoklender, incompatibles con el espíritu y prácticas intelectuales que deben regir una institución universitaria. Son públicas mis profundísimas diferencias con el administrador Sergio Schoklender. Se trata de historias y conductas que remiten a nuestras muy distintas historias personales y que chocan absolutamente en el plano de la ética, la moral, la política y la cultura”. El director académico había intentado resolver antes que Hebe mediara en el conflicto y, efectivamente, ella lo hizo y favoreció a Schoklender.

Tanto la composición inicial del cuerpo docente como los programas de la currícula daban cuenta de que no se trataba solo de una manifestación de buenas intenciones. Aunque reunía en su seno diversas vertientes del pensamiento, todas ellas se inspiraban en el pensamiento crítico y revolucionario. Por supuesto que esta calificación no exime de un análisis más complejo de la experiencia ni otorga en sí misma certificados de pureza (que no los hay en ningún caso) ni de verdad indiscutible (que tampoco existe). Lo que se trata de señalar, en todo caso, es la intención y la direccionalidad de la naciente universidad popular.

Por algunos años, la experiencia anduvo por el carril originario y tuvo un éxito por lo menos en cuanto al poder de convocatoria, que se manifestaba tanto en el cuerpo docente como en los estudiantes. De hecho, no había ninguna otra organización que tuviera un eco equivalente, medido en capacidad de unir y amalgamar a una izquierda que no ter-

minaba de superar la derrota de las décadas anteriores, que no era solo local, sino internacional, y que simbólicamente estaba marcada por la caída del Muro de Berlín. Esta capacidad no era un mérito menor de las Madres.

Radicalización

Más de una década antes de la creación de UPMPM, Hebe había comenzado un proceso de radicalización de la línea política de Madres que trascendió en mucho las cuestiones de las violaciones a los derechos humanos. No solo se pronunciará sobre la política económica del Gobierno, sino que expresamente comenzará a hablar del socialismo como la aspiración de Madres; quizá, el hecho más simbólico de ese proceso fue la reivindicación de la figura del Che Guevara. Con el enorme prestigio y alto perfil de Hebe, la izquierda lograba una presencia en la escena política que compensaba, en parte, la extrema debilidad con la que había reaparecido tras el retorno del Estado de derecho y la búsqueda infructuosa de una representación electoral. De ese modo, la presidenta de la Asociación se convertía en la esperanza de recomposición de sectores revolucionarios cuya derrota había sido un factor determinante del surgimiento de Madres de Plaza de Mayo. Era como si se cumpliera un ciclo histórico en el que Hebe y sus seguidoras se convertían en un puente entre la generación de revolucionarios derrotados en los años 70 y el futuro. Para el sistema, sin duda, se había convertido en la peor de todas las Madres.

Lo paradójico es que ese posicionamiento no solo contrastaba con la escasa relevancia de la izquierda en el orden interno tras la dura derrota de los 70, sino que parecía ir a contramano en el nivel internacional; allí se estaba procesando algo todavía mucho más complejo. Si la política de reforma del socialismo impulsada por el flamante líder de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov prometía una renovación de la izquierda, en realidad condujo, en pocos años, a la liquidación del bloque comunista, que se expresaría simbólicamente en la caída del Muro de Berlín. En la práctica, sus efectos catastróficos recaerían en todos los sectores de izquierda en sus más diversas expresiones, y dejaría el terreno despejado para una nueva hegemonía mundial capitalista.

No solo era la crisis del movimiento comunista internacional, llegando a producir fenómenos como la autodisolución del Partido Comu-

nista Italiano, el más grande de Occidente. Incluso la izquierda crítica de la versión soviética, como la trotskista y la otrora nueva izquierda –sectores maoístas, guevaristas y otros–, que se creían a salvo, vieron cómo las consecuencias también recaían sobre ellos. Hasta los partidos socialistas y la socialdemocracia sufrieron retrocesos y muchos de sus partidos comenzarían un camino sin retorno ya no hacia el capitalismo, sino incluso hacia el neoliberalismo. El modelo soviético, con todas las críticas que había recibido desde la izquierda misma, no dejaba de ser una referencia del ideal de transformación progresista de la sociedad. Como expresó con claridad el filósofo León Rozitchner, “el fracaso en el campo internacional, con la caída del socialismo llamado real o con lo que se está esbozando como fracaso, hizo caer a su manera un imaginario que nos sostenía y alentaba a la gente de izquierda. Era, pese a sus distorsiones, en algunos lugares, un índice de realidad sobre el cual se apoyaba la presunción del optimismo revolucionario, o, en última instancia, el optimismo pensante de aquel que manejaba la teoría crítica”.²

Hebe, entonces, reforzaba su dirección hacia la izquierda, cuando en realidad el mundo parecía ir por otro camino. Por supuesto que no estaba sola, sino que ella, y con ella la Asociación, se sumaban al remanente de la izquierda revolucionaria local –un variopinto conglomerado que incluía desde comunistas y trotskistas hasta ex montoneros– y a la izquierda latinoamericana, en especial la Cuba socialista. En esa dirección emprendió su primer viaje a Cuba. La izquierda, entonces, encontró en ella un referente poderosísimo, intachable, incuestionable, intransigente, y en varias oportunidades, en medio de procesos electorales, la tentarían con candidaturas que ella rechazó sistemáticamente. A la vez, esa radicalización fue el blanco de numerosos sectores, sobre todo de la derecha, pero también del alfonsinismo y el progresismo, que la criticaban por haber abandonado un supuesto lugar neutral o por encima de las facciones políticas y haber partidizado un movimiento otrora, según ellos, universal.

Giro político

Esa orientación comenzó a cambiar apenas unos años después, con la llegada de Néstor Kirchner al poder y el paulatino acercamiento de la

2 Rozitchner, León, *Escritos políticos*, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2015, p. 141.

Asociación a su gobierno. Esa alianza implicó una inflexión profunda en la naturaleza del proyecto universitario. La aceptación —y luego la búsqueda activa— del apoyo del Estado marcó una ruptura con el principio fundacional de autonomía respecto de las estructuras estatales, un fuerte contraste con el rechazo que practicaba Bonafini de todo tipo de vínculo con el Estado. Pero el cambio fue más profundo que el establecimiento de este lazo: la Asociación que había desarrollado una fuerte impronta antisistema, pasaba de la oposición a formar parte del nuevo oficialismo.

Explicar ese giro excede el objetivo de este artículo. Pero no se puede dejar de apuntar que no era un fenómeno aislado de las Madres lideradas por Hebe de Bonafini, sino parte de una persistente crisis de la izquierda revolucionaria que no conseguía constituirse en una alternativa de poder frente al sistema y que en algunos casos comenzaba a desarrollar tácticas posibilistas. La crisis del capitalismo local y el estallido popular del 2001 podrían haber sido una oportunidad para una alternativa de cambio social profundo, pero ninguno de los que alzaban esas banderas lograron llevar el curso de los acontecimientos en esa dirección. El sistema, en cambio, logró rearmarse. La salida de la crisis y la recuperación de la gobernabilidad se dio por el lado del kirchnerismo, que no prometía revolución, sino, en el mejor de los casos, redistribución.

En sintonía con la nueva orientación política del espacio liderado por Bonafini, poco a poco iría cambiando la conducción de la universidad, los contenidos curriculares y la composición del cuerpo docente. Pero el torcimiento decisivo del proyecto vino con el escándalo político y mediático centrado en la figura de Sergio Schoklender, quien había asumido un papel central en la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La Fundación, que emprendía obras de viviendas populares con fondos públicos, quedó envuelta en graves denuncias de corrupción. En un juego de pinzas entre sectores del poder político, mediático y judicial, las iniciativas de las Madres, incluida la Universidad, quedaron a la deriva.

La crisis económica desatada por el retiro de los fondos estatales, sumada al colapso político interno, precipitó el declive del proyecto. Finalmente, las Madres cedieron la Universidad al Estado Nacional, que la transformó en un Instituto Universitario dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Así, la Universidad perdió su autonomía originaria y quedó atada a los vaivenes de los cambios de

gobierno. Con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en 2015, el proyecto fue desmantelado, y sueños contrahegemónicos de su origen, mitigados con anterioridad, definitivamente clausurados.

No se puede, sin embargo, atribuir este desenlace únicamente a la ofensiva de la derecha. También fue consecuencia de opciones estratégicas y políticas, y graves equívocos éticos dentro del propio proyecto. La alianza con el Estado, sin los necesarios resguardos de independencia, y la tolerancia con prácticas administrativas incompatibles con los principios fundacionales, contribuyeron de forma decisiva a la crisis. Nada de esto estuvo desvinculado de los cambios ideológicos previos.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, las Madres intentaron recuperar algo de aquel proyecto. Tras la retirada de Macri, comenzó un proceso de reorganización con el objetivo de crear una universidad nacional, en línea con la ley universitaria. Esa estrategia implicaba ya, de hecho, el abandono de la idea original, pero si se hubiera llevado a cabo podría haber representado una contribución política nada despreciable para los sectores populares. Sin embargo, nuevamente las disputas políticas internas y las mezquindades personales entorpecieron el camino. El proyecto quedó debilitado y desarticulado, dejando servida al nuevo gobierno de Javier Milei la oportunidad de liquidarlo.

A pesar de los esfuerzos aún inacabados de las Madres por recuperar la Universidad, el proyecto actual está lejos de aquel impulso fundacional contrahegemónico de los albores del siglo. Aquella Universidad que nació como herramienta de revolución cultural y política, que intentó formar sujetos críticos y militantes para la transformación del mundo, hoy sobrevive de forma desdibujada, ajena a su origen.

La historia de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo es también la historia de una batalla cultural por la hegemonía. Su recorrido muestra la potencia de los sueños colectivos, pero también los peligros de abandonar principios en nombre de lo posible. Es una historia que nos interpela: no sólo sobre lo que fue, sino también sobre lo que no se supo –o no se quiso– sostener.



La Universidad Campesina del MOCASE - VC

Coordinación Político Pedagógica de la UNICAM

Somos un colectivo formado por compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia de Santiago del Estero y de otros lugares de la Argentina. Tenemos a cargo la gran tarea de acompañar y orientar los procesos que se dan en la Universidad Campesina - Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos (UNICAM SURI). Somos parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), un movimiento que se conformó hace 34 años.

Desde aquí, los invitamos a asomarse a nuestra experiencia de formación, de producción de conocimientos, de vida.

La UNICAM SURI es un sueño que nació en los montes santiagueños hace más de 25 años y que fue creciendo desde entonces.

Las muchas necesidades, la enorme experiencia de aprender en la lucha y la organización, el vínculo con universitarios, germinaron la certeza y el coraje de pensar que necesitábamos nuestra propia universidad. Esa que permitiera la formación de nuestros jóvenes para quedarse en el campo, para mejorar la vida de las comunidades campesino-indígenas. Una universidad que se afirmara en nuestros viejos y nuevos saberes. Necesitábamos –y por eso nos atrevíamos a generar– una universidad que nos respetara en nuestras formas, nuestras luchas, nuestros maestros, nuestros territorios, que nos acompañara en este estar siendo campesinas y campesinos que nos identificábamos también como indígenas. Empezamos a soñar una universidad que siguiera enriqueciendo esos saberes y los llenara de nuevos aciertos y esperanzas. Los universitarios, estudiantes, docentes, investigadores seguirían siendo parte de nuestra construcción, con ellos seguiríamos intercambiando saberes, haceres, sentires y utopías, pero siendo nosotros y nosotras lxs protagonistas.

En 2011 de a poco se inició la construcción, con muchos brazos compañeros, con poco dinero pero mucho entusiasmo. Fue así que se fue poblando de trabajadoras y trabajadores que decidieron integrar esta comunidad, formar familias y edificar futuro.

La UNICAM se encuentra en Argentina, al sur de la provincia de Santiago del Estero, centro de nuestro país. Es un espacio de formación popular y comunitaria del MOCASE. Vivimos en comunidad infancias, jóvenes y adultos de distintos territorios del país. Trabajamos día a día para construir la universidad organizándonos en espacios de trabajo y espacios de convivencia, como lo es la producción de alimentos tanto animal, vegetal y apicultura, la cocina, la parquización y mantenimiento, la construcción, el espacio de la niñez, la comunicación de la organización y la radio comunitaria Surimanta FM 89.3. También hacemos talleres de cerámica, telar, curtiembre y escuela de deporte infantil y de jóvenes, formando equipos de fútbol femeninos y masculinos que participan en campeonatos zonales y provinciales. Compartimos saberes y trabajo con compañeros y compañeras del pueblo de Ojo de Agua y de las comunidades campesino-indígenas cercanas, formándonos para seguir fortaleciendo la organización.

Además tenemos Fogones Comunitarios creados con la intencionalidad de cumplir con el derecho a la alimentación para la población que no llega a cubrir esta necesidad cotidiana.

En la UNICAM llevamos adelante diversas escuelas, las mismas son espacios de formación sistemáticos con sus cronogramas presenciales y contenidos específicos. Si bien cada una de nuestras escuelas desarrollan nudos problemáticos correspondientes a cada escuela, tenemos una serie de materias troncales que consideramos básicas para la formación de nuestra militancia: Memoria Histórica (desde donde entendemos la historia como proceso de liberación de los pueblos), Educación Popular (donde trabajamos con los educandos los procesos de formación como el que forman parte), Agroecología (para comprender el sistema de producción de alimentos). Actualmente desarrollamos las siguientes escuelas de formación: la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria, que lleva 6 años de desarrollo, con una camada de 40 egresados y egresadas; y la Escuela de Psicología Social y Popular, donde el año pasado egresaron 40 estudiantes. La Escuela de Agroecología ya tiene una trayectoria

de 17 años en la que cientos de jóvenes se han ido formando para promover el arraigo en sus territorios y el desarrollo de una vida digna.

Estos son los espacios de formación nacional donde nos encontramos para intercambiar las realidades de cada territorio y trabajar colectivamente las herramientas y reflexiones para seguir luchando por una vida digna en el campo.

Además, llevamos adelante procesos de alfabetización y terminalidad de primaria, donde garantizamos el acceso al derecho a la educación. Para nosotros la terminalidad de primaria es una propuesta que busca hacer cumplir algo tan importante como lo es el derecho a la educación y que, a la vez, promueve tanto el desarrollo personal como el grupal y comunitario a partir de la recuperación de la autoestima y la autosuperación permanente.

Para nosotros, la universidad es parte de la organización donde el cotidiano está atravesado por la realidad y las tareas del movimiento. Trabajamos en la defensa de los territorios para fortalecer la producción de alimentos y acceso al agua de las comunidades campesino-indígenas. Con el trabajo de base multiplicamos organización y trabajo comunitario.

Otros de nuestros espacios de formación y organización son los Refugios del Buen Vivir, como el Alicia Cisneros y Las Abras. Son lugares donde es posible la vuelta al campo y la posibilidad de construir un proyecto de vida digno, superador y colectivo para los y las jóvenes de las barriadas de pueblos y ciudades.

La UNICAM forma parte del Programa de Casas Convivenciales de la SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), luego de un trabajo de más de 10 años en acompañamiento, contención y proyección de jóvenes que atraviesan dificultades con el consumo de sustancias o que vienen de procesos de alta vulnerabilidad social (madres solteras, jóvenes en situación de calle desvinculados con sus familias, etc). En la UNICAM recibimos jóvenes de diferentes territorios, con diversas trayectorias de vida “rotas” y vamos trabajando la autoestima, el autocuidado y el autogobierno de forma comunitaria.

En la forma de gobierno de la Universidad Campesina se ha definido el principio de participación de todos los actores involucrados en la experiencia, siendo la CPP (Coordinación Político Pedagógica) la designada para llevar adelante las tareas planteadas por el colectivo.

Entendemos la formación como proceso de liberación de los pueblos oprimidos, con el desafío de promover sujetos críticos capaces de transformar la realidad colectivamente.

Para nosotros y nosotras, como movimiento popular, la formación es esencial. Sabemos que un movimiento que lucha por su territorio y por una vida digna campesino-indígena, por el buen vivir, es formador y necesita profundizar esa formación. Los procesos de formación se despliegan en cada uno de los lugares en que estamos, en cada una de las tareas, asumiendo cada uno de los desafíos.

En esta experiencia del día a día, fuimos y seguimos construyendo nuestra pedagogía, que tiene como objetivo estratégico la liberación, la emancipación de los pueblos. Miramos nuestro caminar como movimiento junto a muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones dentro de la CLOC VC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina) y de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y reconocemos algunos rasgos de esa pedagogía que nos gustaría compartir:

- Es **colectiva** tanto en la conducción de los procesos formativos que está en manos de las coordinaciones político pedagógicas, como en el sentido que tiene la formación, ya que lxs estudiantes llegan convocados y acompañados por sus comunidades y finalizan comprometidos con el crecimiento de sus territorios y del movimiento. Decimos que es pasar del “yo” al “nosotros”.
- Es **orgánica**, el movimiento en sus espacios de trabajo y de conducción conoce y encamina los procesos de cada una de las escuelas, así como piensa cotidianamente la formación de todos sus integrantes.
- Es **diversa**, ya que respeta y se enriquece con las diferentes formas de conocer, de vivir, de sentir ya sea en el campo, en los pueblos, en las ciudades, en las universidades, en otras organizaciones compañeras.
- Es **territorializada**, se enraíza en los territorios en los que se construyen los conocimientos campesino-indígenas. De ellos aprende y a ellos encamina a los jóvenes que se van formando. No hay espacios de formación ni períodos presenciales en las escuelas que no tengan momentos de intercambio y de trabajo en algunas comunidades.
- Es **práctica reflexionada** para saber más y hacer cada vez mejor. Parte de la praxis ancestral y la gestada en el movimiento, articulando los



tiempos históricos con nuevas experiencias. La concepción pedagógica y política del movimiento está orientada por la noción de praxis, práctica consciente de transformación de la realidad, entendiendo a los seres humanos como seres históricos que se hacen y se rehacen en la historia.

- Es **estudio**, que entendemos no limitado a los libros, sino constante observación, experimentación, diálogo y reflexión para enfrentar los más diversos retos de la realidad.
- Es **dialógica** entendiendo que el debate es una forma de valorización de la opinión y de la palabra, de la producción colectiva de conocimiento y es parte de una metodología problematizadora.
- Es una apuesta a todos y todas, pero especialmente a **los y las jóvenes y niñeces**. Busca el desarrollo de sujetos históricos protagonistas, creativos, reflexivos.
- Es **alternancia** entre los espacios en los que predomina la presencialidad y los que se desenvuelven en las comunidades rurales y de los pueblos. Una estrategia que sabemos adecuada a la continuidad de la vida campesina, que fomenta el arraigo rural, pero que además nos permite enriquecernos con los procesos de los sujetos involucrados en ambos espacios formativos. La alternancia también posibilita que en la presen-

cialidad se puedan garantizar la riqueza de la diversidad territorial de donde provienen los sujetos que participan del proceso.

Entendemos que la formación es un proceso sistemático e intencionado de comprensión de la práctica social para transformarla de manera consciente, en función de procesos organizativos concretos y en la perspectiva de la construcción del proyecto histórico. Entendemos que los sujetos de la formación y de la práctica social son personas concretas, en relación, con memoria, con historia, con condicionamientos y libertad. La formación se reconoce válida, porque permite y ayuda a asumir el papel de sujeto activo, crítico y creador en la construcción de la historia. Un proceso de profundización de la conciencia donde hombres y mujeres, como sujetos de conocimiento, alcanzan una conciencia creciente, tanto de la realidad socio-política y cultural que da forma a sus vidas, como de su capacidad para transformar dicha realidad.

Un movimiento que lucha busca de este modo la soberanía pedagógica, se afirma en el derecho a tomar sus propias decisiones pedagógicas. Somos también solidarios y solidarias con los que luchan por la educación pública, también luchamos para que en todos nuestros territorios se pueda acceder a una educación pública gratuita y de calidad. Compartimos con ella nuestra experiencia que sabemos valiosa, de modo de seguir disputando por una educación pública realmente popular.

Estamos convencidos y convencidas que un movimiento que lucha precisa formar a sus militantes para resolver lúcidamente los múltiples problemas cotidianos y empujar el crecimiento colectivo. Un movimiento que lucha precisa estar abierto al diálogo igualitario con distintas fuentes de saberes y con diversos sujetos, valorando y labrando nuestra producción propia de conocimientos.

Así entendemos la Educación Popular para la liberación y emancipación de los pueblos.

Universidad y extractivismo

Racionalidades y contra racionalidades en el sistema científico argentino

Álvaro Álvarez*

El siglo XXI encuentra al sistema científico tecnológico nacional en general, y al sistema universitario en particular, en una importante encrucijada. La espacialización de un modo de apropiación extractivista, con un fuerte impacto sobre los territorios, ha impulsado el desarrollo de un saber instrumental, una racionalidad técnica dominante que se desarrolla al servicio de la reproducción del capital, apropiando cuerpos, territorios y saberes. Sin embargo, y como contracara de ese proceso, al interior del propio sistema científico han emergido resistencia situadas, que ancladas en la producción de un conocimiento interdisciplinario y un diálogo de saberes y experiencias con colectivos y organizaciones socioterritoriales diversas, promueven una contra racionalidad científica, sustentada en el respeto y la preservación de formas preexistentes de vivir y habitar la naturaleza y que problematiza los procesos de apropiación y uso de los territorios y bienes comunes y su impacto sobre cuerpos, comunidades y territorios.

Este trabajo intenta ser una aproximación a un debate urgente para quienes somos parte de la Universidad Pública, un aporte a la discusión

* Investigador del CONICET en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (CONICET-UNCPBA), vicedirector del Centro de Investigaciones Geográficas (FCH-UNCPBA). Integrante del Grupo de Investigación en Infraestructura y Conflictos Socioterritoriales (GIICSO).

sobre esa disputa de sentidos y saberes tan importante en un contexto de crisis multidimensional como la que estamos atravesando.

El extractivismo como solución a la crisis del capital

La crisis del capital de los años 70 inicia un ciclo –aún abierto en la historia política latinoamericana– que se desarrolla a partir de una profunda reestructuración del sistema capitalista global y que tiene diversas consecuencias sobre las periferias geográficas. El neoliberalismo resultante, que se impone a través de diferentes formas de violencia, opera una drástica transformación de las estructuras sociales, económicas, territoriales y político-culturales imponiendo las bases de un nuevo ciclo extractivista.

Como corolario de las políticas aplicadas desde las dictaduras militares en Argentina en particular y en América Latina en general, la hiper concentración y la extranjerización de las economías nacionales es acompañada, desde los inicios del siglo XXI, por un renovado proceso reprimarizante que posiciona a la región como un reservorio de recursos estratégicos para la reactivación de un capitalismo en crisis a escala mundial.

En ese marco, en las primeras décadas del siglo XXI las políticas económicas ensayadas en la región facilitaron el ingreso de grandes corporaciones extranjeras ligadas a la exportación de materias primas, desde la desregulación nacional de las inversiones a la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) o el recientemente aprobado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) tuvieron y tienen el propósito de generar un entramado normativo afín a la expansión de las grandes empresas del extractivismo en el que la mega minería y el agronegocio jugaría un rol destacado.

Como condición de este proceso, la expansión de las fronteras extractivistas requiere también del diseño de mega proyectos de infraestructura, como la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) anunciada en la Primera cumbre de presidentes de América del Sur en el año 2000, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) creado dentro de la UNASUR desde el año 2009, o la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China en el año 2013, con fuertes implicancias para la región. Estas iniciativas, que promueven la construcción de nuevos corredores

de circulación –mayoritariamente bioceánicos– para asegurar el acceso a territorios, la disponibilidad de agua, energía y recursos naturales a los inversores, han sido parte de un consenso extractivo en la región que edifica un macro sistema técnico extractivista, que con un fuerte impacto en el ordenamiento del territorio regional, es impulsado por los gobiernos con el propósito fundamental de aumentar la exportación de commodities y atraer divisas (Álvarez, 2021)¹.

Nos preguntamos qué rol juega el sistema científico argentino en este sostenido crecimiento reprimarizante de la economía nacional, en las primeras décadas del siglo XXI que, traccionado por ese modelo de apropiación extractivista, genera impactos en múltiples dimensiones (Gudynas, 2016)². De qué manera interactúan el sistema científico con las transformaciones productivas y territoriales que operaron y operan a diversas escalas. En tal sentido, y en un intento exploratorio, pondremos el foco sobre determinadas actividades y desarrollos tecnológicos vinculados a dos rubros centrales del modelo: la minería y el agronegocio. Pero intentando remarcar también, en un intento de ponderar las contraracionalidades en el desarrollo de la ciencia, la construcción de colectivos que desde una perspectiva crítica problematizan el desarrollo de la ciencia al servicio del capital, poniendo el centro del análisis sobre los impactos sociales y ambientales de esos extractivismos.

Un nuevo ciclo mineral y una nueva expansión agrícola

La recomposición de la economía capitalista en la Argentina, pos crisis de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, implicó también, como consecuencia de una mayor estabilidad económica, un retorno de la gobernabilidad en un país conmocionado por la debacle económica y los diversos levantamientos sociales. Ese retorno a la estabilidad política

1 Ver: Álvarez Álvaro (2021); “Veinte años de la iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana. Un balance en dos dimensiones” Revista Aportes Para La Integración Latinoamericana, (44), 034. Instituto de Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Álvaro Álvarez (2021a)

Álvarez Álvaro (2021a) “Infraestructuras de transporte y disputas territoriales: La IIRSA en Santa Fe” FCH/UNICEN, CLACSO. 2021. Buenos Aires.

2 Ver: Gudynas, Eduardo. (2016). Modo de Producción, modo de apropiación, una distinción a propósito de los extractivismos. Actuel Marx Intervenciones No 20: LOM, Santiago de Chile.

y el crecimiento económico se vio traccionado por la demanda internacional de *commodities* que se plasmó en un aumento considerable de la oferta exportadora de bienes primarios y en la consolidación de determinados actores económicos concentrados –de carácter transnacionales–, que hegemonizaron toda la cadena de producción primaria desde el suministro de insumos, la producción, la circulación, la comercialización y hasta el consumo en los países de sus casas matrices.

Las primeras décadas del siglo XXI fueron testigo de la articulación de dos ciclos extractivos que generaron profundos impactos sociales y ambientales, reordenando el territorio regional: el ciclo minero y el agro-negocio. Por un lado, se desarrolló un nuevo ciclo de mineralización en la región que se extendió a lo largo de toda América Latina mediante la imposición de un “consenso minero” que unifica a todos los gobiernos, instalando “una nueva minería” a través de diferentes canales y lenguajes, lo que ha implicado cambios drásticos en múltiples dimensiones de la vida social (Machado Aráoz, 2014)³.

En Argentina, la minería ha experimentado un crecimiento significativo en las primeras décadas del nuevo siglo, convirtiéndose en un sector importante para la economía nacional. Las exportaciones mineras han aumentado, impulsadas por la demanda global de minerales como el litio y el oro. Se prevé que este crecimiento continúe, con proyecciones de inversiones millonarias en nuevos proyectos de extracción en los próximos años favorecidos fundamentalmente por un régimen de incentivos a las grandes inversiones que otorga beneficios a las corporaciones mineras.

El sector minero argentino ha marcado un hito histórico en los primeros cinco meses de 2025, al registrar exportaciones por un total de 2.206 millones de dólares (AAICI, 2025), estimulado fundamentalmente por la demanda de litio y oro, la cifra más alta para este período en la historia del país, superando el récord previo de 2011. Según datos relevados por la Gerencia de Inteligencia Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, las exportaciones mineras experimentaron un incremento interanual del 11,3%. En el caso del litio, el crecimiento de las exportaciones en los primeros cinco meses del año

3 Ver: Machado Aráoz Horacio (2014). “Territorios y Cuerpos en Disputa: extractivismo minero y ecología política de las emociones”. *Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*. Vol. 8 (1) <http://www.intersticios.es>



Contra la megaminería en Andalgala y en la UNT

fue de 49% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que el caso del oro alcanzó una expansión del 45% en el mismo lapso.

Por otro lado, en la agricultura argentina el crecimiento de la superficie sembrada, fundamentalmente con monocultivos, y de la exportación, también demuestra un incremento sostenido a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI, acompañado de una gran concentración de los actores económicos. En el año 2024, solo 5 empresas –Cargill, Viterra, Cofco, Bunge, LDC– comercializaron el 62% de los granos. En este marco al denominado paquete agrotecnológico integrado por la promoción de semillas transgénicas, utilización de agroquímicos y maquinaria con alta tecnificación para la siembra directa, se le suma otro componente de vital trascendencia: la infraestructura. Los mega proyectos y obras de infraestructuras, comprendidos en iniciativas a diferentes escalas, generaron macro sistemas técnicos del agronegocio, que desde la siembra directa, la cosecha, la circulación y la logística portuaria reordenaron el agro argentino –y en consecuencia gran parte del territorio nacional– en función de nuevas lógicas y dinámicas generando condiciones de oportunidad para la expansión territorial y el acaparamiento de tierras y recursos.

De acuerdo a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la campaña agrícola 2024/25 se proyecta que Argentina sembrará 42.5 millones de hectáreas con granos, y se espera una producción de 135.7 millones de toneladas. Este volumen de producción se posicionaría como el segundo más alto en la historia del país, solo superado por la campaña 2018/19 don-

de Argentina produjo un total de 146.9 millones de toneladas de granos en una superficie sembrada de 39.37 millones de hectáreas. Estos datos son muy significativos si tenemos en cuenta que hace 30 años, cuando se introdujo embrionariamente la soja transgénica con uso de glifosato, durante la campaña 1995/96, Argentina sembró aproximadamente 26.4 millones de hectáreas de granos y produjo alrededor de 54 millones de toneladas.

De estos datos se desprende que Argentina va rumbo a duplicar la superficie utilizada para el agronegocio y triplicar la producción de granos, proceso que demanda más infraestructuras, más tecnología aplicada como semillas y maquinarias, mayor superficie de tierra empleada en la agricultura y, en un contexto de crisis hídrica como la que atravesamos, mayor control de las fuentes de agua. ¿Qué rol desempeña el sistema científico en esta expansión de las actividades extractivas?

Sostenemos como hipótesis que existe un entramado técnico extractivo, que caracterizamos siguiendo a Santos como un “macro sistema técnico” (Santos, 1996) en el que el sistema científico tiene una participación nodal, tanto en el desarrollo tecnológico como en la legitimación del productivismo y la idea de progreso que reviste de fundamento y le otorga una racionalidad hegemónica a las formas dominantes de apropiación de la naturaleza.

Macro sistemas técnicos extractivistas

Milton Santos analiza cómo desde la reestructuración de la economía capitalista el medio natural, devenido en medio técnico, se transforma en un medio técnico científico-informacional, una nueva cara del espacio y del tiempo, que desde hace más de medio siglo se impone en la geografía mundial, constituido por una amalgama totalizante integrada por la ciencia y la técnica, y articulado a través del mercado mundial. Es ahí, en un medio globalizado, técnico y científico, donde se instalan las actividades hegemónicas como la minería moderna y el agronegocio, aquellas que participan del comercio internacional haciendo que determinados lugares se vuelvan mundiales. El extractivismo es expresión y se sustenta en ese medio técnico que, como un sistema invasor, se expande territorialmente haciendo un uso intensivo de aquellos recursos que son considerados estratégicos para las principales actividades productivas.

En el agro este medio altamente tecnificado –y financiarizado– se expande desde la denominada “revolución verde” que complejizó la

producción agrícola incorporando transformaciones científicas que generaron múltiples impactos productivos y socioterritoriales. Estos cambios, producto de transformaciones originadas en el sistema científico de EEUU, desde fines de la década del 60, se extendieron por el mundo, principalmente en los países subdesarrollados productores de trigo, maíz, arroz, soja, algodón, etc. En Argentina se aprobaron y sembraron por primera vez cultivos transgénicos en 1996, durante la gestión de Felipe Solá al frente de la Secretaría de Agricultura que en un trámite express aprobó la comercialización de soja transgénica con uso de glifosato. En paralelo se incorporaron la mecanización, la irrigación y el uso de agroquímicos, lo que condujo a altos rendimientos productivos y a la constante expansión de las fronteras del agronegocio hacia nuevos territorios, proceso conocido como pampeanización.

Un proceso similar experimentó la minería. En el siglo XX, inicialmente, la minería se centraba en la extracción de rocas de aplicación y minerales no metalíferos para la industria local. Sin embargo, a finales del siglo, la minería metalífera, como el oro, la plata y el cobre, cobró importancia impulsada por inversiones extranjeras y cambios en la legislación. La minería moderna en Argentina se encuentra en un momento clave por la producción de minerales críticos como el cobre y el litio, esenciales para la denominada transición energética.

Este proceso es acompañado por la capacitación técnica en las universidades argentinas que colaboran en la formación de profesionales y el desarrollo tecnológico del sector. Varias universidades ofrecen carreras relacionadas con la minería, como Ingeniería en Minas, Geología y carreras técnicas como Tecnicatura en Minería y Tecnicatura en Procesamiento de Minerales. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), por ejemplo, ha creado el “Hub de Minería” en conjunto con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para impulsar la investigación en esta actividad.

La ciencia empresarial

El 29 de julio de 1966 con la denominada “Noche de los Bastones Largos”, la dictadura de Onganía inauguró un período de intervención sobre las universidades nacionales y, a través de la represión a estudiantes y profesores que defendían la autonomía universitaria, se disciplinó a la comunidad científica generando el mayor éxodo de investigadores en la his-

toria nacional. Esta embestida a la ciencia se completaría con la dictadura autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), que tuvo un impacto devastador en la comunidad académica, caracterizado por la censura, la represión y la expulsión de científicos y docentes, así como por la intervención y control de instituciones educativas y de investigación. La persecución del pensamiento crítico fue complementado con el desarrollo de una ciencia al servicio de las grandes corporaciones.

El paradigma de una ciencia empresarial, orientada por lógicas de mercado y regida por las necesidades del capital, ha sido central en la expansión del modelo de apropiación extractivista y en las últimas décadas ha experimentado transformaciones profundas en los modos de investigar y en las formas de acaparamiento de los saberes producidos. La ciencia empresarial avanza con consorcios público-privados, con mayor presencia de las grandes empresas y asociaciones empresariales en los directorios de las instituciones de ciencia, con fondos derivados del extractivismo para financiar investigaciones y universidades, y con un sistema de patentamientos al servicio de las corporaciones, cuyo resultado es la transformación del conocimiento en mercancía, con fuertes impactos sociales y territoriales.

Andrés Carrasco, investigador del CONICET, médico de una extensa trayectoria académica que marcó un hito con su investigación sobre agrotóxicos en embriones, definía este modelo de alianza entre el extractivismo y el sistema científico de la siguiente manera:

“En Argentina tenemos un modelo de producción que no es soberano. No lo es en minería, en agricultura, en energía. Lo están decidiendo otros. El factor nuevo es que por primera vez las instituciones ligadas a la producción de conocimiento han sido incorporadas a esa dependencia. La famosa resistencia de los sectores universitarios y de pensamiento crítico, ha cedido. Se doblan sin romperse. Y al doblarse, ceden su autonomía en función de participar del festín de pertenecer al primer mundo, adoptando un modelo de desarrollo supuestamente exitoso pero diseñado no de acuerdo a nuestros intereses, sino a intereses que nos perjudican (Carrasco, 2012)”.

Si en el año 1996 Argentina aprobó la producción y comercialización de soja transgénica con uso de glifosato, patentada por la empresa estadounidense Monsanto, en el año 2020 la innovación en biotecnología vino de la mano de la ciencia nacional. El ministerio de Ciencia, Tecnología

e Innovación de la Nación, junto con el CONICET, la empresa Bioceres y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), anunciaron la aprobación regulatoria por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de la tecnología HB4 para el cultivo de trigo.

Desarrollada por un grupo de biólogos liderados por la Dra. Raquel Chan, Directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, perteneciente a la UNL, y al CONICET, en alianza con la empresa argentina de biotecnología agrícola Bioceres, la tecnología HB4 permite obtener semillas más resistentes a la sequía y a suelos salinos posibilitando la expansión de las fronteras agrícolas a nuevos territorios. El HB4 es una variedad de trigo transgénico tolerante al herbicida glufosinato de amonio, 15 veces más tóxico que el glifosato. Argentina fue el primer país en aprobar su cultivo y comercialización seguido por Brasil y Paraguay. Los impactos de esta innovación en uno de los países más fumigados del mundo con 600 millones de kilo litros de agrotóxicos aplicados por año son cuantiosos. Los impactos para la ciencia, también, dado que si bien la tecnología HB4 fue desarrollada por el CONICET y la UNL, el patentamiento será usufructuado por la empresa Bioceres S.A con todo lo que implica en términos de ganancias por regalías.

Una situación similar se expresa, como hemos visto, en la minería, y fundamentalmente en la extracción litífera con diferentes políticas desarrolladas en los últimos años en alianza entre el sistema científico y las empresas. Si bien en Argentina, durante el gobierno de Cristina Fernández ya se observan los primeros intentos de participar en la cadena extractiva y productiva del litio mediante el establecimiento de algunas políticas científico-tecnológicas, un paso fundamental en esa dirección es la creación, en el 2022, de la primera Planta Nacional de Desarrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio, impulsada por la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto está integrado por un consorcio entre la UNLP, el CONICET y la empresa YPF-Tecnología, con participación de capitales públicos y privados. Esta iniciativa cuenta además con el aporte tecnológico de la compañía china Xiamen Tmax Battery Equipments Limited, quien es la proveedora de equipamientos.

Por otra parte YPF Litio y la empresa china Tianqui Lithium acordaron en 2022 acciones conjuntas de explotación, procesamiento y comercialización de litio. En el mismo sentido lo hizo el gobierno de Jujuy

con la empresa Gotion Inc, también china, para construir una fábrica de baterías de litio.

También en 2022 YPF litio comenzó su participación en actividades extractivas en yacimientos cuando en alianza con la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado se propuso avanzar en la exploración de diferentes áreas que podrían contener litio en la región catamarqueña.

La alianza entre ciencia pública y empresas redundan en la construcción de un entramado afín a las grandes corporaciones –donde en el caso del litio, China tiene un rol preeminente– y en el actual contexto de ultra liberalización de las políticas del Estado nos preguntamos cuáles son los resguardos para que el conocimiento producido por institutos científicos y Universidades no sea mercantilizado y comercializado en beneficio irrestricto de capitales mayoritariamente extranjeros. De qué manera las Universidades públicas y los institutos de investigación evitan ser coniventes con un avance arrollador de proyectos extractivos que vulneran comunidades y formas preexistentes de habitar y vivir los territorios.

La ciencia digna

En las últimas décadas y como contracara de los procesos antes descritos, investigadores, investigadoras, colectivos científicos, grupos de estudio e investigación han desarrollado un entretejido en defensa de las comunidades y sus territorios a partir del desarrollo de una ciencia crítica y de la participación en diversos espacios multisectoriales (asambleas, cátedras libres, campamentos y acampes, jornadas, congresos, etc.) de co-construcción de conocimientos y saberes. Andrés Carrasco, en un intento de contraponer las racionalidades y contraracionalidades en el desarrollo de la ciencia moderna nos dice:

“La ciencia de la modernidad produce tanto conocimientos como desconocimientos. Es frágil en cuanto a su criterio de verdad y ciertamente no neutral cuando pretende constituirse en certeza. Eso la hace manipulable, promoviendo científicos que son en verdad ignorantes especializados, mientras que induce convenientemente en los ciudadanos una falsa concepción generalizada. Sólo la ciencia que es capaz de dialogar con otras formas de conocimiento como el del sentido común, puede ser ciencia. Y solo la interpenetración de estas formas de conocer puede garantizar la posibilidad de una nueva racional-

lidad (Carrasco, 2012)”.

Quisiéramos ahora realizar una descripción de tres experiencias vinculadas al estudio de los impactos del agronegocio y la minería que consideramos relevantes a la hora de mostrar un paradigma de ciencia digna, un desarrollo científico que pone en primer lugar la defensa de las comunidades y territorios ante la brutalidad del capital y el desarrollo extractivista.

El Instituto de Salud Socioambiental (INSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, dirigido por el Dr. Damián Verzeñassi, tiene una nutrida trayectoria en el estudio de los impactos del agronegocio sobre las comunidades rurales y urbanas, y sostuvo desde el 2010 hasta el 2019 la experiencia de los campamentos sanitarios, como evaluación final integradora del Ciclo de Prácticas Final de la carrera de medicina. Los campamentos implicaron una metodología de evaluación interdisciplinaria con el objetivo de realizar un análisis epidemiológico por barrido en poblaciones afectadas por los extractivismos. El Instituto ofrece un detallado informe de cada uno de los campamentos realizados pudiendo dar cuenta de afecciones diversas del modelo del agronegocio sobre territorios y comunidades. A pesar del impacto de estos trabajos, desde finales de 2019, las nuevas autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario cambiaron la modalidad de la práctica final. Decidieron que los campamentos ya no se realizaran. Sin embargo, los 10 años de experiencias en el territorio, en comunidades atravesadas por problemáticas de salud vinculadas al agronegocio, no fueron en vano. Los resultados de estas investigaciones son insumos valiosos que han logrado trascender a través de publicaciones y trabajos diversos. El INSSA alumbró también el nacimiento de los Congresos de Salud Socioambiental que se realizan desde el año 2019 y son un espacio destacado de problematización sobre los efectos del extractivismo sobre cuerpos y territorios.

Con esa misma premisa de abordar los impactos del modelo extractivista, el Proyecto de Investigación Sobre Conflictos Ambientales y Territoriales (PICAT) está conformado por integrantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), bajo la dirección de la Dra. Malena Castilla, investigadora del CONICET. PICAT es un grupo de estudios conformado por estudiantes, graduadas e investigadoras de la Universidad Pública. Entre sus principales líneas de investigación se destaca el análisis sobre cuestiones vinculadas a los pueblos originarios en la Provincia de Buenos Aires, atendiendo fundamentalmente

a los escenarios de conflictividad ambiental y territorial que existen en dichos espacios. Desde el 2020, los integrantes de PICAT, a partir del desarrollo de diferentes instancias de investigación, extensión, transferencia y docencia han analizado diversas variables que afectan a dicha población, históricamente invisibilizada y criminalizada. PICAT estudia cómo la población, mayoritariamente indígena, expulsada de sus territorios por los efectos del extractivismo, se localizan en barrios periféricos de la provincia de Buenos Aires en iguales condiciones de injusticias socio territoriales y ambientales que en sus territorios de origen. Con su trabajo cuestionan la idea de migraciones ambientales y argumentan:

“Hablan de desplazamientos o huir del clima como si la agencia la tuviese la naturaleza y no una persona humana que implementa un modelo extractivo que destruye la naturaleza y los modos de vida de esas poblaciones. Entonces empezamos a cuestionar esas categorías que se construyen sobre todo para generar políticas públicas y decimos que no son migrantes ambientales ni desplazados por el clima, sino que son expulsados por modelos extractivos, porque muchas veces no es la sequía lo que produce la migración, sino que es un proceso de desertificación producto de la incorporación del modelo agroindustrial. No son las inundaciones lo que genera la migración de estas personas, sino que a partir de la migración los empresarios utilizan eso para después privatizar los territorios y no permitir el acceso a las tierras tradicionales de esas comunidades, entonces están obligadas a migrar. No son los desmontes en sí mismos o la pérdida de bosque lo que genera esa expulsión de la población, sino que es el desmonte y la transformación, los cambios de uso de suelo de esos territorios. Entonces decimos eso, que no es el clima lo que hace que las poblaciones migren, sino que son expulsados por el extractivismo” (entrevista a la Dra. Malena Castilla directora de PICAT).

El entrecruzamiento de las problemáticas ambientales, las expulsiones de las comunidades indígenas y las condiciones de vida a las que son sometidos los pueblos desplazados de sus territorios, es un aporte nodal del PICAT a los estudios de los extractivismos. Es indispensable destacar la composición del grupo, fundamentalmente estudiantes de grado de la Universidad de la Matanza y la vocación por un trabajo situado y con compromiso social y ambiental.

Con esa misma perspectiva de trabajo, y siendo parte de un conjunto importante de grupos de investigación que discuten con el modelos

extractivista, el Grupo Geopolítica y Bienes Comunes (GyBC) es un colectivo de trabajo interdisciplinario del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires que aborda problemáticas geopolíticas, energéticas y de transición socio-ecológica, especialmente en Sudamérica. GyBC es un espacio de referencia en el estudio de la minería litífera en Argentina, con un fuerte compromiso con las comunidades que resisten a la expansión del extractivismo minero.

Hace una década, en el año 2015, y luego de varios años de trabajo se publicó el libro *Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina*, una lectura ineludible en los estudios sobre el litio y un antes y después en la conformación del grupo, iniciando un camino de referencia en la temática. La diversificación y crecimiento del grupo le fue dando mayor alcance a sus investigaciones y profundizando el trabajo en red. Como plantea Gustavo Romeo, integrante de GyBC:

“Entonces, a partir de esa presencia en los territorios, y de conocer a quienes resisten localmente, las redes fueron tejiéndose con hilos que descansaban, yo siempre pienso esto, que descansaban en el suelo con una punta en las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, y esa punta llega hasta Rosario, y luego esa punta llega hasta Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y la otra punta de ese hilo que va por el piso llega hasta Comodoro, y luego va hasta el Conurbano, y donde ocurre alguna situación de presencias de, no sé, de otros investigadores en el territorio, haciendo pruebas en el Salar, o presencia de, o se enteran que va a haber una modificación legislativa, provincial, que habilite el extractivismo de litio, la persona que se enteró y escucha tira de ese hilo, esa punta de ese hilo, y se empiezan a tensar armando esa red. Vos sabés de lo que te hablo. Y poder tomar esa punta del hilo y tensarlo, se logró a partir de la confianza que se generó” (Entrevista al Dr. Gustavo Romeo, integrante de GyBC).

El nuevo ciclo del capital abierto luego de los años 70 impuso en la región un sistema técnico extractivista, una racionalidad dominante, donde la ciencia y la tecnología se desarrollaron al servicio de una nueva forma de producción y subordinación de la naturaleza. Sin embargo, los grupos de investigación que de manera sintética presentamos aquí –INSA, PICAT, GyBC y tantos otros– son parte de una trama de colectivos diversos que en las últimas décadas abrigaron el pensamiento crítico y le dieron cuerpo a una ciencia digna, que en contraposición a la ciencia y la

racionalidad técnica dominante hacen un aporte colectivo a la defensa de los territorios y comunidades de nuestra América Latina.

En la actualidad el gobierno de la Libertad Avanza encabezado por Javier Milei está implementando políticas de ajuste significativas en el sector científico-tecnológico de Argentina, mientras promueve con medidas como el RIGI un saqueo sistemático de los recursos estratégicos en beneficio de las grandes empresas. Esto ha generado un rechazo generalizado de la comunidad científica, por el impacto de este tipo de medidas, y por el abrupto desfinanciamiento de la ciencia nacional, junto a la intervención sobre los organismos e instituciones científicas.

El presupuesto destinado al CONICET, por ejemplo, se prorrogó desde 2023, lo que implica una reducción significativa en la inversión para investigación y desarrollo, potenciado por el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Los investigadores y becarios enfrentamos salarios congelados y por debajo de la inflación, lo que dificulta nuestra situación económica y ha sido motivo de renunciaciones y jubilaciones anticipadas. Esta falta de recursos para investigar y las bajas remuneraciones están llevando a jóvenes investigadores a buscar becas y financiamiento en el exterior, estimulando lo que conocimos en los años 90 como fuga de cerebros.

No son las corporaciones que se beneficiaron de la ciencia empresarial y promueven el extractivismo en sus múltiples dimensiones quienes defenderán a las instituciones de ciencia y a las universidades. Solo con una respuesta colectiva, amplia y articulada lograremos frenar el desgaste del sistema científico argentino. Apuntalar una ciencia que contribuya a dar respuestas a las necesidades de los pueblos y las comunidades es una tarea urgente.

Referencias

- Carrasco, Andrés *et. al.* (2012). *Modelo agrícola e impacto socioambiental en la Argentina: monocultivo y agronegocios*. AUGM/UNLP. La Plata.
- Santos, Milton (1996). *De la totalidad al lugar*. Oikos-Tau. Barcelona.

Ciencia, pero mirada desde la clase

Francisco Carriquiriborde*

Esta nota busca aportar ideas y debates abiertos para repensar el rol de lxs laburantes en esa cosa llamada academia, esa actividad que institucionalmente se estructura entre distintos organismos de CyT y las universidades nacionales. Estas reflexiones, que en realidad son colectivas, surgen en la lucha por condiciones dignas de trabajo y de la participación en diversas instancias de negociación con autoridades del CONICET y las Universidades. Nacen como propuesta a diversos comentarios cotidianos en nuestras cátedras, laboratorios, lugares de encuentro de docentes e investigadorxs que, por su alta y continua prevalencia, en realidad se materializan como ideas-fuerzas. Aparecen como si fueran naturales y, como tales, moldean relaciones laborales entre pares, entre colegas, entre dirigidxs/directorxs, pero también habilitan determinados tipos de políticas públicas.

Ante todo, Investigar es Trabajar

En diversos ambientes del mundo académico es cotidiano escuchar la auto valoración de nuestro laburo como una vocación o un privilegio. Se espera que trabajemos largas horas, sin horario definido donde cualquier fin de semana o feriado puede ser sacrificado; se espera que se trabaje aun en condiciones de enfermedad o cuando se está maternando/paternando; es normal el cubrir con plata del propio sueldo deficiencias en elementos básicos del trabajo, y un largo etcétera. Como se supone es lo que elegimos para desempeñarnos, se impone una sobrecarga laboral

* Dr. en Ciencias Exactas orientación en Ciencias Biológicas. Docente-investigador de Exactas-UNLP. Ex delegado ATE-CONICET y JCP-LP. Militante de “Vientos del Pueblo-Frente por el poder popular”.

por sobre la ya sobrecarga y sobreexigencias que el mismo sistema científico genera. Para mal de peores los sueldos y las condiciones laborales (como la estabilidad laboral, las licencias, etc.) históricamente han sido precarizantes de nuestra propia vida.

También, esta idea-fuerza de la vocación científica trae consigo la idea que nuestro rol como científicxs comprometidxs es “devolverle a la sociedad un poco de eso que nos dio”. De esta manera se termina en la construcción de “unx otrx”. Por un lado, el/x científicx; y por el otro, el pueblo. Por un lado, lxs que ostentamos el conocimiento y describimos la realidad como nadie, y por el otro el sujeto pasivo, deseoso y a la espera de nuestra bondad. Se construye una identidad como científicxs que busca no tener relación con el resto de la masa de laburantes; se actúa como si el ámbito académico fuera un castillo de cristal que nada tiene que ver con los destinos del conjunto del pueblo. Pero esta mirada también corre del centro al Estado como garante de eso “que tenemos que devolver al pueblo” (derechos como salud y educación de calidad, ciencia que mejore la calidad de vida, etc.) y pasa a ser opcional de las buenas voluntades individuales.

Estas ideas que sustentan prácticas, relaciones y permisos, nuestro patrón las entiende diferente. El Estado-empleador hace una compensación económica a cambio de la producción científica y de su transmisión en diferentes formatos. Enmarca nuestra actividad en el cumplimiento de reglamentos obligatorios de trabajo como horas a cumplir, lugar de trabajo, productividad. Contrata personal en diferentes jerarquías con roles particulares: la carrera científica comienza con una beca doctoral, luego se asciende a una beca postdoctoral y luego se asciende a la planta permanente. Esta actividad se vuelve ordenadora de nuestras vidas y sin ella perdemos márgenes de libertad en esta sociedad; no hacemos lo que queremos con nuestras 24 horas de vida y la guita de la que disponemos nos limita. En el marco de las relaciones impuestas por el capital, esto es un trabajo. Como es compartido por el resto de lxs empleadxs públicxs, el Estado-empleador reconoce esta relación laboral en el marco de condiciones precarias de trabajo (caracterizada por la inestabilidad y la sobrecarga).

Además, el Estado-empleador está muy preocupado por la producción científica, no financia proyectos de personalidades excéntricas, genixs alocadxs o caprichos personales. La producción científica



Foto: archivo propio, toma del ex MINCyT durante el 2016

de calidad trae prestigio y fortalece relaciones internacionales; puede generar valor agregado en productos nacionales; puede aportar a generar desarrollos propios que mejoren la salud y la calidad de vida de la población nacional; puede aportar a conocer la propia historia y el desarrollo de nuestras sociedades, etc. Ya sea desde sistemas científicos con perspectiva de soberanía nacional, o desde miradas brutas con sistemas científicos reducidos a su mínima expresión, la ciencia aporta a moldear sociedades con unas u otras características. Cómo se vincula la producción científica y su divulgación con el desarrollo de países soberanos y cultos, tiene que ver con los objetivos específicos que nuestro empleador delinea para el país.

Esta perspectiva de clase, de percibirnos como cualquier otrx laburante, con determinadas condiciones de trabajo (diferentes y particulares respecto de otros sectores), necesariamente se traduce en el análisis en profundidad de las mismas. Pero también nos hermana con el conjunto del pueblo trabajador, obliga a discutir qué ciencia necesita nuestro pueblo para una vida digna y con quién se puede construir esta ciencia. La ciencia no solo es una construcción cultural, también tiene una orientación de clase.

Fortalecer lo colectivo frente a lo individual

Naturalmente, en el marco de las relaciones laborales con el Estado-empleador surgen un sinfín de complicaciones, vinculadas a las condicio-

nes mismas de trabajo (estabilidad laboral, salarial, licencias, horarios flexibles y horas extras, escaso-nulo presupuesto, etc.). Para resolverlas en su origen poco alcanzan las posturas individuales que priorizan una carrera personal intachable que solo genera un sálvese quien pueda. Las condiciones precarias (y la desconexión de la producción científica con el resto de la sociedad) se mantienen, ya que en realidad el destino del sistema científico y el de sus laburantes depende de las decisiones del Estado-empedor y de las políticas que despliega, tal como lo vivimos con brutalidad actualmente.

Como laburantes es importante reforzar los espacios de participación del conjunto de lxs trabajadorxs, donde todas las voces sean válidas para la identificación de demandas y todxs seamos sujetxs de cambio, independientemente del escalafón donde laburemos. En esa masividad y en esa rebeldía está el germen de posibilidad de cambio real y de mejora de nuestras condiciones de laburo-vida. Para esto es fundamental la creatividad y la capacidad de enraizar las luchas en la singularidad de nuestro sector. Pero no por eso podemos caer en pensar las luchas desde cero, separadas de su historia y de otras luchas que acontecen en paralelo. Así, las medidas de fuerza se vuelven aisladas, cuesta continuarlas en el tiempo y pierden efectividad, se desorganiza.

Para resolver esto, nuestro pueblo en el andar de su historia ha construido los gremios como herramienta de organización de laburantes y a través de los cuales canalizar sus demandas. Así, el percibirse como laburantes deviene en fortalecer estas herramientas, sin pretender que cada vez que surge una problemática haya que salir corriendo a crear la pólvora y ver qué hacer. Parte de asumirse laburantes implica también interpretar a los gremios como engranajes responsables, al menos parciales, de nuestras condiciones de vida, sea para bien o sea para mal.

Luchar siempre sirve

La realidad siempre parece eterna, pero nada es natural, todo es heredado. Personalmente soy de la generación que, entre otras victorias fruto de las luchas en CONICET, logró el pago de aumentos paritarios a las becas, reconocimiento de la obra social al grupo familiar, la equiparación de la jubilación entre investigadorxs y CPAs. Nos precedieron quienes lucharon por becas de 5 años de corrido, obra social y licencia por embarazo para becarixs, estabilidad laboral dentro de la planta CIC.

Vendrán lxs que coronen un Convenio Colectivo de Trabajo sectorial que formalice el trabajo de los 4 escalafones del CONICET.

La lucha educa, nos marca y une con otrxs, por eso también brinda nuevas perspectivas para investigaciones más solidarias y comprometidas.



Movimientos sociales y universidad

Debates sobre el marco teórico en la academia*

Silvia Beatriz Adoue**

La academia viene realizando estudios sobre los “movimientos sociales” en Europa y en los Estados Unidos. Era de interés estatal el mapeamiento de esas luchas para evitar el desarrollo de los elementos disruptivos en su seno. La lucha por derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, exigió una producción de conocimiento necesaria para la elaboración de políticas que atendiesen algunas demandas, debilitando su carácter radical y reconociendo los elementos antisistémicos, para los cuales solo restaría la represión.

La irrupción inesperada de procesos como el de la revolución cubana, en la década de 1960, disparó la alarma frente a amenazas desconocidas en el contexto de la consolidación del dominio imperialista de los Estados Unidos sobre el conjunto del continente. Instituciones de fomento a la investigación como la Fundación Ford empeñaron recursos para mapear las sociedades latinoamericanas y formar mediadores de

* Este texto enviado por la autora para publicar en el presente Dossier, es parte del trabajo presentado en el curso “Movimientos Sociales: entre las movilizaciones y el Estado”, ofrecido en 2022 por el profesor Francisco Longa, como disciplina de doctorado en la FLACSO, y del artículo publicado en portugués en la revista *Luchas Sociales*, volumen 26, número 49, 2022.

** Educadora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (de Brasil). Profesora de la Universidad Estadual Paulista (UNESP) y del programa TerritoriAL.

conflictos con instrumental teórico que permitiera transformar demandas en políticas públicas.

Durante las dictaduras, que desarticulaban las organizaciones sindicales y partidarias para evitar la resistencia al nuevo patrón de dominación que se pretendía implantar en la región, nuevas formas organizativas emergían con características que la academia se preocupó en estudiar. Las mediaciones de las luchas se tornaron urgentes durante el pasaje a gobiernos civiles. Esas mediaciones, sin embargo, no contaban con recursos suficientes para la transformación de demandas en políticas públicas. En la década del '90, amenazas de explosiones sociales obligaron a correcciones en las políticas neoliberales en la segunda mitad de la década. Y el estudio sobre los “movimientos sociales” exigía nuevos esfuerzos para la elaboración de políticas compensatorias de la miseria que las contrarreformas neoliberales traía.

Esa necesidad pendular de complementar la aceleración de la explotación con acciones compensatorias llevó a la intermitencia entre gobiernos de derecha y progresistas, para administrar ambas (la aceleración de la explotación y las acciones compensatorias).

Surgimiento de los estudios de los movimientos sociales en Europa occidental y en los Estados Unidos

El campo de estos estudios académicos se constituye en torno a un objeto que se distingue de las luchas sociales estudiadas anteriormente porque no se trata de luchas llevadas adelante por sindicatos y partidos. Alain Touraine¹ ha llamado “nuevos movimientos sociales” a aquellos en que las reivindicaciones culturales tendrían un peso importante, distinguiéndose de luchas sindicales, en las que las reivindicaciones económicas tendrían una importancia decisiva.

En todo caso, se trata de movimientos eminentemente urbanos en sociedades que vivían en regímenes democrático liberales. En Europa occidental, surgieron en contextos de sociedades estables y con una estratificación relativamente pequeña del mercado de trabajo. En Estados Unidos, aunque también se trataba de un contexto de sociedades estables, pesaba un mercado de trabajo estratificado y de una estratificación

1 Ver “La voz y la mirada”. In: *Revista Mexicana de Sociología* n° 4, octubre-diciembre. México: UNAM, 1979.

racializada. Partidos y sindicatos, atrapados en los consensos de post-guerra, no representaron las insatisfacciones que se expresaron por otras vías, imprevistas y en muchos casos, con características disruptivas.

Por motivaciones diferentes, y difusas, hubo un creciente interés por el estudio de esos movimientos, para entender sus dinámicas y posibilidades de transformación societaria. El estudio de la literatura europea sobre el tema sugiere que los investigadores querían sobre todo medir el potencial de la capacidad de ruptura de esos movimientos. Entre los trabajos estadounidenses, en cambio, se observa un foco en las posibilidades de absorción de las demandas de dichos movimientos por el sistema.

Aquí cabe una pequeña digresión, para hacer referencia al uso práctico de los conocimientos a propósito del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, que tuvo masividad y alcance nacional. Consiguió también un enraizamiento socio territorial que rebasaba a la población negra. El Black Panthers Party surgió en ese contexto, con una expansión y radicalización programática que articuló la masa marginal de inmigrantes latinos, los blancos desempleados, las organizaciones de los pueblos nativos y los estudiantes universitarios que se oponían a la guerra de Vietnam. El Estado veía en la expansión de este movimiento una amenaza que debía ser conjurada. Aisló los elementos irreductibles, infiltró agentes, difundió el uso de heroína en sus bases territoriales, se valió de recursos ilegales, como el asesinato y los atentados a las sedes, y legales, como la prisión y represión de actividades de todo tipo, inclusive las de los comedores, escuelas y clínicas populares. Y, por otro lado, acogió algunas de las demandas dentro del marco de políticas sociales focalizadas.

Los estudios de caso, las etnografías, los trabajos comparativos y cuantitativos, sugieren un esfuerzo exhaustivo por mapear los movimientos estudiantiles, feministas, barriales, ambientalistas, y, sobre todo en los Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles de los grupos racializados. Algunas líneas de investigación ayudan a reconocer recurrencias en esos procesos y relaciones de causa y efecto. En el caso estadounidense, los estudiosos se permitieron establecer algunos criterios de análisis que surgieron de los primeros estudios de caso y permitieron hacer previsiones a propósito de la eficiencia de las prácticas de los movimientos. Al hacerlo, tiraron una pala de cal arriba de las hipótesis del período anterior, psicologizantes, a la manera de Gustave

Le Bon² y José Ortega y Gasset³, sobre el comportamiento de las masas, reconociendo de manera sistemática las elecciones racionales de los movimientos y sus miembros.

Las definiciones a propósito de los movimientos sociales son bastante elásticas. Se habla de redes de interacción, de creencias y solidaridad compartidas, de acción colectiva externa a la esfera institucional, pero se llega a hablar de los procedimientos habituales de un grupo⁴. Se suele denominar movimiento social desde los usos y costumbres de un grupo dado a una rebelión colectiva. Los criterios de análisis apuntados por la escuela estadounidense para el estudio de un dado movimiento social son: la estructura de oportunidades políticas, las formas de organización y los procesos enmarcadores⁵.

Formación del campo de estudios sobre movimientos sociales en la academia latinoamericana

En los años 50, en Cuba, se desarrolló un movimiento de programa, en principio, modesto. La juventud universitaria del Partido Ortodoxo Cubano, tomó para sí la organización de una insurrección armada que garantizará... elecciones sin fraude. Una serie de coincidencias infelices (desembarque desastrado del grupo que llevaba la provisión de armamentos, desencuentro entre el Directorio estudiantil y los sindicatos) hizo que el pequeño grupo sobreviviente del desembarque se resguardase provisoriamente en la Sierra Maestra. Allí, relativamente aislado, precisó depender de los pequeños campesinos (semi asalariados) de la región, tanto para su seguridad como para su alimentación. Las negociaciones con los campesinos guajiros llevaron al grupo a incluir en su programa la reforma agraria. Era un sector social que inicialmente no había sido ni siquiera cogitado para la alianza insurreccional, que durante el período en que permanecieron en la Sierra se rearticuló. En enero de

2 Ver *Psicología de las masas*. Libro Libre, 2018.

3 Ver *La rebelión de las masas*. México: Universidad de Guadalajara, 2016.

4 Ver BLANCO, Marisa Revilla. "El concepto de Movimiento social: acción, identidad y sentido". In: *Zona Abierta*, n° 69, p. 181-213. México: 1994. En línea <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500501.pdf>

5 Ver Mc ADAM, Doud; Mc CARTHY, John, y ZALD, Mayer (1999), "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales". In: *Movimientos Sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo, 1999, p. 21-46.

1959, cuando llegaron a La Habana, las dos columnas que recorrieron el territorio fueron siendo engrosadas por un número inmenso de combatientes. Cuando, en febrero, promulgaron la primera ley de reforma agraria, los industriales y comerciantes locales, con intereses imbricados con los de la burguesía agraria, resolvieron cerrar sus empresas y partir para unas vacaciones prolongadas en Miami. Los trabajadores que dependían de sus empleos encontraron los portones cerrados. Nada que una buena maza no resolviese. La dinámica misma de los acontecimientos llevó a un movimiento a estatizar las empresas extranjeras y hacer acuerdos militares con el enemigo de Estados Unidos a 200 km de su territorio, en plena Guerra Fría.

A fines de los años 50, la Fundación Ford se daba como misión la formación de técnicos e ingenieros en América Latina, en apoyo a los proyectos de la Alianza para el Progreso. Ya, en los 60, el fomento a las ciencias sociales se transformó en la prioridad de la fundación. Para eso, no dejó de aprovechar la “capacidad instalada”, sobre todo en países como Brasil, Argentina y México. Realizaba acuerdos y suministraba recursos directamente a instituciones de investigación y formación de investigadores, con becas y estancias en universidades de Estados Unidos. El criterio de distribución de esos recursos era la excelencia académica, medida con los parámetros de funcionamiento, rutinas de trabajo, continuidad, rigor en la utilización sistemática de los marcos teóricos probados en la academia estadounidense. La evaluación, claro, era a partir de informes de investigación que serían juzgados por cuadros de la Fundación, formados en las instituciones del país de origen. Las finalidades de la Fundación coincidían con “la mano de lana” de la política externa de Estados Unidos: en un primer momento, mapear la sociedad latinoamericana, para después crear una élite intelectual “en condiciones de llevar a cabo el trabajo de intermediación entre el saber técnico en las arenas del procesamiento político-doctrinario de las demandas sociales” (MICELI, 1995: p. 365). En suma, formar mediadores de conflictos que supieran transformar las demandas en políticas públicas. Dicho esto, no podemos dejar de reconocer el éxito alcanzado en tales objetivos. Para muestra, basta un botón: el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien inició en escala las políticas focalizadas y compensatorias recomendadas por el Banco Mundial en la segunda mitad de la década de 90, había sido becario de la Fundación Ford y coordinó el

Centro Brasileño de Análisis y Planeamiento (CEBRAP), institución ampliamente favorecida por la actividad filantrópica de la Fundación.

En todo caso, si en un primer momento se impulsaron los estudios micro, para componer después el mapa de las sociedades latinoamericanas y reconocer dinámicas comunes, de a poco se iba admitiendo que los cuadros formados a partir del marco teórico elaborado fuera del subcontinente se incorporasen a estudios macro. Y aun se espera que ese marco insuficiente para dar cuenta de la realidad latinoamericana sea mejorado, corregido, optimizado.

Los movimientos latinoamericanos no encajan en el marco teórico de las academias del norte

Gran parte de las luchas sociales en las periferias ocurren en el campo. Y son protagonizadas por agrupamientos sociales poco integrados a las instituciones estatales. Se trata de movimientos campesinos, pero también naciones anteriores a la invasión europea o que se desarrollaron al margen de esta. La importación del patrón civilizatorio europeo se combinó con el despojo y la integración bárbara de las poblaciones trabajadoras, con extracción de valor por modos de producción no capitalistas. Esto permitió la supervivencia de prácticas de sociabilidad que facilitaron la reproducción social sin depender o dependiendo parcialmente del mercado capitalista. Gran parte de las luchas de estos grupos no tienen como pauta demandas de renta o de derechos al Estado. Algunas de esas luchas, al contrario, tienen como objetivo el reconocimiento de la no integración.

No ocurre lo mismo con los movimientos urbanos, pero, aun en estos casos, la composición social de los movimientos y la posibilidad de absorción de sus demandas por los interlocutores estatales en América Latina es diferente de los países centrales. A diferencia de las sociedades relativamente homogéneas de Europa occidental e inclusive (aunque menos que las de Europa) de Estados Unidos, a partir de las cuales se desarrolló el marco teórico sobre movimientos sociales, las sociedades de América Latina son muy heterogéneas. Atravesadas por la historia colonial y hoy más o menos integradas como capitalismo dependientes, su mercado de trabajo es extremadamente estratificado, y de una estratificación racializada, en la que la distribución de los puestos de trabajo por género se da de forma diferente a la de los países del norte global.

Los estudios de José Nun⁶, Florestan Fernandes⁷ y Lélia Gonzalez⁸ de los años 60, 70 y 80 ya apuntaban para una masa marginal preponderante en la composición de las clases trabajadoras latinoamericanas. Al mismo tiempo, y del punto de vista de las aspiraciones de esa población, y a partir del fin de las dictaduras militares⁹, que, como contrarrevoluciones preventivas, crearon las condiciones para cambios en los patrones de dominación de la región (con una reprimarización de la mayoría de las economías que habían alcanzado algún desarrollo de la industria de transformación, con la excepción de Brasil, donde fue impulsada una rápida industrialización) despuntaban expectativas de reasalarimiento o asalariamiento.

Los 90

En América Latina de los años 90, distingo dos momentos de la aplicación de la receta neoliberal. El primer quinquenio fue de destrucción de los marcos de derechos laborales históricamente conquistados a partir de los años 30, interrumpidos de facto durante las dictaduras. El segundo quinquenio, y con las correcciones “anticíclicas” introducidas por el Banco Mundial, se comenzó a aplicar políticas sociales focalizadas de carácter compensatorio que previniesen explosiones sociales frente al simple despojo al que la especialización productiva había destinado la región. En la política agraria, se defendía una reconfiguración que permitiese al mismo tiempo atender la demanda de alimentos para el mercado interno y el flujo de *commodities*. Es lo que se llamó de “Nuevo Mundo Rural”¹⁰.

La aplicación de la receta inicial y, después, de su corrección no fue simultánea en los países de la región. Soy consciente de estar trabajando

6 Ver *Superpoblación relativo, ejército industrial de reserva y masa marginal*. Buenos Aires: CELADE, 1969.

7 Ver *Capitalismo dependiente e classes sociais na América Latina*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

8 Ver “Cultura, etnicidade e trabalho: Efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher”. In: *Por um feminismo afro latino americano*. Rio de Janeiro: Zahar, 2020, p. 20-38.

9 Y aquí hablo propositalmente del fin de las dictaduras militares y no de las dictaduras empresariales militares, porque fue el régimen político el que cambió y no la dominación empresarial.

10 Ver Perico, Rafael Echeverri; y Ribero, María Pilar. *Nueva ruralidad. Visión del territorio en América Latina y el Caribe*. San José de Costa Rica: IICA, 2002.



con trazos gruesos. Chile, por ejemplo, fue un laboratorio que anticipó la primera en, por lo menos, una década y media. Los motivos no caben en este trabajo. Vale decir que tal vez haya sido un caso un tanto fuera de la curva, con dispositivos de una economía del terror, en un contexto que no era sólo el de una contrarrevolución preventiva, sino también con características de una contrarrevolución a secas. En los países de América Central y Colombia, con características neocoloniales más pronunciadas, se combinaron las políticas de despojo con la ampliación de la mano ilegal del Estado, con el fortalecimiento de milicias, grupos paramilitares y parapoliciales, y articulación con los carteles de la droga. En México, donde no hubo régimen militar, las políticas focalizadas fueron aplicadas más precozmente, junto con la ampliación de la “mano oculta” del Estado. En Bolivia hubo una combinación del “narcoestado” con la clausura del anterior ciclo minero, lo que cambió enormemente la composición social de la clase trabajadora. En Paraguay hubo un proceso de expulsión campesina, con el avance de la frontera de la soja desde Brasil.

Es en ese contexto que surge una onda de luchas tanto en las ciudades como en el campo. En el campo, resistiendo a la nueva investida de

despojo, comparable a las otras dos ondas que ocurrieron en la primera invasión europea y en las últimas décadas del siglo XIX¹¹. En las ciudades, resistiendo a ser lanzados al limbo de la población excedente.

La insurrección zapatista en Chiapas, el levante mapuche en el Ngu-lumapu, las marchas indígenas en Ecuador son, con descompases y particularidades, ejemplos de los primeros. Los fogoneros primero y los piqueteros después en Argentina, el Caracazo y una infinidad de puebladas en todo el continente, las primeras rebeliones de “pingüinos” en Chile, son ejemplos de los segundos. La guerra del agua y la del gas en Bolivia combina elementos de los levantes rurales y urbanos. Todos estos movimientos despertaron el interés de investigadores sociales de todo el mundo. Y, como era de esperar, fue desplegado el *zoom* etnográfico sobre sus luchas. Los estudios focalizaban particularidades y el carácter inédito de lo que emergía. Los investigadores locales tenían mejores condiciones para encontrar, en los datos empíricos, continuidades con las tradiciones de otros ciclos históricos, que permitían reconocer el repertorio de prácticas ensayadas y testadas por los movimientos. Para dar sólo un ejemplo: el pasado minero de los cocaleros bolivianos explica el uso de la dinamita en sus acciones.

Llegaron los gobiernos progresistas

En comienzos de los años 90, el académico Adolfo Gilly, entonces asesor del candidato a la presidencia de México Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el Partido de la Revolución Democrática¹², decía que los candidatos de izquierda recogerían la insatisfacción del electorado con las consecuencias de las reformas neoliberales, pero que no contarían con recursos para responder a las demandas sociales, a no ser con políticas compensatorias. Es decir, con políticas anticíclicas que redujeran los efectos más brutales, pero sin frenar la aceleración de la acumulación.

De hecho, con graduaciones y particularidades, es lo que hicieron los gobiernos progresistas en la primera década larga del milenio¹³. Aun

11 Ver Adoue, Silvia. “Las cadenas de extracción y los pueblos preexistentes”. In: Adoue, Silvia; Pinassi, Maria Orlanda; Félix, Mariano (org.). *Nuestra América en la encrucijada: pandemia, rebeliones y estado de excepción*. México: Incendiar el Océano. Buenos Aires: Contrahegemonía y Herramienta, 2020, p.101-111.

12 Información oral.

13 Ver: FÉLIZ, Mariano; PINASSI, Maria Orlanda (org.). *La farsa neodesarrollista y las*

aquellos que llegaron a alterar sus constituciones no rompieron con lo que viene siendo llamado “consenso de las *commodities*”. Con vínculos históricos con los movimientos sociales y cuadros mediadores de conflictos y transformadores de demandas en políticas públicas, los gobiernos progresistas fueron mucho más eficaces en combinar políticas anticíclicas con aceleración sistémica de manera optimizada¹⁴.

Es en el contexto en que se desarrollan estudios como los de Francisco Longa¹⁵, y Fernando Stratta y Sergio Nicanoff¹⁶. Ambos tienen como objeto movimientos territoriales urbanos de Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Podríamos agregar, para completar el cuadro argentino, los estudios sobre la “marea verde” feminista que comenzó su ascenso en este período y que resulta también, de manera indirecta, de las transformaciones en el mundo del trabajo operadas por las reformas neoliberales¹⁷. Todas estas

alternativas populares en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: Herramienta, 2017.

SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos. *Além do PT. A crise da esquerda brasileira em perspectiva Latino-Americana*. San Pablo: Elefante, 2016.

- 14 SANTOS, Fabio Luis Barbosa dos; y FELDMAN, Daniel. *O médico e o monstro. Uma leitura do progressismo latino-americano e seus opositos*. San Pablo: Elefante, 2022.
- 15 Ver: *Historia del Movimiento Evita. La organización social que entró al Estado sin abandonar la calle*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2019.
- 16 Ver: “Territorialidad y movimientos sociales. Dispositivos de control, resistencias y saberes de las luchas populares”. In: *Contrahegemoniaweb*, 21/09/2019. Disponible en: <https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/10/21/territorialidad-y-movimientos-sociales-dispositivos-de-control-resistencias-y-saberes-de-las-luchas-populares/>
Y: Gómez, Marcelo (2010). “Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis”. En Massetti, Ástor, Ernesto Villanueva y Marcelo Gómez (comps.). *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
Quirós, Julieta (2008), “Piqueteros y peronistas en la lucha del Gran Buenos Aires. Por una visión no instrumental de la política popular”, en *Cuadernos de Antropología Social* N° 27, FFyL – UBA, 2008, p. 113-131.
Cortés, Martín. “Movimientos sociales y Estado en el “kirchnerismo”. Tradición, autonomía y conflicto”. En A. MASSETTI, E. VILLANUEVA y M. GÓMEZ (Comps.). *Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce, 2010, p. 97-118.
Pero también ver: Bringel, Breno y Falero, Alfredo. “Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones”, en *Caderno CRH*, Vol. 29, 2016, p. 27-45.
- 17 Ver: LOZANO, Juliana Díaz; TORNO, Christian (org.). *Debates picantes de los feminismos populares: Estado y autonomía*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madresel-

reflexiones giran en torno de un núcleo dramático problematizado de diferentes maneras: la menor o mayor autonomía de los movimientos sociales con relación a los gobiernos progresistas. ¿O sería con relación al Estado? Las problematizaciones, que, en su mayoría recurren a estudios de caso, estudios diacrónicos que dan cuenta de la dinámica de los movimientos, nos presentan la vigencia, utilidad y pertinencia o no de ciertas categorías como autonomía, clientelismo, cooptación, incorporación, sobredeterminación y autodeterminación, entre otras, para dar cuenta de las dinámicas de la relación entre estos movimientos y los gobiernos/Estado. No me escapa que estos abordajes teóricos son munición para la lucha política, ya que todas esas categorías vienen cargadas de pliegues de sentido y tienen un peso emocional en la retórica de las luchas.

Valdría la pena analizar las políticas de los gobiernos progresistas para el campo, más allá de las retóricas agraristas e indigenistas. Podemos verificar que no son políticas que tienden a modificar la estructura agraria. Tienen una dimensión de políticas sociales de alivio a la pobreza, por un lado, y a la integración de territorios a las cadenas dominadas por el capital en la esfera de la comercialización, por otro. Sin desatender las recomendaciones presentes en la propuesta de la “nueva ruralidad”. Es decir, habría lugar para todo: para una agricultura familiar integrada a los mercados de diferente escala, pero lo que debe predominar es la producción de *commodities*. De ellos depende, inclusive, el flujo de recursos para sustentar las políticas sociales. Y así se cierra el círculo según el cual, en el discurso, por lo menos, “ganamos todos”.

Otra cuestión que valdría la pena pensar de manera más panorámica es en qué medida las demandas de ampliación de la democracia política fueron atendidas durante los gobiernos progresistas. La propuesta del poder comunal formulada por el presidente Hugo Chávez en su lecho de muerte, “¡Comuna o nada!”, casi una década después continúa con *status* de promesa. La Constitución Plurinacional de Bolivia y la de Ecuador no salieron del papel y es agitada por los movimientos a cada conflicto contra el extractivismo. La “democracia participativa” formulada por el Partido de los Trabajadores se demostró un fiasco. Generó consejos que o no tienen poder deliberativo, o su composición es prioritariamente del capital privado. El llamado presupuesto participativo, que se proponía

a ensayar un debate sobre el destino de los recursos públicos, puso en disputa un porcentaje mínimo del presupuesto y se transformó en causa del surgimiento de pseudo movimientos sociales, constituidos *ad hoc* en torno a proyectos para capturar esos pequeños recursos, en la triste práctica de dispendio de energía en la disputa de pobres contra pobres.

Las políticas anticíclicas en un contexto de aceleración sistémica son políticas de Estado, y no sólo de gobierno. Para dar un ejemplo bastante extremo: el gobierno de Jair Bolsonaro, durante la pandemia, con idas y venidas, llegó a cuadruplicar el valor de los planes de renta mínima que se habían expandido durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores; y se llegó en cierto momento a cuadruplicar también el número de beneficiados. Si bien estas políticas llevaron el nombre de Auxilio Emergencial, son percibidas como una continuidad de los planes sociales ya instalados como políticas permanentes.

Teoría, academia, movimientos

La academia dio espacio a cuadros que provienen de los movimientos. Estos encontraron un nicho en los grupos de investigación vinculados a las teorías decoloniales. Los estudios decoloniales surgieron con la pretensión de cuestionar las epistemologías sobre las cuales fueron construidas las universidades en Europa.

Autores como Aníbal Quijano, Enrique Dussel y Rita Segato, por ejemplo, en América Latina, han desarrollado cuestionamientos que rechazan la pretensa universalidad que la academia atribuye a la elaboración de conocimientos a partir de la civilización europea capitalista, colonial, patriarcal. Los académicos europeos que se presentan como decoloniales como Walter Dignolo y Boaventura de Sousa Santos, se tornaron referentes europeos de los estudios decoloniales sobre América Latina.

El ingreso de miembros de movimientos a la producción académica no cambia por sí mismo, las relaciones de poder de las instituciones y, consecuentemente, un cambio de los abordajes teóricos. Para la academia, esos nuevos cuadros son informantes privilegiados y fuerza-tarea para el trabajo de campo. Al mismo tiempo, fortalecen el prestigio de la institución frente a la sociedad y de los grupos de investigación de acogida frente a grupos concurrentes en la propia academia. En contrapartida, esos cuadros tienen acceso a formación superior, a conocimientos y procedimientos de investigación del acervo académico, además de becas y,

eventualmente, calificación para posicionarse mejor dentro del mercado de trabajo, especialmente en el campo de la educación y la investigación.

Sin duda, la presencia de cuadros de los movimientos dentro de la academia alimenta el conocimiento que ella tiene sobre las dinámicas de las luchas, y pone a disposición conocimientos para los movimientos, pero no modifica las relaciones de poder y las finalidades que la institución preserva, y que están determinados por la distribución de recursos de los Estados y de las fundaciones internacionales.

Hay pocas experiencias de elaboración teórica por fuera de las universidades. Aun en las “cátedras libres” y “universidades populares”, más vinculadas a los movimientos, hay lo que viene siendo llamado de “intelectuales anfibios”, con empleos dentro de la carrera académica y vínculos con grupos de investigación formales dentro de la academia. Los propios movimientos han priorizado los vínculos con las universidades, como parte de las demandas de políticas públicas, y han apostado menos en la elaboración teórica autónoma. Son raros los estudios sobre los movimientos que no parten de las universidades.

Para seguir reflexionando

Las características y dinámicas del actual modelo de acumulación, predominantemente predatorio, hace de los territorios el último locus de la resistencia. Último, porque es en los territorios donde se ejercen las formas más intensivas de despojo, pero también porque es en ellos donde la vida ocurre. La energía vital que resiste a ser saqueada encuentra ahí las posibilidades de enfrentar e imponerse.

El sistema global no tiene, por sí mismo, cómo frenar su dinámica. Sólo puede disparar para adelante. La lógica de las demandas, cuando transformadas en políticas sociales depende de los recursos disponibles por los Estados, que a su vez dependen del despojo. La pregunta es cómo los movimientos sociales integrados a esas políticas atravesarán (o no) esa *Travesía de Casandra*¹⁸.

Son preguntas para la elaboración teórica. Y son preguntas para la sobrevivencia de nuestras gentes.

18 Película italo-teuto-británica de 1976, dirigida por George Cosmatos.

Sin
**EDUCACION
PUBLICA**

no hay

FUTURO

**ACTIVIDAD
URBANA**

**PRESENCIA
UNIVERSITARIA**



La Universidad Pública en la encrucijada

Mercantilización, resistencias y alternativas

“La universidad está dejando de ser un lugar en el que se piensen y elaboren proyectos alternativos y críticos, que repercutan en el beneficio de las sociedades y de las naciones, para convertirse en un nicho de mercado capitalista, en el cual el neoliberalismo está destruyendo los últimos resquicios de democracia que existían.

En muchas universidades existen voces críticas de estudiantes y profesores que no se pliegan a los nuevos dictados del neoliberalismo educativo y perseveran, en medio del aislamiento y la marginación, en su proyecto de construir otro tipo de universidad, no mercantil, ni infantilizada. Allí se encuentra la esperanza para reconstruir una universidad al servicio de la población, donde quepan muchos mundos y saberes y que rompa con la destructora hegemonía de lo políticamente correcto.”

Renán Vega Cantor



Huella del Sur

